A TIENTAS CON LA DEMOCRACIA

MOVILIZACIÓN, ACTITUDES Y CAMBIO EN LA PROVINCIA DE ALBACETE, 1966-1977

ÓSCAR J. MARTÍN GARCÍA

CATARATA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ÓSCAR J. MARTÍN GARCÍA

ES DOCTOR EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y MIEMBRO DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS DEL FRANQUISMO Y DE LA TRANSICIÓN (SEFT). HA PUBLICADO EL LIBRO *ALBACETE EN TRANSICIÓN. EL AYUNTAMIENTO Y EL CAMBIO POLÍTICO, 1970-1979* (INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES, 2006). TAMBIÉN HA ESCRITO NUMEROSOS ARTÍCULOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS Y HA COLABORADO EN OBRAS COLECTIVAS COMO *EL FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN EN ESPAÑA. DESMITIFICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA DE UNA ÉPOCA* (LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2008). HA SIDO INVESTIGADOR VISITANTE EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE FLORENCIA Y CONTRATADO POSTDOCTORAL EN EL CAÑADA BLANCH CENTRE FOR CONTEMPORARY SPANISH STUDIES DE LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Óscar J. Martín García

A tientas con la democracia

MOVILIZACIÓN, ACTITUDES Y CAMBIO EN LA PROVINCIA DE ALBACETE, 1966-1977

CATARATA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

COLECCIÓN INVESTIGACIÓN Y DEBATE

ESTE LIBRO HA RECIBIDO EL APOYO DEL INSTITUTO ALBACETENSE "DON JUAN MANUEL" DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALBACETE

DISEÑO DE CUBIERTA: ESTUDIO PÉREZ-ENCISO
ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: JACOBO PÉREZ-ENCISO

© ÓSCAR J. MARTÍN GARCÍA, 2008

© LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2008
FUENCARRAL, 70
28004 MADRID
TEL. 91 532 05 04
FAX. 91 532 43 34
WWW.CATARATA.ORG

A TIENTAS CON LA DEMOCRACIA.
MOVILIZACIÓN, ACTITUDES Y CAMBIO EN LA PROVINCIA DE ALBACETE, 1966-1977

ISBN: 978-84-8319-390-7
DEPÓSITO LEGAL: M-45.428-2008

ESTE LIBRO HA SIDO EDITADO PARA SER DISTRIBUIDO. LA INTENCIÓN DE LOS EDITORES ES QUE SEA UTILIZADO LO MÁS AMPLIAMENTE POSIBLE, QUE SEAN ADQUIRIDOS ORIGINALES PARA PERMITIR LA EDICIÓN DE OTROS NUEVOS Y QUE, DE REPRODUCIR PARTES, SE HAGA CONSTAR EL TÍTULO Y LA AUTORÍA.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A la memoria de mi padre, Jesús Martín Del Villar

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ÍNDICE

PRÓLOGO de Sebastian Balfour 11

INTRODUCCIÓN 15

CAPÍTULO 1. LOS ECOS DEL DESCONTENTO (1966-1973) 45

1. La respuesta callada al subdesarrollo y al miedo 47
2. El grito ahogado del campo 56
3. ¿La Banca siempre gana? 72
4. Villamalea, entre el verde de la viña y el rojo del Partido 81
5. De la sacristía al ambiente 95

CAPÍTULO 2. OPORTUNIDADES POLÍTICAS, CRISIS ECONÓMICA Y PROTESTA (1974-1975) 111

1. La movilización en alza. Clérigos disidentes y trabajadores malhumorados 111
2. Trabajadoras en movimiento. Contra la explotación y la exclusión de género 119

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

3. Agricultores descontentos y médicos en pie de guerra 128
4. La crisis económica: una amenaza sobre un fondo de inestabilidad política 144
5. Un barco que zozobra y unos aliados inesperados 150
6. 'La verdad', una nueva prensa resultado de los realineamientos políticos 162
7. Canales de difusión y transmisión de la protesta 172
8. Movilización social y desarrollo organizativo 182
9. La creación de marcos e interpretaciones de la acción colectiva 191

CAPÍTULO 3. ACCIÓN. REPRESIÓN Y CAMBIO POLÍTICO (1976-1977) 207

1. Después de Franco, demandas de amnistía y democracia 207
2. Conflictividad laboral y politización de la escena social 215
3. La amenaza de los recién llegados 226
4. Asociaciones y espacios para la construcción de la ciudadanía 234
5. El movimiento vecinal. Un compromiso cívico y político 251
6. Los exponentes de una cultura contrahegemónica 263
7. En busca de nuevas señas de identidad. Recitales y fiestas populares 269
8. Represión y orden público. La otra cara del conflicto 282

CONCLUSIONES 301

BIBLIOGRAFÍA 321

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PRÓLOGO

La transición a la democracia en España se convirtió muy pronto en modelo o, si se quiere, en cuadro explicativo o, al menos, en punto de referencia para procesos de democratización en otras partes del mundo, en particular en el centro y este de Europa y en América Latina. La variable dependiente que se extrajo de la experiencia española fue el aparente éxito de la negociación entre las elites políticas que fraguó la arquitectura de la nueva democracia, definiendo los términos del cambio político.

Lo que se esfumó en la construcción de este paradigma fue el peso político que tuvo la protesta social en los últimos años del franquismo y durante la transición. En la gran mayoría de la literatura sobre el periodo ha sido habitual perder de vista el influjo que tuvo sobre el proceso de la transición la conflictividad social en sus muchas manifestaciones, desde las universidades hasta las fábricas y las asociaciones de vecinos de los barrios obreros. Aunque la relación entre esta protesta y la concertación política es difícil de calibrar, durante el franquismo tardío esta conflictividad alcanzó una intensa dimensión política al tropezar con la legalidad franquista.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Evidentemente, los actores sociales no juegan un papel formal en las diferentes negociaciones democráticas, aparte de los representantes de los sindicatos democráticos, como en los acuerdos de La Moncloa. La construcción de un nuevo sistema político es tarea ineludible de los partidos políticos. Pero el trasfondo de las negociaciones entre las elites políticas durante la transición fue una creciente movilización social con fuertes connotaciones democráticas. Es incluso posible que desde las salas y los restaurantes donde se reunían los representantes de los partidos políticos para negociar se pudiera oír el eco de la protesta en la calle.

Claro está que esta movilización tenía sus límites. La estrategia de la huelga general ensayada por la izquierda como utillaje para una ruptura democrática fue abandonada al constatar que no se podía generalizar la protesta social. A pesar de su fuerte contenido político, estaba demasiado vinculada a conflictos puntuales y culturas locales para poder extenderse en el tiempo y el espacio, por no hablar del problema de las condiciones clandestinas en que sus líderes tenían que trabajar hasta 1977. Sin embargo, la protesta social fue una baza fundamental de la oposición democrática en las negociaciones que condujeron a la democracia. De hecho, hacía ya varios años que muchos empresarios negociaban directamente con los líderes clandestinos en las grandes fábricas, pasando por encima las estructuras de los Sindicatos Verticales. O sea que en el acercamiento a la democracia de las elites reformistas del franquismo y de sus clientes sociales pesó fuertemente el temor a la pérdida del orden público y económico, tanto en las calles como en las fábricas.

Uno de los muchos méritos de este nuevo libro de Óscar J. Martín García, joven investigador que conocí durante su reciente estancia en el Centro Cañada Blanch de la London School of

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Economics and Political Science, yace en su argumento de que la conflictividad social, con sus fuertes implicaciones políticas, se generalizó en el franquismo tardío bajo múltiples formas de protesta hasta las provincias alejadas de los tradicionales centros de movilización. El hecho de que las expresiones manifiestas de protesta se concentrasen en las grandes ciudades industriales no descarta la realidad de las manifestaciones del descontento arraigadas en las culturas de las comunidades provinciales y rurales. El libro ofrece un estudio importante de la relación dialéctica entre la movilización social y las tensiones internas al franquismo a nivel local que se intensificaron a raíz de la crisis económica a partir de 1973 y de la crisis política con la muerte de Franco. Además, su utilización de testimonios orales profundiza nuestro conocimiento de la militancia contra el franquismo. Aporta, a la ya densa literatura sobre la transición, un análisis inteligente y bien matizado del complejo proceso de cambio social y político en una de las provincias menos modernizadas durante el franquismo tardío, proceso que contribuyó a la construcción de una sociedad civil democrática. Es una importante contribución a la tesis que enfatiza la variable de la protesta y del descontento sociales en el conjunto de procesos que condujeron a la nueva democracia.

Por otra parte, una de las características de la nueva historiografía en España es la multiplicación de estudios locales, muchos de los cuales vienen apoyados por instituciones regionales como parte de la construcción de nuevas identidades a nivel regional a raíz de la devolución de recursos y competencias de la nueva democracia. Ahora bien, la aportación de estos estudios locales a la historiografía varía mucho. Una cosa es el estudio local que contribuye con nuevos datos empíricos a confirmar una tesis ya determinada. Y otra, es uno que aporta una nueva virtualidad explicativa, que matiza o cuestiona hipótesis establecidas.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Indudablemente, el libro de Óscar J. Martín García pertenece a esta noble estirpe historiográfica que enriquece nuestro conocimiento de la transición a la democracia en España.

SEBASTIAN BALFOUR
Catedrático Emérito de Estudios Contemporáneos Españoles
London School of Economics and Political Science

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

INTRODUCCIÓN

El editorial de *La Verdad de Albacete*, un diario provincial de tendencia democristiana, escrito el 16 de julio de 1976, días después del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, señaló que "la democratización española no surge voluntariamente desde el poder, sino que ha sido reclamada por el pueblo [...] que es quien ha provocado la respuesta"[1]. En esta línea, no son pocos los científicos sociales que han concluido en sus trabajos que la obtención de las libertades democráticas se encuentra relacionada con la movilización emprendida desde abajo por diversos colectivos (Foweraker y Landman, 1997, 2). Análisis realizados tanto por historiadores sociales, como por aquellos que han cultivado la sociología histórica o la teoría política, señalan que el cambio de tipo democrático es en parte impulsado por la acción colectiva de "diferentes grupos, clases y movimientos" que "luchan para ganar un mayor grado de autonomía y control sobre sus vidas contra diversas formas de estratificación, jerarquía y opresión política" (Held, 1989, 199)[2]. Con ello no se pretende presentar a los procesos de recambio de los sistemas autoritarios por estructuras plenamente democráticas como criaturas simplemente modeladas

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

a golpe de irresistible lucha popular. Las democratizaciones son transformaciones verdaderamente complejas en las que concurren una amplia gama de factores políticos, sociales, económicos y culturales (Huntington, 1991). Por ejemplo, en el caso español, la historiografía sobre la transición desde la dictadura franquista a la democracia ha puesto de relieve la importancia de explicaciones multicausales (Ortiz Heras, 2008b). Lo que con esta breve reflexión inicial únicamente se pretende es poner de relieve la escasa atención prestada, a pesar de los fecundos resultados cosechados por las tendencias antes apuntadas, a la acción de los movimientos sociales en las teorizaciones y explicaciones de los procesos de democratización en general, y al acaecido en España en la segunda mitad de los años setenta en particular.

En general, han sido dos las líneas argumentativas que han prevalecido en los estudios sobre la transición en España. Ambas han cosechado una notable ascendencia académica y aceptación social. Por una parte, aquella para la que la democracia es el producto casi unívoco y natural de los procesos de modernización socioeconómica. De manera tal que para el caso español el "*milagro político* de la transición ha sido convertido en el inevitable corolario del *milagro económico* del tardofranquismo" (Townson, 2007, 10)[3]. Desde este enfoque, la transición en España vendría a ser el resultado "lógico, esperado, y casi predecible, del cambio social de los sesenta" (Juliá, 1988, 25-40; Juliá, 1996). Por tanto, como señala algún autor, lo que "comenzó como un programa de reforma económica" con el Plan de Estabilización de 1959, "acabó transformando España de tal manera que una completa democratización llegó a ser inevitable" después de la muerte de Franco en 1975 (Malefakis, 1983, 217)[4].

A mediados de los años ochenta el péndulo analítico osciló. Al calor de la llamada *ola de la democratización* apareció una nueva tendencia en el estudio de las transiciones a la democracia que intentó superar el mecanicismo y la ahistoricidad de algunos planteamientos

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

estructuralistas anteriores. Entonces el eje explicativo del cambio democrático pasó de la determinación de los condicionantes socioeconómicos a interpretaciones centradas en la total capacidad de maniobra y acción de los individuos. En esta dirección, los procesos de democratización fueron explicados sobre la base de la capacidad estratégica y negociadora de unos protagonistas de excepción situados en el espacio de la alta política. Desde dicha perspectiva la transición democrática desde sistemas autoritarios vino a ser en "última instancia una cuestión de artesanía política" (Di Palma, 1990, 8). Una obra de ingeniería política sustentada en la "gran responsabilidad de las elites nacionales en lograr el grado de consenso y unidad necesario para el establecimiento y consolidación de la democracia". Tales postulados llevan a concluir, según esta línea teórica, que "los tipos de transición más frecuentemente encontrados son transiciones desde arriba" en las que las grandes personalidades políticas juegan un papel fundamental en su diseño y conformación, y a este respecto el caso español vendría a representar "the very model of the modern elite settlement" (Highley y Gunther, 1992, 342; Karl, 1990, 8-9).

En España, desde finales de los ochenta, proliferaron un sinfín de memorias, biografías y autobiografías de "personajes y figuras de la transición". Estos trabajos aprovecharon el creciente interés que entre las ciencias sociales suscitó la llamada *transitología* y la tendencia de ésta, como se ha dicho, a presentar la experiencia española como el "modelo mismo del moderno acuerdo entre elites". En este sentido, las mencionadas memorias y biografías, obras la mayoría de ellas de políticos del Antiguo régimen, evidenciaron un poco disimulado afán en legitimar democráticamente a sus protagonistas. Motivo por el cual el eje central de su argumento no varió mucho del constante ensalzamiento de la labor de aquellos que desde el interior de la dictadura contribuyeron decisivamente al alumbramiento del nuevo sistema democrático. Aparecieron así títulos tan significativos, entre muchos otros, como *Quién hizo el cambio* (Ysart, 1994), *Las claves del*

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

rey (Bardavío, 1995) o *Lo que el rey me ha pedido* (Fernández Miranda y Fernández Miranda, 1995). Sobre la base de estos escritos se fraguó, en líneas generales, una visión del cambio político en torno a la clase aperturista de la dictadura y, sobre todo, a "tres principales protagonistas". Éstos fueron "S. M. el Rey Don Juan Carlos I, que marcará el rumbo a seguir; el presidente del Gobierno don Adolfo Suárez, que conducirá el timón, y el presidente de las Cortes don Torcuato Fernández Miranda, que irá sondando los escollos para procurar esquivarlos" (Palacio Atard, 1989, 23; Powell, 1993).

Dicha perspectiva de la transición ha disfrutado de una importante difusión pública, favorecida por la imagen del periodo transmitida desde las instituciones, la creciente presencia de los medios de comunicación en la política, el apoyo editorial y la ausencia —hasta hace poco— de reivindicaciones por la recuperación de la memoria. En consecuencia, se ha convertido en explicación casi canónica del proceso la interpretación según la cual la "Transición fue obra, sobre todo, de *reformistas del franquismo*". En base a la misma éstos fueron quienes "ejecutaron el proyecto de reforma política del Rey, y quienes contribuyeron, decisiva y decididamente, a la transformación política de España" (Martín Villa, 1984, 46-50; Palomares, 2006). Tan explícita pretensión de presentar el cambio político a la democracia casi como obra exclusiva de los aperturistas de la dictadura ha llevado consigo la suposición de una sociedad española que asistió al proceso como mera espectadora instalada en la desmovilización social y política (Ortiz Heras, 2004, 223-240). Es más, dentro de esta tendencia, cuando los términos *movilización* y *transición* han aparecido juntos, no ha sido para analizar la interacción entre el cambio político y la acción colectiva. Muy al contrario, ha sido para señalar la amenaza de la primera en la consolidación y afianzamiento de la segunda (Álvarez Tardío, 2005, 61-69).

Buena parte de los análisis sobre la transición asumen que ésta fue más o menos el derivado de las transformaciones socioeconómicas

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

experimentadas durante la década de los sesenta. Dichos cambios marcaron las condiciones o el telón de fondo sobre el que actuaron las elites políticas engendradoras del sistema democrático en la segunda mitad de los años setenta. A partir de estos dos ejes, se ha forjado una "explicación oficial del periodo". En otras palabras, se ha construido una especie de "catecismo laico de la nueva democracia" con el fin de legitimar —a través de una explicación teleológica, casi normativa y no exenta de tópicos— el nuevo marco político, sus instituciones y su clase dirigente (Pérez Serrano, 2007, 73-75)[5]. Del pasado reciente se han seleccionado unos determinados hechos y personajes considerados políticamente funcionales en la construcción de referencias identitarias para el presente y el futuro democrático de nuestro país. Pero al mismo tiempo dicha selección transmite una visión parcial de la historia, excesivamente atenta al papel de los "grandes personajes", en la que la sociedad española queda al margen del proceso de recuperación de las libertades democráticas (Molinero, 2002, 98; Pérez Garzón, 2000, 21).

Tal marginación ha quedado justificada porque, al fin y al cabo, Franco murió en la cama. Es decir, la movilización social fue incapaz de derribar a la dictadura y la mayoría de los españoles nunca participaron en huelgas u otras acciones contenciosas contra el régimen franquista. Sin embargo, a menudo se ignora que el papel de la conflictividad social en un régimen específico debe de ser valorado en función de la naturaleza de dicho régimen. No en vano, es ésta la que determina la incidencia política y el significado de la propia acción (Ysàs, 2006, 31). En este sentido, al minimizar la importancia de la movilización social y del disentimiento político se obvia la esencia misma de la dictadura, la cual fue radicalmente incompatible con el conflicto. Bajo este prisma, cualquier trasgresión del orden representó un desafío abierto y un ataque frontal a la legitimación de origen del régimen. Por lo tanto, las

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

explicaciones sobre la conflictividad social durante la etapa final del franquismo no pueden quedar limitadas a análisis meramente cuantitativos. Parece aconsejable prestar atención también a los efectos que sobre la esfera política tuvo la existencia misma de la protesta bajo el contexto de una dictadura como la franquista. En esta línea, se puede decir que la conflictividad social desgastó políticamente al régimen en un doble sentido. Por una parte "desafiando su capacidad para proveer las bases para la paz social y el orden", y por otra, "erosionando su cohesión conforme se enfrentaba a este desafío" (Collier, 1999, 20).

También se ha argumentado que buena parte de la conflictividad social del periodo, sobre todo la protagonizada por la clase trabajadora, estuvo carente de una finalidad política. Habitualmente se ha incidido en la motivación básicamente salarial y laboral que llevó a los trabajadores a la movilización. Con esta clase de enfoques se ha intentado oscurecer la relación entre la protesta obrera, el debilitamiento de la dictadura franquista y el cambio político a la democracia. Sin embargo, con perspectivas de este tipo se pasa por alto que en aquellos contextos dictatoriales donde se ha intentado eliminar la organización colectiva y la defensa independiente de los intereses de los trabajadores, la reivindicación salarial y laboral siempre ha ido inextricablemente unida a la demanda política. Como decía un asalariado albacetense en la primavera de 1976, mientras que no se restituyesen las libertades sindicales "irá llegando la protesta política, además de la reivindicación laboral"[6]. De hecho, según los informes oficiales de las autoridades de la provincia de Albacete, la conflictividad laboral respondió a la "petición de mejoras salariales" y a las "causas laborales". Pero también a la existencia de un "fondo político latente". De hecho, en 1974 la Delegación Provincial de la OS admitió el "entronque de lo social con lo político", al ir "ambas situaciones íntimamente ligadas como manifestaciones de la vida misma"[7].

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Se hace difícil, por tanto, deslindar el conflicto económico del político en el marco de una dictadura como la franquista. El propio uso de la acción colectiva confirió a ésta un indeleble marchamo político bajo las condiciones impuestas por un régimen determinado a considerar todo conflicto social como una cuestión de subversión y orden público (Gómez Alén, 1998, 647). En este sentido, en la medida en que las prácticas sindicales de los trabajadores sobrepasaron los "límites legales impuestos por el régimen", éstas adoptaron "automáticamente objetivos políticos", saltando de "las relaciones salariales al campo político más general" (Foweraker, 1990, 279). En definitiva, la "motivación laboral de buena parte de las protestas obreras no debe llevar a la confusión" (Ysàs, 2002, 91). Bajo la dictadura, la existencia de un marco institucional que dejaba afuera a la mayoría de los derechos fundamentales hizo que la conflictividad adquiriera "una dimensión política especial al chocar con la legalidad y con las instituciones franquistas" (Ysàs, 1991, 206).

En cualquier caso, no hay que olvidar que a la muerte de Franco existían numerosos factores que influyeron considerablemente en el devenir del proceso de transición. Como por ejemplo la presencia de un contexto internacional favorable a la implantación de un sistema democrático y el hecho de que el país había experimentado durante década y media un acelerado proceso de expansión económica y profundas transformaciones sociales. Igualmente, toda descripción del periodo debe de tener en cuenta el cambio operado en el comportamiento, los hábitos y las actitudes políticas de los españoles, el cual forjó un importante apoyo social al cambio en sentido democrático. Sin olvidar que desde principios de la década de los setenta el régimen vivía una honda crisis de sucesión y desmembramiento interno. Además, importantes apoyos sociales de éste —entre ellos la Iglesia, la burguesía industrial o los medios de comunicación— se distanciaban del mismo al tiempo que apostaban por una salida de tipo democrático convergente con la Europa liberal. En efecto, en virtud de la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

importancia que todos estos, y otros, elementos adquirieron en la activación del proceso democratizador, para algunos autores la "instauración de la democracia nunca sería el resultado de una irresistible movilización popular" que incluso fue incapaz de derribar al régimen franquista (Juliá, 1994, 185). No obstante, aunque las luchas sociales nunca alcanzaron niveles arrolladores e irrefrenables, y el cambio político se localizó en la encrucijada en la que confluyeron numerosas causas y factores además de la movilización, parece difícil "entender la transición española a la democracia sin tener en cuenta el incremento de la conflictividad social de este periodo" (Soto, 1996, 363).

Sin embargo, el interés político y mediático, junto a la consolidación de un determinado modelo analítico y de un discurso paradigmático sobre la transición, han entorpecido considerablemente la comprensión del proceso en general. Sobre todo en lo referente a la incidencia de la conflictividad social en el desarrollo del mismo. Se hace necesaria, por tanto, una mayor concreción cronológica y conceptual a la hora de estudiar los mecanismos del cambio político. A este respecto, parece ocioso —como ha demostrado una abundante historiografía al respecto— negar la *virtú*, en forma de intuición y habilidad política, de los reformistas del Antiguo régimen. Éstos, en apenas un año —desde el nombramiento de Adolfo Suárez en julio de 1976 a las elecciones de junio de 1977— convencieron a las Cortes franquistas de su autodisolución, legalizaron los partidos políticos y organizaron las primeras elecciones democráticas. Pasos todos ellos imprescindibles para el alumbramiento de la democracia.

No obstante, es necesario preguntarse qué ocurrió con anterioridad, desde la muerte de Franco en noviembre de 1975 hasta la designación de Suárez como presidente del Gobierno. La respuesta es que durantes estos meses la clase política franquista se vio sumida en una total indecisión, paralización y división. Dicha situación de parálisis fue provocada y atizada en buena medida por la ola de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

huelgas y protestas que recorrió parte del territorio tras la desaparición del dictador (Balfour 1994). A este respecto, no hay que olvidar que durante 1976 el país alcanzó unas cotas de conflictividad social que triplicaron la media de días de trabajo perdidos en conflicto por cada mil trabajadores registrada en los países de la CEE, en cuyos estados miembros la huelga era un derecho reconocido (Sartorius y Sabio, 2007, 43). Incluso en una provincia como Albacete, supuestamente alejada del epicentro del conflicto, la OS reconoció a principios de 1976 no poder sustraerse a "la serie de reivindicaciones sociolaborales que se han desatado en todo el país" tras la muerte del dictador y que "naturalmente, en nuestra provincia también se escucha el eco". Asimismo el gobernador civil resaltó con preocupación "la intensa y extensa actividad desplegada por los denominados grupos de oposición" en la provincia[8]. Sobre todo del PCE. Éste, según el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete "ha ido tomando posiciones, y hoy lo tenemos en las puertas de nuestras casas, en el umbral de nuestras fábricas, en nuestros institutos, en nuestras facultades y, por qué no decirlo, a veces en nuestros templos y conventos"[9]. Ante esta situación, la primera autoridad gubernativa subrayó la necesidad de "mantener la iniciativa a toda costa para hacer imposible toda ruptura"[10]. Ésta no fue hacedera, entre otras razones, por la falta de adhesión popular y por la implacable actuación de los órganos de coacción de la dictadura. Sin embargo, la presión social sí consiguió hacer fracasar los planes de liberalización cosmética propuestos por el Gobierno de Arias Navarro. Con ello, la acción de los movimientos sociales logró desactivar cualquier iniciativa que implicase la perpetuación de la dictadura y no conllevase un verdadero proceso de democratización.

En esta línea, se puede argumentar que bajo el convulso contexto posterior a la muerte de Franco la movilización marcó el camino a seguir, en forma de cambio democrático, para salir de la crisis económica, política y social del país. En atención a la intensa

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

conflictividad social y a la agitación política que forzaron el cese de Arias Navarro y de su equipo pseudorreformista "lo más alarmante era que el nuevo Gobierno presidido por Adolfo Suárez no se diera cuenta o ignorara el hecho de que no hay principio de solución a esta crisis sin un cambio sustancial de inequívoco sentido democrático en la dirección política del país". De hecho, la amenaza, de consecuencias inadvertidas en un marco de recesión económica y debilitamiento de la dictadura, impuesta por el alto nivel de contestación social experimentado durante los primeros meses de 1976 desazonó profundamente a las mentes más clarividentes de la dictadura. Por ejemplo, a los pocos días del nombramiento de Suárez como nuevo presidente del Gobierno un concejal aperturista del ayuntamiento de Albacete previno a la Corona del "riesgo que gravitaría sobre la Monarquía" de no mediar una cambio democrático que desactivase la tensa situación sociopolítica. En mayo, Luis Apostua, subdirector del diario *Ya*, había avisado en conferencia en Albacete que sin la articulación de un decidido cambio político "la ruptura se nos viene encima" en forma de imparable movilización social. Incluso la continuista UDPE creyó conveniente, ante el "delicado momento", que el nuevo presidente del Gobierno tuviese en cuenta la "necesidad del pueblo español de ser el protagonista de su futuro". De este modo, a la altura del verano de 1976 existía entre amplios sectores sociales la opinión generalizada de que "los efectos pueden ser imprevisibles" y las "huelgas salvajes" si el ejecutivo recientemente nombrado no articulaba la apertura de nuevos "cauces de participación política"[11].

Por tanto, la movilización social no sólo contribuyó a crear las condiciones políticas para el cambio democrático. También marcó la senda sobre la que debía transitar el nuevo gabinete Suárez "si es que quería sobrevivir". Y dicha senda no fue otra que la asunción de la "agenda política de la oposición" (Doménech, 2002a, 66). En este sentido, parece difícil entender los mecanismos del cambio

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

democrático sin tener en cuenta que "las negociaciones que se llevaron a cabo en 1976 tuvieron como telón de fondo un estallido de actividad popular que influyó en gran medida en su resultado" (Balfour, 1994, 208). De hecho, las elites políticas no se limitaron a "escoger fórmulas desde arriba". Las negociaciones en la alta política estuvieron mediatizadas por una importante presión popular que consiguió introducir sus principales demandas y reivindicaciones en la agenda política de la transición (Sartorius y Sabio, 2007, 23). En atención a este razonamiento, se puede decir que las elites dirigentes del proceso de transición no tuvieron una ilimitada capacidad de maniobra política. Es más, como sugiere Pérez Díaz, su principal habilidad no fue tanto guiar los acontecimientos cómo saber interpretar las señales enviadas desde abajo, desde la sociedad civil. Por lo tanto, no se puede comprender la transición a la democracia sin prestar atención a la movilización sociopolítica que a la vez que constriñó, también ofreció oportunidades a los gobernantes para encauzar el cambio en sentido democrático (Pérez Díaz, 1993, 41-58).

En los análisis sobre la transición han proliferado teorías en exceso economicistas o decisionistas. Éstas habitualmente han oscurecido y soslayado la importancia de la movilización popular en la recuperación de las libertades democráticas. Pero otra importante traba para una comprensión más completa del periodo es la desatención a los esfuerzos de movilización emprendidos por los colectivos sociales radicados en las provincias menos industrializadas y urbanizadas del país. En efecto, como señalan algunos autores, las manifestaciones del descontento protagonizadas por los mismos habitualmente "han sido relegadas a un segundo plano, cuando no abiertamente preteridas por la historiografía especializada de los últimos años" (Cobo Romero y Ortega, 2003, 113-114). De este modo, la lenta maduración de los estudios sobre la historia social de la parte final del franquismo comienza a reclamar nuevas investigaciones sobre aquellas realidades menos favorecidas por el

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

"milagro económico" de los años sesenta y setenta. Esta demanda científica nace de la necesidad de complementar, ampliar y matizar, los ya fructíferos resultados obtenidos en los análisis sobre la movilización en las regiones más industrializadas y agraciadas por el cambio socioeconómico experimentado por el país durante el segundo franquismo.

Así, el objetivo de este trabajo es el de contribuir en sus posibilidades a rellenar ambas parcelas poco consideradas en la historiografía sobre el cambio político. Con este fin, el presente libro se propone analizar los procesos de movilización de una ciudadanía que a través de los mismos comenzó a intimar con prácticas y valores democráticos en un "trozo deprimido de España" como la provincia de Albacete. Un propósito de este calibre constituye, como es de esperar, un desafío no exento de dificultades. A la escasez de estudios al respecto, se unen los habituales tópicos historiográficos aplicados a aquellas zonas que sufrieron un mayor retardo socioeconómico durante las décadas de los años sesenta y setenta. Según los estereotipos más arraigados en la profesión, estas partes del país supuestamente transitaron de forma silenciosa y sin llamar la atención por los años finales del franquismo. Bajo este enfoque, poca o ninguna fue la incidencia en la transición de aquellas provincias que recibieron gozosas una democracia diseñada desde arriba y decidida en otros lugares a través de un proceso del cual habían sido totalmente ajenas.

Resulta innegable decir que en la sociedad albacetense de los años setenta persistió la desmovilización, el miedo y la adhesión al régimen franquista. Reflejo de lo mismo, los índices de conflictividad nunca fueron comparables con los de otras regiones. Sin embargo, como se trata de demostrar en las siguientes páginas, la sociedad de la provincia no fue tan apática y pasiva como habitualmente se ha dado a entender. Además, casos como el de la provincia de Albacete esconden una importante virtualidad explicativa a la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

hora de comprender la naturaleza del cambio a la democracia en España. Por una parte, demuestran que la contestación experimentada durante los años finales del franquismo, aunque con diferentes grados de intensidad y extensión, no quedó reducida tan sólo a los principales bastiones industriales y urbanos del país. Desde principios de la década de los setenta ésta se extendió a nuevas provincias, sectores productivos y grupos sociales, con sus consecuentes efectos en el incremento de la militancia política, en la emergencia de nuevas demandas y en la aparición de actitudes críticas con la dictadura entre grupos antes despolitizados. Lo que da idea de la nada despreciable presión social en sentido democrático a la que tuvieron que hacer frente las autoridades franquistas después de la muerte del dictador.

Casos como el albacetense son ejemplo del ascenso de una fuerza social favorable al cambio democrático que incluso fue perceptible en las partes del país más atrasadas y antes desmovilizadas. Creciente y extensa agitación social que dio al traste con los planes de perpetuación pseudorrefromista de la dictadura y abrió las puertas del cambio democrático. Pero, por otro lado, casos como el aquí estudiado también son ejemplo de los límites de dicho cambio. A este respecto no hay que olvidar que la ruptura democrática fue en buena medida imposible debido a la escasa politización popular y a la debilidad de las organizaciones de oposición en aquellos lugares más rurales y atrasados. Por lo tanto, el estudio de una provincia como Albacete ayuda a apreciar la fortaleza y las debilidades de la movilización social y de las organizaciones de oposición al franquismo. En el análisis de la realidad albacetense se pueden observar las dos dimensiones que caracterizaron la lucha popular durante los instantes finales de la dictadura. Por una parte, la pujanza para hacer inviable la pervivencia del franquismo. Por otra, la flaqueza para provocar un profundo interregno rupturista. Ambas dimensiones se encuentran directamente relacionadas con

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

los resultados y la naturaleza de un cambio político, con ciertas limitaciones, que si bien fue controlado por los sectores aperturistas del Antiguo régimen, incorporó las principales demandas democráticas emanadas de la presión social desde abajo.

Este libro intenta no ser simplemente un estudio *sobre* la provincia de Albacete sino también un análisis *desde* dicha provincia. Es decir, en este caso el acercamiento a la realidad local no invalida el propósito de comprender los procesos sociopolíticos más generales. En este sentido, se trata de un trabajo centrado en un espacio específico, pero que en su tratamiento analítico queda insertado en una realidad general en acelerada transformación y creciente convulsión. Aquí no se concibe al objeto de estudio como una realidad aislada, que por sí misma tendría una capacidad limitada para explicar el proceso de cambio político a través de la movilización social. En el análisis siguiente la agitación social experimentada en la provincia de Albacete es tratada como parte de un ciclo de protestas que desde principios de los años setenta se fue extendiendo geográfica y sectorialmente. De hecho, así fue percibido por unas autoridades provinciales preocupadas en 1971 porque el "ambiente general de la provincia ha sido de inquietud" y "alarma en ciertos momentos", como "reflejo de lo mismo en el ámbito nacional". Esta interrelación entre la creciente, aun pausada, ebullición social de la provincia y los factores sociopolíticos generales fue también apreciable en una de las memorias de la Delegación Provincial de Trabajo. Según la misma, en 1975 estaban "aumentando las tensiones conflictivas" en la provincia. Especialmente a "finales de año" como "reflejo de la situación nacional"[12]. Por tanto, en base a dicha interacción, los efectos políticos de la movilización experimentada en la provincia de Albacete han de ser interpretados en términos acumulativos. En otras palabras, como un agregado, como realidad integrada en un ciclo general de protestas. Las más o menos modestas manifestaciones del descontento registradas en esta provincia se sumaron a los procesos de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

movilización que se estaban sucediendo durante la década de los setenta en otras muchas partes del país y que consiguieron erosionar las estructuras franquistas hasta facilitar, junto a otros factores, el establecimiento de un sistema democrático.

La movilización habida en la provincia de Albacete desde finales de los años sesenta evolucionó al calor de las oportunidades ofrecidas y las amenazas impuestas por factores políticos, sociales y económicos de tipo general. A lo largo del presente libro se analizan las fluctuaciones y cambios que experimentó la acción colectiva en su interacción con la presión represiva, la crisis del franquismo, la desunión y división de su elite dirigente, los proyectos de liberalización impulsados desde arriba, la depresión económica, la muerte de Franco, etcétera. La estrecha relación entre el crecimiento del conflicto en Albacete y las oscilaciones en el contexto sociopolítico y económico del país introduce a aquel en los avatares de la política general y en las luchas por el poder a nivel nacional. Desde esta perspectiva, la historia local desde abajo permite ofrecer respuestas a cuestiones generales sobre los procesos de organización y movilización de los sujetos sociales. En esta dirección puede ser muy útil para desentrañar las relaciones recíprocas entre la acción colectiva y el cambio político a la democracia.

Por otro lado, la historiografía del periodo apenas ha valorado los efectos políticos de la aparición del disenso colectivo contra la dictadura en lugares en los que existieron profundas limitaciones para ello. En referencia a esta cuestión, cabe decir que incluso para los meses posteriores a la desaparición del dictador, los datos cuantitativos de la protesta en la provincia de Albacete no dejaron de ser moderados y mucho menores que en otras partes del país. No obstante, parece apropiado prestar atención a la potencial amenaza que para el régimen franquista supuso la aparición de una creciente contestación en aquellas partes del país "donde nada (amenazante) parecía ocurrir". En este sentido, el ascenso de la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

conflictividad en la provincia, bajo un escenario general caracterizado por la emergente efervescencia social, el imparable deterioro económico y la creciente incertidumbre política, no pasó desapercibido para las autoridades locales. Éstas, un tanto perplejas y turbadas, reconocieron, como hizo el gobernador civil en febrero de 1976, encontrarse ante unos "instantes de desafío histórico". Unos momentos que para el inspector general de la Policía Armada de la provincia encarnaban, en la primavera de este año, una "época crucial para nuestra Patria", caracterizada por los "turbios manejos y propósitos" de la "subversión" contra los "intereses supremos de la Patria"[13]. Asimismo, el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil manifestó hallarse en unos instantes marcados por el "clima de confusión, de desorientación e intranquilidad, cuando no de irritación y de amargas consecuencias". Desazón más punzante aún al tratarse de una de esas provincias en las que apenas unos años antes "predominaba la apatía política popular y el régimen se sentía fuerte o al menos no desafiado" (Cazorla, 2007, 102).

No hay que olvidar, en cualquier caso, que el factor "implícitamente amenazante en la protesta" sobre las percepciones de las autoridades son "las visiones que indican a dónde puede conducir dicho comportamiento" (Tarrow, 1991, 6). Y el comportamiento, aún medroso y poco decidido, que lentamente manifestaron provincias como Albacete parecía señalar, conforme avanzaron los años setenta, una cada vez más habitual imitación de lo reflejado en el *espejo político* de los centros industriales y urbanos más convulsos del país. De este modo, el intenso conflicto que en las zonas más movilizadas del país siguió a la muerte de Franco, combinado con una minoritaria pero apreciable protesta en provincias como Albacete, indicó a las autoridades franquistas lo que "podía suceder en un futuro no muy lejano en el resto de España, en el caso de que no hubiesen cambios políticos sustanciales" (Doménech, 2002b, 327). Por tanto, más allá de los análisis cuantitativos, la acción

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

colectiva consiguió generar un potencial de amenaza y sugestión, dentro de un escenario general de convulsión social e inestabilidad política, que influyó decisivamente en las previsiones de las autoridades ante el futuro político inmediato. Desde el verano de 1976 la actuación de éstas se vio afectada por el peligro de radicalización del conflicto y la extensión de las luchas sociopolíticas de consecuencias imprevisibles en un marco de recesión económica.

La escasez de grandes conflictos colectivos ha consolidado la imagen de una sociedad albacetense resignada e impasible durante el franquismo tardío. Esta carencia de enconados enfrentamientos sociales habitualmente ha sido utilizada para reseñar los apoyos sociales de los que disfrutó la dictadura franquista en provincias como Albacete. En efecto, el minifundismo empresarial, el control social, la dispersión de la mano de obra en el campo, la eventualidad, etcétera, hicieron de las huelgas y de las algaradas casos excepcionales en la provincia. Sin embargo, la ausencia de conflictos colectivos visibles no siempre implicó aquiescencia y consentimiento pasivo con el ordenamiento sociopolítico dominante (Casanova, 2000). Dicha escasez de luchas colectivas quizá tuvo más que ver con la debilidad estructural de los trabajadores de la provincia y con el miedo que con la aceptación y lealtad al orden impuesto. Así parece desprenderse del estudio de las formas de resistencia cotidiana que en ocasiones constituyeron la única alternativa posible para los asalariados de la provincia de conseguir mejores sueldos, rendimientos más bajos, más tiempo libre, etcétera. Los trabajadores y las clases populares albacetenses hicieron absentismo, hurtaron, disminuyeron su ritmo de trabajo, etcétera, con el fin "egoísta" de mejorar las condiciones individuales de vida y trabajo. Pero también para enfrentarse, con las únicas armas posibles a su alcance, a patronos, autoridades y propietarios, que constituyeron una amenaza para la reproducción cotidiana de las condiciones materiales de la existencia. La mayoría de las veces se

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

trató de formas de acción individuales, calladas y prosaicas. Raramente buscaron provocar cambios profundos. Sin embargo, fueron más eficientes, y consiguieron mejores resultados palpables, que el enfrentamiento directo con los patronos y autoridades. La existencia de esta lucha anónima puso de relieve la capacidad de adaptación de los trabajadores al contexto político y social existente a través de la utilización de aquellos repertorios más accesibles y eficaces. Además, su importante extensión matiza la absoluta lealtad de los trabajadores albacetenses hacia el ordenamiento sociopolítico dominante sugerida por la falta de estruendosas luchas sociales. Por lo tanto, como sugiere Susan Eckstein, "focalizar la atención meramente en las expresiones manifiestas de desafío ofrece una falsa impresión de generalizado apoyo y legitimidad del régimen" (Eckstein, 1989, 30).

Por otra parte, la historiografía de la parte final del franquismo ha evidenciado cierto desinterés por aquellos colectivos más rezagados en el cambio socioeconómico de los años sesenta. Tal desatención ha estado relacionada con la casi exclusiva identificación, por parte de la historia social del periodo, entre la acción colectiva y el conflicto industrial (Cruz Artacho, 2001). Con base en dicha relación casi unívoca han pasado desapercibidas diversas manifestaciones del descontento enraizadas en las formas de vida y culturas de las sociedades rurales. A este respecto, no hay que olvidar que los procesos de modernización socioeconómica y política que alumbraron los repertorios de acción típicamente obreros o industriales, se desarrollaron de forma desigual y discontinua en el medio rural de la España de los años sesenta (Tilly, 1978, 82-96). Durante la etapa final de la dictadura franquista en el campo convivieron la persistencia y el cambio, y, por lo tanto, las formas tradicionales y modernas de expresión reivindicativa (Gil Andrés, 2000, 434-435). Por esta razón, será necesario prestar atención a las variantes preindustriales del conflicto, desde la ocultación de la cosecha a la algarada

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

pasando por las disputas por el monte, para entender los componentes políticos que subyacieron en la solución de los asuntos colectivos dilucidados en el ámbito público de las comunidades rurales del tardofranquismo. Hecho que viene a cuestionar la imagen impasible con la que habitualmente se ha presentado a los colectivos del mundo rural durante la etapa final del franquismo. Por tal motivo, en este trabajo se propone un acercamiento, con especial énfasis en los aspectos culturales y políticos de la movilización rural, que supere los clichés estructuralistas y funcionalistas habitualmente impuestos al comportamiento de los colectivos del campo. Con este propósito se intenta profundizar en las experiencias compartidas y en las definiciones comunes de las clases populares del medio rural albacetense sobre la justicia y las obligaciones asistenciales de los gobernantes, así como la voluntad de dichas clases populares en intervenir en los asuntos públicos y políticos de la comunidad.

Como ya se ha dicho, difícilmente se puede ocultar la pasividad y el apoyo social al régimen franquista en ciertos sectores de la provincia de Albacete. Sin embargo, como se trata de demostrar en este libro, la ausencia de contestación políticamente articulada no significa necesariamente la absoluta aceptación y legitimación del orden político existente. Más aún si se tiene en cuenta que bajo una dictadura como la franquista, en la que el consentimiento descansó en parte sobre la presión represiva, la ausencia de manifestación pública del malestar no tiene el mismo significado que en un sistema democrático (Ortiz Heras, Ruiz y Sánchez, 2003; Ortiz Heras, 2005, 169-186). Sobre esta cuestión, es preciso señalar que durante los años setenta se percibió cierto desgaste en la identificación activa de la población albacetense con la dictadura. Tal deterioro, como en el resto del país, en los niveles de adhesión ciudadana fue debido principalmente a los "bajos niveles de información, interés y participación política dentro de los cauces que el régimen mismo arbitraba" (López Pintor, 1981, 7-47).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

También en la provincia de Albacete en la parte final del franquismo el consenso con la dictadura comenzó a cuartearse y a ser puesto en evidencia. Entre otras razones, por la limitada incidencia social de los aparatos estatales de encuadramiento. Por ejemplo, en 1966 un informe oficial redujo la actividad de buena parte de los sindicatos provinciales a la "obligada conexión con el mando nacional, sin realidad palpable por la falta de número adecuados para un eficaz funcionamiento". Por lo que no extraña que en 1970 un estudio de la JOC de Almansa concluyese que casi la mitad de los trabajadores consultados "da la impresión que no conocen la CNS". Por otro lado, en 1971 la Delegación de la Juventud reconoció su escasa capacidad de inserción en medios juveniles porque "si los jóvenes no hacen caso a sus propios padres ¿cómo van a hacernos caso a nosotros, que nos miran de una forma extraña como si fuéramos a aprovecharnos de ellos?"[14]. En 1974 la jefa provincial de la OJE femenina acusó de la lánguida participación juvenil en las estructuras oficiales de socialización al "descrédito o falta de confianza en los Órganos Políticos del Sistema, y a veces de las mismas personas que lo representan"[15]. Sobre esta cuestión, también hay que tener en cuenta el fracaso de las asociaciones políticas del Movimiento nacidas del Estatuto de Asociaciones de 1974 "recibidas con el mayor escepticismo por el pueblo en general". La memoria del Gobierno Civil de 1975 admitió que el "interés, recogido en la Memoria del año pasado, despertado por el aperturismo político, ha disminuido en forma sensible, siendo tan sólo de destacar la recogida de firmas para las asociaciones ANEPA y UDPE". Menor aún fue la aceptación de otras asociaciones que buscaron prosélitos en la provincia, como RSE, UDE, Fuerza Nueva y el FNE, sin llegar a constituirse por falta de socios.

El progresivo alejamiento entre el régimen franquista y la sociedad civil durante la década de los setenta fue advertido en multitud de informes oficiales como aquel que, en referencia a la ciudad de Albacete, resaltó el "desinterés general del vecindario

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

que ignora incluso quiénes son los que les gobiernan". Percepción ratificada por una encuesta, realizada en el otoño de 1975, según la cual casi un 40 por 100 de los albacetenses no sabía quién era el alcalde de la ciudad[16]. De acuerdo con un estudio sobre la realidad socioreligiosa de Albacete "se habla del alcalde, el gobernador o del obispo, pero se llega a desconocer el nombre [...] a pesar de que los medios de comunicación social transmiten con frecuencia esos nombres". En definitiva, se puede decir que en los años finales de la dictadura se dejó sentir un creciente distanciamiento entre gobernantes y gobernados. Como concluyó en octubre de 1974 un concejal del Ayuntamiento de Albacete, el "vecindario es abúlico y poco colaborador" porque "ha perdido la fe en las instituciones"[17].

Otro ejemplo del desconocimiento de las autoridades y de la erosión del prestigio de las instituciones fue la disminución de la participación en las elecciones municipales y de procuradores a Cortes durante el franquismo tardío. La dictadura otorgó un carácter plebiscitario, de "ratificación y adhesión popular" en el interior y legitimación de cara al exterior, a este tipo de procesos electorales. Por esta razón fue habitual el despliegue propagandístico oficial animando al voto en los días anteriores a los comicios. También fueron usuales las presiones y amenazas de las autoridades para promocionar una alta y legitimadora participación. Por ejemplo, con motivo de las municipales de 1966, el justificante del voto "será exigido a los funcionarios del Estado, Provincia, Municipio y Movimiento para el cobro de sus haberes, y cuya omisión dará lugar a recargos tributarios, de acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones vigentes"[18]. Por el contrario, las fuerzas de la oposición, como hicieron los comunistas en 1973, llamaron "a todos los albacetenses a abstenerse de votar en las próximas elecciones municipales para así demostrar su disconformidad con esta farsa democrática"[19]. Por lo tanto, el considerable aumento de la abstención reflejado en el cuadro siguiente da idea del creciente desgaste

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

político del régimen franquista y de la erosión de sus apoyos sociales durante la década de los setenta.

CUADRO 1

PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES DE PROCURADORES A CORTES POR EL TERCIO FAMILIAR Y ELECCIONES MUNICIPALES POR EL TERCIO FAMILIAR. ALBACETE

CORTES 1967	MUNICIPALES 1970	CORTES 1971	MUNICIPALES 1973
75 por ciento	65 por ciento	56 por ciento	42,8 por ciento

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS OBTENIDOS DE AHPGC. ELECCIONES. CAJAS 12. 13. 19. 20.

Esta disminución en los niveles de adhesión a la dictadura fue paralela, como en el resto del país, a un moderado aumento en el "interés por la política, el descontento con el régimen y los gobernantes y el apoyo ideológico a la alternativa democrática". En 1969 el gobernador civil de Albacete reconoció que "contrariamente a lo que venía sucediendo, y en gran parte debido a los medios de difusión, se aprecia en general una mayor preocupación por las cuestiones políticas" de una ciudadanía cuyas "aspiraciones se centran en una progresiva democratización de las instituciones"[20]. También diversas encuestas y estudios locales evidenciaron el acercamiento de algunos sectores sociales de la provincia a valores democráticos y su progresivo enajenamiento de las instituciones del régimen. Por ejemplo, en una encuesta realizada por la Sección Social del Sindicato Provincial de Banca en 1970, la mayoría de los trabajadores del sector prefirieron un sindicato más participativo y representativo. En el mismo año, un estudio de la JOC de Almansa reveló que para el 40 por 100 de los encuestados, el sindicalismo oficial era poco o nada adecuado para defender los derechos de los trabajadores, siendo únicamente un 15 por ciento las opiniones favorables a la labor de la OS provincial[21]. Tampoco debieron de ser favorables para el sindicalismo oficial los resultados de una encuesta realizada en 1974 por Cáritas en

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La Roda, que "sometía a consideración la eficacia de los órganos del Ministerio de Trabajo y de la Organización Sindical". Por lo que no extraña que las autoridades locales prohibiesen la publicación de la misma y amenazasen a sus organizadores con "denunciarlos por propaganda ilegal". Por otra parte, un estudio sociológico encargado por la Vicaría de Pastoral Social a la altura del otoño de 1975 indicó que el 97 por por ciento de los preguntados menores de treinta años (y un 92,1 por por ciento de la totalidad de los encuestados) creían conveniente que las autoridades fuesen elegidas mediante un proceso electoral de carácter democrático. A juzgar por el estudio de la realidad socioreligiosa de la provincia, el "pueblo albaceteño se muestra dispuesto a una democracia" y "asegura en su gran mayoría que los cargos públicos deben ser elegidos, no nombrados"[22].

Esta evolución y cambio en las actitudes, valores y opiniones políticas, que operó en la sociedad albacetense de la parte final del franquismo, estuvo íntimamente relacionada con las transformaciones sociales, el cambio generacional, la tímida incorporación a la sociedad de consumo, el contacto con otras realidades y fuentes de información a través de la emigración, etcétera. Sin embargo, los cambios sociales y económicos representan una condición necesaria, pero no suficiente para explicar dicha adopción de nuevas prácticas, actitudes y comportamientos. En este sentido, tuvo una importancia indudable el sigiloso y cotidiano proceso de contacto, experimentación, aprendizaje y legitimación de las ideas y valores democráticos. Sólo sobre dicha base el aumento de la conflictividad social experimentado en los últimos años del franquismo contribuyó a la extensión de posturas reivindicativas más críticas con la situación social y política del país. De esta manera, conforme aumentaron los índices de conflictividad social fue creciendo el *antifranquismo sociológico* que, a su vez, alimentó el activismo militante y la presión social a favor de un cambio hacia la democracia (Ysàs, 2004, 38).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Se puede decir, entonces, que la protesta fue la *punta del iceberg*, o la expresión pública y contenciosa de todo un proceso más silencioso y menos visible de construcción de la ciudadanía democrática (Laraña, 1999, 203). La relación entre las fases de mayor visibilidad pública de todo movimiento social y aquellas de latencia han sido poco estudiadas. No obstante, a través de los estrechos márgenes abiertos por la Ley de Asociaciones de 1964, y la actividad diaria en centros parroquiales, clubes juveniles, asociaciones culturales, teleclubs, librerías, etcétera, cada vez fueron más los albacetenses que, a tientas, experimentaron e intimaron con prácticas y valores democráticos. Dicho contacto, a su vez, aumentó la autoestima y la confianza en las capacidades para influir en las condiciones sociales y políticas de la vida cotidiana de ciudadanos antes atomizados. De esta forma, aunque no siempre hubo una traducción directa en huelgas u otros conflictos colectivos, se fue creando una "base potencial para el cambio político", que fue "mucho mayor de lo que el descontento políticamente articulado sugiere" (Eckstein, 1989, 27). De hecho, el descenso a las actividades desarrolladas en el seno de la sociedad civil permite abogar por una historia social que no sólo se interese por el perfil cuantitativo y numérico de la protesta, sino también por los procesos cotidianos que lentamente minaron la pretensión de la dictadura franquista de mantener el control político sobre la sociedad española.

Bajo el enfoque aquí presentado, el proceso de recuperación de las libertades en España no se puede entender en toda su complejidad sin prestar atención a la extensión de actitudes favorables al cambio democrático entre crecientes sectores sociales. En este sentido, el cambio democrático se vio facilitado por la incipiente emergencia de una sociedad civil autónoma de la injerencia del Estado franquista durante la etapa tardía de la dictadura (Soto, 2005, 31). A pesar de la creencia generalizada, la ciudadanía democrática no fue simplemente el producto automático del proceso de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

transición y de la Constitución de 1978 que consagró los derechos civiles y políticos que durante cuatro décadas había negado la dictadura franquista. Como sugiere Radcliff, la ciudadanía democrática, no como estatus o condición, sino como proceso histórico, fue el resultado de una construcción gradual y activa de la relación entre los ciudadanos y el Estado. Esta ardua labor de recomposición de la sociedad civil tuvo sus orígenes en la segunda parte del franquismo. Respondió a un proceso fluido que se manifestó en la confluencia entre el Estado, la acción colectiva y los significados culturales. Por lo tanto, en la intersección entre la historia política, social y cultural (Radcliff, 2007b, 343-348).

Un planteamiento de este tipo equivale a cuestionar la tendencia general a situar el origen del tránsito a la democracia en la fecha misma de la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. Comenzar la "historia de la democratización" a partir de dicho acontecimiento histórico supone centrarse únicamente en la última fase de un proceso más largo y profundo (Collier y Mahoney, 1997, 286)[23]. Por el contrario, aquí se comparten los supuestos de aquellos autores para los que el "proceso de transición no se puede entender sin tener en cuenta la dinámica sociopolítica que se va a generar en el último decenio franquista" (Molinero, 2005, 22-23)[24]. Por esta razón, el periodo de estudio propuesto en este trabajo busca expandir las coordenadas del análisis del cambio democrático hacia abajo en términos sociales y hacia atrás cronológicamente para indagar en la *social fabric* desde la cual "comenzar una historia social de la transición" (Radcliff, 2007a, 141).

Con tales supuestos, el presente estudio pretende transitar, en la medida de sus posibilidades, por el terreno fecundamente abonado por esa *segunda ruptura* que en el análisis de los movimientos sociales y de la acción colectiva fue preconizada hace ya más de dos décadas (Álvarez Junco y Pérez Ledesma, 1982). Es innegable la influencia que directa e indirectamente este libro recibe tanto de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

los historiadores marxistas británicos como de la sociología histórica. La perspectiva desde abajo de los procesos de cambio social y político de ambos enfoques ha permitido cuestionar los metarrelatos sociopsicológicos sobre la acción colectiva (Neveu, 2003, 90-93; Kaye, 1989 y Hobsbawm, 1988). En esta línea, a diferencia de aquellas teorías que presentan la protesta como una explosión social esporádica, caótica e irracional, aquí se opta por una visión distinta de la misma. Es decir, como la "serie continua de interacciones entre los titulares nacionales del poder y personas que reclaman con éxito hablar en nombre" de aquellos "carentes de representación formal" y que realizan "públicas demandas de cambio en la distribución o en el ejercicio del poder" (Tilly, 1988, 12; Tilly, 1998, 31-32). Este volumen intenta recoger conceptos y principios de análisis presentes en la Teoría de la Movilización de Recursos y en la del Proceso Político. Pero también se busca incorporar las conclusiones del debate suscitado por las críticas planteadas a estos enfoques por parte de planteamientos relacionados con la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales. Por lo tanto, junto a factores organizativos y políticos, en este libro se atiende a los mecanismos de creación de marcos de significado y de construcción social de la identidad colectiva (Cobo Romero, 2007). Ambos esenciales para comprender la representación y el ordenamiento simbólico de la realidad sobre los que se asentaron imágenes y percepciones compartidas que justificaron y motivaron la protesta (Melucci, 1995, 41-57). En definitiva, "el analista de un movimiento social tiene dos tareas: dar cuenta de los factores estructurales que han reforzado objetivamente a grupos de oposición y analizar los procesos que inciden en la atribución de significado e importancia a unas condiciones políticas cambiantes" (McAdam, 2001, 47). Con tal objetivo, en los siguientes contenidos del presente libro se atenderán a las oportunidades políticas que facilitaron la acción colectiva, a los recursos disponibles para emprender dicha

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

acción, a las informales redes de sociabilidad y solidaridad sobre las que descansó la movilización y a los procesos de interpretación y percepción compartida de la realidad social.

El presente libro es el resultado definitivo de una investigación de la que previamente se ha dado cuenta en diversas publicaciones y artículos científicos que, como en este caso, han contado con el inestimable apoyo del Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel. Buena parte de los contenidos tratados más adelante han sido debatidos en el Seminario de Estudios del Franquismo y de la Transición (SEFT) y en las jornadas que éste viene organizando desde hace varios años[25]. Al frente de dicha empresa se encuentra el profesor Manuel Ortiz Heras, también director de la tesis doctoral de la que este libro es resultado, a quien es de agradecer el apoyo, el consejo, la familiaridad y el compañerismo demostrados durante todo este tiempo. Asimismo también quisiera reconocer la ayuda prestada por los profesores Damián González, Juan Sisinio Pérez Garzón, Pedro Oliver y Sebastián Balfour, quien accedió amablemente a escribir el Prólogo de este libro.

Igualmente este libro no hubiese sido posible sin la invitación de los profesores Bartolomé Yun y Paul Preston al Instituto Universitario Europeo de Florencia y al Cañada Blanch Centre de la London School of Economics, al primero para realizar una estancia de investigación y al segundo como becario postdoctoral. En ambos centros el autor ha tenido la suerte de coincidir con magníficos investigadores, compañeros y amigos, así como en el King's College de Londres, en la Facultad de Humanidades de Albacete y en el Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Con todos ellos quien escribe estas líneas ha compartido impagables momentos de esfuerzo, discusión, y, sobre todo, camaradería. Aparte quedan Laura, mis familiares más cercanos y mi madre, a quienes es difícil corresponder con tanta paciencia, apoyo y comprensión.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

NOTAS

1. *La Verdad de Albacete*, 16-7-1976. (En adelante *LV* en las citas a pie de página.)
2. En estudios de sociología histórica de ámbito trasnacional, como los de Charles Tilly y sus colaboradores, se demuestra que en la historia contemporánea de las principales potencias europeas los "poseedores del poder nunca otorgaron derechos sin presión". Para este autor, las "formas de acción colectiva" fueron las "formas principales en que grupos de gente corriente, con sus reivindicaciones y aspiraciones, dieron forma a las estructuras de poder en Europa". (Tilly, 1997, 323 y 334.)
3. Para Donald Share la "idea de que la democracia fue virtualmente inevitable, o al menos muy probable, dado el nivel de desarrollo económico" alcanzado por el país durante los años sesenta, ha sido expresada tanto por académicos como por actores políticos que han visto en el caso español la confirmación de la "teoría liberal desarrollista que establece una relación directa entre crecimiento económico y liberalización". (Share, 1986, 27.)
4. Al socaire de las teorías de la modernización han aparecido explicaciones, representantes de la llamada *ideología tecnocrática de la transición*, que resaltan la misión histórica del régimen franquista al modernizar al país y prepararlo para, tras la muerte de Franco, iniciar un cambio político pacífico y democrático. Una crítica a estos planteamientos en los artículos que Santos Juliá escribió en *El País* bajo el título de "La verdadera democracia" y "Un fascismo bajo palio en uniforme militar", el 22-10-1992 y el 18-6-1998 respectivamente.
5. Esta interpretación dominante se ha visto recientemente desgastada por la emergencia de una nueva generación activa, en sustitución de aquella que protagonizó la transición, en la que la "ausencia de las experiencias vividas por sus abuelos y sus padres les obliga a enfrentarse al pasado con otra mirada". Reflejo de ello es la eclosión en los últimos años de una conciencia crítica sobre el modelo de transición, de movimientos por la recuperación de la memoria histórica, de un incipiente debate sobre el papel de la monarquía, del revisionismo de corte neofranquista, etcétera. Véanse Juliá, 2003, 23 y Aróstegui, 2006.
6. *LV*, 13-5-1976.
7. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2146.
8. AHGCA. Memorias del Gobierno Civil, (1976).
9. *LV*, 11-10-1975.
10. AHM. Libro de Actas del Pleno, 1-2-1976.
11. *LV*, 8-8-1976.
12. AHGC. Memorias del Gobierno Civil (1975).
13. *Albacete Sindical*, nº 11, 1976.
14. AHP. Delegación de la Juventud. Memoria de actividades. Caja 28673.
15. AHPOS. Asistencia y Promoción. Caja 2043.
16. AGA, Sección Interior, Caja. 2.597.
17. *LV*, 17-10-1974.
18. AHPGC. Elecciones municipales. Cajas 21 y 22.
19. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3.
20. AHGC. Memorias del Gobierno Civil (1969).
21. AHJOC. Zona Levante-Sureste. Caja 95. Carpeta 2.2.
22. *LV*, 21-10-1975.
23. Los estudios que han privilegiado un estudio desde arriba de la transición sólo captan "la culminación de un proceso más largo y más general que

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

precisamente es la fundación necesaria de los términos en los que se desarrollan estas negociaciones" entre elites. (Tarrow, 1985, 207-208.)

24. Según Foweraker "no hay duda de que en España se democratizó a través de una transición pactada, pero sólo después de que el terreno hubiese sido preparado durante al menos veinte años de lucha popular". (Foweraker, 1994, 220.)

25. Igualmente, este trabajo se ha desarrollado en el marco de los proyectos de investigación *Movimientos sociales en Castilla-La Mancha durante el segundo franquismo y la transición, 1959-1977* (HUM2006-14138-C06-03) financiado por el MEC, y *Movimientos sociales en Castilla-La Mancha durante el tardofranquismo,1960-1976*, (PAI-05-060), financiado por JCCM.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CAPÍTULO 1

LOS ECOS DEL DESCONTENTO (1966-1973)

No es la argumentación central de este trabajo reducir la explicación del cambio político a las exigencias del desarrollo capitalista. Ni tampoco realizar una interpretación *tecnocrática* de la transición a la democracia que tuvo lugar en nuestro país en la segunda mitad de los años setenta. Últimamente, los estudios de historia social sobre la parte final del franquismo confieren una mayor importancia a los aspectos culturales e identitarios presentes en la emergencia de la movilización (Cobo Romero, 2007). Igualmente, han perdido cierta vigencia aquellos planteamientos que establecen una relación causa-efecto entre los cambios en la estructura económica del país y la aparición de mayores niveles de efervescencia social durante el franquismo tardío. No obstante, resulta innegable destacar la influencia ejercida por las profundas transformaciones socioeconómicas en la creación de una sociedad más dinámica, inquieta, y conflictiva. Con la consecuente aparición de nuevos valores culturales y actitudes políticas que contribuyeron a facilitar el camino hacia la transición democrática (Molinero e Ysàs, 1999, 271-296).

Con mayor o menor énfasis en los condicionantes estructurales, una de las conclusiones generalmente aceptadas por los investigadores

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

del periodo es que la impetuosa dinámica socioeconómica experimentada por el país durante la década de los sesenta abrió nuevas posibilidades para la movilización y el conflicto (Cronin, 1992, 29-43). Entre otras cosas, porque la necesidad de asimilar las nuevas realidades nacidas de tan hondas transformaciones, y de encauzar una conflictividad social presente desde los años cincuenta, introdujo cambios en el perfil variable de las instituciones y en las estrategias políticas de la dictadura franquista (Foweraker, 1990, 106-110). Así, en 1958 fue promulgada la Ley de Convenios Colectivos. Ésta, al devolver parcialmente a empresarios y trabajadores la capacidad para negociar sobre las condiciones salariales, entreabrió una "nueva estructura de oportunidades desde la cual plantear el conflicto obrero" (Doménech, 2002b, 355). Por otra parte, esta apertura en la legislación laboral fue seguida por la ampliación de los mecanismos de participación y representación en el aparato vertical a través de las elecciones sindicales (Molinero e Ysás, 1998, 67-68). La combinación entre la liberalización de las relaciones de trabajo y el *participacionismo* sindical ensayado por los jerarcas del Movimiento contribuyó, como dice Gómez Roda, al "cambio en el marco de oportunidades y expectativas" para la movilización, ya que, en palabras de Babiano, las "elecciones sindicales lo hicieron al brindar una oportunidad para acumular recursos organizativos y la negociación colectiva abriendo una brecha, con anterioridad inexistente, que posibilitara el conflicto" (Gómez Roda, 2004, 96 y Babiano, 1995, 343). Por tanto, durante la década de los setenta el potencial de acción y organización de los trabajadores españoles aumentó al calor del desarrollo económico. Pero esta creciente capacidad disruptiva de la clase trabajadora también estuvo estrechamente relacionada con las nuevas oportunidades nacidas de la apertura, aunque limitada y controlada, en la superficie de la estructura política. Se puede sugerir, entonces, que desde inicios de la década de los años sesenta, los asalariados españoles

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

encontraron en la conjunción entre el desarrollo económico, la tibia reforma política y las transformaciones sociales, un camino, aunque escarpado, más transitable para la movilización en la defensa de sus intereses.

1. LA RESPUESTA CALLADA AL SUBDESARROLLO Y AL MIEDO

Los efectos del círculo virtuoso relanzado por la interacción entre el cambio socioeconómico, las oportunidades políticas y la movilización durante la parte final del franquismo tuvo evidentes límites. Se vio entorpecido por importantes obstáculos estructurales. Sobre todo en aquellas provincias del país en las que las arrolladoras manifestaciones del cambio tuvieron una expresión más modesta. Por ejemplo, en el caso de Albacete, el modelo de desarrollo económico desigual y especialmente dirigido a aquellas zonas con una base industrial preexistente y la exclusión de las políticas de planificación indicativa, limitó los efectos de las transformaciones socioeconómicas sobre la provincia. En ésta, la década de los sesenta se caracterizó, a excepción de la capital provincial y de algunos de los municipios mayores, por la masiva emigración, el retardo económico y el atraso social y cultural. En Albacete, el Plan de Estabilización no encarnó el gozne que abrió la escotilla del "milagro económico" de la provincia. Más bien, representó el inicio de la agudización de un proceso de abandono del medio rural ya iniciado inmediatamente después de la guerra civil. Según la OS albacetense, en 1960, las "repercusiones propias del Plan de Estabilización han creado en algunas zonas de nuestra provincia una situación grave, originando el que nuestros trabajadores se vean en la necesidad de emigrar a otras regiones donde cuentan con grandes factorías o centros fabriles en busca de la ansiada colocación". Quince

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

años después de esta comunicación, en 1975, de los ochenta y seis municipios de la provincia, únicamente la capital, Almansa y Madrigueras, habían resistido la cuchillada de la emigración. Ésta desangró a una provincia de la que marcharon unas 210.000 personas entre 1940 y 1975[1].

Durante la década de los años sesenta la provincia de Albacete fue testigo de una cierta reducción de los efectivos empleados en el sector primario. La mano de obra dedicada a faenas agrícolas disminuyó en un 29 por ciento entre 1950 y 1975. En el mismo intervalo de tiempo los efectivos empleados en el sector secundario y en el terciario aumentaron en un 21 y un 16,1 por ciento respectivamente (Gómez Herráez, 1996, 168). Aun así, en 1967 la mitad de la población activa se dedicaba a la agricultura, el 22,3 por ciento a la industria y el 27,6 por ciento a los servicios. En realidad, la provincia de Albacete nunca pudo superar su regazada posición de salida en los albores del proceso a finales de los años cincuenta. El resultado fue, por un lado, la permanencia de un sector agrario totalmente arcaico, con preponderancia del latifundio y muy mal explotado. Por otro, la "ausencia casi total de empresas de verdadera importancia" en un océano preindustrial en el que predominó "la gran atomización" y en el que "la mayor parte de las instalaciones que existen son un auténtico minifundio, y en un porcentaje alto de carácter puramente familiar y artesano"[2].

Para algunos autores el "tamaño de las empresas influyó decisivamente a la hora de que se produjeran o no huelgas". Entre 1968 y 1974, un 67,4 por ciento del número total de conflictos tuvieron lugar en centros con más de cien trabajadores (Mateos y Soto, 1997, 44). Por esta razón no extraña, como dijo la OS provincial, que la "distribución de la población activa y el reducido tamaño de los establecimientos industriales [...] producen que el desarrollo de la vida laboral discurra por cauces de general normalidad". En 1967 la Policía resaltó la inexistencia de "conflictos laborales planteados"

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

debido a la "escasa importancia industrial de la capital y la provincia con ausencia de grandes centros industriales". Esta carencia de importantes luchas sociales también estuvo directamente relacionada con la paz sociolaboral que la dictadura franquista puso al servicio de la clase empresarial a través de la represión de los más básicos derechos de los trabajadores y la eliminación de sus organizaciones de clase (Vega, 2002, 39).

La dispersión, el aislamiento, la eventualidad, y el severo control social, hicieron casi imposible la aparición de grandes huelgas y algaradas en provincias como Albacete. Extremo este que, no obstante, no agotó el catálogo de conflictos. Ni implicó una absoluta pasividad, aceptación, colaboración y lealtad de la clase trabajadora con el poder patronal o vertical (Benito del Pozo, 1990, 113-114). A este respecto, la protesta suele ser "una construcción a través de los recursos disponibles de acuerdo con las posibilidades y obstáculos presentes en un determinado entorno" (Melucci, 1988, 322). En este sentido, el conflicto anónimo, informal y subterráneo, representó el repertorio de reivindicación y expresión del descontento más accesible en escenarios atrasados y empobrecidos donde las condiciones estructurales y políticas hicieron de la rebelión abierta algo excepcional (Sartorius y Sabio, 2007, 91). Sin embargo, tales formas de resistencia han recibido hasta el momento poca atención por parte de la historiografía sobre el franquismo tardío. Esta falta de interés ha condenado a la sumisa aquiescencia con la dictadura a sujetos y grupos que a menudo sólo pudieron manifestar su desasosiego de forma callada e individual.

Las formas de resistencia cotidiana encarnaron una alternativa para presionar sobre cuestiones vitales en el devenir diario del centro de trabajo, como mejores salarios, rendimientos más bajos, más tiempo libre, el trato respetuoso por parte de los capataces, etcétera. Constituyeron una importante respuesta estratégica y adaptativa de los colectivos más débiles a un entorno subdesarrollado y represivo.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Como han dicho ciertos autores, "algunas acciones *individuales* como el absentismo o el abandono del trabajo pueden ser alternativas a acciones más colectivas" en determinados contextos especialmente hostiles (Edwards y Scullion, 1987, 18). No en vano los repertorios de este tipo necesitaron de una mínima coordinación y nunca persiguieron cambios profundos. Pero pusieron de relieve la resistencia y falta de aceptación del orden laboral impuesto por patronos y autoridades sindicales. Representaron, en otras palabras, las turbulencias cotidianas de un mar aparentemente en calma (Mingo, 1994, 133).

Estas formas de lucha cotidiana, aún individuales, calladas y prosaicas, preocuparon profundamente a las autoridades de la dictadura. Por este motivo los gobernantes franquistas pusieron a disposición de los empresarios una copiosa gama de recursos legales para sancionar formas de resistencia como el absentismo, la falta de puntualidad, la indisciplina, etcétera. Así, en las fábricas, talleres y fincas de la provincia de Albacete habitualmente se produjeron despidos por la "ausencia del centro de trabajo sin motivo alguno que lo justifique", por el "uso reiterado de bebidas alcohólicas durante la jornada laboral", por asistir al trabajo en un "estado de falta al orden y decoro", por el "menosprecio de la autoridad de los jefes inmediatos", por "discutir de manera grosera con las compañeras", etcétera[3]. Debido al falseamiento patronal, no se puede saber en qué grado los asalariados utilizaron este tipo de acciones. No obstante, parece ser que algunas de ellas, como el absentismo, llegaron a representar un problema importante tanto para empresarios como para dirigentes del Sindicato Vertical.

Por ejemplo, los trabajadores de la localidad de Almansa hicieron un uso tan generalizado del absentismo que la propia Memoria de la Delegación Comarcal en 1973 calificó al mismo como un acto "muy perjudicial para la industria". Por esta razón fueron muy numerosas las sanciones impuestas por "falta al trabajo sin previa justificación

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ni aviso" en algunas empresas del Calzado de dicha localidad como Garcimar, Lacarcel, etcétera. En este municipio, el absentismo laboral quedó escondido muchas veces en las visitas al médico. El elevado número de trabajadores que diariamente dejaron de trabajar para ir al centro de salud llevó en 1969 a los facultativos del municipio a quejarse de la "grave interferencia que a su labor supone el elevado porcentaje de *cazarrecetas* o *cazabajas* y de otros usuarios sin una sintomatología que justifique la utilización de los servicios"[4]. Tan generalizada fue esta práctica que los empresarios tuvieron que recurrir a "una interpretación de la Dirección General de Trabajo en virtud de la cual sólo tienen obligación de retribuir dieciséis horas al año" de las perdidas por los desplazamientos al médico. Hecho que "creó un gran malestar entre muchos trabajadores" pero que, según los mandos locales del Vertical, consiguió corregir "muchos abusos existentes, habiendo descendido notablemente el absentismo laboral que ello producía". Ante la dimensión del problema, los empresarios almanseños llegaron a adoptar medidas implacables para erradicar esta práctica de disensión obrera. En octubre de 1976 la UTT de la Piel denunció que "algunas Empresas de Ramo de esta localidad mantienen el criterio de no conceder vacaciones anuales retribuidas a aquellos trabajadores que durante el año natural han permanecido determinados periodos en baja por enfermedad o accidente de trabajo o accidente no laboral"[5].

El absentismo también fue una práctica extendida en la construcción. El presidente de este Sindicato Provincial se quejó en 1975 de la proliferación de "demasiados accidentes sin secuelas". Ante la habitual repetición de hechos de este tipo, la empresa constructora del Talave impuso que "al negociar un nuevo convenio colectivo, se estudien medidas severas para combatir la simulación de accidentes". En algunos puntos de la provincia de Albacete el absentismo llegó a ocasionar un "grave perjuicio" y una "carga

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

notable", según algunos empresarios del sector, por las "horas de trabajo perdidas en detrimento de la producción, y los gastos que suponen las cargas de la Seguridad Social". No en vano, un estudio realizado por la Escuela de Organización Industrial calculó que las horas perdidas durante el año 1976 por razones de absentismo fueron veinte veces superiores a las perdidas en conflictos laborales abiertos. Ejemplo de la capacidad disruptiva de una acción anónima aparentemente muy poco contenciosa como fue el absentismo.

Desde finales de los años sesenta el absentismo se convirtió en un instrumento de autodefensa obrera contra la alta siniestralidad, las precarias condiciones laborales y las largas e intensas jornadas de trabajo. Según la empresa constructora del túnel del Talave, el "elevado número de accidentes simulados acaecidos a finales de 1972" respondió al deseo de los trabajadores de "utilizar como festivos los días comprendidos entre 2 y 5 de enero" y "evitar trabajos al aire libre en los días más crudos de frío". En este sentido, el absentismo representó un escape, un descanso tomado por cuenta propia, que reveló una especie de revancha contra el patrón. Desquite que se intentó cobrar un miembro del jurado de empresa de Cementos de la Mancha, despedido por amenazar con reducir su rendimiento porque "en el trabajo no me engañan"[6]. Igualmente, pareció tomarse un descanso el trabajador de Villarrobledo que —según la empresa— durante una "simulada enfermedad asistió, tarde y noche, a sendas representaciones teatrales que se celebraban en esta localidad". Actitudes que, en última instancia, remiten a la pervivencia de una economía moral entre la clase trabajadora de la provincia. Ante la imposibilidad de presionar colectivamente al empresario, ésta intentó recuperar un balance más justo entre el esfuerzo realizado, las horas trabajadas y el salario recibido.

La animadversión subterránea contra el patrón también salió a la superficie mediante la realización de destrozos, sabotajes y hurtos. Entre otros muchos ejemplos, el jurado de empresa del túnel del

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Talave pidió la revisión de la "instalación de aseos y servicios de talleres en los cuales han sido arrancadas las cerraduras y cadenas de los váteres". En Villamalea, el destrozo de caminos llegó a tener tales dimensiones que los burócratas verticalistas pidieron al Ayuntamiento "tomar medidas y acometer esta cuestión de forma firme [...] con la debida fuerza y autoridad". El propietario de la finca Los Pandos, en Almansa, despidió a uno de sus peones porque "intencionadamente, a mala fe, ha arrancado de una viña 181 vides, habiendo dañado otras tantas, por lo que el acto debe ser considerado de sabotaje a la empresa, ya que en anteriores veces que ha labrado la misma viña no ha rozado ni una sola cepa"[7]. El hurto fue especialmente destacable en el campo, sobre todo en las fincas de los potentados locales. En 1967 el delegado de la OS informó que un grupo de terratenientes de la comarca de Villarrobledo "se han personado en mi despacho para manifestar que los daños y hurtos en sus cosechas son constantes, y hasta el punto de que si no se les ponen remedio inmediato, se verán obligados a dejar de cultivar". Antes, en 1963, los mayores propietarios de Bogarra ya habían reclamado insistentemente el control estricto de los campos por parte de la Policía Rural, porque éstos estaban siendo "Pasto de las garras de los malhechores". Pero tal control no fue fácil cuando hechos de este tipo se escondieron en el anonimato facilitado por la solidaridad comunitaria. Por ejemplo, en 1963 unos letreros apostados junto a la propiedad de un pequeño agricultor de Villamalea decían "A vuestro amigo y compañero no perjudicarle, no le toquéis", porque "los que habéis nacido en el polvo de la tierra sabéis que todo pertenece al que la trabaja"[8]. Es más, mientras que algunas prácticas de resistencia fueron encubiertas y legitimadas por los vecinos, aquellos encargados de reprimirlas recibieron la animadversión, la difamación o la burla de la comunidad. Así ocurrió en 1975, cuando la Comisión de Vigilancia Rural creada en Villamalea "para ir solventando los problemas que se suscitasen en el campo", no resultó "eficaz para solventar los

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

mismos, ya que incluso ningún vocal quiere formar parte de la Comisión por no tener que llegar a enfrentarse con asuntos que no son nada agradables".

También existió el boicot, el manifiesto desinterés en el trabajo y la reducción del rendimiento. Actitudes de este tipo fueron intolerables para el jurado de la empresa textil Ibermoda. En junio de 1974 dicho jurado acordó sancionar a seis operarias por "cambiar hilos a los bolsillos de unas prendas y no poner interés en el trabajo". Fueron habituales las denuncias patronales por "falta de puntualidad al trabajo" y "disminución voluntaria en el rendimiento de la labor". Entre otros muchos, éste fue el caso del operario de la empresa Lacarcel, que en 1971 fue amonestado por la "disminución voluntaria y continuada de rendimiento". Ejemplos, en definitiva, que hacen pensar que cada forma de producción y de obtención del salario generó su propias, adaptativas y distintivas, formas de callada resistencia y "contraapropiación" (Scott, 1986, 31).

Las necesidades materiales de una clase trabajadora albacetense, con "mucho miedo y muy poco pan"[9], hicieron de la adaptación a las circunstancias cotidianas una necesidad casi perentoria. En este escenario, las demandas más modestas pudieron ser más fácilmente alcanzadas a través de prácticas silenciosas. Es decir, mediante acciones que no desafiaron directamente al patrón y que se escondieron detrás de la máscara de la pública aquiescencia. Por ejemplo, una operaria de las cadenas de producción de la industria textil no levantaba la cabeza de la máquina cuando el jefe o el encargado rondaban por la planta. Sin embargo, cuando la mirada de escrutinio de ambos desaparecía, era el momento de descansar, de hablar con los compañeros, de contar chistes, mofarse de los jefes, *hacerles coplillas* o cantar. Ésta era la única posibilidad de adaptación pragmática a los frenéticos ritmos demandados por el patrón. De ahí la nota que el gerente de la firma de Calzados Lacárcel entregó a una de sus trabajadoras en 1967. Según la cual debía "tener

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

presente que para trabajar y poder sacar la producción encomendada, no le será permitido, entre otras cosas, el cantar durante el trabajo, mantener conversaciones impropias de su cometido o mantener cualquier otra actitud que perjudique los intereses de la empresa", al "estar el resto de la plantilla pendiente de su conversación y por lo tanto desatendiendo cada cual sus obligaciones"[10].

Se trató, en líneas generales, en todos los casos citados con anterioridad, de un conflicto soterrado en el que el asalariado no manifestó abiertamente un desafío al control empresarial. Más bien fueron acciones defensivas y antipatronales en las que el trabajador intentó eludir de forma callada la autoridad de aquel. Resistencia *brechtiana*, como diría James Scott, en forma de autodefensa y autoayuda que pretendió obtener puntuales mejoras en las condiciones laborales sin recurrir al conflicto directo con empresarios y autoridades. Sin embargo, la conflictividad individual también manifestó otra cara más frontal y disruptiva para el orden empresarial. Nos referimos a aquella relacionada con los conflictos de carácter disciplinario. De esta suerte, desde la segunda mitad de los sesenta, aumentaron los despidos disciplinarios en la provincia. Habitualmente éstos fueron maquillados por las autoridades bajo una eufemística "incompatibilidad de caracteres". Detrás de dicha incompatibilidad se escondieron faltas de indisciplina, desobediencia, insultos, e incluso agresiones a los empresarios o encargados. Todo lo cual reprodujo un enfrentamiento abierto entre algunos operarios y sus jefes que en muchas ocasiones llegaron a cuestionar la autoridad patronal. Entre otros casos, en 1969, la empresa García Lorente advirtió a una trabajadora de que "como vuelva a faltar el respeto al gerente de la empresa, con insultos impropios de una persona, será motivo de despido inmediato"[11]. También López Vera amonestó a una de sus trabajadoras porque "habiéndole ordenado el jefe de su taller a dicha productora que se sentara en su mesa, ésta le contestó *que no quería*". En la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

empresa textil Hijos de Ginés Pérez hubo sanciones de empleo y sueldo a una trabajadora por "haber desobedecido una orden del Encargado de Almacén". Insubordinación que en ocasiones estalló en amenazas y violencia contra los jefes y encargados. Así, en la Junta de Conciliación un empresario de la construcción se negó a readmitir en octubre de 1969 a un trabajador despedido por "haberlo insultado el demandante y amenazarlo con una navaja y un serrucho". En 1965 un trabajador villarroblense se despidió "con gestos despectivos" de la oficina local de la OS "no sin antes haberse expresado en forma violenta y despectiva hacia la Organización Sindical, Magistratura de Trabajo y Tribunal Central de Trabajo". Entre otros ejemplos, en marzo de 1966 la Policía Rural de Casas Ibáñez denunció a un enlace por el "mal trato que dio a las jerarquías de la Organización Sindical y al propio jefe de la Hermandad que se encontraba presente"[12].

En definitiva, las formas más o menos discretas de manifestación del descontento analizadas en este apartado parecen sugerir un menor apoyo y legitimación social de la dictadura franquista de la que cabría suponerse en atención a las escasez de expresiones colectivas, visibles y notables, del malestar y de la protesta. Por consiguiente, como sugieren ciertos autores, "focalizar la atención meramente en las expresiones manifiestas de desafío ofrece una falsa impresión de generalizado apoyo y legitimidad del régimen" (Eckstein, 1989, 30).

2. EL GRITO AHOGADO DEL CAMPO

La centralidad que en el estudio de la segunda parte de la dictadura franquista han ostentado los grandes cambios económicos y sociales ha contribuido a oscurecer otras parcelas importantes para un conocimiento más profundo del periodo. Éste es el caso de los

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

comportamientos de aquellos sectores más rezagados en la modernización socioeconómica que han quedado postergados en los análisis del cambio social durante el franquismo tardío. En este sentido, la tendencia a contemplar a los actores colectivos de la parte final de franquismo como epifenómenos acompañantes de una modernización que se desplegó por su propio empuje y ritmo ha llevado a la par cierta marginación historiográfica en el análisis de los colectivos anclados en el medio agrario y rural (Sartorius y Sabio, 2007, 228-229).

La historia social sobre la parte final del franquismo ha tendido a identificar acción colectiva y conflicto industrial. En base a dicha relación casi unívoca han pasado desapercibidas diversas formas y manifestaciones del descontento enraizadas en las formas de vida y culturas de las sociedades rurales. Según el ya clásico argumento de Charles Tilly y sus colaboradores, los repertorios de acción colectiva desarrollados en la Europa de los siglos XVIII y XIX dejaron paso, conforme avanzó el siglo XX, a formas de conflicto típicamente industriales. Estas nuevas formas fueron resultado de la industrialización, la urbanización y la proletarización por un lado, y del crecimiento del Estado-nación y de la institucionalización de la democracia liberal por otro (Tilly, 1978, 82-96). Sin embargo, difícilmente se puede hablar de una evolución lineal y unívoca de los repertorios de la acción colectiva aplicable a la España de los años sesenta, donde la pujanza de dichos procesos de modernización fue discontinua y desigual. Por tanto, las tradicionales categorías de división y clasificación de la acción colectiva en función de su carácter *reactivo* o primitivo y *proactivo* o moderno, tienen poca validez en la realidad rural de la parte final del franquismo. Es más, aunque en los diferentes ciclos de protesta se suelen producir innovaciones estratégicas y discursivas, éstas quedan limitadas a la pequeña escala. Habitualmente los descontentos recurren a repertorios de acción cercanos, aprendidos, insertos en

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

la costumbre y en las culturas de movilización de las sociedades (Tilly, 2006, 40 y Bascuñán Añover, 2008). Por tanto, en el medio rural del tardofranquismo convivieron la persistencia y el cambio, y reflejo de tal combinación también fue perceptible la pervivencia de formas tradicionales de protesta y la aparición de modernas prácticas de expresión reivindicativa (Gil Andrés, 2000, 434-435).

Normalmente, las movilizaciones campesinas, en cualquier época y lugar, han sido vistas como simples respuestas repentinas a estímulos económicos, malas cosechas, heladas, granizos, plagas, etcétera. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que las circunstancias materiales adversas a menudo se insertaron en el telón de fondo de significados y elementos simbólicos. Habitualmente compuestos éstos por derechos y obligaciones recíprocas, costumbres y normas sociales aceptadas y compartidas por la comunidad (Scott, 1976, vii). Aguijoneados por la mala campaña en los campos de cereal y apoyados en unos derechos adquiridos en base a unas regulaciones sociales y relaciones de reciprocidad esencialmente paternalistas, en 1973 varios agricultores de Casas Ibáñez se presentaron en la Hermandad para "*reclamar* el importe de los daños ocasionados en los trigos [...] toda vez que como el año ha sido tan sumamente malo de cosecha, necesitan este dinero para hacer frente a las compras de simientes y abonos para la simienza". Las hostiles circunstancias económicas generaron descontento y preocupación pero raramente provocaron protestas de forma automática. La percepción cotidiana acerca de las dificultades de la reproducción material estuvo mediada y filtrada por unos significados colectivos que fundaron cierto consenso popular acerca de lo legítimo y lo ilegítimo. Especialmente en lo tocante a prácticas de comercialización, acaparamiento de la producción, precios de los productos de primera necesidad, etcétera. Por esta razón, en el medio rural el pan se convirtió en la pieza central de cualquier expresión del desasosiego causado por la crisis económica de la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

parte final de la dictadura. En mayo de 1976 la Hermandad de Alatoz manifestó el "malestar de los vecinos de la localidad por el precio del pan [...] ya que existen muchas familias numerosas que su jornal se va tras la compra del pan". En ese mismo mes los dirigentes sindicales de Jorquera se quejaron porque los "panaderos están muy mal mirados y existe últimamente un gran descontento por la subida del pan y el poco precio de los cereales". Ante esta situación varios vecinos se dispusieron a elaborar su propio pan, pero se quejaron por las "pegas que se les ponen para retirar harinas, etcétera"[13].

También descansaron en una densa red de significados, concepciones y símbolos, algunas formas cotidianas de resistencia como el impago de impuestos. Sobre todo, en lo relativo a la exacción de aquellas cuotas encargadas de sufragar parte de la actividad de unas hermandades sin recursos, desprestigiadas y exhaustas económicamente. En octubre de 1974, un irritado, ante el impago de las cotizaciones sindicales, responsable de la Hermandad de Carcelén expuso que si sigue "la cosa como va, será posible que en lo sucesivo no pague nadie". En la Hermandad de Abengibre la situación era, en palabras de su presidente, "inaguantable". Había "personal al que se le deben los haberes desde hace más de un año". Pero aun así, los agricultores se negaron a realizar el pago de la cuota sindical. En mayo de 1976 la Hermandad de Jorquera no pudo subir las cuotas puesto que "muchas no se cobrarían" y existirían "muchas reclamaciones que tendríamos de nuestros agricultores". En 1974, las autoridades se negaron a eximir o rebajar la entrega vínica obligatoria tras las heladas y granizos que arruinaron la cosecha de uva en la zona de Casas Ibáñez. En respuesta, los agricultores comenzaron a ocultar y falsificar las declaraciones de la cosecha. Esta práctica debió de estar bastante extendida. Asimismo, es muy posible que contase con una amplia legitimación y aceptación entre los agricultores de la zona. De hecho, cuando el

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

presidente de la Hermandad de Casas de Ves exigió la realización de inspecciones y la aplicación de sanciones sobre los implicados, su superior jerárquico aconsejó realizar la "vista gorda" ante las "desfavorables consecuencia políticas" que podían acarrear en la comarca tales denuncias.

Indudablemente, aquellos agricultores que no pagaron los impuestos de las hermandades o que ocultaron su cosecha lo hicieron en beneficio propio. Básicamente se trató de una acción de autodefensa o autoayuda indirecta, poco coordinada y casi nada disruptiva. Pero no hay que olvidar que cuando este tipo de comportamientos individuales se generalizaron y se hicieron numerosos, como parece ser este caso, la resistencia popular consiguió negar importantes recursos a las clases dominantes y a las hermandades franquistas. Las intenciones quedaron inscritas en los propios actos, y el impago de las cuotas de las hermandades reflejó la preeminencia de los intereses económicos propios de los agricultores ante la desconfianza y el desprestigio de las mismas. A menudo, las acciones de resistencia cotidiana en el medio rural han sido catalogadas como comportamientos egoístas y apolíticos con el único objetivo de solucionar los problemas materiales de la existencia. Sin embargo, como se puede apreciar en el caso del pan y de los impuestos, precisamente dicha conexión entre la resistencia y las necesidades materiales básicas confirieron un sentido político a aquélla. Esto fue así en tanto que dicha resistencia no fue otra cosa que la respuesta a los requerimientos, exigencias y presiones de aquellos como hermandades, propietarios y patronos, que eran vistos por los agricultores como una amenaza a la reproducción material de la existencia (Scott, 1997, 13).

En ocasiones, fue tal el recelo popular al pago de cuotas e impuestos que las autoridades desistieron de su cobro. Como dijo un informe de la Hermandad de Carcelén, fechado en abril de 1974, muchos de los agricultores censados "desde hace años han dejado

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de pagar y como quiera que por ninguna parte se les exige el pago forzoso se han creído que ya no tienen que pagar". Además, en los pueblos pequeños existió toda una "política de la reputación" o estigma moral que sancionó negativamente la colaboración con aquellas exacciones de la autoridad que estaban "muy mal vistas" y que fueron definidas colectivamente como "injustas" e "ilegítimas". En comunidades locales en las que la mayoría de los vecinos se conocían, el ostracismo, en forma de vacío o rechazo social, y las amenazas, indirectas, apodos, miradas, etcétera, representaron una importante, aunque soterrada, arma de presión social. Los rumores sigilosamente extendidos de violencia y de rechazo hicieron del cobro de las cuotas y cargas de las hermandades una ocupación poco deseada en algunas zonas rurales. En 1974 los dirigentes de la Hermandad de Carcelén llamaron la atención sobre la necesidad de "nombrar un agente ejecutivo para realizar los cobros por la vía de apremio, y como quiera que en la localidad no se quiere hacer cargo nadie, precisa que por la COSA se nombre a uno". En 1975, ante el importante volumen de impago en la localidad de Villavaliente, y la inhibición de la Hermandad de hacer recaer las impopulares tareas de recaudación sobre un funcionario local, se llamó a la capital para que se mandase a un "agente ejecutivo para el cobro de dichos valores por la vía del apremio". Incluso entre aquellos en los que recayó labor tan repudiada existió una evidente falta de celo y dejadez en la realización de su cometido. En junio de 1976 el recaudador de la Hermandad de Alcalá del Júcar reconoció que a pesar de "venir prestando sus servicios en la hermandad desde hace muchos años" en el "cobro de cuotas en periodo de ejecutoria se ha distraído *un poco*". "Leve" distracción que se tradujo en la dejación de la recaudación durante varios de los "años anteriores"[14]. Por tanto, la extensión del impago de los impuestos y la presión social sobre aquellos encargados de su cobro, indican la existencia de un ruido de fondo de legitimaciones y justificaciones

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

que apoyaron tales prácticas de resistencia. No hay que olvidar, de hecho, que este tipo de acciones se desarrollaron en el seno de comunidades pequeñas y con redes informales muy densas. Éstas fueron las portadoras de una subcultura que legitimó dichos repertorios en base al ultraje de las definiciones compartidas de lo "justo" y del ataque a los intereses materiales de la comunidad, por parte de las autoridades.

Las justificaciones populares de la protesta estuvieron íntimamente vinculadas a las prerrogativas y deberes derivados de un conglomerado de costumbres y normas paternalistas (Thompson, 1979, 45). De este modo, a ojos de la comunidad, el impago de impuestos y cuotas quedó justificado por el "mal gobierno" y las irregularidades habituales en el funcionamiento de no pocas hermandades de la provincia. Así, en el universo de significados y normas comunitarias, dicho impago representó la respuesta popular ante la dejadez de las autoridades en su "obligación" de contraprestación de servicios a los gobernados. Un buen ejemplo de la desatención en la que se vieron sumidas estas hermandades se produjo en julio de 1964. Entonces, el delegado de la OS en Albacete reconoció la "manifiesta indisciplina y abandono del servicio con los naturales perjuicios para la ejecución de tareas que tienen asignadas" varias de las hermandades de la provincia. Un año antes, el delegado de la OS se había alarmado por las "evasiones en el cumplimiento del deber" en la Hermandad de Bogarra. Al tiempo que lamentó que la misma se hubiese convertido en "refugio de intereses solapados de carácter personal" con el consecuente "desprestigio para la Organización Sindical". En 1961 las jerarquías sindicales de la provincia señalaron sobre La Herrera que "es público y notorio que esta Hermandad es una de las más negligentes en el cumplimiento de los servicios que se le encomiendan" (Ortiz Heras, 1992, 163). También fueron denunciadas anomalías y casos de corrupción en el funcionamiento de muchas otras hermandades.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Por ejemplo, a finales de los años cincuenta se realizaron escritos y denuncias por fraudes en la contabilidad del secretario de Corral Rubio y Alcalá del Júcar. En 1958 y 1959 se amonestó al secretario de Villavaliente por su "deplorable conducta e insuficiencia administrativa". Igualmente, los agricultores de Navas de Jorquera y Elche de la Sierra se quejaron de la actuación del secretario de la Hermandad por el uso ilegítimo de los fondos de las obras sindicales. En Bienservida, el secretario no llevaba con la "limpieza necesaria" el libro de caja. En mayo de 1974 los agricultores de Bormate denunciaron la desaparición de unas cantidades de la hermandad, etcétera[15].

Por tanto, el impago de impuestos y cuotas fue el reflejo de la vulneración de los vínculos de reciprocidad sobre los que se asentaba el respeto de la comunidad hacia dichos entes de control franquista en el medio rural. En este sentido, los agricultores de Bormate siempre tuvieron claro que "aquí nadie da duros a cuatro pesetas". En abril de 1965 cerca de una veintena de los mismos se personaron ante el Jefe de la Hermandad "aunque no habían sido citados por él". Tras realizar una asamblea se negaron a pagar las cuotas "salvo que se pusieran los medios para que los presupuestos fueran menos gravosos, ya que se consideraban perjudicados al tener que pagar *cantidades excesivas con relación a los pocos servicios que percibían de aquélla*"[16]. En otro ejemplo, los socios de la Cooperativa de San Antonio Abad de Villamalea aceptaron inicialmente realizar la llamada Entrega Vínica Obligatoria (EVO) de una porción de sus cosechas como parte de sus "obligaciones" en el juego de reciprocidades con las autoridades. Sin embargo, rechazaron frontalmente tal entrega cuando el precio fijado sobre la misma fue inferior a la mitad del coste de producción y por debajo además de la mitad del precio del alcohol en el mercado. Así, los agricultores de Villamalea no percibieron la entrega de la EVO como el justo pago por un deber de contraprestación sino una exacción "a todas

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

luces injusta" porque beneficiaba a "licoristas, farmacéuticos, exportadores, etcétera, para compensarlos y que ganen más todavía a costa de miles de viticultores pequeños y medianos, agobiados por el trabajo y las deudas". En el fondo de la cuestión, de nuevo, se ventiló implícitamente lo que las clases populares de este pueblo consideraron una afrenta a los derechos y obligaciones contraídos de forma recíproca entre autoridades y gobernados. Como decía el presidente de la Cooperativa, "nosotros no estamos contra" dicha entrega "pero sí contra el precio" impuesto por el Gobierno, que "sólo beneficia a los que tienen los bolsillos bien llenos"[17]. En la madrugada del día 21 de octubre de 1974 varias botellas de vino tinto fueron lanzadas por un grupo de agricultores de esta localidad contra la fachada principal de la sede de la Organización Sindical como "símbolo evidente de protesta ante la desastrosa política de precios llevada a cabo por el Gobierno en este sector"[18]. Pero la significación de tal acto no residió únicamente en la manifestación del descontento ante los bajos precios de la uva. En el fondo del mismo se escondió una noción popular de la uva y del vino que fue más allá de su consideración como productos o bienes comercializables. Ambos, además, encarnaron el símbolo de unas relaciones económicas y sociales que estaban siendo vilipendiadas por parte de las autoridades.

Por otro lado, dicha acción fue perpetrada de madrugada. Bajo las condiciones de represión y las limitaciones a la protesta abierta en el medio rural, los actos colectivos habitualmente buscaron la oscuridad y el anonimato con el fin de minimizar los costes[19]. El 19 de septiembre de 1974 el delegado comarcal de Casas Ibáñez informó a su superior en Albacete que "según ha llegado a mis oídos, el sábado día 14 de madrugada, tiraron en los caminos rurales propaganda subversiva, yendo ésta dirigida a los agricultores". En el mismo mes y año, durante las Fiestas de la Vendimia en Villamalea se produjo un corte de energía eléctrica y "sobre las diez de la noche aparecieron por todo el pueblo panfletos subversivos". Tras

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

la realización de dicha panfletada, los implicados aprovecharon la oscuridad y la complicidad del vecindario para volver a confundirse, como si nada hubiese ocurrido, con el resto de los habitantes en la algarabía de los festejos.

Como ya se ha dicho, en ocasiones los puestos de mando de las instituciones locales del medio rural fueron ocupados por individuos cuya labor al frente de las mismas no respondió a la definición comunitaria del "buen gobierno". El comportamiento de las autoridades locales a veces no respondió a las atribuciones morales exigidas por los vecinos a cambio de legitimidad y aceptación. Por tal motivo no es extraño que circulasen rumores sobre el secretario de la Hermandad de Corral Rubio "dado a la bebida", quien finalmente tuvo que ser trasladado del pueblo por "la animosidad contra dicho cargo". Tal animadversión vecinal estuvo provocada por la "cuestión de los desahucios producidos en tierras del término, de grave perjuicio para la economía local, de los que *culpan* a la propia Organización Sindical". Asimismo, en Navas de Jorquera, algunos vecinos intentaron arrojar por la ventana del salón de la Hermandad al secretario. La razón esgrimida fue que éste había negado las ayudas pertinentes a una viuda con cuatro hijos por no prestarse a sus "pretensiones abominables"[20]. Este tipo de acciones parecían asemejarse a erupciones espontáneas de ira contra los empleados públicos. Pero en realidad, estuvieron más relacionadas con formas de acción violenta pero no indiscriminada, sino aplicada selectivamente. Aquellos que recibieron la amenaza o la violencia por parte de la comunidad fueron señalados por el rumor, el relato de boca en boca de "cosas tan desagradables", los comentarios que crean "un mal ambiente", la sanción de aquello "mal visto", etcétera. Las habladurías, los agravios y los ultrajes casi siempre tuvieron un responsable o un culpable. Las más de las veces —según la sorna popular— un "plancha chaquetas", un propietario, un patrón o un representante de la autoridad.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Los rumores, murmuraciones, difamaciones y calumnias conformaron parte del torrente simbólico de la resistencia popular cotidiana. Éste también se manifestó a través de la burla y la ironía. Por ejemplo, los vecinos de Villamalea bautizaron con el nombre de "El Romancero" el escrito difundido por algunos propietarios, el alcalde y los bodegueros del pueblo. La imposición de tan mordaz y sarcástico apelativo se debió a que dicho escrito sermoneó a los vecinos con que "hablar cosas que no se entienden es perder el tiempo... y la forma de perder el tiempo en este caso es hablar de política, que no trae más que malestar y disgusto a todos"[21]. También hubo otras variantes simbólicas como la retirada de la deferencia. Éste fue el caso de la Hermandad de Labradores de Hellín en 1974. En vez de criticar abiertamente a las autoridades agrarias, hecho de previsibles consecuencias en términos de recriminaciones, amenazas o ceses, esta Hermandad manifestó su descontento mediante la retirada de los habituales cumplimientos y cortesías a los gobernantes franquistas. Así, en julio de 1974, en una "reunión en la que hubo momentos de gran tensión", la Hermandad pidió ante el "problema de la patata, el vino, las variedades de frutos, la situación del cerdo, o la subida del gasoil y abonos", suspender el homenaje preparado por el ayuntamiento al ministro de Agricultura y "obrar con un criterio de mayor realismo y no dejarse llevar por impulsos de sentimentalismo político"[22].

Más que apáticos y resignados, algunos grupos de agricultores de la provincia decidieron movilizarse cuando se trató de cuestiones que afectaron intensamente a la marcha de la comunidad. Esto se produjo en aquellos momentos en los que se puso en peligro la reproducción social y económica de la misma, o cuando los desmanes de las clases dominantes transgredieron la concepción de justicia social compartida por los vecinos. En diversas ocasiones y puntos de la provincia la concentración parcelaria fue vista como una "maniobra" de las autoridades para beneficiar los intereses de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

los mayores propietarios en detrimento de los pequeños agricultores. En 1972 los agricultores del municipio de Cenizate se vieron legitimados para interrumpir los trabajos de concentración parcelaria iniciados por los técnicos del Ministerio de Agricultura. Esgrimieron que con dichas medidas las autoridades no *fomentaban* la justicia social sino que la *manejaban* y, por lo tanto, "como siempre el que se beneficia es el poderoso, porque el que no tiene nada no le concentran nada". Así, en el mes de junio, una veintena de agricultores de la localidad levantaron las hitas distribuidas por los técnicos para iniciar la concentración.

Un desafío de estas características no tardó en provocar la reacción de las fuerzas del orden público. Éstas rápidamente arrestaron a todos los implicados en la acción. No obstante, aunque la actuación policial era más que previsible, no se puede decir que los agricultores participantes en la protesta fuesen unos temerarios. En cierto sentido, tenían las espaldas cubiertas ya que su acción disfrutó de un clima de opinión comunitaria favorable. Es decir, como se señaló con anterioridad, acciones de este tipo se apoyaron en tupidas redes sociales de comprensión de las que nació el apoyo y la legitimación de la mayor parte de los vecinos. Por esta razón, cuando las catorce parejas de la Guardia Civil, compuestas por comandantes, tenientes y sargentos, condujeron a los agricultores detenidos al ayuntamiento de Cenizate, de éste habían desaparecido tanto el alcalde como el jefe de la Hermandad para evitar nuevas protestas y la politización de la situación[23].

La cuestión de la concentración parcelaria puso a flor de piel las concepciones populares sobre la justicia social. En Casas de Ves, con los intentos de concentración parcelaria "no se consiguió nada más que alborotar a ciertos agricultores"[24]. Esta cuestión también provocó tensiones entre los pequeños propietarios de Bormate, Munera y Casas Ibáñez. El 22 de febrero de 1976 la prensa informó que "en las últimas semanas se han producido en nuestra provincia

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ciertas alteraciones, a causa del anuncio de concentración parcelaria en El Bonillo, Bonete y Montealegre". Según las autoridades, el ambiente político y la ausencia de autoridad por carecer temporalmente el primero de estos municipios de alcalde, facilitó la movilización de sus agricultores contra la concentración parcelaria en enero de 1976. Una centena de agricultores de El Bonillo se opusieron "en actitud resuelta", con manifestaciones, charlas y amenazas de encierro, a la concentración parcelaria programada desde el IRYDA. "Hicieron —según informó la prensa— objeto de una recepción hostil a los técnicos del IRYDA desplazados a la villa". Éstos fueron amenazados y "echados del pueblo", en lo que una autoridad calificó como un conflicto con "todos los matices de una lucha de pobres y ricos"[25].

En estos y otros casos existió una nada desdeñable participación femenina. En Cenizate, las mujeres retiraron mojones junto a sus maridos. En El Bonillo, el 19 de enero de 1976, parte del vecindario "representado por más de cien personas, entre ellas 30 mujeres, decidió ocupar los bajos del Ayuntamiento local, cuartel mayor de los funcionarios del IRYDA". También a principios de 1976 un importante grupo de mujeres desfilaron en manifestación por las calles de la localidad de Bonete contra la concentración parcelaria. Según un informe del PCE, fechado en 1970, en Villamalea las "mujeres son tan jabatas como los hombres y hay alguna con gran sentido y capacidad política". La determinación de algunas de estas mujeres en la defensa de los intereses materiales de sus comunidades quedó reflejada cuando un periodista preguntó a un ama de casa de El Bonillo: "¿Y ahora dónde van?". La respuesta, ejemplo de voluntad y decisión popular, fue "donde sea mester". En definitiva, en las movilizaciones del mundo rural, las mujeres ocuparon un papel importante a la hora de legitimar moralmente cualquier reivindicación, resultado de su protagonismo en la solidaridad vecinal y en el ámbito doméstico.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La movilización de los vecinos estuvo sustentada en determinados valores y costumbres. La alteración de los mismos fue percibida por los agricultores y sectores populares como el ultraje de lo que era considerado como un derecho o privilegio tradicional. Éste fue sobre todo el caso de la disputa sobre los montes y tierras comunales, donde se ventiló los derechos de aprovechamiento de unos recursos esenciales para la reproducción material de ciertas comunidades rurales. En 1974 hubo tensiones entre el Ayuntamiento de Casas de Ves y algunos vecinos por el intento de la primera de impugnar las Ordenanzas de Pasto y recuperar parte de las tierras dedicadas a dicho fin. En marzo de 1976, los pequeños agricultores de El Bonillo vieron vulneradas sus "prerrogativas tradicionales" sobre la utilización de las tierras comunales tras el establecimiento de un Coto Social de Caza. Por esta razón levantaron "enormes quejas" por los "enormes daños que produce la caza precisamente a los agricultores más modestos de la localidad". En 1974 el Ayuntamiento de Albacete intentó expulsar a los agricultores de Higueruela y Hoya Gonzalo de la sierra procomunal Albacete-Chinchilla para crear un Coto Social de Caza. En respuesta, los agricultores hicieron valer los "derechos tradicionales" adquiridos por los "muchísimos años que la gente estuvo cultivando [...] desde tiempo inmemorial, desde la existencia del pueblo" dichos terrenos. La reivindicación de los agricultores fue la de "recobrar los derechos" sobre las tierras que constituían un recurso "fundamental para sus medios de vida". Como destacó la prensa, se trató de un contencioso en el que era más importante el "respeto a la justicia, a la equidad y a la moral" que a los propios "textos legales". Durante los meses que duró el conflicto la actitud intransigente de las autoridades municipales provocó "zozobras y violencias" entre el vecindario de estas dos localidades. Según la prensa, el "asunto ha llevado hasta las escopetas vecinales a las faldas de la sierra". Los vecinos de estos pueblos destrozaron el vallado, las estacas y señalizaciones oficiales, y amenazaron a los agentes oficiales encargados

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

del cobro del canon de roturación[26]. Finalmente, debido a la creciente presión popular, el ayuntamiento de Albacete decidió respetar los "derechos tradicionales" de explotación y cultivo de una parte de la sierra por parte de aquellos que lo habían venido haciendo durante generaciones.

Las manifestaciones del descontento en el medio rural rara vez fueron producto de la espontaneidad. Generalmente, tuvieron lugar cuando sus organizadores percibieron una oportunidad favorable. En ocasiones, dicha oportunidad apareció con motivo de una fiesta local o celebración popular. En la celebración de algunas festividades los vecinos echaron mano de un repertorio de acciones ritualizadas e insertas en una cultura popular de la protesta. El objetivo de éstas fue el de canalizar la hostilidad, consolidar los rasgos de la identidad local y reforzar las pautas de conducta y los valores de solidaridad comunitaria. Así ocurrió, por ejemplo, en el municipio de Villamalea. Allí fue tradicional la colocación anual por parte de los quintos de la bandera nacional en el frontón de la iglesia con una inscripción en su interior. En 1971, una parte de los quintos decidieron que la leyenda de ese año sobre la bandera dijese que "La quinta del 71 muestra su ideal: expropiación de los expropiadores. La tierra para el que la trabaja. Que cese la emigración". Los quintos cercaron la plaza, el alcalde amenazó con irrumpir en la misma con las fuerzas del orden, algunos de los jóvenes se mostraron dispuestos a "quitarse los cinturones", pero finalmente el texto fue cambiado ante las presiones de las autoridades. Tras el intento fallido de 1971, tres años después los jóvenes villamalenses que marchaban a cumplir el servicio militar subieron al frontón de la iglesia una bandera con el lema "Los mozos del 74 por una España mejor. La tierra para quien la trabaje. Y freno a la emigración"[27].

Además, la fiesta popular representó una oportunidad para protestar cuando estuvo de por medio la reacción obstruccionista

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de las autoridades. Así ocurrió en 1972 cuando el alcalde de Villamalea intentó suspender las fiestas de la Cooperativa San Antonio Abad a pesar de la desaprobación mayoritaria del vecindario. En respuesta, se produjo una concentración de cientos de vecinos frente a la casa del alcalde. Bajo el "ruido satírico" —en expresión de E. P. Thompson— de gritos y petardos se congregaron "para demostrar que se oponían a los manejos de los que quisieron quitar la fiesta". En opinión de las autoridades, esta manifestación popular representó una "tumultuosa" algarabía con "lanzamiento de petardos acompañados de un gran griterio en la puerta de la vivienda del señor alcalde, con evidente menosprecio y desobediencia de su autoridad" (Sanz Díaz, 2003, 250). Mediante esta "ruidosa denuncia" una buena parte de los villamalenses señalaron públicamente al alcalde como una persona poco grata, merecedora de recibir el ostracismo y el recelo del vecindario (Thompson, 1995, 543-546). Por lo que no extraña que la sala de cine y de baile propiedad del primer edil fuesen regularmente boicoteadas, y la asistencia a las mismas realmente baja.

En suma, durante la parte final de la dictadura en el medio rural y agrario de la provincia de Albacete persistieron formas tradicionales de acción y resistencia popular. Dicha continuidad de unos determinados repertorios de acción preindustriales se produjo en base a su importante eficacia y capacidad de presión para obtener mejoras. Se trató de manifestaciones del descontento eminentemente prosaicas, específicas y localistas, pero que lejos de suponer una manifestación apolítica contra los agravios sufridos, representó la voluntad de los vecinos de intervenir en los asuntos públicos de la comunidad. A través de dichas formas de acción, las clases populares del medio rural y agrario de la provincia manifestaron sus intereses y aspiraciones, delineando una sociedad rural no tan apática y desmovilizada como habitualmente se ha tendido a presentar.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

3. ¿LA BANCA SIEMPRE GANA?

La tranquilidad social fue la tónica dominante en la provincia de Albacete durante la primera parte de la década de los años sesenta. Entonces, aún la nueva generación de militantes no había despuntado y la desilusión y el cansancio habían hecho mella en unos activistas de posguerra que simplemente se limitaban a escuchar la "Pirenaica" o a pasarse alguna que otra publicación clandestina. Como señalaba la memoria del Gobierno Civil en 1960, respecto a las "actividades comunistas y similares, no se ha apreciado durante el año ninguna destacada, ya que su actuación se ha reducido a comentar las noticias de carácter propagandístico que emiten las radios extranjeras, y a comunicarse entre ellos las mismas, lo que denota que persisten en su ideología que mantienen de la manera más discreta"[28].

Esta plácida y apacible estampa comenzó a dar muestras de una incipiente efervescencia desde los años finales de la década de los sesenta y primeros setenta. Para entonces, la propia OS provincial ya detectó un "descontento general" entre la clase trabajadora albacetense. Según un informe oficial, durante 1968 "se hace necesario destacar que en determinados momentos en las localidades de Almansa, Chinchilla y Albacete se han producido en algunas empresas situaciones de tensión conflictiva". Para los gerifaltes de la OS provincial "merece destacarse el sector del Metal". Los "presidentes de secciones sociales y vocales más significativos" del mismo fueron llamados al orden desde las jerarquías sindicales, llegando a recibir "instrucciones en su propio domicilio". Además, el "sector Transporte, especialmente RENFE, también acusa gran descontento", así como el bancario, que "se encuentra fuertemente politizado", y la construcción. De nuevo en 1969 se reprodujeron "tensiones conflictivas en algunas empresas, especialmente en Construcción, Hostelería, Transportes e Industrias Químicas".

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Para finales de año también hubo algún que otro movimiento entre los trabajadores del campo[29].

Según las jerarquías sindicales, a finales de la década de los sesenta, las "actividades de los grupos de oposición sindical se concretan en nuestra provincia en dos puntos específicos, que son las Comarcales de Almansa y Villarrobledo. La primera, núcleo importante industrial, es lógico que en los momentos actuales tenga sus manifestaciones de tipo HOAC y, especialmente, en el sector del Calzado, predominando en sí mismo el elemento femenino". Por otro lado, Villarrobledo "importante comarcal de carácter agrícola, tiene también pequeños grupos de comisiones obreras que manifiestan de vez en cuando su oposición sindical". Las comisiones villarroblenses nacieron en torno a unos pocos trabajadores del campo liderados por un militante del PCE. En 1968 éste consiguió recoger 450 firmas en apoyo de un escrito reivindicativo de un aumento salarial. Junto a "un grupo numeroso de trabajadores se fue al ayuntamiento y a la Hermandad". Pero el "alcalde los intimidó", llamó a la policía de la capital y se detuvo al "cabecilla" de la reivindicación. Para su suerte quedó sin castigo gracias a "la intercesión del capitán de la Guardia Civil"[30].

Como se puede apreciar, desde finales de la década de los sesenta, la situación sociopolítica de la provincia de Albacete comenzó lentamente a experimentar una mayor, aunque aún muy tímida, animación. Este pausado cambio hacia una escena social un ápice más agitada tuvo su origen en la celebración de las elecciones sindicales de 1966. Entonces, fueron elegidos enlaces de la JOC y de la HOAC en el Calzado en Almansa. Igualmente, aparecieron algunos enlaces inquietos en el Metal, sobre todo en la RENFE de Albacete, donde existía un núcleo de trabajadores con vínculos organizativos a nivel nacional y con contactos con Comisiones Obreras. Por las mismas fechas, en la localidad de Villarrobledo, en RENFE un militante del PCE fue elegido vocal sindical. Se trataba

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de un joven "muy inteligente y con mucha conciencia de clase" según el Partido. Éste había conseguido aglutinar a un grupo de "15 o 20 trabajadores que expresaban abiertamente su descontento, sobre todo los más jóvenes", entre los que pronto aparecería una pequeña célula del PCE[31]. Aparte de la elección de un puñado de enlaces cristianos, comunistas e independientes en unos pocos centros y sectores dispersos, la verdadera importancia de estas elecciones en la provincia radicó en que representaron un importante salto organizativo para dos de los colectivos más inquietos durante este periodo, los militantes cristianos en el Sindicato de la Banca y los comunistas en la Hermandad de Labradores de Villamalea.

En la provincia de Albacete la organización militante en el sector de la Banca estuvo principalmente protagonizada por jóvenes vinculados a los movimientos de apostolado obrero de la Acción Católica. Desde finales de los años cincuenta algunos jóvenes empleados bancarios comenzaron a participar en las elecciones sindicales animados por consiliarios y responsables del apostolado. Ya en la década de los sesenta aprovecharon las oportunidades abiertas por los proyectos de revitalización del sindicalismo oficial, integración del activismo obrero y ampliación de la vía representativa, puestos en funcionamiento desde el interior del propio Movimiento para aumentar su influencia política dentro del *establishment* franquista (Ysás, 2004, 85-89). Aquéllos fueron momentos, como recuerda un enlace del sector, en los que —siguiendo las directrices de las jerarquías nacionales— los gerifaltes provinciales del Sindicato de la Banca "se querían abrir, pero nosotros quisimos entrar"[32]. El resultado fue la elección en los comicios sindicales de 1966 de un importante número de militantes cristianos y empleados independientes que consiguieron controlar la Sección Social del Sindicato e incluso llegaron a presidir el Consejo Provincial de Trabajadores. La presencia en el principal organismo de representación oficial de los

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

trabajadores de la provincia permitió a los militantes de la Banca alcanzar las presidencias de otras instituciones como las de la delegación provincial del Instituto Nacional de Previsión o la del Mutualismo Laboral, llegando igualmente a estar presentes en la Comisión Técnica Calificadora y en algunos Consejos Laborales de entidades como Banesto o el Banco Central. Este acceso y el control de diferentes instituciones locales dificultó el ejercicio de la represión contra los militantes del sector y primó la utilización de repertorios legales, abiertos y públicos por parte de éstos.

Desde las estructuras verticales, los empleados de banco utilizaron los recursos organizativos facilitados por la oficialidad para levantar una estructura de coordinación a nivel provincial. El alto grado de presencia militante en el seno del Sindicato Provincial de Banca hizo posible que desde la Sección Social del mismo se articulase un movimiento reivindicativo que aglutinó a la mayoría de las oficinas bancarias de la ciudad de Albacete, así como de varias sitas en las localidades de Hellín, Almansa, Casa Ibáñez, Villarrobledo, La Roda, etcétera. Esta coordinación provincial descansó sobre una militancia laxa, informal y basada en las redes sociales cotidianas que permitió diferentes niveles de compromiso. El sector se organizó principalmente en torno a un pequeño, pero combativo y organizado, núcleo de vocales provinciales y enlaces sindicales. Como recuerda uno de ellos "el grupo más inquieto era más reducido, después conforme se iban teniendo menos inquietudes se iba ampliando el grupo y eran personas que conectaban bien pero no se atrevían a hacer muchas acciones". La vertebración del movimiento habitualmente se canalizó a través de las innumerables reuniones y asambleas facilitadas por los órganos de representación del Sindicato Vertical y la red de locales del mismo. En éstas, los enlaces y representantes sindicales informaron de las diferentes irregularidades en sus respectivas oficinas, a partir de las cuales se elaboraron listas de quejas, tablas reivindicativas, se programaron

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

visitas y se redactaron peticiones a los empresarios, a las autoridades sindicales o a Magistratura[33].

Junto al movimiento campesino animado por el PCE en Villamalea, la Banca fue el sector más conflictivo en Albacete en los años finales de la década de los sesenta y principios de los setenta. En 1968 los jerarcas verticales exhibieron una gran preocupación sobre la situación en el Sindicato de la Banca "habida cuenta de la politización tan enorme que tenía este Sindicato, y de los problemas de índole nacional que el mismo tiene"[34]. Poco después, los militantes católicos del sector en la provincia de Albacete se adhirieron, a través de los contactos nacidos en las estructuras de representación nacional del Sindicato Vertical, a la Interbancaria. Ésta fue un comité independiente creado por empleados de Banca catalanes en 1970 para negociar los convenios nacionales en el sector a partir de una tabla reivindicativa muy parecida a la de Comisiones Obreras. Como en otros muchos casos y sectores laborales, la similitud entre las tablas reivindicativas de los trabajadores y las demandas de la oposición política consiguió vincular la labor de militantes, como los cristianos de la Banca, sin conexión organizativa con el antifranquismo, con las peticiones de la oposición democrática. De este modo, la debilidad de las organizaciones clandestinas de oposición a la dictadura se vio fortalecida por la acción sindical de numerosos militantes de base que sin pertenecer orgánicamente al antifranquismo reclamaron prácticamente las mismas mejoras y derechos que los grupos de oposición (Fishman, 1996, 116-118).

Así, aunque entre los enlaces sindicales y militantes más comprometidos de las oficinas albacetenses "ninguno pertenecía a un partido político en la clandestinidad"[35], en sus declaraciones, peticiones y manifestaciones públicas, expresaron principios y demandas muy parecidas a las entonces reclamadas por los grupos clandestinos de oposición a la dictadura. Sobre todo, cuando se

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

trató de denunciar los obstáculos impuestos por el sindicalismo oficial a una verdadera defensa de los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, en 1970 los enlaces del sector se quejaron porque "los pocos que lo intentamos encontramos muchas dificultades, no siendo suficientes los medios para defendernos de las arbitrariedades de que somos objeto por parte de los empresarios, debido a las normas que regulan nuestra situación laboral". Por esta razón, la parte social del Sindicato de Banca de Albacete consideró "principios básicos" para "satisfacer las necesidades de defensa de nuestros intereses" la creación de un sindicato con "independencia respecto al estado, grupos políticos y cualquier otros", que "sea sólo de trabajadores, los empresarios que formen el suyo propio", que "todos los dirigentes, hasta el más alto nivel, sean elegidos por los trabajadores" y que tenga "garantías totales para los que ejerzan cargos representativos", pasando "el patrimonio de la actual Organización Sindical" a "depender solamente de los trabajadores". En este mismo año, cuando en los medios oficiales afloraron continuas noticias sobre la nueva ley sindical, los militantes del sector enviaron un escrito a los procuradores albacetenses en las Cortes franquistas. En el mismo señalaron que "no sería necesario deciros que características pretendemos los trabajadores que contenga una ley sindical, pero por si acaso" dejaron clara la necesidad de un sindicalismo "totalmente autónomo y representativo"[36].

A través de la mencionada Interbancaria los empleados de Banca se movilizaron a nivel provincial y nacional en una protesta que estuvo estrechamente relacionada con la dura negociación de los convenios colectivos de principios de los años setenta (Martín García, 2006a, 135-149). En la década anterior, durante los sesenta, los convenios habían constituido una eficaz herramienta para "economizar" la inquietud de los grupos más militantes al oscilar la negociación colectiva en torno a cuestiones salariales y laborales. Sin embargo, en los años setenta los trabajadores entendieron que

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

las mejoras laborales estaban íntimamente relacionadas con la representatividad en la negociación. En este sentido, conforme fue avanzando la nueva década los convenios colectivos no sólo representaron una buena oportunidad para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los empleados de Banca, sino también para presionar colectivamente en favor de más amplios derechos y libertades sindicales. Hecho que ya se dejó entrever durante la negociación del convenio del año 1970. En octubre, tras la distribución y publicación de una encuesta por parte de la Sección Social, según la cual el 90 por ciento de los empleados se declaró dispuesto a movilizarse durante la negociación, siete vocales de la misma, su vicepresidente y un enlace del Banco Central de Albacete, dimitieron en señal de protesta por la actitud obstruccionista y en suplantación de los verdaderos intereses de los trabajadores exhibida por parte del delegado provincial de la OS.

Cada vez fueron más los asalariados bancarios descontentos por los resultados de una negociación efectuada a sus espaldas y en contra de sus intereses. Por tal motivo creció la presión no sólo contra la parte patronal sino también contra los negociadores nombrados por el Sindicato Vertical, con la consecuente politización de la negociación colectiva. Así, tras los decepcionantes resultados consagrados en el convenio de 1972, los empleados de Banca de la provincia tomaron parte en las "pacíficas acciones de protesta llevadas a cabo por los trabajadores de Banca de toda España". Denunciaron que la "Comisión Social Deliberadora no es representativa a juicio de los trabajadores de Banca de Albacete" porque "difícilmente pueden aceptarse sus actuaciones por la mayoría de los trabajadores"[37]. En la misma línea, en julio de 1974, los empleados de Banesto de Albacete pidieron en carta colectiva "actualizar y perfeccionar la legislación en materias de convenios colectivos sindicales, teniendo los trabajadores derechos de reunión, asociación y expresión"[38].

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En diciembre de 1974 estalló uno de los más importantes conflictos habidos en el sector de Banca a nivel nacional durante la dictadura. También se dejó sentir en Albacete, en cuyo sindicato, según los dirigentes del verticalismo, existía un "foco extrasindical y fuertemente politizado". Antes, durante el verano, los empleados de Banesto de Albacete reivindicaron públicamente "mejorar las condiciones de trabajo y de vida" y dejaron claro que "no descansaremos hasta tanto la voz del trabajo sea escuchada", a pesar de la existencia de "grandes obstáculos que habremos de superar en esa participación de los trabajadores en la lucha y consecución del tránsito a una sociedad menos egoista, autoritaria e inmovilista que ésta en la que nos ha tocado vivir". En diciembre, los empleados de Banca privada de varias provincias fueron a la huelga en protesta por la falta de representatividad de la Comisión Social Deliberadora del Convenio Colectivo, constituida ésta por los mismos miembros del aparato vertical que en el convenio del año anterior habían acordado una subida salarial muy inferior al aumento del coste de la vida. Ante tal situación, los empleados demostraron en encuestas y escritos su rechazo de la Comisión Oficial y eligieron al margen de la OS una Comisión verdaderamente representativa de sus intereses, la cual incluso llegó a ser parcialmente reconocida por los empresarios. Según fuentes laborales "los bancarios hicieron huelgas en las siguientes capitales: Madrid, Barcelona, Mataró, Lérida, Valencia, Zaragoza, Córdoba, Huelva, Sevilla, Albacete, Valladolid, Oviedo, Gijón, San Sebastián, Pamplona e Irún"[39]. En datos ofrecidos por la prensa, unos seiscientos empleados de banca de toda la provincia de Albacete realizaron paros durante varios días del mes de diciembre. En Albacete, los días "7, 9 y 11 han efectuado jornada de paro de 30 y 45 minutos los empleados de Banca, especialmente en Banco Central, Banco Español de Crédito, Hispano Americano, Bilbao y Vizcaya". Aunque el día 10, considerado "como día de lucha", las presiones de las autoridades

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

sindicales y gubernativas de la provincia consiguieron, con "alguna oposición en Banesto", desactivar el paro y "no hubo nada que señalar al día que tanto nos preocupó"[40].

Por otra parte, las acciones de presión emprendidas por los empleados del sector durante la negociación de estos convenios exhibieron una notable habilidad en la utilización de diferentes formas de manifestación del descontento. Cuando la amenaza de represión es real, la utilización de protestas discretas que encuentran su capacidad de presión en lo simbólico es más eficaz en la defensa de unos determinados intereses que el enfrentamiento directo con los empresarios o las autoridades sindicales. Cuando la huelga abierta pudo acarrear efectos traumáticos en términos de despidos, sanciones y detenciones, los empleados de Banca recurrieron a herramientas de presión menos disruptivas, pero muy eficaces. Entre éstas se encontró, por ejemplo, el dejarse crecer la barba, ir al trabajo en zapatillas deportivas, entrar unos minutos tarde, exhibir un brazalete de luto o un pin en la solapa que decía "Este banco me debe dinero", pasear colectivamente de dos en dos alrededor de una plaza, etcétera[41]. Sobre este tipo de acciones un informe policial fechado en 1970 señaló que los empleados llevaron consigo "durante el primer semestre actos diversos cara al público, dentro de las respectivas entidades, culminando con un conato de manifestación en la zona más céntrica de la capital, antes de la iniciación de la jornada laboral"[42]. Generalmente se trató de una manifestación del descontento poco estridente, pero el mensaje no dejó de ser casi subversivo pues entonces en el sector el mero hecho de ir a la oficina en zapatillas "estaba muy mal visto, ¡si teníamos que llevar corbata!". El objetivo último de estas formas de acción más suaves y menos directas fue el de "hacer algo" pues "no teníamos otra cosa, lo normal es que se hubieran hecho paros o una huelga, pero como eso era ponerse en la calle...". Esta capacidad y riqueza adaptativa a las condiciones sociopolíticas existentes

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

demuestra que en sistemas autoritarios en los que la amenaza de violencia política contra toda acción colectiva se encuentra siempre presente, la expresión simbólica, pacífica y discreta del malestar, tiene un valioso potencial para crear incertidumbre y sorpresa entre las autoridades.

4. VILLAMALEA, ENTRE EL VERDE DE LA VIÑA Y EL ROJO DEL PARTIDO

En este pequeño pueblo, de apenas tres mil habitantes, de la comarca de La Manchuela fue creada en 1946 la Cooperativa San Antonio Abad al calor de la Ley de Cooperativas de 1942 y de los grupos de colonización. Inicialmente, dicha Cooperativa estuvo controlada por los próceres falangistas de la localidad y su actividad fue prácticamente nula hasta el año 1953. Entonces, ante los bajos precios de la uva vendida a los bodegueros y propietarios que monopolizaban el mercado del vino y de los alcoholes, un grupo de pequeños agricultores decidieron reimpulsar la Cooperativa para defender sus intereses. De este modo, la Cooperativa de San Antonio Abad fue "refundada" con el objetivo de producir y comercializar, a través de bodegas propias, los productos vinícolas de los pequeños y medianos agricultores del pueblo. Por lo que no extrañan las presiones, boicots, intimidaciones y amenazas, de los mayores propietarios y bodegueros del municipio y la comarca contra tal empresa colectiva[43].

También a mediados de la década de los cincuenta apareció en el pueblo un grupúsculo de jóvenes empeñados en reorganizar el Comité Local del PCE. Se trató de un puñado de jóvenes comunistas que no habían vivido la guerra, o que lo habían hecho en su infancia y que, por lo tanto, se encontraban menos amedrentados y atenazados por la represión de posguerra que sus antecesores.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Entre estos jóvenes arraigó, como reflejo del giro estratégico marcado por el Partido en estos años, la convicción acerca de la ineficacia de la mera clandestinidad y del cerrado debate doctrinario. Por esta causa buscaron "salir a la superficie de la forma que fuese, ya que la clandestinidad nos impedía tener influencia" en los asuntos públicos y políticos en los que se ventilaban los intereses de los vecinos del pueblo. Con este espíritu decidieron impulsar la infiltración en las organizaciones de masas del régimen franquista a nivel local con el fin de "defender los intereses económicos del campesino y crear un movimiento de masas".

Resultado de dicha estrategia, los militantes comunistas consiguieron en 1957 la presidencia de la Hermandad de Labradores. Aunque ésta fue una experiencia efímera ante las innumerables presiones que llevaron a la dimisión del presidente dos años después. Sin embargo, este relativo éxito animó al Comité del PCE a continuar y adquirir un mayor compromiso en la "colonización" de las instituciones locales y en la perseverancia en la lucha abierta a través de las organizaciones del régimen. En este sentido, un objetivo irrenunciable, por su importancia en la articulación de los intereses económicos y de las relaciones sociales del pueblo, fue la presidencia de la Cooperativa San Antonio Abad. A principios de los sesenta los comunistas se propusieron su conquista a través de la persona de Enrique López Carrasco, de quien el sargento de la Guardia Civil dijo en 1970 que "suponiéndose por tanto que llegado un estado de emergencia o situación caótica, sería uno de los elementos más peligrosos". En 1956 López Carrasco fue elegido vocal por la Sección de Maquinaria, donde consiguió atraerse el apoyo y la confianza de sus compañeros. Este pequeño agricultor, quien para la Guardia Civil "es muy aficionado a la lectura y demuestra estar muy documentado en cuanto a cooperativismo y entidades de esta índole", fue elegido presidente de la Cooperativa en el mes de septiembre de 1961. Cargo que ostentó, con "entusiasmo y ardor" según la Policía, ininterrumpidamente

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

hasta la celebración de las elecciones generales de 1977. Si bien intentó ser vetado desde la oficialidad por sus "pésimos antecedentes políticos" y en evitación de que la Cooperativa "pueda convertirse en un foco político contrario a nuestro Movimiento, desde el que, de una manera solapada, se ejercieran actividades comunistas". Por esta razón, "se estrecharon todas las medidas de vigilancia y control sobre las actividades de la Cooperativa", aunque sin grandes resultados para malestar de las autoridades provinciales[44].

Desde comienzos de la década de los años sesenta la Cooperativa de San Antonio Abad se convirtió en "una avanzadilla de la lucha", en "una plataforma de movilización del Partido que por ahí canalizó sus protestas"[45]. Asimismo, se tornó en un importante instrumento de politización de muchos pequeños y medianos agricultores del pueblo. Con el paso de los años esta Cooperativa llegó a ser el "símbolo de lucha y enfrentamiento político, económico y social de los campesinos contra las instituciones y el régimen franquista". Según un informante del Partido, de paso por estas tierras en 1970, en Villamalea el "centro de toda la vida económica, social y política es la Cooperativa, que empezó a funcionar hace ya algunos años con unas decenas de socios, y hoy agrupa a 1.000 familias campesinas"[46]. En noviembre de 1974 el diario *La Verdad* recalcó que "por una vez una Cooperativa está siendo freno del subdesarrollo (hasta donde puede), y acelerador del bienestar"[47]. No extraña, por tanto, la preocupación de las autoridades sindicales de la provincia porque el "peligro mayor se cierne sobre otras localidades colindantes", ya que la Cooperativa San Antonio Abad "sirve de norte a otras cercanas, cuyo contagio político es muy posible". Por ejemplo, en 1964 en la localidad de Villalpardo la policía tuvo que dispersar una asamblea fomentada desde la Cooperativa de Villamalea por las incitaciones a los vecinos "para que se pronunciaran en fuerte protesta ante las autoridades de todo orden y reivindicaran una mejora de sus derechos sociales".

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El control de la Cooperativa por parte de miembros más o menos cercanos a la oposición democrática facilitó la introducción de los mismos en otras instituciones locales. Con motivo de las elecciones sindicales de 1966, desde la presidencia de la Cooperativa se informó a los socios que "hay las elecciones sindicales en España, es un tema palpitante y de serio interés para todos. Si tenemos que vivir en estos pueblos, tendremos que luchar no sólo por la Cooperativa, sino por una buena Hermandad y un eficaz ayuntamiento". Como cuenta el propio Enrique López Carrasco, "no nos conformábamos con la Cooperativa. Con el tiempo suficiente preparamos copar la Hermandad. Íbamos casa por casa para conseguir votos [...] Les animamos a ir a votar y ganamos". En las elecciones de 1966 y de 1971 las candidaturas encabezadas por los comunistas y por otros vecinos comprometidos, aunque sin militar en el Partido, con el movimiento campesino, obtuvieron la presidencia de la Hermandad y el control de la Sección Social de la misma. En esta última fecha, según el propio PCE, "hubo mucha animación y gran afluencia de público" durante la votación. Cuyos resultados dieron a los comunistas y aliados dieciocho de los veinticuatro puestos a cubrir. Éstos obtuvieron 1.436 votos por 375 de los candidatos oficialistas[48].

Éxito que muy posiblemente se hubiese vuelto a producir en las elecciones de 1975 de no mediar las manipulaciones y amenazas esgrimidas por el sindicalismo oficial. En esta localidad los comunistas impugnaron el plan electoral que pretendía minimizar el número de cargos elegibles en los centros con fuerte presencia del PCE y de las Comisiones Campesinas y aumentar el número de cargos en sectores adictos en los que la victoria de la candidatura oficialista estaba asegurada. También denunciaron que algunos candidatos electos eran "hermanos, tíos y sobrinos del presidente de la Hermandad"[49]. Las múltiples arterías y coacciones hicieron que las últimas elecciones sindicales del franquismo en la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Hermandad de Villamalea estuviesen controladas, según el PCE de la localidad, por "gente reaccionaria" en la Sección Económica y por sus "hombres de paja" en la UTT. Aun así, la oposición consiguió obtener la presidencia de la parte social y la vicepresidencia de la Hermandad.

Tal fue el grado de entrismo del PCE en las instituciones locales de la dictadura que —según un informe fechado a inicios de los setenta— la "lucha contra la reacción local ya se lleva en un plano abiertamente político, producto de que a las autoridades el poder local se les ha escapado prácticamente, sólo les queda la alcaldía como plataforma política". Por esta razón las jerarquías provinciales intentaron fortificar esta institución con el nombramiento de alcaldes adictos a la línea dura del régimen. Durante este periodo fueron nombrados ediles de la localidad un antiguo brigada de la Guardia Civil y el delegado local de la OS. Personaje éste último —según los comunistas— "soberbio y sin sentimientos sociales y humanos", que en una asamblea de la Cooperativa en 1973 fue denunciado como "abanderado del anticooperativismo" y "representante de una minoría que no supera el 5 por ciento". Las malas relaciones y los continuos enfrentamientos entre el Ayuntamiento y la Cooperativa llevó a ésta segunda a avisar que la "mala fe" y el "fanatismo personal" del alcalde podían ocasionar en el "pueblo algún problema delicado y de violencia" (Sanz Díaz, 2003, 178-179). También las autoridades provinciales hablaron de "enfrentamientos e incidentes entre los grupos opuestos del puesto". Para acabar con esta situación, en 1976 el movimiento democrático, encabezado por el PCE, intentó conseguir la alcaldía en la persona de Enrique López Carrasco. Como decía un informe del PCE acerca del control sobre la alcaldía de Villamalea, "los camaradas no le quitan el ojo de encima para arrancársela en la primera oportunidad que se presente". Y ésta apareció con motivo de la apertura municipal en materia electoral auspiciada por las reformas del

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

gobierno de Arias Navarro. Entonces, los militantes del Partido no sólo consiguieron reunir el 1 por ciento de las firmas del censo requeridas para presentar candidatos, sino que llegaron a juntar un 25 por ciento de las firmas de los vecinos censados. Si bien las maniobras y obstáculos burocráticos impuestos por las autoridades hicieron imposible la participación de López Carrasco en dichos comicios. Hubo que esperar a las primeras elecciones municipales democráticas de 1979 para que los comunistas obtuviesen el bastón municipal por mayoría absoluta. No obstante, aunque el ayuntamiento fue la única institución local que se resistió al control del movimiento abanderado por el PCE, ésta sufrió un constante desprestigio y pérdida de influencia sobre la vida social, económica y política de la comunidad. Así quedó reflejado, por ejemplo, en el fracaso de la Cooperativa en la "que como socios figuran —según el diario *Informaciones*— el alcalde, los concejales y antiguos bodegueros". Dicha Cooperativa había sido promocionada desde la oficialidad como contrapeso a la creciente influencia sobre el vecindario de la Cooperativa San Antonio Abad y con el objetivo de debilitar y dividir el importante movimiento campesino de la localidad.

En el caso de Villamalea, el acceso al poder modeló el tipo de acción emprendida por parte de los militantes del PCE. La obtención de importantes cargos en la Cooperativa y en la Hermandad permitió al PCE ejercer una lucha abierta y legal, haciendo de las instituciones de control de la dictadura verdaderas plataformas de reivindicación y movilización. Como decía un informe del Partido, "el alma de todo este trabajo" fue Enrique López Carrasco, "presidente de la Cooperativa, presidente de la Hermandad, presidente de la Caja Rural y miembro de unas cuantas comisiones y organismos provinciales". Un pequeño agricultor que —según citado informe— "sabe combinar su trabajo abierto con el ilegal, aunque es un líder fundamentalmente legal". A través del trabajo abierto y del control de los organismos locales, los militantes de la oposición

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tuvieron acceso directo a la gran mayoría de villamalenses, para quienes los instrumentos oficiales de establecimiento del precio de la uva, reparto de las ayudas al campo, préstamos a bajo interés y negociación colectiva, incidieron decisivamente en sus condiciones de vida y de trabajo. Así fue posible obtener el apoyo a numerosas reivindicaciones —al venir convocadas desde organismos reconocidos por la legalidad franquista— por parte de vecinos sin grandes inquietudes políticas que de otra manera hubiesen sido reacios a colaborar con cualquier actividad clandestina.

Las principales acciones reivindicativas impulsadas desde la Cooperativa o la Hermandad siempre estuvieron muy vinculadas a las necesidades más perentorias de las clases populares del pueblo. Se trataba de aprovechar y utilizar "todo lo que desde las instituciones del régimen se podía hacer para ayudar a la gente". Buen ejemplo de ello fue la creación, desde la Cooperativa, de la Caja Rural con el objetivo de que "el dinero del campo se invierta en el campo". De hecho, "gracias a esa entidad bancaria muchas personas de Villamalea con dificultades económicas muy serias han podido salir adelante"[50]. Ésta facilitó préstamos a los campesinos en condiciones muy favorables. La Caja Rural también canalizó el ahorro de los emigrantes del pueblo en Holanda y en otros lugares, lo que hizo posible que las remesas redundasen en la promoción económica de la localidad[51]. Por tanto, la movilización emprendida en Villamalea, más que ser el resultado de un modelo ideológico, básicamente respondió a las necesidades de defensa colectiva de los intereses de los agricultores y las clases populares en el marco de una dictadura como la franquista. De hecho, el progresivo apoyo popular a las demandas de tipo político y democrático se desprendió de las reivindicaciones más sentidas por los habitantes del pueblo y del trabajo sindical y social a nivel de base.

Tal defensa se llevó a cabo a través del ejemplo diario de trabajo, honradez, esfuerzo, compromiso y realismo. Los comunistas

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

al frente de la Cooperativa y otros organismos locales únicamente consiguieron el apoyo y el prestigio entre el vecindario mediante la pragmática y cotidiana defensa de los intereses del pueblo. En este sentido, la dirección local del PCE siempre tuvo claro que el respeto y favor entre los vecinos únicamente se podía ganar a través del ejemplo cotidiano de compromiso y rectitud. Por este motivo, el PCE villamalense creó la *Comisión de los Tres*. Ésta comisión fue la encargada de velar porque el militante "fuese un espejo de perfección, el más trabajador, el más honrado, de vida matrimonial irreprochable, sin vicios, etcétera". No en vano, la mayoría de los activistas y simpatizantes del PCE en Villamalea, aunque "sus ideales políticos son de izquierdas", fueron conceptuados por los informes de la policía franquista como individuos de "buena conducta moral, pública y privada". Fue habitual que en las fichas policiales se hablase de un "honrado trabajador y carente de vicios" o de un vecino que "goza de buena reputación" en el pueblo, para referirse a individuos comprometidos con la lucha democrática liderada por el PCE.

La dirección del PCE de Villamalea siempre tuvo claro que el crecimiento del Partido y las posibilidades de la lucha contra la dictadura anduvieron de la mano de su capacidad para influir en los asuntos sociales, económicos y políticos que preocuparon diariamente a los villamalenses. Para ello, fue necesario el aprovechamiento eficaz de todos los recursos facilitados por la intrincada maquinaria de las instituciones franquistas locales. Por esta razón, el PCE de Villamalea, principalmente conformado por pequeños agricultores, estableció alianzas y una íntima colaboración al frente de la Cooperativa, de la Hermandad y de la Caja Rural, con técnicos y profesionales de clases medias que no fueron necesariamente comunistas, aunque el sargento de la Guardia Civil los calificó en 1970 como "socios incondicionales" del presidente de la Cooperativa y "simpatizantes de las ideas izquierdistas"[52]. Para ocupar diferentes cargos en los diferentes organismos locales, el

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

"Partido empezó a tantear a esa gente que creyó conveniente que le podía ayudar por su capacidad de convicción, por su valía personal, por sus cualidades, por su disponibilidad". Según un informante del PCE, la "Cooperativa la dirige el Partido con una serie de aliados que han sabido conquistar los camaradas". De hecho, para el desarrollo y consolidación de las estructuras del Partido en el seno de la localidad fue "muy importante el valerse de las personas que valían para desempeñar esos puestos, aunque no fuesen comunistas"[53].

En esta misma línea, se puede decir que el PCE de Villamalea se afanó por crear un frente interclasista y abierto, un movimiento de base social amplia, que aglutinase, además de pequeños agricultores y jornaleros, a profesionales, funcionarios, comerciantes, miembros de clero local, etcétera. Se trató de utilizar todos los recursos legales y clandestinos, para representar los intereses del mayor número posible de vecinos y colectivos sociales. Buen ejemplo de ello fue la creación, por parte de militantes del PCE, de la Cooperativa de consumo Robert Owen, cuyo objetivo fue abaratar los precios y ayudar en la cesta de la compra a las familias económicamente más débiles. No obstante, desde el Comité Local del PCE se llamó a los vecinos al "debido respeto con el pequeño comercio de Villamalea". Desde la dirección del Partido "se nos aconsejaba a todos los socios que debíamos comprar en todos los pequeños comercios de Villamalea"[54]. Esta voluntad de inclusión y representación de los intereses de amplios sectores populares permitió al PCE fraguar un profundo arraigo e inserción en el tejido social del municipio. Dichas raíces, además, crecieron conforme se fue levantando una red de servicios que llegó allí donde no alcanzó el Ayuntamiento. Por ejemplo, desde el PCE se articularon y pusieron en funcionamiento las conocidas como *jornadas rojas*. Instauradas éstas en 1967 con el fin de ayudar —mediante peonadas los fines de semana, la recolección de la uva, facilitación de maquinaria, etcétera— a aquellos agricultores más necesitados del pueblo.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Asimismo, independientemente de la oficialidad y con la influyente participación del PCE y de sus aliados, se crearon la mencionada Caja Rural, la biblioteca del pueblo, el economato Robert Owen, el club de teatro, el equipo de fútbol, los bailes obreros, el Bar-Club Televisión, el Club de Amigos de la UNESCO, etcétera. Así, cuando los colegios electorales se abrieron por primera vez a la democracia en junio de 1977, el PCE de la localidad tenía cuatro centenas y media de afiliados —más del 10 por ciento de la población del pueblo—. Pero su influencia social en Villamalea era mucho mayor. De hecho, durante las décadas de los sesenta y setenta el PCE llegó a "controlar la vida económica, política y cultural de Villamalea". Por todo lo cual no extraña que, como decía un informe del PCE, "Villamalea es conocido en toda la comarca, y más allá, en la provincia, como el pueblo rojo".

La movilización pública, abierta y legal tuvo su correlato en el activismo clandestino. Es decir, además de aprovechar al máximo los recursos legales facilitados por el sindicalismo y el cooperativismo franquista, el PCE promovió toda una serie de acciones ilegales como la organización de asambleas, el reparto de propaganda, la realización de huelgas, manifestaciones, encierros, etcétera. En las más de las veces, el Partido potenció la actividad dentro de la legalidad, pero no tuvo ningún inconveniente en utilizar repertorios ilegales cuando las condiciones así lo aconsejaron. Por ejemplo, cuando la UTT de la Hermandad encontró numerosos obstáculos para preparar el convenio de 1974 su presidente protestó porque en "en esto de la celebración de reuniones se nos están poniendo cada día más trabas y burocracia en lugar de ir concediendo más libertad, pues si se continúa con tantas cortapisas para celebrar una reunión, nos veremos en la necesidad de celebrarlas clandestinas"[55]. Muestra de la continua trasgresión de la legalidad por parte de los comunistas de Villamalea, Enrique López Carrasco —a pesar de ser un líder legal— fue el ciudadano más multado

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

durante toda la dictadura por cuestiones sociopolíticas en la provincia de Albacete. Producto de dicho activismo opositor nacieron a principios de los setenta las Comisiones Campesinas (Ortiz Heras y Sánchez Sánchez, 2001, 218). Según la Policía, esta organización actuaba en "conexión con el Partido Comunista, unas veces secundando campañas de agitación de nivel nacional y otras aprovechando la fricción entre la administración y administrados en problemas de intereses sociales y económicos"[56].

En el caso de Villamalea, la militancia antifranquista y la agitación política se sustentaron en los recursos facilitados por la lucha abierta y legal a través de las instituciones del régimen. La actividad y el compromiso público representaron el mejor instrumento para ocultar la participación en la oposición contra la dictadura. Por este motivo, en la mayoría de los informes personales sobre activistas del PCE en la localidad, la Guardia Civil manifestó no conocer "actividades políticas ni hechos delictivos de ninguna naturaleza"[57]. El trabajo abierto hizo pasar desapercibidos a muchos militantes clandestinos del Partido. Uno de ellos recuerda que en el enfrentamiento con uno de los prohombres franquistas de la localidad éste le espetó "ya tengo ganas de que vengan los tuyos". A lo que él le respondió: "no hace falta que vengan porque estamos aquí ya". De hecho, si desde finales de los años cincuenta el Comité Local del PCE nunca fue desarticulado, ni salió a la luz su composición ni el aparato de propaganda, ello fue debido a que la clandestinidad en este pueblo estuvo firmemente entretejida con la acción llevada a cabo dentro de la legalidad. Como recuerda un militante comunista "en la clandestinidad estábamos muy bien organizados en células, pero si a nosotros nos hubieran descubierto una célula probablemente hubiéramos caído [...] lo importante es que la lucha era abierta totalmente y ahí se estrellaban".

El trabajo abierto y legal, junto al abnegado compromiso diario con las necesidades más sentidas del municipio, hizo que los

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

líderes del movimiento gozasen de una importante popularidad y reconocimiento social en la localidad. La entrega y la obtención de mejoras palpables trenzó vínculos de simpatía y solidaridad entre los militantes y el resto del vecindario "porque la gente confiaba en nosotros ya que hacíamos una política completamente abierta" y "conseguíamos cosas"[58]. Sólo así fue posible un importante cambio en la consideración social de la represión. En la parte final del franquismo ésta ya no golpeaba, como en décadas anteriores, a grupúsculos desconocidos de activistas clandestinos. Por el contrario, en los años finales de la dictadura, dicha violencia estatal se cernió sobre trabajadores que abiertamente, con un empeño realista y responsable, defendían los intereses de las clases populares a través de cauces perfectamente legales como la Cooperativa, la Caja Rural, la Hermandad, etcétera. Por esta razón un guardia civil de la localidad se llegó a preguntar "¿por qué tenemos que perseguir a esta gente?"[59]. En efecto, el compromiso esforzado y público en alguna que otra ocasión incluso atrajo el reconocimiento de las fuerzas del orden franquista. Por ejemplo, según un informe del PCE Central en 1970, el "sargento de la Guardia Civil, que es asiduo a las asambleas generales de la Cooperativa, al salir de la última comenta las reivindicaciones que planteó en la misma el presidente, diciendo: Aún se quedó corto Enrique, debía haber exigido que se arregle algún cuartel, que están llenos de goteras"[60].

Bajo estas condiciones, el empleo de la represión contra aquellos que previamente se habían ganado la confianza y el apoyo de la mayoría de sus vecinos podía desencadenar un conflicto politizado e incluso muy radicalizado. Bajo la dictadura ningún líder antifranquista fue "intocable", pero la aplicación y gestión de la represión sobre aquéllos más conocidos y respetados cada vez se hizo más problemática. Éste fue el caso de Enrique López Carrasco. Desde principios de los sesenta las jerarquías provinciales informaron que el "presidente de la Cooperativa San Antonio Abad, Enrique

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

López Carrasco, es individuo de claras ideas comunistas las cuales trata de inculcar en los jóvenes de la localidad, habiendo existido ya malestar y protestas de la autoridad local por estas actividades". Por esta razón, como ya se ha dicho, recibió una retahíla de sanciones y denuncias, fue continuamente investigado y vigilado por la Policía, tuvo que declarar en comisaría en muchas ocasiones, etcétera. Sin embargo, nunca fue encarcelado u objeto de malos tratos debido al importante apoyo social que acumuló a sus espaldas. De hecho, para ocultar la dificultad de reprimir a López Carrasco, los gobernantes locales incluso hicieron correr el bulo de que se trataba de un personaje cooptado por el cooperativismo y el sindicalismo oficial, y que contaba con la protección de jerarquías superiores que evitaban que este líder campesino fuese encarcelado o simplemente, como muchos otros, brutalmente apaleado.

En Villamalea, las estructuras de movilización facilitadas por la organización del Partido en la localidad se entrelazaron con las estructuras menos visibles e informales de la propia comunidad. La labor de los militantes de la oposición se integró de lleno en las experiencias de reciprocidad laboral y vecinal, los intercambios solidarios, los vínculos emocionales, las sanciones sociales y los valores compartidos. En este sentido, la celebración de la Fiesta de la Vendimia fue un buen ejemplo de los efectos indeseados de la represión cuando ésta fue ejercida sobre colectivos con una fuerte identidad comunitaria basada en el apoyo mutuo. Organizadas por la Cooperativa, dichas fiestas representaron una oportunidad para ritualizar las expresiones de malestar social y crítica política. Además, apuntalaron los valores de solidaridad y enfatizaron la identidad de una comunidad fuertemente apegada a su Cooperativa y a la defensa de los intereses generales del pueblo. Por esta razón, el alcalde intentó en 1972 suspender estas fiestas, diluirlas en el marco de otros festejos religiosos e imponer sanciones a sus organizadores. Y así habría sido de no mediar el rechazo frontal del

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cuerpo sacerdotal de la localidad, y la realización de varias "reuniones y manifestaciones o desfiles sin autorización" de cientos de vecinos "con alteración grave del orden público y de la paz social" para "mostrar su disconformidad con la situación política actual". El pueblo vivió varios días de tensión y enconamiento que dejaron vislumbrar un conflicto más serio. Así, ante la presión social, la determinación de la mayoría de los villamalenses de defender sus fiestas y el inminente peligro de radicalización de la situación, las autoridades no tuvieron más opción que permitir la celebración de las fiestas durante los años siguientes.

En intento de evitar altercados de este tipo, en 1971 una conferencia sobre Miguel Hernández "se impuso, sin que nadie intervenga, ni las autoridades ni la Guardia Civil", aunque ésta "más que acto cultural se asemejaba a mitin político", y "a pesar de no ser autorizada"[61]. No hay que olvidar a este respecto algunas algaradas (manifestaciones, concentraciones frente al ayuntamiento o el cuartel de la Guardia Civil, bloqueo del baile, etcétera) habidas en 1976 como respuesta popular contra la represión. Por ejemplo, tras la detención de algunos de los asistentes a una conferencia durante las Fiestas de la Vendimia de este año, casi dos centenares de personas bajo el grito de "libertad a los detenidos" rodearon el cuartelillo hasta que los apresados fueron dejados en libertad horas más tarde. Dos meses después, en noviembre de 1976, la policía detuvo a varios manifestantes que fueron conducidos al cuartel de Villamalea. Pero "ante los ánimos un tanto exaltados de la población", la cual resistió con decisión la toma militarizada del pueblo, éstos tuvieron que ser "trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Albacete" para evitar una situación de desorden mayor[62].

Como se puede apreciar, en Villamalea llegó un momento en que, gracias a la "lucha abierta" y a la solidaridad fraguada a través de la misma, "les era imposible golpearnos sin provocar movilizaciones". Como dijera quien fue presidente de la Cooperativa,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

"desde entonces tengo que agradecer que las autoridades no nos dejasen tranquilos, sucediéndose conflicto tras conflicto". Hecho que hizo que "nos unamos más, que haya solidaridad, y que se vea con interés nuestra gestión económica y social" (Doménech, 2002a, 56). Lo que demuestra, en definitiva, el carácter proactivo de los actores colectivos y su capacidad, no siempre valorada por la historiografía, no sólo para sortear y resistir, sino también para aprovechar la represión en su beneficio, generando flujos de solidaridad y politización (Oliver Olmo, 2007).

5. DE LA SACRISTÍA AL AMBIENTE

Algunos sectores eclesiásticos minoritarios influyeron en la lenta y pausada animación del panorama social, cultural y político, de la provincia de Albacete durante los primeros años de la década de los setenta. Antes, las relaciones entre la Iglesia española y la dictadura franquista se habían caracterizado desde el inicio de la guerra civil por la mutua colaboración sellada con la firma del Concordato con la Santa Sede en el año 1953. Sin embargo, la celebración del Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965 marcó un punto de inflexión en el maridaje entre la Iglesia y el régimen de Franco (Raguer, 2006). La celebración del Concilio, unida a la renovación generacional dentro de la Iglesia, removió un conflicto que no quedó únicamente limitado a las jerarquías y estructuras eclesiásticas, sino que también impregnó decisivamente el devenir político del periodo (Levine, 1986, 149-150). Sobre todo, porque conforme fueron avanzando los años sesenta y setenta aumentó el número de católicos seglares, sacerdotes y religiosos presentes en conflictos sociales y actividades de la oposición que supusieron una amenaza política para la dictadura, y que a su vez propiciaron el enfrentamiento del régimen franquista contra la Iglesia española y el Vaticano.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Se ha dicho que en "aquella España había varias Iglesias" (Sartorius y Sabio, 2007, 428). Como apunta Pedro Carasa, durante el franquismo más que de la Iglesia, habría que hablar de diferentes Iglesias que convivieron de forma antagónica: bien colaborando, distanciándose o en oposición con la dictadura franquista durante la etapa final de la misma (Berzal de la Rosa, 2007, ix-xiii). Así, a pesar de la moderada evolución experimentada por la jerarquía eclesiástica durante los años setenta, existió en las cabezas de numerosas diócesis resistencias que clamaron por el mantenimiento de la unidad católica y la colaboración armónica Iglesia-Estado. Entre ellas se encontraron, aunque con matices, los dos obispos que ocuparon la sede albacetense en la parte final de la dictadura. En líneas generales, el papel de ambos durante este periodo osciló entre el compromiso con el régimen franquista, el conservadurismo apolítico y el tibio aperturismo tras la muerte de Franco (Ortiz Heras, 2008).

El obispo Arturo Tabera Araoz, se caracterizó durante su ministerio en la diócesis de Albacete hasta 1969 por una fervorosa connivencia con el poder político. Ejemplificada esta en las palabras del gobernador que en 1960 ensalzó la "mutua comprensión e inteligencia" existente entre la autoridad eclesiástica y la civil sobre aquellas "cuestiones que de otra forma podrían ser ocasión de roces u otras derivaciones"[63]. En 1966 el obispo Tabera mostró su más enérgica gratitud "sin límites y empapada en emoción" hacia la figura del dictador por la concesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort (Santa Olalla, 2002, 365). Su sucesor fue Ireneo García Alonso, estrecho colaborador de Pla y Deniel en Toledo, y presentado al Caudillo como "uno de los más prominentes católicos del régimen" (López Villaverde, 2003, 108). Entre sus méritos, fue galardonado por el periódico provincial del Movimiento, *La Voz de Albacete*, como "albacetense del año 1972", junto al gobernador civil, el alcalde de la capital y el presidente de la Diputación. Ante tal

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

conexión con la oficialidad provincial no extraña que el doctor Ireneo García se limitase, como no pocos compañeros de jerarquía, a moverse sin complicaciones en el terreno de la denuncia profética —admitida por el Concilio y la Conjunta— contra las injusticias sociales, sin inmiscuirse en espinosos asuntos políticos (González Madrid y Ortiz Heras, 2005, 60). En más de una ocasión defendió que la "Iglesia no puede descender a criterios concretos de la actual situación española, y ésa es una responsabilidad que les toca a los políticos". En su opinión, publicada en 1974, la "Iglesia no se va a meter en problemas opcionales, nosotros lo que tenemos que hacer es defender principios morales y éticos"[64].

Hablar de disidencia eclesiástica en la diócesis de Albacete es limitarse a una minoría de sacerdotes jóvenes. Según un informe oficial, aunque con clara intencionalidad a la baja, sobre "sacerdotes españoles de activismo antirrégimen contrastado", en la diócesis de Albacete había 174 párrocos, de los cuales únicamente siete, un 4 por ciento, eran catalogados como *activistas*. Una cantidad más que modesta si se tiene en cuenta que según los datos de dicha comunicación la media nacional se situaba en un 10,6 por ciento[65]. Aun así, y a pesar de tratarse de una minoría, las homilías, pronunciamientos públicos y actividades organizadas por los párrocos contestatarios soliviantaron e inquietaron profundamente a unas autoridades locales perplejas y desorientadas ante las nuevas actitudes de algunos representantes de una Iglesia otrora fiel aliada de la dictadura. Como manifestó a principios de 1974 una jerarquía de la diócesis, en la provincia de Albacete "estábamos acostumbrados a que la Iglesia ejerciera una misión de conservación, de ahí la extrañeza de muchos" ante la incipiente aparición de una nueva Iglesia que aboga por "ejercer una función crítica dentro de la sociedad" y "facilitar la libertad humana".

Por este motivo, conforme fue avanzando la década de los setenta, las relaciones entre un sector de la Iglesia albacetense y los

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

mandos políticos de la provincia se vieron profundamente desgastadas. El resultado de dicho deterioro fue la aparición de cierto *anticlericalismo de derechas* entre diversas personalidades del *establishment* político provincial (Cruz, 1997b). En octubre de 1971 el director provincial de Asuntos Económicos de la OS, a la sazón también concejal del ayuntamiento de Albacete, mostró su enojo y malestar al "ver a ciertos sacerdotes opinar de política o hablar de lo que ocurre en la sociedad". Igualmente, acusó a "cierta parte del clero" de estar "rompiendo la posibilidad de un entendimiento entre los españoles"[66]. En esta misma línea, los párrocos más comprometidos con la problemática social y política de sus feligresías fueron asaeteados por parte de las autoridades locales. Por ejemplo, en 1971 el presidente de la Hermandad de Labradores de Villamalea "hizo un llamamiento la víspera [de las elecciones sindicales], desde los micrófonos de la parroquia para que se participara si no queríamos que el Sindicato fuera un instrumento marchito y agotado". Hecho que en los despachos oficiales "ha sentado muy mal y ahora atacan al sacerdote"[67]. Estas actitudes anticlericales a veces desembocaron en agresiones contra sacerdotes, como la sufrida por el coadjutor de la JOC y párroco del Espíritu Santo al leer una homilía que hizo "perder los nervios" a un reconocido falangista de la capital[68]. En 1973, según relató una nota del Consejo Parroquial de Villamalea, "tres personas del pueblo entraron a la sacristía, les dijeron a unos chavales que había que se saliesen y cerraron la puerta [...] (el alcalde y su hermano) empezaron a insultar al sacerdote, D. Eufrasio, y entre otras cosas le dijeron: *usted y todos los de su calaña tenían que estar colgados. Es usted un rastrero, un mentiroso, un canalla y un sinvergüenza. Es usted un blasfemo. Usted no es ni cura ni cristiano*"[69]. También recibieron amenazas y anónimos los sacerdotes de Pozo Cañada, Chinchilla, Hellín y Alcalá del Júcar, entre otros ejemplos. En algunas ocasiones las personalidades locales del franquismo insultaron, dejaron de dirigir el saludo

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

a curas calificados de *progres*, silbaron y patearon el suelo contra ciertas homilías, etcétera. Así, no extraña que muchas de las iniciativas impulsadas desde aquellos sectores de la Iglesia imbuidos en el espíritu postconciliar fuesen boicoteadas y entorpecidas desde la oficialidad. No en vano, en 1972 el ayuntamiento de Villamalea dejó de pagar los recibos de la luz de la parroquia. El motivo fue el malestar del alcalde ante el comportamiento público del equipo sacerdotal y por suponer tales pagos una "subvención de mera liberalidad". Para un grupo de sacerdotes de Hellín, las amenazas, agresiones e insultos, recibidos desde la oficialidad obedecían al alejamiento del régimen de "una Iglesia que deja el poder, su maridaje y el control por los potentes de este siglo para hacerse más solidaria de los débiles al estilo de Jesús, que mereció la reprobación de los poderosos".

La crítica eclesiástica sobre la situación social y política del país y de la provincia quedó expresada, de forma más o menos tamizada, en homilías, declaraciones a la prensa, encuentros juveniles, asambleas, etcétera. Según la Policía, en 1970 aparecieron en varias parroquias albacetenses "diversas homilías de carácter progresista, pronunciadas por algunos sacerdotes". En este mismo año los informes de las autoridades se hicieron eco del oratorio de los P. P. Filipenses en la ciudad de Albacete. En el mismo, un sacerdote "se ha manifestado varias veces disconforme con decisiones del Gobierno y también de sus propios superiores religiosos". Además de defender que la "Iglesia tenía competencia en asuntos temporales y políticos", el citado párroco abogó en una homilía por la desposesión de los bienes de la misma "diciendo debían ser devueltos a sus legítimos propietarios". También las autoridades llamaron la atención en 1971 sobre las actividades que en los locales de Cáritas estaban llevando a la práctica varios sacerdotes y consiliarios "habiendo motivos suficientes para pensar que no se reducen sus conversaciones a asuntos religiosos". Algunas de dichas reuniones

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

fueron organizadas por "dos sacerdotes obreros que se manifiestan como progresistas y en cierto modo desafectos al régimen". En el mes de noviembre de 1971, las alarmas entre los prebostes franquistas se volvieron a encender con "motivo del aniversario de la muerte de José Antonio". Entonces, fue "distribuida entre los sacerdotes de la provincia una carta recomendando que se desposeyesen los funerales de todo carácter oficial y político"[70]. En Villamalea, la misa no llegó ni a celebrarse por decisión del propio párroco. Desde ese momento, se sucedieron diversos desencuentros entre el equipo sacerdotal y las autoridades locales. Durante 1972 éstas llegaron a tachar a los párrocos del pueblo "desde *alteradores del orden* hasta *comunistas*" (Sanz Díaz, 2003, 227).

En la diócesis de Albacete, a principios de la década de los setenta aparecieron interesantes alternativas a la pastoral más conservadora y esclerótica impulsadas por la dirección del Seminario Diocesano y la Vicaría de Pastoral Social. En el seno de la mencionada vicaría se creó la Asamblea del Consejo Pastoral de Albacete, comprometida —según su coordinador— con una "acción pastoral conflictiva" que "bien planteada" y "coherente consigo misma" tiene "fuertes resistencias al presentar un cristianismo que no quiere adaptarse a la situación actual, sino que quiere ser un revulsivo". También desde dicha vicaría se promovieron un buen número de cursillos, encuestas, seminarios y encuentros de contenido social y político. Sobre todo destacaron los cursillos organizados desde 1972 cada verano bajo el nombre de Cursos de Escuela de Pastoral Social. Éstos fueron organizados con el objetivo de realizar un "análisis cristiano" del "contexto sociopolítico" y del "devenir histórico". Congregaron a sacerdotes progresistas, militantes y dirigentes del apostolado, cursillistas y seminaristas procedentes de diversas partes del país reunidos en Albacete para discutir sobre la historia de la Iglesia y de los movimientos sociales, las relaciones laborales, la economía, la emigración, etcétera. Tales seminarios

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

trajeron por tierras albacetenses a figuras del catolicismo menos timorato como José María Setién, monseñor Iniesta, Álvarez Bolado, Julio Lois o como el jesuita "educado en Madrid en los barrios sociales" padre Agustín Coy. Por tal motivo no extraña que la edición de 1973, en la que se discutió sobre "Fe y política", levantase "ampollas en más de una mente" e hiciese emerger las habituales "nubes preventivas" en los círculos oficiales. De nuevo, en agosto de 1974, la revista del obispado, *Arco*, se refirió a estos cursos como una "de las actividades de la Iglesia diocesana que despierta ciertos recelos en algunos ambientes". Un informe policial culpó a los cursillos de 1973 de "haber dado lugar a que aumenten las diferencias que ya separaban profundamente a los integrantes de la diócesis de Albacete, que están divididos en dos grupos bien definidos, ortodoxos y progresistas". En el verano de 1974 la prensa católica provincial informó que "hay tensión en la diócesis" y las "nubes que se divisan son graves"[71]. Desmembración que, desde la óptica de las jerarquías provinciales, tuvo su "origen en el nombramiento de sacerdotes progresistas para los cargos clave del obispado"[72].

Muchas de las actividades citadas fueron impulsadas por consiliarios y curas obreros que contaron con la inestimable colaboración de algunos eclesiásticos encaramados en ciertos cargos de la diócesis como la mencionada Vicaría de Pastoral Social o el Seminario. En marzo de 1974, el director del mismo señaló con satisfacción que "se revelan como actitudes generales de los alumnos una notable elevación del nivel teológico, cierto inconformismo, casi habitual, sobre la orientación de algunas clases, y sobre cauces de diálogo y participación efectivos, y una sintonía de carácter, llamaríamos generacional, con los puntos conflictivos del ambiente estudiantil general". Ya desde finales de los años sesenta, en el seno del seminario aparecieron grupúsculos de jóvenes seminaristas especialmente inquietos. Éstos, a partir de nuevas lecturas y contactos con los sectores del clero más progresista de otras ciudades como Madrid,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Valencia o Alicante, y con el mundo de las fábricas y de los barrios, desarrollaron una profunda desconfianza ante "una teología muy teórica y muy separada de la realidad". Entre los que llegaron a ordenarse emergió una visión profundamente crítica con "el papel jugado por la Iglesia en la guerra civil" y con la "colaboración asidua de ésta con el régimen de Franco". Actitud que les llevó a denunciar que la Iglesia era "tapadera de injusticias" y "legitimadora de situaciones de pobreza"[73]. Según un informe de la JOC provincial, estos curas obreros eran parte de la "gente de la JOC que se compromete, rompe frecuentemente con la Iglesia institucional; admite sus relaciones personales con Dios y con Cristo pero no aceptan la profesión externa. Por otra parte, se encuentran sin ideología y caen de plano en el marxismo". Entre estos curas y otros seglares, según proseguía dicho informe, la "actitud crítica despertada por la revisión de vida, creó una actitud *anti* de oposición al Estado y a la Iglesia", que cuestionó la "misma constitución ideológica del Estado español surgida al finalizar la guerra civil"[74].

Según un informante del PCE, a la altura de 1970 en la capital provincial aparecieron "círculos católicos" en torno a "algunos sacerdotes muy buenos, sobre todo uno que trabaja de albañil y es conocido por el *cura comunista*". Otro informe, éste fechado en 1971, hizo mención del pueblo de Villalgordo del Júcar, donde existía "una Cooperativa de uva en la que hay algunos comunistas y el sacerdote se liga a los trabajadores". A la luz del Concilio Vaticano II, este tipo de curas más comprometidos buscaron "una dimensión un poco más auténtica del Evangelio". Por dicho motivo optaron por "dejar las sacristías" para acercarse "donde están los problemas, la gente, convivir con ellos para desde ahí abajo hacer el trabajo del sacerdocio". En otras palabras, querían "vivir esa vocación en presencia de un mundo obrero del que la Iglesia estaba de espaldas totalmente". Por esta razón, algunos de ellos trasladaron su residencia a barrios de clase trabajadora de la periferia de ciudades como

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Albacete y se enrolaron en diferentes oficios porque para conocer su problemática "había que vivir como vivía la gente". De esta forma, los curas obreros y sacerdotes más comprometidos comenzaron a "vivir la realidad de la gente que trabajaba, compartir con ellos hasta el trabajo, con todo lo que significaba y a partir de ahí ejercitar esa cercanía a este tipo de gente que sabíamos que estaban ya muy alejados de la Iglesia en aquella época"[75].

A las autoridades franquistas disgustó profundamente algunas de las actitudes y comportamientos públicos de estos curas *progres* o *rojillos*. Encrespó los ánimos de las jerarquías civiles y eclesiásticas de la provincia el hecho de que estos párrocos sacasen las misas de la Iglesias o se negasen a confesar a las mujeres casadas por sus relaciones matrimoniales. En la parroquia del barrio de San Pedro de Albacete "un domingo se comulgaba con obleas y otro con pan, y la gente se sentaba allí en corro a escuchar la homilía"[76]. Los párrocos de Villamalea en más de una ocasión negaron los sillones preferenciales de la Iglesia al alcalde y demás autoridades. Además, apoyaron los matrimonios civiles de vecinos del pueblo en contra de la negativa del juez local. El "mismo cura decía en las homilías que no se fuese hipócrita y que el que no sintiese el sacramento que no se casase por la Iglesia", pues la "boda civil era una postura política y no religiosa". Todo este tipo de comportamientos fueron interiorizados por el franquismo provincial como un ataque a lo sobrenatural y divino. Además de tratarse de una insultante defensa de la temporalidad, la justicia social, la política y la sociología.

En la diócesis de Albacete apareció una minoría de curas jóvenes identificados con la "Iglesia de Dios en la medida en que se haga presente en, conviva con y esté compuesta de pobres, marginados, explotados, etcétera". Estos sacerdotes demandaron de las jerarquías eclesiásticas un cambio en la estructura de autoridad dentro de la Iglesia, una revisión del papel de la misma en el mundo y la ruptura de su alianza con la dictadura franquista. Sin tratarse de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

un conflicto desbordado, esta situación llevó al obispo Ireneo a manifestar su deseo de vencer el descontento generacional "subyacente en todas las diócesis" que "se da en los sectores jóvenes de sacerdotes porque son más sensibles y están más cerca de problemas actuales". Asimismo, desde la máxima jerarquía de la diócesis se mostró la voluntad de "superar las posibles separaciones entre obispos y sacerdotes". Sin embargo, el mismo obispo Ireneo tuvo que actuar de freno a las proposiciones sobre el celibato y otras cuestiones espinosas planteadas por los curas más jóvenes y renovadores en la Asamblea del Presbiteriado Diocesano de Albacete, preparatoria de la histórica Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes del otoño de 1971. Fue dicha reunión presbiteriana un encuentro tenso y polémico en el que el propio obispo tuvo que manifestar que la "Asamblea y él mismo son incompetentes para pronunciarse sobre temas que, como el celibato, se ha reservado el Papa". Aunque el sector más progresista de la diócesis perdió las votaciones, al menos logró consensuar un comunicado en el que se abogaba por que los "actuales estudios teológicos, históricos, sociológicos y psicológicos sobre el celibato y la posible evolución futura de su legislación continúen con seriedad y serenidad, *para no llegar tarde, como tantas veces ha llegado tarde la Iglesia*"[77].

Además, las disensiones en el cuerpo sacerdotal se vieron atizadas por la presión realizada por los grupos del apostolado. La disidencia de los clérigos más jóvenes y menos acomodaticios se vio reforzada por la actitud crítica con las jerarquías eclesiásticas de los seglares de la JOC y la HOAC. Por ejemplo, en 1970 la JOC de Almansa pidió "cambios necesarios dentro de la Iglesia, a todos los niveles [...] amplios, radicales y con profundidad", puesto que la "Iglesia, lo dice Cristo, sobre todo, es de los pobres". Desde este movimiento se demandó a las jerarquías de la diócesis, ante su actitud timorata y ambivalente, que, delante del poder político, se "defiendan los derechos y aspiraciones de los más débiles y explotados de toda la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

clase obrera" y que "se denuncie públicamente la situación" sufrida por los jóvenes trabajadores puesto que "ningún cristiano puede menospreciar sus responsabilidades humanas y temporales". A juicio de los jocistas, desde principios de la década se apreciaba en la diócesis un "cierto espíritu renovador, con buena voluntad, de una parte mínima de la jerarquía, aunque buscando soluciones parciales, que por parciales se quedan en superficiales y no sirven". Razón por la cual "hemos perdido toda la confianza en esa Iglesia" y "la mayoría de la juventud trabajadora hoy ve a la Iglesia en nuestro país como aliada de los ricos y del poder establecido" [78].

La crisis de la Acción Católica y el enfrentamiento de sus ramas especializadas con la jerarquía a mediados de la década de los sesenta habían marcado el declive de los movimientos de apostolado obrero. Éstos perdieron buena parte de su presencia e influencia tanto dentro de la Iglesia como de la oposición al franquismo (Montero, 2000). No obstante, durante los años setenta, aunque de forma mucho menos esplendorosa, dichos movimientos siguieron funcionando como una especie de rescoldo formativo. Sobre todo, facilitaron recursos y una estructura para la acción social de innegable trascendencia en aquellos lugares con bajos niveles de industrialización y urbanización, con endebles organizaciones clandestinas y con una menor tradición de lucha obrera (Berzal de la Rosa, 2000, 592).

La JOC y la HOAC mantuvieron una presencia activa, sobre todo en la ciudad de Albacete, desde la década de los cincuenta. A la altura de 1960, según las autoridades, el segundo de estos movimientos de apostolado se encontraba infectado por militantes del "campo marxista" que dirigían "duras críticas contra el sistema social actual, censurando disposiciones en materia laboral y demostrando una franca oposición a la organización sindical"[79]. A finales de los sesenta, tras la crisis, aparecieron nuevos núcleos de la JOC y de la HOAC en Almansa y en Albacete. En Almansa se creó

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

un movimiento en torno a la industria del Calzado, con alguna expresión también en la Banca. En Albacete, además de la presencia en el Textil, hubo núcleos reducidos en el Metal, en la Construcción y en la Banca. Según un informe de 1971, la JOC llegó a tener presencia en importantes localidades de la provincia como Villarrobledo, La Roda y Hellín. Por aquel entonces, las principales vías de crecimiento del movimiento en la capital se encauzaron "a través de militantes con chicas de fábricas de la Confección" y en "barrios subdesarrollados a través de los consiliarios que van a vivir allí". Según un informante del PCE, a la altura de 1970 en la capital provincial emergieron algunos "círculos católicos" en los que la "JOC es muy activa y tiene muy buena posición". Aunque la militancia en los grupos cristianos de la zona nunca fue muy numerosa, durante el curso 1970-71 entraron en contacto con la JOC del sureste (Albacete, Murcia y Almería) algo más de medio millar de jóvenes[80].

En los locales de los movimientos del apostolado obrero se desarrollaron un buen número de actividades formativas que alumbraron una conciencia reivindicativa en jóvenes trabajadores sin inquietudes más allá de "ganar un dinero para llegar el domingo y tener dos pesetillas e irte a jugar a los billares". Éstos, además de experimentar con la *pedagogía activa* y las *revisiones de vida*, participaron en cursos, seminarios, excursiones, competiciones deportivas, campamentos, guateques, que casi siempre, además de representar una forma autónoma de disfrute del ocio y del tiempo libre, tuvieron "su reverso educativo" (Sanz, 1994, 51). A través de la participación en las actividades mencionadas numerosos jóvenes trabajadores comenzaron "a tener confianza en ellos mismos", a intimar con prácticas democráticas y concienciarse de que "sindicato oficial no está al servicio del trabajador, sino al servicio de los intereses del capitalismo"[81].

En definitiva, como conclusión a este apartado cabe decir que poco a poco, entre ciertos sectores de la Iglesia albacetense fue

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

emergiendo cierta "amenaza de politización". Impuesta ésta por el criticismo con la situación política del país y por el desafío a las relaciones de poder y autoridad dentro de la propia Iglesia. Desafío que fue más allá de los confines y divergencias intraeclesiales. Es decir, las demandas de una Iglesia renovada, menos piramidal y jerárquica, y más cercana al "pueblo de Dios", se insertaron de lleno en el mar de fondo del malestar del clero joven y de la bases seglares ante el compromiso de la Iglesia española con la dictadura franquista. De este modo, las tensiones dentro de la Iglesia se cruzaron con profundas transformaciones sociales y políticas que crearon nuevas legitimaciones, visiones del compromiso cristiano y estructuras para la expresión del descontento contra las autoridades eclesiásticas y civiles (Levine y Mainwaring, 1989, 203-204).

NOTAS

1. AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1975). Caja 2133.
2. AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1976). Caja 2133.
3. AHPOS. Delegación Comarcal de Almansa. Secretaría de Asuntos Sociales. Caja 3934.
4. AHPOS. Delegación Comarcal de Almansa. Secretaría de Asuntos Sociales. Caja 3935.
5. AHPOS. Delegación Comarcal de Almansa. Delegación Comarcal. Caja 3873.
6. AHPOS. Sindicato de la Construcción. Documentación varia. Caja 2798.
7. AHPOS. Delegación Comarcal de Almansa. Secretaría de Asuntos Sociales. Caja 3933.
8. AHPGC. Derechos ciudadanos. Asociaciones. Caja 765.
9. Entrevista realizada a Encarna Calero (13-6-2005), trabajadora de la Piel, enlace sindical y militante de la JOC.
10. AHPOS. Delegación Comarcal de Almansa. Secretaría de Asuntos Sociales. Caja 3935.
11. AHPOS. Delegación Comarcal de Almansa. Asesoría Jurídica. Caja 3909.
12. AHPOS. Delegación Comarcal de Villarrobledo. Asesoría Jurídica. Caja 4808.
13. AHPOS. Delegación Comarcal de Casas Ibáñez. Hermandad de Labradores y Ganaderos. Caja 3705.
14. AHPOS. Delegación Comarcal de Casas Ibáñez. Hermandad de Labradores y Ganaderos. Caja 3705.
15. AHPOS. Delegación Comarcal de Casas Ibáñez. Hermandad de Labradores y Ganaderos. Caja 3704.
16. AHPOS. Delegación Comarcal de Casas Ibáñez. Delegación Comarcal. Caja 3685.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

17. AHPCE. Publicaciones Periódicas. Carpeta 45/6. *BDI*, nº 5, septiembre 1974.
18. FPM. AHT. *BID*, nº 6, octubre, 1974.
19. AHPOS. Delegación Comarcal de Casas Ibáñez. Delegación Comarcal. Caja 3689.
20. AHPOS. Hermandad de Labradores y Ganaderos. Informe Guardia Civil de Mahora. Caja 2855.
21. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3.
22. *LV*, 9-7-1974.
23. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3.
24. AHPOS. Delegación Comarcal de Casas Ibáñez. Delegación Comarcal. Caja 3686.
25. *LV*, 21-1-1976.
26. *LV*, 3-9-1974.
27. *LV*, 3-11-1974.
28. AGA. Gobernación. Memoria del Gobierno Civil, Albacete (1960). Caja 11307.
29. AHPOS. Sindicato de la Construcción. Correspondencia. Caja 2820.
30. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3.
31. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3.
32. SEFT. Entrevista con José Herreros (5-6-2005), empleado bancario, enlace sindical, presidente de la Sección Social de la Banca, presidente del Consejo Provincial de Trabajadores y también presidente de Mutualismo.
33. AHP. Libros de la Organización Sindical. Actas. Caja 444 (10-10-1969).
34. AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1968). Caja 2133.
35. SEFT. Entrevista con Telesforo Carrión (25-10-2005).
36. AHP. Libros de la OS de Albacete. Actas del Sindicato de la Banca. Libro 443 (20-1-1970).
37. AHPOS. Sindicato de la Banca. Caja 2670. Correspondencia 1972.
38. *LV*, 9-7-1974.
39. *GDS*, nº 40-41, 1974.
40. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia nacional. Caja 2189.
41. SEFT. Entrevista con Blas González (25-10-2005), empleado bancario, enlace sindical, presidente de la Unión de Técnicos y Trabajadores del Sindicato de la Banca y de la Hermandad Provincial de Donantes de Sangre.
42. AHGC. Memorias del Gobierno Civil (1970).
43. Buena parte del relato de este aparatado se basa en B. Sanz Díaz (2003): *Villamalea. Historia de un pueblo de Castilla-La Mancha*, 1875-1977. Villamalea, ayuntamiento de Villamalea. También B. Sanz Díaz (1993): "Bastiones de resistencia en Castilla-La Mancha (I): El caso de Villamalea" en I. Sánchez, M. Ortiz Heras y D. Ruiz (coord.): *España franquista. Causa General y actitudes sociales ante la dictadura*. Albacete, UCLM.
44. AHPGC. Derechos ciudadanos. Asociaciones. Caja 765.
45. SEFT. Entrevista con Julián Gómez (1-6-2007), vecino de Villamalea y militante de las Juventudes Comunistas.
46. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3.
47. *LV*, 3-11-1974.
48. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

49. *GDS*, nº 51-52, 1975.
50. SEFT. Entrevista con Julián Gómez (1-6-2007).
51. SEFT. Entrevista con Joaquín Fernández (1-6-2007), vecino de Villamalea y militante del PCE.
52. AHPGC. Derechos ciudadanos. Asociaciones. Caja 765.
53. SEFT. Entrevista con José García (1-6-2007), vecino de Villamalea y militante del PCE y de Comisiones Obreras.
54. SEFT. Entrevista con Julián Gómez (1-6-2007).
55. AHPOS. Delegación Comarcal de Casas Ibáñez. Hermandad de Labradores y Ganaderos. Caja 3704.
56. AHGC. Memorias del Gobierno Civil (1972).
57. AHP. Gobierno Civil. Derechos ciudadanos. Asociaciones. Caja 765.
58. Como relata un militante comunista de aquellos años "éramos gente normal y comprometida, que nada tenían que ver con la imagen que el régimen había creado en la mente de la gente del comunista robando y matando, en Villamalea todo eso se tiró por la borda porque éramos gente corriente que trabajábamos como todo el mundo y nos tomábamos nuestras cervezas, y participamos en todo, en bailes, fiestas, partidos de fútbol y además nos preocupábamos por los problemas del pueblo". SEFT. Entrevista con Joaquín Fernández (1-6-2007).
59. SEFT. Entrevista con Joaquín Fernández (1-6-2007).
60. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3.
61. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3.
62. *El País*, 14-11-1976.
63. AHPGC. Derechos ciudadanos. Asociaciones. Caja 766.
64. *LV*, 4-12-1974.
65. AGA. CUL. MIT. Gabinete de Enlace. Caja 557. Carpeta 10.950.
66. *La Voz de Albacete*, 10-10-1971.
67. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3.
68. SEFT. Entrevista con Salvador Jiménez (24-5-2007), primer alcalde democrático, del PSOE, en la ciudad de Albacete tras las elecciones municipales de 1979.
69. SEFT. Entrevista con Julián Gómez (1-6-2007).
70. AHGC. Memorias del Gobierno Civil (1971).
71. *LV*, 7-7-1974.
72. AGA. CUL. MIT. Gabinete de Enlace. Caja 557. Carpeta 10.950.
73. SEFT. Entrevista con Andrés Gómez Beteta (3-6-2005), cura obrero, enlace sindical en la Construcción, militante del movimiento vecinal, dirigente provincial y nacional de la JOC.
74. AHJOC. Zona Levante-Sureste. Reunión de Consiliarios. Caja 95. Carpeta 4.1.
75. SEFT. Entrevista con Juan Fernández (5-4-2006), cura obrero, militante del movimiento vecinal y dirigente de la HOAC.
76. SEFT. Entrevista con Antonio Pérez (12-12-2005), albañil, vecino del barrio de San Pedro y militante de la JOC.
77. *BOOA*, nº 5, Extraordinario de la Asamblea del Presbiterio Diocesano.
78. AHJOC. Zona Levante-Sureste. Caja 95. Carpeta 2.2.
79. AGA. Memoria del Gobierno Civil de Albacete (1960). Gobernación. Caja 11307.
80. AHJOC. Zona Levante-Sureste. Caja 95. Carpeta 2.3.
81. AHJOC. Zona Levante-Sureste. Diócesis de Albacete. Caja 96.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CAPÍTULO 2

OPORTUNIDADES POLÍTICAS, CRISIS ECONÓMICA Y PROTESTA (1974-1975)

1. LA MOVILIZACIÓN EN ALZA. CLÉRIGOS DISIDENTES Y TRABAJADORES MALHUMORADOS

Como ya se ha visto en el capítulo anterior, en los años finales de la década de los sesenta y primeros setenta comenzaron a aparecer diversas expresiones de descontento entre varios colectivos de la provincia, aunque se trataban de manifestaciones reivindicativas generalmente efímeras y aisladas. Durante los dos años transcurridos entre el magnicidio de Carrero Blanco, en diciembre de 1973, y la muerte de Franco, en noviembre de 1975, la crisis de la dictadura franquista creció y se agudizó paralelamente al desarrollo de una conflictividad social cada vez más numerosa y disruptiva. A nivel nacional 1973, según datos del Ministerio de Trabajo, fue un año especialmente tenso en comparación con los dos ejercicios anteriores. Hubo 931 conflictos que implicaron a 357.523 trabajadores y en los que se perdieron 8.649.265 horas de trabajo. No obstante, en 1974 dichas cifras aumentaron significativamente. Entonces tuvo lugar un importante salto cualitativo y cuantitativo en la profundización de la conflictividad y en la movilización sociopolítica que

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

marcó la recta final de la dictadura. Se produjeron 2.290 conflictos en los que participaron 685.170 trabajadores, perdiendo casi catorce millones de horas de trabajo (Molinero e Ysás, 1998, 96)

Estos mayores niveles de efervescencia social también fueron perceptibles en la provincia de Albacete. Ésta experimentó un apreciable, aunque modesto en comparación con las zonas más industrializadas y urbanizadas del país, incremento en el grado de movilización social. A finales de 1973 las autoridades provinciales reconocieron que "en el que pudiéramos llamar sector de oposición, se ha observado un mayor movimiento"[1]. Desde entonces, se apreció en la provincia un notable incremento en el número de panfletadas y de reparto de "propaganda subversiva". Entre otros ejemplos, en abril de 1974 la capital provincial amaneció sembrada de octavillas tiradas por las Comisiones Campesinas[2]. En agosto se produjo la aparición por "toda la ciudad en portales y buzones de una gran cantidad de panfletos subversivos relativos a la constitución de la Junta Democrática". El 26 de agosto el delegado comarcal sindical de Casas Ibáñez remitió una nota a su superior en Albacete en la que adjuntaba la "propaganda subversiva tirada anoche día 25 sobre las 24:00 horas, siendo ésta recogida por la Fuerza Pública sobre las 5 de la madrugada de hoy día 26"[3]. Según informaron las autoridades locales, en la noche del 13 al 14 de septiembre, se encontraron en Villamalea y La Roda "gran cantidad de papeletas subversivas" con la firma de Comisiones Obreras y Campesinas de la Mancha. En octubre la propaganda fue repartida en Hellín, y en diciembre "aparecieron por el centro de esta ciudad una serie de panfletos subversivos sin firmar por ningún grupo" en los que se "hacían referencia a la falta de libertad del pueblo español".

En el ámbito socioreligioso se apreció —según las autoridades— durante 1974 un aumento del número de trabajadores que se dejaban "arrastrar por la postura antisindical de algunos sacerdotes obreros que vienen actuando en esta capital". Según un informe

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

oficial, dichos sacerdotes "están creando un clima de enrarecimiento en las relaciones laborales que nada beneficia ni a la doctrina de la Iglesia católica, ni a los postulados de la Organización Sindical"[4]. Pero no fue éste el único punto de colisión entre las autoridades provinciales y ciertos sectores del clero albacetense. Merece la pena destacar que en Hellín, con la colaboración de algunos sacerdotes y miembros del apostolado obrero, la Comisión Justicia y Paz recogió en el verano de 1974 unas doscientas firmas a favor de la amnistía para los presos políticos y los objetores de conciencia. Al tiempo que también pidieron la "renovación de la legislación para que puedan reconocerse como lícitas ciertas actividades consideradas todavía como delictivas"[5].

Cada vez fue mayor la indignación y desasosiego que en ciertos ambientes eclesiásticos levantó la acción policial y la creciente presión represiva de las autoridades franquistas. Así, a pesar de las amenazas, en enero de 1974 catorce sacerdotes albacetenses publicaron una carta colectiva condenatoria de los malos tratos y vejaciones sufridas por un militante comunista detenido durante una acción en contra del *proceso 1001*. Esta repulsa sacerdotal a la fuerza empleada por la Guardia Civil estuvo justificada —a juicio de los firmantes— porque "el silencio de la Iglesia cuando se dan casos públicos, la haría cómplice". También el párroco de Alcalá del Júcar denunció en homilía las torturas ya mencionadas. Hecho por el cual fue sancionado desde el Gobierno Civil. Si bien la cuantía de la multa fue reunida en pocos días y sufragada por la feligresía de esta localidad.

No fue menos preocupante para las autoridades provinciales el surgimiento en el mundo rural de un movimiento de curas jóvenes interesados por la problemática campesina, por la emigración y por la mísera realidad de los temporeros, a los que en ocasiones acompañaron en sus desplazamientos a la vendimia francesa[6]. Éste fue el caso, por ejemplo, del Delegado Diocesano de Emigración y de su hermana, quienes a su vuelta de la campaña en octubre de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1974 denunciaron en la prensa y en la radio las condiciones miserrimas de los temporeros durante la vendimia en Francia ante la falta de trabajo en la provincia. En el mes de agosto la Delegación Diocesana de Emigraciones reclamó que los "10.000 albaceteños que no tenemos más remedio que ir" a la vendimia francesa "al menos deberíamos exigir lo que exigen los sindicatos obreros"[7]. Antes, con motivo del Primero de Mayo del año 1974, en Villamalea "charlas de carácter extrasindical se dieron a emigrantes" por parte de grupos cristianos y comunistas. La creciente sensibilidad ante estos temas en algunas parroquias del mundo rural de la provincia hizo que en 1974 los jerifaltes del Sindicato Vertical investigasen los "arciprestazgos de Elche de la Sierra, Yeste y la localidad de Villamalea". En estas localidades, a su juicio, se estaba "haciendo gran propaganda por determinados sacerdotes, tratando de captar enemigos del sistema con motivo de la vendimia en Francia". Por este mismo compromiso con los parados y la clase trabajadora de los pueblos, un párroco de La Roda fue objeto de vigilancia y control porque —según un informe oficial— "tiene antecedentes de toda índole por donde pasó"[8]. Los capitostes de la OS también tuvieron que salir "al paso del texto que bajo la denominación de 'Temporeros, mercancía barata'[...] ha difundido el Arciprestazgo de Alcaraz". Ante la influencia de dicho texto entre diferentes colectivos de temporeros, el secretariado provincial de Asuntos Sociales de la OS, valiéndose de las hermandades, se vio obligado a iniciar la "difusión intensiva de unos folletos informativos que aclaran suficientemente los puntos "oscuros" que se dejan ver en el texto referido". En definitiva, en los años finales del franquismo, el clero rural comenzó a expresarse de forma más crítica ante las circunstancias sociales y políticas que rodeaban la vida cotidiana de los pueblos de la provincia. Por ejemplo, el presidente de la Hermandad de Labradores de Fuentealbilla declaró haber recibido "informes concretos y fidedignos de que el sacerdote de este pueblo, durante la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

celebración de la Santa Misa [...] hizo declaraciones públicas, dejando en entredicho la labor realizada por esta Hermandad"[9].

De este impulso por salir de las sacristías —en el que mucho tuvo que ver la presencia en la provincia de jóvenes sacerdotes desterrados de las "provincias del Norte"— y conocer los problemas del campo, nació la Asamblea Diocesana del Movimiento Rural. Ésta estuvo vinculada a Cáritas y su labor se centró en la denuncia de las injusticias sociales sufridas por los campesinos. Así lo hizo con motivo del Día del Mundo Rural en 1975, cuando protestó porque "no se cuenta con la clase campesina para las decisiones políticas, ni siquiera a escala de pueblo ni de provincia". Además de organizar encuentros y reuniones informativas entre los jornaleros, la Asamblea denunció públicamente que "cuando despierta a la realidad el campesino que está en el pueblo o intenta defender sus derechos, lo tachan de que está haciendo política. Ya se encargan determinadas fuerzas locales o externas de impedir que la gente del campo piense en voz alta, o se asocie para pensar en estos asuntos políticos en los que se decide su vida"[10].

Como más tarde veremos, el creciente número de posturas críticas dentro de la diócesis durante el último año de vida del dictador fue contestado con un apreciable aumento en las sanciones y amenazas gubernativas contra párrocos. Hecho que generó una estimable espiral de críticas y politización entre algunos sectores, aunque minoritarios, de la diócesis de Albacete. Por ejemplo, en septiembre de 1975 el equipo parroquial de la iglesia de los Padres Capuchinos de la localidad de Hellín denunció en homilía que la predicación sacerdotal "en las circunstancias actuales resulta no raras veces dificilísima", cuando la misma "no debe exponer la Palabra de Dios sólo de modo general y abstracto, sino aplicar a las circunstancias concretas de la vida la verdad perenne del Evangelio". Estos sacerdotes se sintieron perseguidos por defender una Iglesia "atenta a la vida" y "servidora de los derechos humanos

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de todos los hombres"[11]. A finales de octubre de 1975 el sacerdote de la iglesia del Espíritu Santo de Albacete pidió por el "crecimiento del espíritu de solidaridad", por los "obligados a emigrar", por los "detenidos, los torturados y los parados". Lo cual le granjeó la preceptiva sanción gubernativa porque "en los momentos y circunstancias actuales la exhortación precitada no puede tener otra interpretación que la que se da en la denuncia, de clara y malintencionada alusión hacia las falsas actuaciones de las FOP, tendentes a su desprestigio". Ante éste y otros casos, el obispo se vio obligado a defender a aquellos sacerdotes más jóvenes deseosos de "cumplir con el deber de pastores y de cristianos fuera de presiones", al tiempo que también llamó la atención sobre el "peligro de politización de la Iglesia".

De esta manera, las relaciones entre la autoridad civil y ciertos sectores eclesiásticos llegaron a tensarse de tal forma que en la visita del gobernador civil por los pueblos de la serranía albacetense durante el verano de 1975 éste no fue acompañado en ningún acto oficial por la correspondiente autoridad eclesiástica. Incluso el párroco se negó a bendecir la piscina municipal que iban a inaugurar el gobernador y el alcalde en el municipio de Yeste en el verano de 1975.

En el terreno laboral, durante 1974 los dirigentes del Sindicato del Metal detectaron "un mayor interés" en "relación con los problemas en la vida laboral" y por "el planteamiento de los conflictos tanto individuales como colectivos que surgen"[12]. A finales de 1973 los gerifaltes del sindicalismo oficial en Almansa reconocieron que es "cierto que algunos sectores que se escudan en una postura social, pero que están politizados en su esencia, atacan sistemáticamente nuestra forma de actuación". En la memoria de 1974 la OS provincial detectó la existencia de varios grupos "extrasindicales" con "pretensiones de complicar el ambiente laboral claramente con motivaciones de orden político"[13]. Con ocasión de la visita de los príncipes de España a Albacete en el mes de mayo de 1974, las jerarquías sindicales

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

manifestaron su disgusto porque en la fábrica de jaulas Ángel Serna Blanco "con unos 100 trabajadores, por parte de unos, y con motivo de los permisos especiales pedidos para la llegada del príncipe de España, hay sistemáticamente oposición a las instrucciones que se dictan por la Organización Sindical". En la primera parte del año también hubo tensiones laborales en la fábrica de Confección AVI, en López Vera, Garcimar, Autobuses Albacete, etcétera. En el Matadero Frigorífico las precarias condiciones de trabajo provocaron el descontento y el plante de seis trabajadores en el mes de mayo. Unos meses antes, la Sección de Matarifes protagonizó un paro laboral de media hora de duración. Dicha acción se saldó con una sorprendente mejora salarial, pero se cobró como víctima al jefe de sección, quien sufrió un expediente de despido. Finalmente, la solidaria movilización de los matarifes contra los subterfugios patronales hizo que el trabajador despedido fuese readmitido.

La emergencia del conflicto colectivo, más regular, disruptivo y mejor organizado, en una provincia anteriormente casi callada, llenó a las autoridades sindicales de inquietud y zozobra. Por lo que se entiende el alivio mostrado por éstas con la llegada del periodo estival del año 1974, porque así la "mayor parte de la clase trabajadora inicia vacaciones y desaparecen ciertos focos netamente antisindicalistas". Creciente desasosiego entre los mandos sindicales que se hizo más intenso conforme fueron apareciendo las primeras consecuencias derivadas de la crisis económica internacional que estalló en 1973. Entre otras razones porque las respuestas patronales ante el progresivo deterioro de la situación económica y el ascenso de la conflictividad se centraron principalmente en la reducción de los costes laborales y en la salvaguardia de los beneficios y de la disciplina en los centros de trabajo. Esta estrategia empresarial a menudo colisionó con las aspiraciones de la OS de contener la protesta a través de la defensa de la legalidad y de las instituciones del régimen (Molinero e Ysás, 1998, 245).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En momentos de creciente convulsión e incertidumbre social la burocracia provincial de la OS se afanó por atender las reivindicaciones obreras sobre aspectos económicos para así taponar la emergencia de demandas sobre la representatividad o los derechos sindicales. Por ejemplo, en el verano de 1974 los dirigentes sindicales se comprometieron a "buscarles un nuevo empleo asequible a sus condiciones profesionales" a los trabajadores de Manuel Márquez como "postura política de mejores resultados" para desactivar posibles conflictos en dicha empresa. Asimismo, como nunca antes habían hecho, los letrados del Sindicato Vertical presionaron a los propietarios de Autobuses Albacete para que aumentasen los salarios de sus trabajadores con el fin de evitar un "conflicto que tenga repercusión pública en tan importante servicio"[14]. Pero este propósito verticalista de aplacar el malestar de los trabajadores a través de mejoras laborales y aumentos salariales en ocasiones se encontró con la actitud patronal. Bajo el ambiente de crisis económica e incipiente movilización social que se vivió desde finales de 1973 en la provincia, la fuente del conflicto en muchas ocasiones no coincidió con el receptor del mismo. Es decir, mientras que la mayoría de las protestas fueron ocasionadas por las medidas empresariales para asegurar la disciplina laboral en momento de crisis, aquellas finalmente se dirigieron contra la OS y contra el ordenamiento político ante la falta de los cauces necesarios para defender los intereses obreros.

Éste fue el caso del conflicto laboral que se desató en la empresa textil López Vera durante el otoño de 1974 y que movilizó a buena parte del sector. El detonante del mismo fue el despido de dos trabajadoras por causas disciplinarias. Para evitar consecuencias indeseables en un sector con una importante presencia de la JOC, la OS provincial "trató de disuadir" la "intención de la empresa" de deshacerse de dichas operarias. Pidió al patrón que "cesase esa actitud [...] antisocial" ante "los graves perjuicios y consecuencias que

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

podría llevar en el buen desenvolvimiento de las relaciones entre la plantilla y la dirección de esa empresa". Incluso los dirigentes de la OS adoptaron, en un gesto sin precedentes, "la determinación de franca oposición a la política de la dirección de la empresa". Pero los esfuerzos de la burocracia vertical fueron vanos ante la determinación del empresario "dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias" en su cruzada contra sus empleadas menos dóciles y "no readmitirlas costara lo que costara"[15]. Actitud que provocó "el descontento entre el personal empleado" y desencadenó un conflicto de ciertas dimensiones que acarreó un importante desprestigio y desgaste político de la maquinaria sindical oficial.

En definitiva, se puede decir que el aumento de la inquietud social en la provincia de Albacete, bajo el telón de fondo de la creciente incertidumbre sociopolítica, llevó al sindicalismo oficial a articular mejoras económicas en aquellos sectores en los que existía la amenaza de un conflicto politizado. Sin embargo, tan desusada estrategia vertical colisionó —en época de crisis económica— con el endurecimiento de las posturas patronales para disminuir los costes laborales de la producción. Así, se fue produciendo un advertido distanciamiento entre patronos y burócratas del III Sindicato Vertical, con el consiguiente aumento de las motivaciones para la organización de unos trabajadores que encontraron en este choque de intereses nuevas oportunidades para la mejora de sus condiciones de vida materiales y políticas.

2. TRABAJADORAS EN MOVIMIENTO. CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y LA EXCLUSIÓN DE GÉNERO

Durante la larga dictadura franquista, las muestras de disentimiento de las mujeres vivieron diversas etapas. Dichas fases fueron desde servir como enlace entre los guerrilleros y la retaguardia

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

durante la posguerra, hasta convertirse en un apoyo fundamental para la militancia de hijos, hermanos y maridos. Sin embargo, aquellas mujeres que participaron en la resistencia contra la dictadura durante los años cuarenta y cincuenta generalmente ocuparon una posición subalterna y de apoyo en la lucha clandestina. Dentro de las organizaciones antifranquistas se desconfió de sus aptitudes como militantes y se las vio, más que como compañeras de lucha, como esposas, madres o hermanas (Arriero, 2005, 253-255). No fue hasta las décadas de los años sesenta y setenta cuando las mujeres se erigieron en protagonistas de una movilización independiente. A partir de entonces autonomizaron su lucha y buscaron nuevas formas de organización propia. De esta forma, durante la parte final del franquismo, diversos grupos femeninos desarrollaron desde espacios vecinales y fabriles una comprometida militancia social y política, aunque ésta haya sido a menudo invisibilizada por enfoques habitualmente androcéntricos (Díaz Sánchez, 2006a, 39-54).

En Albacete, como en el resto del país, los años sesenta vieron una importante integración de la mujer en el mundo del trabajo al calor de la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer de 1961 (Valiente, 1998). Legislación que, a pesar de la propaganda del régimen, promocionó la reincorporación de la mano de obra femenina al mundo laboral en torno a los trabajos menos cualificados, más pobremente remunerados y con peores expectativas de ascenso. Esta circunstancia fue aprovechada por aquellos sectores que en los años sesenta y setenta se extendieron a zonas menos industrializadas a través del empleo de mano de obra femenina, como el Textil en Albacete y Hellín y la Piel y el Calzado en Almansa. Las fábricas de estos sectores en la provincia fueron receptoras de una mano de obra femenina, muy joven, habitualmente entre los 14 y 25 años, procedente del medio rural, sin cualificar, barata y con menos derechos reales que la masculina.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Las jóvenes trabajadoras empleadas en las fábricas de la Confección y del Calzado, además de sufrir una duras condiciones laborales, también fueron víctimas de la exclusión de género. Por ejemplo, a la altura de 1968 el sector Textil empleaba a unos 91.000 trabajadores, de los cuales el 75 por ciento eran mujeres y el 25 por ciento eran hombres (Díaz Sánchez, 2003, 223). Tanto en esta industria como en la Piel, la mano de obra era mayoritariamente femenina. Sin embargo, "los pocos hombres que había ocupaban los puestos de trabajo que más cobraban"[16]. En las fábricas de la Confección, peleteras y calceteras de Albacete y Almansa "los hombres cobraban más, nosotras siempre cobrábamos menos"[17]. En 1975 los propios dirigentes verticales de Almansa señalaron que en la industria del Calzado, sobre todo en la Sección de Corte, se "emplean hoy, indistintamente, hombres y mujeres, percibiendo éstas un salario inferior a aquéllos, aun cuando sus rendimientos sean iguales o superiores"[18].

Además, en estas fábricas los hombres ocuparon las responsabilidades de dirección y control y los puestos más cualificados. En el Textil y en la Piel si "había alguna mujer en el Corte era la que le ayudaba al hombre, pero nunca había una mujer que hacía los patrones". En las fábricas "los encargados y los que tenían algún puesto de responsabilidad siempre eran hombres". Éstos dispusieron de los "trabajos un poco más profesionalizados" mientras que "la mujer ocupaba siempre los sistemas más rutinarios". En dichos centros de trabajo reinó una cultura de género que llevó a la sexuación de algunas labores, produciéndose de esta manera la feminización de ciertas tareas con la consiguiente minusvaloración e ideologización en términos de género. Así, bajo la "cultura machista" hegemónica en las fábricas "no se concebía que un hombre cogiera una máquina de coser"[19]. Además, la doble condición asalariada-mujer marcó la exclusión de éstas en cuanto a las posibilidades de ascenso.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Esta división del trabajo en términos de género formó parte de la estrategia patronal en entornos industriales con una elevada mano de obra femenina. Con ella los empresarios intentaron desviar el conflicto de clases al conflicto de género. El objetivo no fue otro que controlar al mayoritario, y bullicioso, contingente femenino que trabajó en sectores como el Textil, la Piel o el Calzado. La adopción de dicha estrategia igualmente comportó la segmentación espacial dentro del propio centro de trabajo. Mujeres y hombres habitualmente desarrollaron su labor en diferentes espacios dentro de la misma fábrica, siendo aquellos designados al componente masculino los más limpios y menos saturados. Precisamente esta segregación física y espacial, unida a la diferenciación sexual, fue generando diferentes redes sociales dentro de las fábricas. En líneas generales, los hombres trabaron relaciones más estrechas con los mandos patronales, produciéndose una mayor "complicidad entre unos y otros: el encargado les pide y ellos responden"[20]. Por el contrario, la mayoría de las mujeres comenzaron a reunirse y organizarse en torno a unas pocas líderes obreras y militantes de la JOC, tejiendo densas redes de apoyo y solidaridad colectiva.

Las experiencias del devenir cotidiano en el seno de estas redes de sociabilidad y ayuda femenina en las fábricas, fueron consolidadas en la Escuela de Hogar y Formación Femenina de la JOC. A principios de los setenta, más de un centenar de trabajadoras de la Confección y del Calzado participaron en dicha escuela en la que las "jóvenes decidían, opinaban, dirigían el centro". Ésta representó "el campo de acción de los militantes" jocistas que pretendieron "ir seleccionando gente maja y dispuesta, y con ella plantearse alguna acción". A través de la asistencia a las actividades desarrolladas en los locales jocistas, trabajadoras antes aisladas desarrollaron habilidades y "contactos personales" que les ayudaron a "aclararnos, a superar dificultades en la medida que hay una comunicación que no es sólo en la reunión, como una cosa obligada, sino en

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

la vida, en los ambientes de la vida, allí donde desarrollamos nuestra vida diaria". Con la ayuda y orientación de curas obreros y consiliarios, estas jóvenes comenzaron a "charlar, cambiar impresiones [...] intercambiar experiencias sobre nuestra problemática de juventud trabajadora y de los diferentes puntos de vista que podemos tener sobre la situación del país"[21]. En sus conversaciones, contactos diarios y reflexiones en la JOC, las trabajadoras más activas de estos sectores llegaron a identificarse como "mujeres doblemente explotadas". Adquirieron conciencia de que "además de trabajadoras, vivimos explotadas como mujeres [...] estábamos tan oprimidas que cuando en las conversaciones descubres un poco la situación que tienes y dónde estás metida, y que no eres nada, entonces te rebelas"[22].

Las trabajadoras de la Confección y del Calzado se movilizaron para conseguir la equidad salarial y laboral. No sólo reivindicaron mejoras laborales sino también una posición de igualdad dentro de la sociedad que cuarteaba los preceptos ideológicos del Estado franquista. Esta demanda contuvo un saliente elemento de rechazo a la tutela patriarcal representada por el patrón y por el Estado. Así, a los paternalistas empresarios de la Confección y el Calzado "les quedó muy claro en aquella época que *sus mujeres*, como ellos decían, les iban a plantar cara en los temas laborales"[23]. En octubre de 1973 una trabajadora del Calzado llevó a su empresario a Magistratura porque en la Sección de Corte en la que "existen trabajadores de ambos sexos [...] a rendimiento normal nos abonan salarios diferentes"[24]. Según la memoria de la OS almanseña, en 1974 el "personal femenino de la Sección de Corte de la industria del Calzado reivindicó el derecho a percibir salario igual al del hombre de la misma Sección. Ello dio motivo a pequeños incidentes, largas discusiones y reuniones ante la Magistratura de Trabajo, quien falló declarándose incompetente, dándose por terminado el incidente, aunque éste subsiste y se planteará de nuevo al discutirse el nuevo

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

convenio colectivo". Según otro informe oficial, durante 1974 se "han producido incidentes" en torno a la igualdad salarial entre hombres y mujeres, "hasta el extremo de que alguna empresa, para evitarlos, llegó a la equiparación"[25].

Dentro de las fábricas de estas ramas industriales fueron emergiendo redes y espacios de sociabilidad concretados por la exclusión de género. En las redes en las que interactuaron cotidianamente las trabajadoras se fue fraguando una determinada imagen sobre sus compañeros varones. Las más jóvenes y aguerridas, reflejo del nivel de conciencia femenina surgida de la división sexual del trabajo (Kaplan, 1990, 267-295), no tardaron en denunciar que en sus fábricas el empresario y la minoritaria parte masculina de la plantilla estaban como "encuartados". A los ojos de las más inquietas éstos eran unos "vendidos", unos "chivatos", "comprados" y "utilizados" al servicio del patrón. Como resultado, aunque en ningún momento se trató de un conflicto de grandes dimensiones, las relaciones entre las trabajadoras más concienciadas y sus compañeros adeptos a la autoridad patronal cada vez se fueron haciendo más problemáticas. Las muchachas del Textil y de la Piel desconfiaron profundamente de sus compañeros varones porque porfiaban en "contra de las mujeres para subir en el cargo y aumentar el sueldo un poquito más". Por este motivo, entre la mayoría de hombres y mujeres dentro de las fábricas "no había mucha cordialidad" y "no nos relacionábamos mucho"[26]. Tal fue así que en algunas empresas se produjeron fuertes enfrentamientos entre hombres y mujeres. Incluso se llegó a la violencia física en más de una ocasión allí dónde las trabajadoras "eran muy guerreras y muy bravas, que ningún hombre se les subía" (Villar, 2001, 162). En definitiva, durante los años finales del franquismo, la inquietud sociolaboral estuvo presente en las fábricas del Textil y de la Piel. Pero dicha movilización no quedó limitada a las cuestiones laborales. Se ventiló un conflicto entre sexos que llevó consigo un evidente

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

trasfondo político al cuestionar la desigualdad en las estructuras de género sobre la que se levantaban algunos principios ideológicos del régimen franquista (Xavier Ferreira, 1999, 56-59).

El enfrentamiento laboral más importante en la provincia durante 1974 fue el ya anteriormente citado conflicto en la empresa textil López Vera de la ciudad de Albacete. El origen del mismo estuvo en la negativa de las trabajadoras de esta factoría de la Confección, con presencia de la JOC, a aceptar el nuevo horario veraniego impuesto de forma unilateral, contraviniendo lo firmado en el convenio, por parte del empresario. Cuando las trabajadoras se personaron en la fábrica para comenzar su jornada de trabajo se encontraron con las puertas de ésta cerradas, con la consiguiente reproducción de algunos altercados, la intervención de la fuerza pública y el llamamiento a la huelga a la que se adhirió la mayoría de la plantilla[27]. Detrás de este enfrentamiento aparentemente motivado por la cuestión de los horarios se escondió una lucha de connotaciones más profundas en torno a la autoridad patronal en el espacio fabril. En realidad, la trascendencia económica del conflicto era prácticamente nula para el empresario, en su caso dicho conflicto respondió a una cuestión más relacionada con la necesidad de imponer una férrea disciplina sustentada sobre la indiscutible autoridad del propietario de los medios de producción.

El conflicto en López Vera se trató de una lucha en la que la reclamación en base a unas prácticas acostumbradas y consensuadas que a ojos de las trabajadoras devinieron en derechos adquiridos desafió el modelo de organización capitalista y el control absoluto del patrón sobre los medios de producción. Las trabajadoras protestaron porque desde la gerencia de la empresa "proponen otro cambio de horario en el verano, pero no es el deseado ni solicitado por nosotros [...] Creemos que lo que pedimos es *un derecho que hemos adquirido* a través de seis años de realizar el mismo horario [...] y no vemos las razones por las que se nos ha impuesto otro

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

horario distinto". Las operarias justificaron su postura por la ruptura patronal de un acuerdo tácito que perduraba años, sancionado además en convenio, al haber "alterado unilateralmente y sin autorización administrativa el horario de entrada y salida del trabajo"[28]. Sin embargo, el empresario entendió tales reivindicaciones como un inadmisible desafío a su autoridad absoluta sobre todos los medios de producción de su propiedad. Así, la negativa de las trabajadoras a "entrar al trabajo a la hora señalada" constituyó, al parecer del patrón, un intolerable "acto grave de indisciplina y desobediencia a las órdenes de la empresa". Una actitud, que a su juicio, debía de ser considerada como "falta laboral muy grave" por cuestionar la autoridad patronal y su "legítimo" derecho a establecer una disciplina y unos horarios en una empresa de su propiedad. Aunque la presión obrera obligó a la empresa a respetar el horario acordado en el convenio, ésta despidió a dos de las enlaces sindicales que lideraron las protestas. De este modo el conflicto se trasladó, motivado por la postura empresarial, al campo de la solidaridad con los despedidos, contra la represión patronal y la falta de representatividad de los organismos sindicales oficiales. Como en otros muchos casos, la represión desatada por los empresarios y las protestas de solidaridad que siguieron a éstas desbordaron la reivindicación inicial y se convirtieron en motores de nuevas movilizaciones politizadas que habitualmente concluyeron con la readmisión de los despedidos.

Las enlaces expedientadas acudieron a Magistratura, rechazaron la tutela de los servicios jurídicos de la OS y fueron representadas por un abogado laboralista del PCE y de Comisiones Obreras. Actitud que daba a "entender una falta de fe evidente, no en los hombres sino en la organización y en las estructuras de la casa de los trabajadores"[29]. El 25 de octubre de 1974 se celebró el juicio en Magistratura, que falló a favor de las trabajadoras despedidas, declarando el despido improcedente y obligando a la readmisión de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

las mismas. Sin embargo, el empresario se negó a la readmisión. Hecho que activó la movilización del sector en la ciudad y "una nueva crisis en la empresa, al solidarizarse las trabajadoras con sus compañeras expedientadas". Se remitieron numerosas cartas y peticiones a las autoridades provinciales, se organizaron paros, asambleas y reuniones animadas por la JOC, los curas obreros y las Comisiones Obreras que arengaron a "los obreros del textil en general y a los de López Vera en particular, para que en apoyo y solidaridad con sus compañeras se programen acciones unitarias en caso de despido de las mismas". También se produjeron dimisiones de enlaces porque las "garantías sindicales no respaldan tales cargos" y por "considerar que la postura que ha tomado la empresa López Vera contra dos de sus enlaces pone de manifiesto que los cargos sindicales no están auténticamente respaldados"[30]. Así, durante los más de dos meses que duró el conflicto éste implicó a nuevas trabajadoras antes pasivas, reforzó el compromiso de las más concienciadas y captó la atención tanto de los medios locales como de las autoridades sindicales y gubernativas.

La escrupulosa atención que el propio régimen dedicó al mantenimiento de la paz social hizo que en ocasiones, cuando la intransigencia patronal podía provocar una mayor espiral de protestas y politización, las autoridades intercediesen y moderasen la actitud empresarial. Así, según los informes de la Delegación de Trabajo, ante la determinación del propietario de López Vera de no readmitir a las trabajadoras, únicamente fue posible "prevenir un segundo conflicto" gracias a la "necesaria y decisiva intervención" del gobernador civil. Únicamente tras las intercesión de diversas autoridades provinciales la empresa "manifestó su deseo de que las enlaces expedientadas volvieran a reintegrarse en sus puestos de trabajo". Sólo así se dio por concluido, con la victoria de la parte social, un duro conflicto colectivo cuya resolución final fue recibida con gran alivio por las elites franquistas locales. Como subrayó la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

OS, por fin "se ha puesto feliz término al tantas veces comentado asunto López Vera"[31].

3. AGRICULTORES DESCONTENTOS Y MÉDICOS EN PIE DE GUERRA

La convulsión general registrada durante 1975 también se dejó sentir en la provincia de Albacete. Según las autoridades, la razón de esta mayor conflictividad estribaba en que "determinados grupos están tratando de predisponer a la clase trabajadora contra el orden establecido". Entre éstos se encontraron "grupos situados en la oposición sindical" y sacerdotes de "línea constestataria o progresista". Según el gobernador civil, los sacerdotes subversivos estaban utilizando las estructuras de la Iglesia "para significar su postura y hacer críticas negativas sin razonamientos convincentes de disposiciones, organismos o situaciones legales"[32]. A la altura del verano de 1975 el delegado provincial sindical calificó de "inquietos" a los trabajadores de la Banca, el Textil y la Piel. Además, la situación social y política quedaba —a juicio de los dirigentes sindicales— "todavía más enrarecida por la actividad de grupos que podríamos considerar en la oposición, como la HOAC". Según fuentes oficiales, desde comienzos de año la "HOAC presenta nuevos elementos que dan la cara y que en los momentos actuales son casi desconocidos, toda vez que los que existían en primera línea en el cuatrienio pasado han desaparecido". Por otro lado, entre los "grupos extrasindicales" existentes en la industria almanseña, era la "UGT la que por tradición tiene más simpatías y arraigos en la ciudad", siendo mayoritarios los apoyos al "PSOE con vinculación histórica, pues no hay que olvidar que algunos dirigentes de este partido nacieron en Almansa y todavía aquí tienen parientes"[33].

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Durante la segunda parte del año 1975 la atención de las jerarquías provinciales del franquismo se concentró en la celebración de las elecciones sindicales. Éstas fueron presentadas desde la oficialidad con el "claro deseo de auténtica participación democrática en las mismas" puesto que las "motivaciones políticas no impedirán votar a los trabajadores". Sin embargo, los burócratas de la OS se afanaron en realizar las gestiones pertinentes "con el fin de asegurar unas elecciones dentro de la ortodoxia sindical y de la tranquilidad necesaria, sin olvidar una masiva afluencia a las urnas". Desde la OS provincial se esmeraron en tomar las "medidas oportunas para que en las mismas no se infiltren elementos contrarios a la Organización Sindical". Aun así, los propios informes oficiales destacaron a la altura del verano de 1975 que el "ambiente socioeconómico y laboral de la provincia es el que corresponde a un estado de plena efervescencia por elecciones, en las que se han volcado materialmente algunos sacerdotes obreros especialmente en los barrios extremos de la capital y en los centros de asistencia sanitaria dependientes de la Diputación"[34].

En junio de 1975 el editorial local del diario católico *La Verdad* señaló que abstenerse en las elecciones sindicales representaba "un error táctico". Llamó a "actuar desde dentro", ya que la "oportunidad que se ofrece es positiva y aun con los limitados cauces válida"[35]. Así lo hicieron las "candidaturas cerradas que habían sido presentadas por la oposición sindical" en empresas peleteras como Hijos de Ginés Pérez y La Manchega, o de la Confección como Confecciones Río, Layje, López Vera, Miguel Sánchez Flor, en la Central Contable de Banesto, donde los empleados eligieron a sus representantes "usando sólo la burocracia sindical pero sin contar con sindicatos", en el Psiquiátrico, en Renfe, en la Hermandad de Labradores de Villamalea, etcétera. Aun así, los resultados obtenidos por la oposición sindical en estas elecciones no dejaron de ser verdaderamente modestos. Reflejo, según la prensa, de la "incultura

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

sindical y laboral" de una clase trabajadora aún fácilmente manejable por la acción patronal. No obstante, y a pesar de las coacciones y manejos de empresarios y burócratas verticales, algunos enlaces inquietos aparecieron en el seno de los sindicatos provinciales de la Banca, del Textil, de la Piel, de la Sanidad, de la Construcción, de la Hostelería, del Metal y en algunas hermandades. Hecho importante para explicar las turbulencias vividas por estos sindicatos después de la muerte de Franco.

El último año de vida del dictador vio cómo en Villamalea 150 trabajadores hicieron huelga en el mes de mayo. En este mismo año y localidad se puso fin, con la victoria de los agricultores, a la multitudinaria lucha que desde 1972 había enfrentado a la Cooperativa San Antonio Abad con el Ministerio de Agricultura en torno a la entrega vinícola obligatoria. Desde finales de los años sesenta, las cooperativas vitivinícolas habían solicitado a la Administración medidas para dar salida a los crecientes excedentes que agravaban la maltrecha situación económica de los agricultores. Se pidió entonces que fuera retirado un porcentaje de los vinos de menor calidad para la producción de alcohol. Con el fin de evacuar la producción sobrante se puso en funcionamiento la ley de 25 de octubre de 1970. Ésta decretó la Entrega Vínica Obligatoria (EVO) a organismos oficiales del Ministerio de Agricultura de aquellos excedentes de menor calidad de la cosecha para fabricar alcoholes. El conflicto estalló en 1972 cuando las autoridades ofrecieron por la EVO un precio inferior a la mitad del coste de producción y por debajo, además, de la mitad del precio del alcohol en el mercado.

Por esta razón, la Cooperativa se negó a realizar la EVO correspondiente a las cosechas de 1972, 1973, 1974 y 1975. Rechazó lo que a juicio de los cooperativistas fue considerado como una exacción insoportable, dirigida a que "otros se lleven la tajada, ganen dinero y después se lo lleven a bancos suizos"[36]. Pero tal actitud de resistencia, rebeldía y desafío, enervó a unas autoridades que no tardaron en

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

levantar varios expedientes y sanciones. Por ejemplo, el mismo Consejo de Ministros aprobó en julio de 1973 una importante sanción económica contra la Cooperativa. También se intentaron suspender las fiestas de la entidad y embargar sus cuentas. Sin embargo, casi todas estas medidas de castigo exhibieron un importante grado de ineficacia ante los flujos de solidaridad y los apoyos recibidos por la Cooperativa por parte tanto de los vecinos de la localidad como de otros muchos lugares de España.

CUADRO 1

DIFERENCIAS EN LOS PRECIOS OFICIALES Y EN EL MERCADO (EN PESETAS/LITRO)

CAMPAÑA	PRECIO EVO	PRECIO MERCADO
1971-1972	30	60
1972-1973	37	67
1973-1974	40	70
1974-1975	47	62

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE SANZ DÍAZ, 2003, 238.

La imposición de duras sanciones contra una Cooperativa cuyo único objetivo no fue otro que el de defender los intereses de sus socios, que eran la mayoría de pequeños agricultores del pueblo, contra una carga considerada injusta, potenció la solidaridad, la capacidad de resistencia y la politización del conflicto. Como decía un informe oficial en noviembre de 1973, la "situación es seria y delicada, pero estos hombres del campo están decididos". No en vano, la lucha de la Cooperativa de Villamalea recibió la atención no sólo de *Mundo Obrero*, sino también de revistas como *Opinión*, *Posible*, *Gaceta de Derecho Social* y *Triunfo*, por su carácter multitudinario y popular. Según la última de estas publicaciones:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En un pueblo de una de las provincias más depauperadas del país se está llevando a cabo un esfuerzo titánico por liberar a sus hombres y mujeres del subdesarrollo económico, social y cultural. Pues bien, por no acceder a la entrega semigratuita al Estado de una parte apreciable de la producción, un empeño de tanta y tan noble envergadura —merecedora de todo los apoyos— se ve amenazado de colapso. Sin embargo, fuere cual fuere el desenlace, la actitud de Villamalea ha sido como un clarinazo que ha resonado muy fuerte en amplios sectores, anunciador de que el campo también se mueve.

La respuesta de la Cooperativa ante la actitud inflexible de las autoridades se canalizó a través del agotamiento de la vía legal. Los socios de la misma interpusieron recursos y querellas "con el fin de ganar tiempo y de airearlo al último rincón de España". La acción abierta se combinó con la actividad clandestina llevada a cabo por el PCE y las Comisiones Campesinas que llamaron a "hacer frente común de resistencia". En el devenir del conflicto, las asambleas —casi siempre multitudinarias— adquirieron un gran protagonismo. Se convirtieron en la principal estructura de movilización y organización del mismo. Éstas hicieron las veces de un dinámico nexo de unión entre los dirigentes de la Cooperativa y el resto de vecinos del pueblo, además de ser el cauce de ratificación democrática de todas las decisiones tomadas. Hecho que contribuyó a legitimar la lucha entre la mayoría de vecinos de la localidad y a reforzar las señales de solidaridad. Como cuenta uno de los participantes, aquellas asambleas masivas representaron "una escuela democrática para el pueblo". De hecho, contribuyeron a dinamizar y politizar las interacciones informales y relaciones sociales cotidianas en los diversos círculos de sociabilidad del municipio. En octubre de 1975 un sorprendido diario *Pueblo* observó que la "gente habla en sus tertulias de algo más importante que el fútbol y los toros y a uno le

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

sorprende enormemente ver la claridad de mente de la mayoría de sus habitantes". Circunstancia que no extraña habida cuenta que ya en 1970, según lo escrito por un informante del Comité Central del PCE, el "ambiente en el pueblo es muy politizado, y es muy frecuente que en las tertulias en vez de discutir sobre el fútbol, con la misma pasión y como la cosa más corriente se discutan los problemas políticos locales, nacionales e internacionales"[37].

Como ya se ha dicho, el embargo oficial de las cuentas de la Cooperativa como medida de presión fracasó. Este revés llevó al Ministerio de Agricultura a adoptar medidas más duras. En 1975 procedió al embargo de los bienes inmuebles de la Cooperativa, como las bodegas, la almazara, etcétera. Entonces, las asambleas se radicalizaron. Éstas se convirtieron en la expresión de la determinación de los socios a no entregar la parte de la cosecha demandada por el Gobierno. Reunión tras otra, cuando en las asambleas se llamó al "que esté de acuerdo en no pagar que levante la mano", la respuesta fue en la mayoría de las ocasiones contundente y unánime. Aquellos que, aun en presencia de *la Secreta*, se mantuvieron firmes en su opinión de que "es preferible ir a la cárcel antes que pagar" fueron vitoreados y aplaudidos.

Bajo este clima de tensión, las asambleas fueron terreno abonado para la crítica abierta contra las autoridades políticas. En las concurridas asambleas de mayo de 1975 el presidente de la Cooperativa manifestó que "se embarga el patrimonio de unos luchadores que defienden su existencia". Denunció que "el responsable de todo lo que ocurre es el ministro de Agricultura". Máximo representante, a juicio de los dirigentes de la cooperativa, de "las fuerzas más reaccionarias y negras" que "nos están atacando" y "están llevando al campo al desastre" (Sanz Díaz, 2003, 250). Por estas fechas la revista *Posible* tituló "¡Que dimita Allende!". Efectivamente, la información se hacía eco del hecho de que "los agricultores de Villamalea (Albacete) reunidos en asamblea general

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de su Cooperativa del campo San Antonio Abad, han pedido, ni más ni menos, que cese de su cargo el ministro de Agricultura... y que así mismo sean sustituidos los actuales presidentes de la Unión Nacional de Cooperativas... y de la Unión Territorial de Albacete". Lo cual fue catalogado por el diario *Ya* como una "actitud rebelde" por parte de la cooperativa de un pequeño pueblo que osaba desafiar de forma tan directa a la dictadura franquista.

Tal fue el grado de movilización y concienciación exhibido en las asambleas de esta pequeña localidad de La Manchuela que el propio alcalde declaró en la prensa que el "pueblo se ha politizado demasiado y esto a la larga traerá serios problemas". Finalmente, ante la presión social y la inexpugnable determinación de los agricultores de Villamalea y de su cooperativa de no pagar, reforzada ésta por las redes de solidaridad y apoyo mutuo fraguadas entre la comunidad, el Gobierno tuvo que ceder. El Ministerio de Agricultura redujo las sanciones en un 90 por ciento. Asimismo, aceptó una entrega vínica para las cuatro campañas que había durado el conflicto muy inferior a la inicialmente demandada. De esta forma, la larga duración de un enfrentamiento que se prolongó durante casi cinco años, lejos de quemar a la población profundizó su capacidad de resistencia, su conciencia democrática y su sentido de la solidaridad.

Por otro lado, una de las características más salientes de la agitación experimentada en la provincia fue su incipiente aparición entre sectores profesionales, funcionarios y técnicos de la Administración. En la historia social de la parte final del franquismo estos colectivos han recibido muy poca atención a pesar de su crecimiento cuantitativo y de su cada vez mayor presencia en los movimientos sindicales y políticos opuestos a la dictadura (Ysás, 1998, 13). La irrupción de la protesta entre los sectores de *cuello blanco*, que a pesar de la proletarización sufrida mantuvieron ciertas características propias de las clases medias y una consideración

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

social diferente a la de los *monos azules*, facilitó la conexión entre el movimiento obrero de las fábricas y el resto de la sociedad civil. En enero de 1975 unos sesenta empleados de la Delegación de Hacienda se solidarizaron mediante un paro laboral con sus compañeros de otras provincias[38]. En febrero se hizo patente cierto malestar entre los funcionarios municipales. También durante el último año de vida del dictador se apreciaron las primeras muestras de inquietud entre los maestros nacionales que fueron varias veces a la huelga al año siguiente. A éstos les siguieron los PNN de instituto y otros sectores laborales de la Administración como los funcionarios de prisiones, los veterinarios, etcétera.

Bajo esta misma tendencia aparecieron algunos escarceos en los colegios profesionales que habían sido habituales fortines de extracción del personal político franquista. En el verano de 1975 en el Colegio de Abogados de Albacete las asambleas fueron más concurridas. También en ciertas ocasiones exhibieron un tono más tenso y animado. En su seno aparecieron voces críticas ante la "falta de participación en las tareas políticas, administrativas y profesionales" porque "en el pueblo donde no hay participación, se vive más en la crítica estéril que en la solución de los problemas". En el mes de julio de 1975 *La Verdad* destacó que "los abogados quieren participar, decidir colegiadamente y ejercer derecho a voto y veto. Esto en Albacete es nuevo y refrescante". Incluso llegó a plantearse la creación de una asamblea de letrados jóvenes en la que participarían abogados recientemente salidos de una universidad en continua convulsión. Meses después, en el Colegio de Aparejadores se produjo una escisión entre los sectores ortodoxos de mayor edad y actitud más conservadora y una minoría de jóvenes con planteamientos más sociales y democráticos. Estos últimos participaron, con una ponencia sobre el compromiso social del aparejador rural y la denuncia de las corrupciones, en un congreso nacional de aparejadores celebrado en noviembre de 1976. En el mismo se denunció la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

incapacidad de representación de los colegios profesionales y se pidió la libre sindicación y la amnistía laboral y política. Según la prensa, en este colectivo "sin las ideas renovadoras de muchos aparejadores jóvenes, sensibles a los valores democráticos y socializantes para construir una sociedad nueva, este congreso no se habría realizado"[39].

Pero sin duda los conflictos de mayor trascendencia e impacto público fueron los protagonizados por los médicos internos residentes (MIR) en el verano de 1975. La aparición de la protesta en éste y otros sectores de la Administración estuvo estrechamente relacionada con el desarrollo económico, el cambio social y la extensión de diferentes servicios sociales como la Educación o la Sanidad. Dichos cambios llevaron consigo la incorporación a la Administración de un amplio contingente de trabajadores mayoritariamente jóvenes. Asalariados que no habían vivido la guerra, y que en muchos casos habían adquirido una conciencia política previa en las luchas universitarias y en el movimiento estudiantil contra la dictadura.

En algunos centros hospitalarios albacetenses aparecieron muestras de descontento en el otoño de 1974. Éstas estuvieron relacionadas con el conflicto desatado en el mes octubre en otras partes del país ante la pretensión del Instituto Nacional de Previsión (INP) de exigir un "certificado de buena conducta en todos los aspectos" para poder optar a las plazas de MIR. Pero si en el otoño de 1974 fueron dieciocho los centros que secundaron la huelga, en el verano de 1975 el conflicto se extendió a cuarenta y siete hospitales. Entre ellos la Residencia de la Seguridad Social y el Hospital Psiquiátrico de Albacete. En la primera, los MIR se declararon en huelga el 14 de junio de 1975. Actitud que mantuvieron durante doce días a pesar de los despidos de diecisiete médicos por no haberse "reintegrado [...] al régimen normal de trabajo" y participar en las "alteraciones colectivas de días anteriores". Motivo

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

suficiente para que el INP diese por resuelta "toda su relación contractual y docente con las instituciones sanitarias de la Seguridad Social". Cuando los médicos intentaron reincorporarse se les denegó el acceso al centro, que permaneció constantemente vigilado por la Policía para evitar incidentes. El ejemplo de los médicos de la Residencia de la Seguridad Social pronto caló entre los MIR del Hospital Psiquiátrico, quienes declararon la huelga justo cuando concluía la de sus compañeros. Al día siguiente fueron instados por la Diputación para que volviesen al trabajo en un plazo de 48 horas; en el caso de no hacerlo podían considerarse despedidos. Finalmente, los huelguistas se reincorporaron a su puesto una hora antes de que dicho ultimátum expirase.

En líneas generales, la multiplicidad de tipologías contractuales y las diferentes situaciones laborales existentes en los hospitales favorecieron la disgregación de los intereses de los diferentes estamentos de las plantillas hospitalarias. Sin embargo, cuando el conflicto y la represión afectó a jóvenes médicos activos, dinámicos, y preocupados por los problemas del hospital, pero con una situación laboral inestable y precaria, las tradicionales divisiones jerárquicas entre médicos y demás personal sanitario tendieron a diluirse. Como cuenta un antiguo auxiliar "esa división por clases, entre los médicos y lo que era la parte técnica, la parte auxiliar... llegó un momento en que no se notaba tanto [...] La relación con los médicos, sobre todo con los residentes, y con aquellos médicos más progresistas era muy buena, sin tanto escalón"[40]. No extraña, por tanto, que la represión desatada contra jóvenes médicos esforzados y muy considerados entre sus compañeros, y que además reclamaban mejoras sanitarias muy sentidas, provocase un mayor nivel de unión, solidaridad y politización ante el conflicto. Por ejemplo, a finales de junio de 1975 los auxiliares y jefes de servicio del Hospital Psiquiátrico manifestaron su rechazo a los despidos disciplinarios y su "adhesión y apoyo" a las reivindicaciones de los MIR, por responder éstas simplemente

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

a "una situación concreta dentro de las reivindicaciones expuestas por todo el personal sanitario"[41].

En las movilizaciones de los médicos residentes durante el verano de 1975 se ventilaron diversas cuestiones. Por una parte, los MIR protestaron contra unas condiciones laborales deplorables con sueldos muy bajos encubiertos por la situación de estudiantes en prácticas y no de asalariados (Lacalle, 1976, 154-157). Éste fue el caso de aquellos que trabajaban en el Hospital Psiquiátrico, donde cada tres días era obligatorio realizar una guardia de veinticuatro horas y se adeudaban las horas extraordinarias. A pesar de tener una jornada laboral de cuarenta y cuatro horas semanales, estos médicos no disponian de contrato laboral sino de un contrato administrativo precario y eventual, por un año y sin posibilidad de recurso en caso de no renovación. La explotación laboral fue unida a la indefensión, al no disponer de mecanismos sindicales de defensa contra las arbitrariedades de la Administración. Por estos motivos, una de las principales luchas del sector se centró en la consecución de contratos laborales, que permitieran conseguir mejores salarios y "asistirse de los servicios jurídicos de la Organización Sindical, de la Delegación de Trabajo y Magistratura". En este sentido, uno de los caballos de batalla de dicha movilización estuvo en torno al derecho a participar en las elecciones sindicales. Además, no hay que olvidar que entre los médicos más jóvenes e inquietos, al igual que entre los enseñantes, existió cierta aversión al cuerpo funcionarial. Circunstancia debida al deseo de disponer de una mayor capacidad para desarrollar el trabajo de una manera más libre y creativa. Por esta razón, la demanda del estatus de trabajadores con contrato laboral fue también una señal de rechazo a la funcionarización y burocratización existentes en el sistema sanitario.

Por otra parte, en la raiz de las agitaciones habidas en el sector se encontró la cuestión de la representatividad. Los MIR se negaron a ser representados en la negociación con el INP por su habitual

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

interlocutor, el Colegio Nacional de Médicos. A través de un proceso de coordinación, las asambleas de los diferentes hospitales en huelga en todo el país eligieron a los representantes que conformaron la Comisión Nacional Negociadora. Dicha comisión se erigió como el único interlocutor válido de los intereses de los MIR. Reclamó que "los únicos que pueden negociar sobre sus intereses son los propios MIR representados por la Comisión Nacional Negociadora", pues "esta representatividad es uno de los puntos a los que el conjunto de todos los MIR no está dispuesto ni a ceder ni a conceder a nadie"[42]. Ante la negativa del INP a negociar directamente con los representantes elegidos democráticamente por los médicos residentes se extendió y agudizó un conflicto en el que afloraron numerosas demandas de contenido político. Los MIR albacetenses reclamaron la abolición de las cláusulas contractuales con finalidad represiva, la composición paritaria —elegida de forma independiente— de las comisiones de docencia, la elaboración de un régimen interno por parte de una comisión elegida democráticamente y representativa de todos los estamentos del centro, etcétera. En efecto, como se puede apreciar en éste y otros muchos casos, conforme la conflictividad fue en aumento y se extendió a nuevos sectores y actores, las demandas concretas, sectoriales o locales, fueron añadiendo, aunque nunca llegaron a desaparecer, elementos reivindicativos más propios de la política general.

Como demostraron con su acción médicos y otros funcionarios, durante el último año de vida del dictador, el descontento llamó a las puertas de la Administración del Estado. Significativamente la misma Administración que había sido purgada a conciencia durante la posguerra. La protesta se extendió, si bien entre grupos minoritarios, a las clases medias y profesionales que en 1939 habían saludado la entrada en la provincia del triunfante bando rebelde. Hecho que reflejó la erosión de las bases sociales del franquismo. Además, la aparición del conflicto entre

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

estos colectivos contribuyó significativamente a cambiar la imagen de la protesta sociolaboral. Sobre todo entre aquellos sectores no politizados en los que perduraba un imaginario, machaconamente difundido por la propaganda franquista, repleto de prejuicios ante la lucha social de los grupos sociales menos favorecidos. Recelos que comenzaron a desvanecerse cuando quienes hicieron huelga y fueron detenidos no eran obreros fabriles o campesinos, sino jóvenes médicos, maestros, abogados o periodistas. Asimismo, esta ampliación de la movilización a sectores medios y profesionales no pudo dejar de zarandear los habituales pánicos morales de las clases bienpensantes. Éstas vieron absortas como la "furia irracional" se extendía desde el "populacho" y los "incivilizados" obreros a los "ilustrados" hijos de las clases medias. Así, durante los últimos años del franquismo la movilización se fue popularizando y consiguiendo una mayor aceptación social, ante la cual la dictadura tuvo menos respuestas y una más limitada capacidad simbólica para ejercer su habitual demonización de la protesta (Doménech, 2002b, 133).

Aquellos repertorios y modelos de movilización típicamente proletarios durante la década de los sesenta se extendieron entre los sectores de *cuellos blancos* conforme la conflictividad social fue en aumento durante la década de los años setenta (Tarrow, 1989, 331). Sin embargo, los asalariados más inquietos de los estratos medios y profesionales no se limitaron simplemente a mimetizar las reivindicaciones salariales de la clase obrera manual. Por ejemplo, los trabajadores más concienciados de los hospitales y colegios plantearon problemas relacionados con la mejora de los servicios públicos y su vinculación a una reforma sanitaria o educativa que pasaba por el cambio en la estructura política del país. Por tanto, la *terciarización del conflicto* contribuyó en cierta medida a cuestionar la legitimación social del régimen al, junto a la aparición del movimiento vecinal, elevar el interés sobre el funcionamiento de los

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

servicios públicos. Asimismo, también ayudó a profundizar la economía moral de la clase trabajadora que comenzó a entender, sobre todo cuando la crisis económica arreció, la necesidad de conquistar parcelas de ese salario indirecto al que el radicalismo salarial había dejado en segundo término.

Para el caso de la movilización de los MIR y de otros trabajadores del sector de la Sanidad puede decirse que los "grupos de protesta introducen en la agenda cuestiones con las que se identifica otra gente y demuestran la utilidad de la acción colectiva" (Tarrow, 2004, 131). Este razonamiento es aplicable a la problemática vivida en Almansa desde 1974. Mientras que en la capital provincial los colectivos sanitarios y los grupos vecinales comenzaron a reclamar mejoras en la Sanidad, en esta localidad se gestó un movimiento ciudadano en demanda de la construcción de un hospital y de la integración en el Subsector de la Seguridad Social. La propia OS señaló en 1974 que el "problema de la asistencia médica en Almansa era agobiante y blanco de todas las críticas y que al ser general traspasaba los límites del ámbito sindical, ya que no se limitaba a la asistencia a los trabajadores, sino que afectaba a toda la población al carecer de suficientes médicos y de casi todas las especialidades básicas". Según el presidente del Consejo Provincial de Trabajadores, a la altura de 1975 "el malestar entre los trabajadores y la población en general es de todos conocida"[43]. En este ambiente de irritación ciudadana explotó también el descontento de muchos padres por las deplorables condiciones de las aulas de uno de los colegios de la localidad. Ante las promesas incumplidas por el alcalde, unas setenta familias se manifestaron y decidieron no llevar a sus hijos al colegio en el mes de septiembre de 1975. Las deficiencias sanitarias y educativas generaron en Almansa cierta sensación ciudadana de abandono por parte de los poderes centrales y locales. Estos problemas encarnaron tensiones sociales compartidas por diferentes colectivos. Hecho que contribuyó a

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

estrechar los vínculos entre la comunidad, la militancia obrera y una incipiente oposición democrática.

La situación social referente a los problemas sanitarios en Almansa se hizo más tensa durante 1975. Sobre todo después de las elecciones sindicales. Entonces el movimiento ciudadano, relanzado por los nuevos enlaces y vocales elegidos en las mismas, adquirió una mayor capacidad organizativa y disruptiva. Según un informe oficial, el problema sanitario "subsiste, si cabe más agravado, por la erosión del tiempo y las circunstancias [políticas] actuales, ya que las críticas van en aumento y cada vez son más acerbas, por la impaciencia de los nuevos Vocales Sociales y Enlaces Sindicales". Para la Memoria de 1975 de la Delegación Comarcal de la OS en Almansa, la situación sanitaria y la falta de viviendas sociales eran las cuestiones que "vienen produciendo mayores críticas desde hace varios años, agudizados actualmente, sobre todo por la masa trabajadora, la más afectada, concienciada por fuerzas extrañas que, al igual, la están mentalizando en cierto tipo de reivindicaciones —la mayor parte justas— exaltando los ánimos e incitando a adoptar medidas fuera de la legalidad". Tal fue el grado de intranquilidad social y desasosiego ciudadano, que el mismo delegado sindical almanseño reconoció, visiblemente agobiado, que "desde días antes de mi toma de posesión oficial, las personas que me visitaban en el despacho me eran presentadas en la calle, u ocasionalmente las conocía, me planteaban, hablaban y expresaban la preocupación existente en Almansa por el aspecto sanitario". En correspondencia interna manifestó su preocupación porque "la situación en este hecho se deteriora y degrada según el tiempo pasa", además de que "se intente politizar e incidir en el aspecto laboral". De hecho, durante todo el año 1975 ya se habían producido "intentos de manifestación, de paros técnicos e incluso proposiciones de no cotizar a la Seguridad Social". En agosto, un dirigente vertical calificó la situación de "poco agradable".

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Éste dijo que "con motivo de la inauguración del polideportivo de esta ciudad, estuvo a punto de producirse una manifestación de protesta por no haberse puesto en servicio el hospital municipal, costando mucho trabajo calmar a la gente y hacerles ver los inconvenientes y motivos de esta demora". Creció una situación de hondo malestar cívico que alertó a los capitostes del Vertical. En reunión de la Junta de Mandos de la Delegación Comarcal de la OS, celebrada en septiembre de 1975, uno de los vocales resaltó las "presiones a que son sometidos los presidentes de las UTT por parte del elevado censo de trabajadores de la localidad que vinieron solicitando reuniones parciales para conocer la situación de las obras del hospital municipal"[44].

La movilización de una parte importante de la localidad de Almansa por la concesión de un hospital fue tenaz y duradera. Durante 1976 arraigó en dicho municipio un importante movimiento asambleario y cívico. Éste, al igual que en el caso de Villamalea, se canalizó, organizó y propulsó a través de asambleas masivas con la participación de la mayoría de los vecinos. Dichas asambleas populares desbordaron a la Comisión Oficial creada para el efecto por autoridades municipales y del Sindicato Vertical con el objetivo de encauzar el descontento y solucionar la problemática sanitaria de la localidad. Durante los meses finales de 1976 y los iniciales de 1977 este movimiento se fue nutriendo de los militantes de asociaciones de vecinos, de amas de casa, grupos sindicales, clubes juveniles, etcétera. En mayo de 1977 cientos de almaseños participaron en varias asambleas organizadas en distintos locales de la ciudad de forma independiente a cualquier cauce oficial. En las mismas se eligió a una Comisión Gestora "elegida democráticamente entre una mayoría del pueblo de Almansa con poder decisorio" que fue la encargada de organizar la movilización hasta conseguir finalmente, gracias a la presión popular, el tan demandado hospital.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

4. LA CRISIS ECONÓMICA: UNA AMENAZA SOBRE UN FONDO DE INESTABILIDAD POLÍTICA

Las bases de la acción colectiva se encuentran íntimamente relacionadas con el contexto social, económico y político existente. Por esta razón, ha sido un lugar común en la historiografía especializada del periodo considerar que el crecimiento en los niveles de contestación social fue debido a la irrupción en 1973 de la profunda crisis económica internacional. A ello también han contribuido las explicaciones que las propias autoridades articularon para explicar la aparición de una creciente conflictividad social desconocida hasta entonces en muchas partes del país. Así, los gobernantes locales, con el fin de eliminar cualquier adherencia política en las intenciones de los nuevos colectivos albacetenses en conflicto, vincularon el descontento de éstos con el "desequilibrio en la balanza de precios y salarios, fulminantes de la conflictividad laboral". Por ejemplo, para los rectores del sindicalismo oficial en la provincia, las huelgas en Estandard Eléctrica de Albacete "no obedecen a actitud política alguna" sino a la "situación económica en que se encuentran por el bajo poder adquisitivo de la peseta"[45]. En esta misma línea, influenciadas por el paradigma de la frustración-acción colectiva largamente cultivado por las ciencias sociales, distintas aportaciones han encontrado la principal causa del aumento en los niveles de convulsión social durante la parte final del franquismo en la abrupta frustración de las expectativas sociales, tras una larga fase de crecimiento, provocada por la súbita irrupción de la intensa crisis económica del petróleo desde 1973.

Según fuentes oficiales, a la altura de 1974 la crisis no había "tenido en la provincia tanta repercusión como en zonas desarrolladas de la nación". No obstante, era necesario reconocer su "incidencia muy acusada en la actividad secundaria provincial". En Albacete, la crisis afectó duramente a sectores como el Textil, la Piel

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

y el Metal. Pero fue especialmente virulenta en la Construcción, la actividad industrial más importante de la provincia. En este sector las consecuencias de la depresión económica se manifestaron especialmente a través de una drástica destrucción de empleo. Cuando, según datos oficiales, el desempleo a nivel general se acercaba al 2,5 por ciento en el año 1975, este porcentaje ascendía al 9 en la Construcción, que suponía el 35 por ciento de todos los parados del país (Ontíveros, 1975, 64). El presidente de la UTT del sindicato de esta rama llamó la atención a finales de 1974 sobre la "difícil situación que está atravesando el sector de la construcción en nuestra provincia", cuyo "reflejo más evidente son los altos porcentajes de parados, que a 31 de diciembre de 1974 era de un 69 por ciento superior al de igual fecha en 1973". Paro forzoso que además se vio agravado por "el posible regreso máximo de emigrantes (esta provincia tiene numerosísimos), máxime de los que vuelvan sin especialidad"[46].

Durante 1974 la provincia también fue testigo de la aparición de una desenfrenada y galopante inflación. Tomando como base 100, en 1968 el coste de la vida durante los primeros meses de 1974 en la provincia de Albacete fue de 150,9 en enero, de 151 en febrero, de 153,3 en marzo y de 156,8 en abril[47]. Esta rápida ascensión en los precios, unida al estancamiento de los salarios y al crecimiento del desempleo, impuso una seria amenaza para el nivel de vida de los trabajadores albacetenses. Éstos, ante el "freno puesto a la elevación de salarios en la contratación colectiva y lo exiguo que resulta el salario mínimo interprofesional", encontraron en todo punto imposible, a la altura de abril de 1974, "aspirar a la propiedad de la vivienda, mobiliario de ciertas características y, por supuesto, del disfrute de vacaciones fuera de su domicilio". Amenaza que se hizo más alarmante y temible ante el endurecimiento en las actitudes adoptadas por los empresarios. Éstos, respondieron a la crisis y a la disminución de beneficios a través del drástico recorte de los costes

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

laborales mediante expedientes de crisis y reducciones de plantilla como las habidas durante estos meses en Transformaciones Forestales, Sertextil, Ruilor, Pamsa, Manuel Márquez, López Vera, etcétera. Los propios informes oficiales llamaron la atención a finales de 1974 ante la "tensión producida" en el Textil por los "posibles ceses en algunas empresas" y los "motivos de inquietud entre los trabajadores" de la Construcción, cuyos puestos de trabajo se encontraban en peligro. Los burócratas de la OS reconocieron implícitamente el disgusto e irritación que estaban produciendo entre la masa asalariada las medidas empresariales para combatir la crisis. El Sindicato Provincial del Metal resaltó en 1974 que "el número de conflictos se ha elevado en relación con el año anterior, como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesan las empresas"[48].

Los efectos de la crisis, multiplicados por la mencionada actitud patronal y la política de rentas decretada por el Gobierno, menoscabaron la capacidad de la negociación colectiva para mantener los niveles de vida de las clases trabajadoras. En 1974 el director provincial de Asuntos Sociales de la OS reconoció que durante ese año se sufrió una "inflación galopante que ha descompuesto las economías de las familias trabajadoras y ha dejado casi sin efectividad real las mejoras de contratación colectiva". Según la Delegación de la OS de Almansa "cabe destacar que los nuevos Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo no han satisfecho plenamente a la mayoría de los trabajadores [...] ya que los aumentos experimentados en dichos Convenios no han estado en relación con la carestía de vida sufrida en estos centros industriales". Esta ineficacia de la negociación colectiva para contrarrestar los efectos de la crisis económica restó crédito al sindicalismo oficial como cauce de representación de los intereses de los trabajadores. Asimismo, deterioró significativamente su capacidad de canalización del descontento. Razón por la cual se reprodujo durante los

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

últimos años de vida de Franco un crecimiento en el enconamiento y la tensión suscitados durante la negociación de los convenios. A este respecto, para 1975 las estancias oficiales de la provincia previeron que los "fenómenos socioeconómicos" serían de "influencia en la contratación colectiva, endureciendo la negociación". No se equivocaron, pues los informes de ese año señalaron que la "negociación colectiva ha estado presidida por el signo de la dificultad". Atizada ésta además por la acción de las "minorías subversivas" dentro de los centros de trabajo. Por lo que no extraña que, como señaló la JOC en 1975, los "convenios colectivos se estén aprovechando como medio de movilización de gente"[49]. Así lo puso de relieve un informe de la OS almanseña al señalar la "creciente inquietud y desasosiego entre la masa laboral instigada a coacciones y represalias ante tales limitaciones salariales y reivindicaciones que se solicitan, tanto de tipo cultural como asistencial, como económicas, unas justas y, otras, exageradas". En este sentido fue fácilmente apreciable un progresivo "malestar en la clase trabajadora, que si bien y por fortuna no se demuestra violentamente, no por ello hemos de olvidar la tensión que en ellos produce"[50].

Bajo este clima las autoridades reconocieron que "el aspecto económico, lógicamente se refleja en el social". En ese sentido descubrieron desde principios de 1974 un "enrarecimiento en la clase trabajadora" y un "malestar general creciente"[51]. Conforme avanzó el año, los jerarcas del sindicalismo oficial se comenzaron seriamente a "preocupar por el ambiente que se respira entre la población trabajadora". Para éstos, durante 1974, "el ambiente social en nuestra provincia, análogo al resto de España, es de preocupación y desasosiego por la coyuntura económica que atraviesa el país". La estampa no mejoró al año siguiente, siendo la crisis económica —según la oficialidad— la principal "causa del malestar y de la insatisfacción últimamente puestos de manifiesto" entre diferentes colectivos de asalariados. De hecho, como resaltó un informe

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

interno, durante 1975 "los ánimos de los trabajadores están alterándose por múltiples motivos". Entre dichas causas destacaron —en opinión de la autoridad— el "continuo incremento del coste de la vida", el "estancamiento salarial que padecen" y el "alarmante incremento de trabajadores en desempleo"[52].

La acción se desarrolla cuando la gente adquiere acceso a los recursos necesarios para salir de la pasividad y encuentra la oportunidad de usarlos. Pero, en ocasiones, ésta también tiene lugar cuando los individuos se ven amenazados por situaciones que consideran muy injustas, intolerables y, especialmente, gravosas. Efectivamente, la subida de los precios, el control de los salarios, el crecimiento del desempleo, la ineficacia de la contratación colectiva y las actitudes empresariales, impusieron una importante amenaza sobre la clase trabajadora albacetense, tentada ésta a movilizarse cuando los costes de la indolencia y la apatía en momentos de fuerte presión sobre las maltrechas economías familiares fueron superiores a los desprendidos de la propia movilización. Por tanto, la crisis económica provocó un profundo desasosiego y enardeció a los trabajadores albacetenses. Desde finales de 1973 la sombría amenaza de una profunda recesión económica apremió a la clase trabajadora de la provincia a movilizarse contra la carestía de la vida. Sin embargo, de ello no se puede deducir, en la línea de las teorías de la frustración, que el aumento de la conflictividad a partir de estos meses fuese simplemente la reacción espasmódica ante los efectos perniciosos de la crisis económica. Sobre esta cuestión cabe decir que el malestar siempre se encuentra latente en el cuerpo social, pero no es manifestado a no ser que concurran unas favorables condiciones políticas y existan los cauces formales e informales necesarios en la articulación de la protesta. Es más, mientras que los trabajadores más afectados por la crisis económica desatada en 1973, los de la Construcción, mantuvieron una actitud generalmente pasiva, algunos de los colectivos más inquietos, como empleados de Banca, médicos, abogados,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

profesores y estudiantes, no se encontraron entre los sectores más acuciados por la carestía de la vida. De todo lo cual se deduce que la privación no es tanto sinónimo de movilización como causa de pasividad, y que rara vez la acción colectiva es sólo el producto espontáneo derivado de las frustraciones en el mundo de lo material (Oberschall, 1973, 114-115; Shorter y Tilly, 1985, 65).

Entonces, si en la España y en el Albacete de 1974 la "depresión y el paro crecientes, en lugar de frenar y atemorizar a la clase trabajadora como hiciera en otras épocas, están actuando como acicates en la lucha reivindicativa", fue debido a que la turbadora amenaza impuesta por la crisis económica hizo acto de presencia de forma paralela a la crisis final del franquismo, bajo un ambiente de creciente incertidumbre e inestabilidad social y política. Sin duda, las hostiles circunstancias económicas enrarecieron el ambiente social de la provincia, pero los mayores niveles de contestación no dejaron de ser el reflejo de las respuestas colectivas al cambio en las condiciones de la estructura política. Es decir, las clases populares de la provincia percibieron en la acción contenciosa la herramienta más eficaz para presionar por sus reivindicaciones laborales y demandas políticas en un contexto de crisis de la dictadura y aparición de nuevas oportunidades políticas. En este sentido, la coyuntura económica no fue más que el marco sobre el que se desarrolló un nuevo escenario político que alimentó nuevas expectativas y aspiraciones de cambio social y político entre crecientes sectores de la población cada vez más críticos con la dictadura, pero también generó más sombrías amenazas para los detentadores del poder (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, 75). Por tanto, si las hostiles condiciones económicas desasosegaron y urgieron a los trabajadores albacetenses a protestar, éstos también lo hicieron motivados por las señales procedentes del contexto político. Por lo que su movilización no puede quedar desvinculada de la dinámica del poder político durante los años finales de la dictadura.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

5. UN BARCO QUE ZOZOBRA Y UNOS ALIADOS INESPERADOS

La escena social de la parte final del franquismo no quedó convulsionada únicamente a golpe de desempleo e inflación. La intensificación del conflicto social durante los dos años transcurridos entre el asesinato de Carrero Blanco y la muerte de Franco se debió a la conjunción de una serie de procesos en el terreno de la política. Éstos empujaron una apertura en las "dimensiones consistentes" del "entorno político" que fomentó y facilitó la acción colectiva entre la gente corriente (Tarrow, 2004, 45). A ello contribuyeron la confusa liberalización iniciada por el Gobierno de Arias Navarro y el desmembramiento y división interna en el seno de la dictadura. La explosión en la calle Claudio Coello de Madrid que acabó con la vida del presidente del Gobierno, Carrero Blanco, en el mes de diciembre de 1973, provocó un importante cambio en el panorama político del país. Se produjo una cesura, un "cierto cambio en la trayectoria del régimen", que algunos autores han comparado con los giros estratégicos de 1957 y 1969 (Carr y Fusi, 1979, 257).

Aquél, debilitado por sus querellas intestinas, acuciado por la presión internacional y preocupado por el ascenso de la conflictividad social, lanzó desde inicios de 1974 un tibio programa de aperturas con el fin de ensanchar las bases sociales y políticas del sistema (Soto, 2005b, 120). En efecto, como señala Linz, ante la creciente presión "los gobernantes autoritarios están a menudo obligados a poner en marcha una cierta liberalización con la esperanza de reducir la oposición o incluso cooptarla" (Linz, 1990, 14-15). De este modo, el nuevo Gobierno nombrado en enero de 1974, con Arias Navarro al frente, promocionó el desarrollo político controlado del sistema. Dicha evolución quedó sustanciada en la ampliación de los cauces de participación política, aunque manteniendo los límites del orden franquista; la reforma electoral del

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

mundo local; el desarrollo de la Ley Sindical de 1971 y la creación de asociaciones políticas, aunque no de partidos. Además, se produjo cierto relajamiento en la censura. Desde el Ministerio de Información, con Pío Cabanillas como titular del mismo, se puso en práctica una política más permisiva sobre la información y la cultura. En esta dirección, tuvo lugar cierta semitolerancia de los socialistas y sectores más moderados de la oposición democrática (Preston, 2001, 105).

Sin embargo, los efectos de la apertura fueron precisamente los contrarios a los deseados con la puesta en funcionamiento de la misma desde arriba. Según Tocqueville, el "momento más peligroso para un mal Gobierno es aquel en el que intenta corregir sus métodos". Efectivamente, como apuntan O'Donnell y Schmitter, con la reforma, aunque muy limitada y no exenta de retrocesos represivos, de las estructuras políticas de los sistemas autoritarios se comienzan a "redefinir y ampliar los derechos" tímidamente. Lo que, a pesar de las severas limitaciones y de la amenaza represiva, contribuye a colocar la cuestión del cambio político en el centro del debate público y a crear nuevas expectativas entre diversos sectores sociales. Hecho que consecuentemente da lugar a "un rápido y agudo incremento de la politización general y la activación popular". El resultado de todo ello es que "a medida que avanza la liberalización, también se intensifican las demandas de democratización" (O'Donnell y Schmitter, 1986, 25). A este respecto hay que tener en cuenta que raramente los gobernantes autoritarios dejan el camino expedito para la acción de los movimientos sociales, por lo que en contextos opresivos son habitualmente los niveles intermedios de oportunidad política, como ocurre durante los periodos de liberalización controlada, los que motivan en mayor medida a la gente a salir a la calle (Tarrow, 1999, 89-90). Por tanto, como sugiere Linz, la apertura desde dentro practicada en los sistemas dictatoriales, aunque pensada para integrar y mitigar el descontento, "puede contribuir al crecimiento de la oposición en

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

vez de impedirla". En el caso de la dictadura franquista, ésta reveló, a través de la confusa combinación de indicios de apertura y cierre, una creciente vulnerabilidad que fue aprovechada por aquéllos más descontentos y desafectos para incitar a la protesta y a la contestación.

Por otra parte, los actores colectivos más timoratos, como fue en el caso de la provincia de Albacete, no suelen expresar sus demandas públicamente cuando las autoridades se muestran fuertes e implacables. De hecho, a menudo es más habitual que la acción de los movimientos sociales se produzca en momentos de debilidad y fraccionamiento de las autoridades (Tarrow, 2004, 18). Es decir, cuando aparece la oportunidad política en forma de desunión y desmembramiento de las elites gobernantes. En el caso que nos ocupa, dicha apertura en la estructura política comenzó a percibirse desde finales de la década de los sesenta. Desde entonces, el cambio social y en las actitudes, el aumento de la conflictividad y las necesidades exteriores de la dictadura, hicieron de la falta de legitimidad democrática del régimen un serio problema que dividió profundamente a la clase política oficial (Ysás, 2006, 49-52). Tras el asesinato del almirante Carrero Blanco en diciembre de 1973 se agudizaron —al calor de una contestación sociopolítica en efervescencia— las pugnas internas en el seno de la coalición de poder dictatorial. Aunque no se puede hablar de grupos claramente definidos, ni homogéneos, ni absolutamente impermeables, las grietas que durante 1974 emergieron en el Gobierno fueron claro reflejo del fraccionamiento en líneas generales de toda una clase política entre inmovilistas y aperturistas (Juliá, 2006, 65-66). En la provincia de Albacete, en torno a este eje, y sin olvidar las rencillas personales, adquirieron una evidente trascendencia pública las disensiones en el seno del ayuntamiento de la capital y de la Organización Sindical, las deficientes relaciones de ésta con los organismos dependientes de la Delegación de Trabajo y con la Diputación Provincial, el enfrentamiento entre el presidente de la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

misma y el gobernador civil, etcétera. En definitiva, durante los últimos años de vida de Franco su régimen malvivió sustancialmente corroído por los enfrentamientos internos que lo debilitaron profundamente y aumentaron la posibilidades de acción de la oposición (Tusell y Queipo, 2003, 19).

Según algunos autores la "contienda entre elites y la contienda popular se encuentran emparejadas más de cerca en los regímenes de capacidad alta no democráticos" (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, 230). Resultado de esta ubicua característica de la vida social, de la relación entre la contienda por arriba y por abajo, fue la apertura de oportunidades para los sectores desafectos al franquismo. En efecto, la desmembración de la coalición de poder franquista y el consiguiente debilitamiento del régimen aumentaron las opciones de acción de los movimientos sociales y crearon unas condiciones políticas más favorables para un cambio democrático. Pero también, a su vez, el desgaste y descrédito que la movilización social acarreó sobre las estructuras franquistas encarnó una oportunidad para aquellos que estando dentro del sistema tuvieron la voluntad y capacidad para aprovechar la situación y adquirir posturas más evolucionadas. De hecho, la evolución —no exenta de oportunismo, ambigüedad y contradicciones— de parte de la clase política del franquismo hacia posiciones aperturistas fue atizada por el aumento nada despreciable de los movimientos de oposición, el declive del régimen y la incapacidad del mismo para encauzar el creciente disenso político y social conforme avanzaron los años setenta (Ysás, 2004, 14). Por lo tanto, como dice Paul Preston, la militancia popular y la agitación política fueron la "clave para el proceso de democratización". Sin ellas, "ningún funcionario, ni siquiera el más flexible y reformista, se habría creído obligado a reflexionar sobre el futuro" (Preston, 2001, 163).

Así, durante los años finales del franquismo un creciente número de dirigentes franquistas, incómodos con el estancamiento y desprestigio de la apertura preconizada por el Gobierno de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Arias Navarro y los serios ramalazos represivos del búnker, apostaron por vagos e imprecisos posicionamientos reformistas. De esta forma, desde varios meses antes de la muerte de Franco, "una cierta sensación de huida del barco encallado y hundiéndose se apoderó de determinados círculos" de la oficialidad (Molinero e Ysás, 2003, 234).

El ayuntamiento de la ciudad de Albacete es un buen ejemplo para observar las querellas dentro de la elite gobernante y la evolución de parte de la misma hacia posturas en favor de algún tipo de salida reformista. Como el de otras muchas capitales provinciales del país, el poder municipal en Albacete sufrió durante los primeros años de la década de los setenta un fuerte desprestigio. Éste fue causado por la penosa situación de algunos servicios municipales que —en palabras del propio alcalde— estaban "en franco abandono". Además, cada vez fue más patente la desatención a los barrios, la perentoria escasez de recursos, la corrupción, los escándalos urbanísticos, etcétera. En 1973, el desgaste y la falta de confianza popular en la autoridad municipal quedaron corroborados con un ascenso de la abstención hasta el 61,2 por ciento en las elecciones municipales. Hecho que evidenció el "desinterés general del vecindario que ignora incluso quienes son los que les gobiernan"[53]. No en vano, en octubre de 1974 un concejal del ayuntamiento reconoció que el "vecindario es abúlico y poco colaborador" porque "ha perdido la fe en las instituciones". Situación provocada, según algunos observadores de la política local, por el "centralismo desmesurado y por la falta de consistencia que van teniendo los municipios con la erosión que les produce el amparo de la vieja Ley de la Administración Local".

Ante tan deplorable situación y el crecimiento del malestar ciudadano, y no antes, un sector de concejales se quejó porque"la estructura actual deja muy mermados a los concejales para desarrollar su función". Por este motivo, aquéllos con inquietudes más

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

o menos reformistas comenzaron a pedir grados superiores de independencia política para las corporaciones municipales puesto que "los concejales deben tener más posibilidades y que los dejen funcionar como tales". A su juicio, sólo así, a través de una apertura en la anquilosada estructura municipal y la elección del alcalde por el resto del pleno, sería posible ofrecer a "los ciudadanos una imagen eficiente, seria y limpia, de la misión que compete al ayuntamiento". Esta actitud de crítica moderada contra unas jerarquías locales, férreamente alineadas con los sectores más adictos y continuistas del franquismo, llevó a los concejales reformistas a enfrentarse con el alcalde, con el subjefe provincial del Movimiento y a ser apartados de la Comisión Permanente del ayuntamiento. La consecuencia fue la división de la Corporación, con la consiguiente aparición de importantes fricciones provocadas —según un concejal— por las "discrepancias entre dos generaciones, entre dos formas distintas de entender la política". En efecto, los concejales que mostraron ciertas veleidades reformistas también fueron los más jóvenes, mejor formados y con una menor vinculación vital con la guerra civil. Se presentaron a sí mismos como portadores del "caudal de ideas, de creencias y de ilusiones" que "contrastan con otras formas de entender la política y la convivencia"[54]. En la década de los setenta, dentro del sistema se apreciaron disensiones entre aquella cohorte generacional más joven que en los años venideros jugaría un papel activo en el proceso de transición y el espectro político más viejo, reaccionario y anclado en los recuerdos de la guerra civil. Las disensiones entrambos representaron "la reproducción a nivel municipal de los enfrentamientos que estaban teniendo lugar en las altas esferas del régimen entre aperturistas e inmovilistas" (Martín García, 2006b, 42). Querellas internas que finalmente provocaron el cese del alcalde y su sustitución en enero de 1974 por otro edil con cierto aire reformista.

La crisis municipal y el relevo en la alcaldía de la ciudad de Albacete a principios de 1974 coincidieron con las primeras

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

manifestaciones de descontento aparecidas en las barriadas periféricas de la ciudad. Así, los sectores reformistas del ayuntamiento, acuciados por el creciente malestar ciudadano e ilusionados con el programa político aperturista del Gobierno, pusieron en práctica una serie de medidas sobre educación, higiene, sanidad y pavimentación de los barrios. Muchas de las mejoras auspiciadas desde el reformismo local fueron lastradas por la parvedad de los recursos municipales, el sometimiento al férreo centralismo y la falta de representatividad de la Corporación. Sin embargo, se consiguieron algunos avances, mejoras en los barrios y una relación más fluida entre las comisiones vecinales y las autoridades. La prensa provincial destacó en mayo de 1975 que "hasta las Cámaras del hemiciclo municipal ha llegado la inquietud por los barrios periféricos y masificados de la ciudad". Aunque no sin que antes se produjese la "protesta y el interrogante de sus gentes para que los concejales [reformistas] recogieran las antorchas de las peticiones e intentaran suscitar las atenciones de los demás concejales en los plenos para acelerar el ritmo de las preocupaciones y de las soluciones"[55]. De este modo, aumentaron las expectativas y esperanzas de unos vecinos que a través de la presión en momentos de inestabilidad política municipal alcanzaron mejoras para sus barrios. Los pobladores de la periferia aprovecharon la emergencia de actitudes aperturistas en el seno de una Corporación dividida y, así, consiguieron establecer una nueva relación entre los barrios y el ayuntamiento. Dicha relación, a su vez, facilitó el despegue del movimiento vecinal en la capital provincial.

Los concejales reformistas del ayuntamiento de Albacete procedieron de los centros de extracción falangista (OJE, Frente de Juventudes, SEU, TEU, etcétera) y de círculos católicos. En líneas generales, evolucionaron en los años finales del franquismo —al calor de la protesta y de las nuevas posiciones de la Iglesia— hacia posturas socialdemócratas (que en algunos casos acabaron en el

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PSP y en el PSOE) y democristianas (Martín García, 2005b). A partir de 1974, las rígidas limitaciones del proceso de apertura llevaron a éstos a buscar nuevas alternativas de influencia y expresión política más allá de los estrechos márgenes del Consistorio. Como resultado, optaron por opciones políticas superadoras del rígido y pacato Estatuto de Asociaciones promulgado por el Gobierno Arias en diciembre de 1974. Meses después, tras la muerte de Franco, los concejales más evolucionados del ayuntamiento de Albacete fundaron la Alianza Democrática de Albacete (ADA). Se trató de una especie de grupo político inspirado más o menos en el modelo de sociedades de estudios como GODSA o FEDISA. Con una clara vocación aperturista, ADA aunó a varios profesionales liberales, socialdemócratas, democristianos y reformistas bien conocidos en los círculos de poder local. A mediados de 1976 pasó a formar parte de la *Platajunta* y en un manifiesto reivindicó la legalización de los partidos políticos, la creación de un Gobierno provisional y el inicio de un proceso constituyente democrático, la amnistía, etcétera.

Así, como se puede apreciar, parte de las filas del franquismo "fueron progresivamente concienciándose de que el régimen que ellos ayudaron a implantar y en el cual ocuparon posiciones [...] no podía esperar mucho tiempo para introducir ciertas libertades, como mínimo en la medida en que fuesen aceptables por segmentos moderados de la oposición y de la opinión internacional" (O'Donnell, 1989, 64-65). Los posicionamientos reformistas, más o menos directos, tuvieron un mayor eco e incidencia política cuando se trató de jerarquías provinciales. Éste fue el caso del presidente de la Diputación Provincial de Albacete, hombre cercano a Fraga y Barrera de Irimo. Durante 1975 defendió —con la oposición del búnker sindical— una ponencia aperturista de la Ley de Bases para el Estatuto de Régimen Local porque "nuestro país quiere participar y esto es clamoroso e indiscutible". Tras la muerte de Franco, en diciembre de 1975, el presidente de la Diputación abogó

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

por la "evolución política", la "ampliación del campo político" y el "ensanchamiento de los cauces". Sentenció que "más justicia y deseo de participar es lo que se pide". Por lo que —en su opinión— resultaba necesario "ceder para convivir". Estas ideas, aparecidas en un escrito en la prensa local, irritaron y provocaron las críticas de *Arriba*. Asimismo, agudizaron el enfrentamiento entre el presidente de la Corporación Provincial y el gobernador civil a causa de las tibias veleidades reformistas del primero. Ante este progresivo —aunque a veces vacilante— distanciamiento de las posiciones inmovilistas por parte de algunos sectores del franquismo, no extraña que en 1976 las autoridades centrales requiriesen a los gobernadores el "envío a la Dirección General de Administración Local de información detallada sobre alcaldes, concejales, presidentes de Diputación y diputados provinciales, sobre todo, aquellos en los que se den aspectos conflictivos"[56]. Los casos de los concejales reformistas y del presidente de la Diputación de Albacete reflejaron que "en el interior del propio régimen, en la Administración civil, en los sindicatos verticales, surgían focos de disidencia y tímidas tendencias hacia una transformación, y empezaban a proliferar posiciones distintas acerca de su supervivencia futura" (Aróstegui, 2003, 252).

Bajo la "protección de grupos e individuos más privilegiados, las clases populares se pueden sentir más dispuestas a desafiar las condiciones que les disgustan y pueden ejercer una presión más exitosa" (Eckstein, 1989, 37). Conforme la agitación social y las turbulencias políticas dentro de la dictadura fueron en aumento, los movimientos sociales encontraron aliados inesperados, aunque siempre minoritarios, entre las elites o sectores con cierta influencia sobre el poder sociopolítico (Piven y Cloward, 1977, 24). De esta forma, algunos dirigentes franquistas se autoerigieron en una especie de *tribunos del pueblo* al hacer gala de una mayor receptividad ante las reivindicaciones de los grupos descontentos. Con dicha actitud buscaron aumentar la propia influencia dentro de un

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

establishment franquista en descomposición y labrar una nueva trayectoria política sin las molestas adherencias del inmovilismo. Así, en agosto de 1974, posiblemente por primera vez en varias décadas, un concejal albacetense declaró en el periódico del Movimiento, *La Voz*, que las "ideas políticas que se hacen pensando en un solo sector del pueblo, aunque éste sea el llamado victorioso, son inmorales"[57]. En octubre de 1974 aparecieron, desde medios oficiales, críticas más o menos veladas a los movimientos contrarrevolucionarios derechistas en Portugal y en apoyo al proceso de democratización en el país vecino. En este mismo año, los mentideros políticos oficiales de la capital provincial se vieron en más de una ocasión extrañados y contrariados. Esto se produjo, por ejemplo, cuando un concejal del Ayuntamiento —en la "mejor línea aperturista", según sus propias palabras— organizó, desde la Comisión de Gobernación, reuniones y asambleas para conocer las reivindicaciones de un personal municipal muy molesto con su situación salarial. Algo tan inusual que incluso alguien desde dentro del propio ayuntamiento telefoneó a la policía creyendo que detrás de dichos encuentros se cocía una huelga. Mayor consternación en el franquismo local causó el hecho de que en mayo de 1975, por vez primera durante casi cuatro décadas de dictadura, un grupo de concejales aperturistas del ayuntamiento de Albacete se solidarizasen con los estudiantes universitarios y pidiesen que la universidad de Murcia, en la que realizaban sus estudios unos doscientos albacetenses, volviese a abrir sus puertas tras los graves incidentes que habían llevado al cierre gubernativo. Tampoco hasta entonces se había visto que el presidente de la UTT del Sindicato de Actividades Sanitarias, concejal familiar y médico de profesión, visitase a los trabajadores del hospital psiquiátrico encerrados en el Obispado a finales de 1975, para comprobar su estado de salud, y criticase duramente a una OS de cuyo escalafón jerárquico formaba parte. También fue la primera ocasión en que, en relación con este asunto, el alcalde

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

y otras personas "de orden" de la localidad de Lietor encabezaron una carta colectiva, firmada por más de un centenar de vecinos, al procurador de su partido judicial con el objeto de interceder por los intereses de los trabajadores encerrados. Para concluir con estos ejemplos que evidencian la aparición de nuevos posicionamientos dentro del *establishment* franquista local más proclives a ciertas reivindicaciones emanadas desde fuera del mismo, en este mes de enero de 1976 el ayuntamiento de Hellín pidió la "amnistía para presos y exiliados políticos y sancionados por motivos sindicales y laborales"[58].

La perceptible convulsión social que registró el país durante los años finales del franquismo acrecentó —en una situación de galopante crisis económica y crítica desde el entorno occidental más próximo— la sensación de crisis e incertidumbre entre las elites reformistas. Éstas comenzaron —al calor de la redefinición de los comportamientos políticos prohibidos y consentidos— a desplazarse desde las formas prescritas hacia otras toleradas, aunque no muy bien vistas desde ciertos sectores de la oficialidad (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, 65-66). Incluso en algunos casos ciertas personalidades reformistas llegaron a adoptar actitudes completamente intolerables meses antes. Como por ejemplo pudo ser el acudir a reuniones de la Junta Democrática durante 1975. En esta línea, dentro del *establishment* local apareció algún abogado, "ciudadano de bien", decidido a defender a militantes de la oposición. Igualmente, alguna autoridad intercedió en excarcelaciones y anulaciones de sanciones con el propósito de "poner tierra de por medio" con los sectores más recalcitrantes de la dictadura[59]. Ciertos funcionarios de Trabajo llegaron a asesorar a los líderes obreros, e incluso un obispo anteriormente leal a las esencias del nacionalcatolicismo comenzó tibiamente a manifestar algunas opiniones sobre la situación de los trabajadores, contra la violencia estatal y en favor de los derechos humanos.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Estos y otros casos pusieron de relieve —como decía un informe oficial fechado en 1975— "la veleidad de personas que, habiendo estado adscritas con aparente lealtad a la línea política del Régimen, tratan ahora de ir tomando posiciones ante posibles eventualidades que pudieran producirse al tiempo que cumplirse las previsiones sucesorias a la Jefatura del Estado". Esta evolución le sentó "como un tiro al búnker", por la "postura democrática" y la "personal ruptura con la oficiosidad" adquirida por algunos de estos personajes con influencia en ámbitos políticos oficiales. De hecho, no fueron extrañas las presiones, amenazas, desencuentros personales o ceses a cuenta de las nuevas actitudes políticas surgidas entre algunos grupos de las elites franquistas. Éste fue el caso de un burócrata verticalista que fue destituido en febrero de 1975 como director provincial de Asuntos Económicos de la OS por su postura crítica dentro del Consistorio como concejal y por sus buenas relaciones con *La Verdad*, representante a nivel local de la prensa católica menos complaciente con el sindicalismo oficial. Asimismo, entre otros ejemplos, el presidente del Sindicato Local Mixto de Hellín, un falangista evolucionado a posiciones socialdemócratas y comprometido con la problemática de los trabajadores, demandó en el verano de 1974 al teniente de alcalde, de signo continuista, por los insultos y amenazas recibidos por parte de éste[60].

Poco a poco, el desafío exterior se combinó con la presión interior para profundizar en la crisis y erosión de la dictadura. Aunque en realidad no se puede hablar de alianza autoconsciente entre esos sectores de técnicos de la Administración, eclesiásticos, políticos aperturistas y los movimientos sociales. Más bien se trató de una especie de complicidad tácita y subjetiva entre colectivos con diferentes intereses y valores, pero que fueron convergiendo en el rechazo de la represión y en la necesidad de articular algún tipo de cambio político. Se puede sugerir que ante las oportunidades políticas abiertas por la desmembración de la dictadura y el

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

"abandono del barco" de parte de su personal, los grupos desafectos aprovecharon las divisiones entre las elites gobernantes o los apoyos personales y puntuales de dichas elites, o de personajes "de orden y de bien", para aumentar sus posibilidades de acción y reducir los posibles costes ocasionados por la represión.

6. 'LA VERDAD', UNA NUEVA PRENSA RESULTADO DE LOS REALINEAMIENTOS POLÍTICOS

Durante los años finales de la dictadura, motivados por el declive del régimen, se produjeron una serie de nuevos realineamientos sociales y políticos. Éstos no afectaron únicamente a los sectores reformistas del franquismo, sino también a la jerarquía de uno de los pilares sociales más importantes de la dictadura, la Iglesia. Como bien es sabido, desde la guerra civil, la Iglesia española había sido una firme aliada de Franco. Estrecha colaboración que comenzó a desquebrajarse a partir de la celebración del Concilio Vaticano II. Dicho divorcio tuvo su impulso inicial y más decidido durante los años sesenta entre las bases y el sacerdocio joven. El conocido *desenganche* no caló hasta la década siguiente, conforme aumentaba la convulsión social y el régimen perdía apoyos tanto en el interior como en el exterior del país, y con un mensaje más moderado y conciliador, entre las renovadas y rejuvenecidas jerarquías de la Conferencia Episcopal[61].

La adopción de un nuevo posicionamiento sociopolítico por parte del principal órgano de la jerarquía eclesiástica también se dejó notar en los medios de comunicación más cercanos. No en vano, "los intereses de los propietarios desempeñan un papel crucial en los procesos de selección" de noticias y del tratamiento informativo de las mismas (McCarthy, Smith y Zald, 1999, 442). Así, si la jerarquía católica evolucionó desde la legitimación de la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

dictadura franquista a posiciones más críticas con la represión y la falta de libertades, igual lo hicieron las editoriales, periódicos y medios de comunicación afines a aquélla. Entre éstos, uno de los más potentes fue la Editorial Católica EDICA. Ésta fue arribando a posturas vagamente reformistas durante la década de los sesenta a consecuencia de los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II y el documento conciliar "Inter Mirifica" de 1963, sobre medios de comunicación social (Chuliá, 2001, 159). Conforme fue avanzando la década de los setenta, esta editorial, impulsada por la fuerte presencia de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas en su interior, emuló un distanciamiento de la dictadura paralelo al ejercido por las jerarquías moderadas y reformistas de la Conferencia Episcopal.

Pertenecieron a la Editorial Católica *Ya* en Madrid, *Hoy* en Badajoz, *Ideal* en Granada, *El Ideal Gallego* en La Coruña, *La Verdad* en Murcia y Alicante. También tuvo participación en el católico *Correo de Andalucía*. A la altura de 1974, EDICA representaba la cadena de prensa no estatal más importante del país, además de disponer de una agencia de noticias, Logos, y de una editora de libros. Ya por entonces había inaugurado en la primavera de 1973 la delegación del periódico *La Verdad* en Albacete. A la inauguración del mismo, junto al director Francisco Saldaña Fabián, asistieron numerosos personajes del reformismo oficial. Destacaron el presidente del Consejo de Administración de la Editorial Católica, García de Pablos, y el director de la agencia de prensa Logos, Manuel Jiménez Quilez. Este último fue Director General de Prensa cuando se promulgó la Ley de Prensa de 1966 e integrante —junto a Pío Cabanillas (subsecretario de Información y Turismo)— del equipo aperturista que Fraga introdujo en el Ministerio de Información y Turismo (Cisquella, Erviti y Sorolla, 2002, 74). Ante un menguado panorama de publicaciones periódicas de carácter provincial monopolizado por *La Voz de Albacete*, perteneciente a la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cadena de información del Movimiento y propiedad de un conocido preboste local de la dictadura, el diario *La Verdad* hizo las veces de otro de esos "aliados inesperados" para los grupos más descontentos con la situación política. Por una parte, hizo de "conciencia" de crecientes sectores de la sociedad albacetense más o menos favorables a un cambio en sentido democrático. Por otra, actuó como altavoz de aquellas minorías más comprometidas y movilizadas políticamente. Este doble papel consecuentemente llevó consigo la liberación de nuevos y más amplios espacios públicos de debate independientes de la hegemonía sociocultural impuesta por la dictadura (Muñoz Soro, 2007, 457). Para ello, *La Verdad* aprovechó, utilizando en ocasiones un lenguaje un tanto críptico, la mayor tolerancia fomentada por Pío Cabanillas al frente del Ministerio de Información y la relativa permisividad ejercida sobre la información de tipo local.

La Verdad creó nuevos espacios de debate, de confrontación de opiniones y denuncia. Al mismo tiempo, aumentó las posibilidades de influencia política y redujo los costes derivados de la acción. Así, la aparición de este rotativo favoreció la animación de la escena social y política de la provincia al aportar los recursos necesarios para dar a conocer y presionar en favor de las demandas de diferentes colectivos. En aquellos años que antecedieron a la recuperación de las libertades democráticas este rotativo se colocó "nítidamente del lado de aquellos grupos de trabajadores que estaban esforzándose para construir algo diferente, algo nuevo para el futuro social y político de la provincia" (Mata, 2002, 80). Conforme fue avanzando 1974 fueron más los albacetenses, aunque siempre una minoría inquieta y con un mayor nivel de conciencia, que encontraron en este periódico una tribuna para dar a conocer sus problemas y demandas sin correr los riesgos impuestos por la restrictiva legislación franquista. En el verano de 1974 el propio delegado de *La Verdad* en Albacete destacó el inusitado "furor epistolar

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de los albacetenses, lo que es bueno, si se piensa [...] que la gente tiene más confianza en el cuarto poder que los propios profesionales"[62].

Los individuos no procesan la información que leen en los periódicos de manera aislada sino en interacción con los círculos informales más próximos. En efecto, la gente tiende a interpretar las noticias aparecidas en la prensa a través de la conversación y discusión con las redes de sociabilidad más cercanas y con una opinión parecida. Aun así, el papel de los medios es de gran importancia en el desarrollo de los movimientos sociales puesto que un problema se convierte más fácilmente en motor de protesta si accede al espacio del discurso público. En la parte final del franquismo, mientras que las autoridades se esforzaron para que "se silencien o reduzcan al máximo la mayor parte de las noticias sobre conflictos", los grupos agraviados —como en el caso de las trabajadoras albacetenses de la Confección— pidieron que "se informe en prensa y radio de la situación y malestar del sector"[63]. En este sentido, la prensa menos acomodaticia, como *La Verdad*, jugó un papel muy importante al conseguir visibilizar y dramatizar el conflicto bajo un escenario en el que las autoridades se afanaron en ocultarlo y confinarlo a la esfera de lo privado.

No hay que olvidar que los medios de comunicación son "capaces de llegar a una audiencia mucho mayor de la que pueden alcanzar los actores de los movimientos sociales por sí mismos" (McCarthy, Smith y Zald, 1999, 414). En Albacete, los diversos colectivos agraviados, malhumorados y opuestos a la dictadura, encontraron en los ejemplares de *La Verdad* un canal de acceso a la esfera pública con la consiguiente difusión de sus problemas, demandas y razonamientos, ya que "todo nos lo publicaba, y sonaba". Por esta razón, los agricultores de Villamalea "agradecieron por carta" a la dirección del periódico la "preocupación que sentimos hacia la población". De esta manera, al recoger múltiples peticiones y quejas de diferentes colectivos subyugados por la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

dictadura, *La Verdad* reconoció implícitamente a los mismos como agentes de cambio social y político (Martín García, 2007). Por igual motivo no extraña el malestar de los gobernantes provinciales cuando en los números de *este diario* aparecieron críticas y reivindicaciones que, en su opinión, "no tienen desperdicio" y deberían ser prohibidas o sancionadas[64]. El gobernador civil de Albacete se quejó de que "cierto sector de prensa [...] acoge de forma benévola y ostensible" las demandas de diversos grupos sociales. Para la primera autoridad gubernativa dichas reclamaciones eran "utilizadas como motivo o pretexto para formular críticas y darlas a conocer al amparo de la publicidad" conferida "por el periódico *La Verdad*"[65]. Por eso, como manifestó el delegado de este periódico a finales de 1974, "cuando la denuncia llega, nunca le faltan ni las llamadas, ni los consejos, ni las presiones" procedentes del entorno de poder franquista[66].

Cuando los colectivos descontentos de la provincia expresaron sus cuitas y desasosiegos en las páginas de *La Verdad*, intentaron con ello inmiscuir, hacer partícipe, a la opinión pública en sus problemas y atraer la solidaridad, simpatía y apoyo de ésta. De hecho, el conflicto no quedó reducido al enfrentamiento contra patronos, mandamases sindicales o autoridades gubernativas. Hubo una tercera parte —"el público"— de cuya opinión dependió en ocasiones el resultado del conflicto. Muchas veces el periódico *La Verdad* fue el principal nexo entre los colectivos demandantes y ese "tercer actor", convertido en un importante instrumento de presión social y política. Así lo entendió un grupo de vecinos que en abril de 1976, a través de este diario, amenazó a los gobernantes locales con la "desfavorable opinión pública" si no se solucionaban sus problemas de alcantarillado. De igual forma parecieron percibirlo las autoridades cuando informaron de que "uno de los objetivos que se persiguen en todo conflicto laboral es el de influir sobre la opinión pública, así como la difusión de un conflicto y la deformación de sus razones constituyen

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

uno de los medios más claros de politización y de extensión a otros sectores". En fin, tanto los descontentos como las elites comprendieron la importancia de "ganarse a la opinión pública" en momentos de crisis política y social, y de la incidencia que en ello tenía la prensa. Donde esta lucha por la conquista de la opinión pública fue más encarnizada entre trabajadores y autoridades fue en aquellos sectores, como la Enseñanza y la Sanidad, cuya problemática no quedó circunscrita a la del centro de trabajo, sino que afectó directamente la vida cotidiana de la mayoría de la ciudadanía y por ello levantó un mayor interés social.

Todo conflicto entre diferentes grupos sociales también es una lucha de discursos e interpretaciones de la realidad circundante. Cuando el diario *La Verdad* introdujo dicho conflicto en el debate público, sus páginas se convirtieron en el escenario de una confrontación en términos culturales entre antagonistas con diferentes intereses (Klandermans y Goslinga, 1999, 445). Desde el año 1975, las páginas de este periódico representaron el terreno de enfrentamiento simbólico, de atribución de interpretaciones y significaciones contrapuestas, entre empleados de la Enseñanza y de la Sanidad y las autoridades franquistas. Los primeros pugnaron por justificar la movilización y llamar a la protesta. Por el contrario, desde la oficialidad se batalló por desprestigiar y deslegitimar a la misma. Para ello, desde las instancias oficiales se llamó la atención sobre la irresponsabilidad y "falta de celo profesional" de aquellos trabajadores que iban a la huelga en sectores tan sensibles como la Enseñanza y la Sanidad. Por ejemplo, tras las huelgas de los MIR en el verano de 1975, el presidente falangista del Consejo Provincial de los Trabajadores no encontró "justificación para que estos profesionales de la medicina abandonen su puesto de trabajo y como consecuencia, la falta de atención e incluso peligro de los enfermos que no son otros que los trabajadores, que con sus cuotas contribuyen al sostenimiento de la Seguridad Social"[67]. En la misma línea,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

autoridades, asociaciones de padres conservadoras, burócratas verticales, etcétera, denunciaron en la prensa, durante los conflictos en la enseñanza primaria y secundaria acaecidos en 1976 y 1977, que "los únicos perjudicados son nuestros hijos, que no reciben clase". En su opinión tan indeseable situación era debida a la postura de "intransigencia para conseguir sus fines particulares" de unos maestros y *penenes* que "están usando como escudo de defensa a nuestros hijos"[68].

Bajo este discurso se difundió una imagen de los empleados de ambos sectores como trabajadores privilegiados que, a pesar de sus sueldos superiores, se movilizaban por un radicalismo salarial expresado de forma iracunda e irracional. Incluso el pacífico encierro de un grupo de auxiliares del hospital psiquiátrico fue presentado por la Diputación Provincial como un acto intolerable porque "en un Estado de derecho no es admisible el planteamiento por vías de violencia". Igualmente, la OS calificaba a éstos como seres "enclaustrados" incapaces de razonar debidamente ante la "tensión nerviosa" que estaban sufriendo. En la misma línea, los empleados más aguerridos del hospital psiquiátrico y de la Residencia de la Seguridad Social fueron constantemente desacreditados y criminalizados por sus superiores. Éstos justificaron los despidos de los más inquietos por "sacar fotografías y grabar conversaciones" o por ser sorprendidos "en circunstancias poco claras en el despacho de la dirección del centro"[69].

Pero los colectivos movilizados en conflicto también encontraron en *La Verdad* una ventana para dirigirse a la ciudadanía y fundamentar sus movilizaciones ante la misma. En enero de 1976 los auxiliares sanitarios justificaron sus protestas ante la opinión pública como única salida posible porque "la Diputación Provincial no acepta el derecho de todo trabajador a un puesto de trabajo en condiciones de reconocida legalidad" y "la OS actual no defiende verdaderamente los intereses de los trabajadores". Los enseñantes movilizados durante el otoño de 1976 argumentaron su recurso a la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

acción disruptiva subrayando que "la actual huelga no ha empezado sin antes agotar los medios a nuestro alcance". En efecto, en el discurso trabado por estos colectivos, la huelga no sólo fue la última opción ante unas autoridades "arbitrarias" e "insensibles", sino también —como decían los auxiliares del psiquiátrico— la legítima defensa, una vez agotados todos lo cauces, de sus "justas reivindicaciones reflejadas en la prensa diaria".

Sanitarios y enseñantes no exhibieron sus movilizaciones como el instrumento de perpetuación de unos privilegios laborales y salariales. Muy al contrario, dicha protesta fue presentada ante la opinión pública como la herramienta para solucionar —como escribían unos MIR— las "diversas insuficiencias y deficiencias en el funcionamiento del hospital psiquiátrico provincial". Objetivo —en su opinión— tan "honesto" y "razonable" que la "ética profesional" les "impedía callar". Asimismo, los maestros denunciaron la campaña ministerial que trataba de presentar su conflicto ante el público destacando únicamente "el aspecto salarial de nuestras reivindicaciones, olvidando los que se refieren a la calidad de enseñanza, más importantes que aquél". En esta dirección, con el fin de dotar de un sentido a la protesta tanto hacia fuera como hacia dentro del movimiento, los *penenes* defendieron que la solución de la "caótica y discriminatoria situación de la enseñanza en su nivel más popular" y la obtención de "una educación de más calidad" pasaban necesaria e ineludiblemente por "una temporal anormalidad en las clases". Por tanto, como les dijeron a los padres de sus alumnos a través de la prensa, "comprender y apoyar las reivindicaciones de los PNN, en estos momentos, más que ayudar a unos trabajadores, es asegurar la formación democrática, humana e integral de nuestros hijos". Igualmente los médicos del hospital psiquiátrico enlazaron y justificaron sus protestas con una mejor atención a los pacientes psiquiátricos, quienes "ajenos a esta honda problemática" estaban sufriendo —en su opinión— una "situación de conflicto no resuelto"[70].

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Por otra parte, como ya se ha visto, un primer paso de aquellos que reivindican es introducir sus demandas en el espacio de debate público. Éste encarna la plataforma de acceso posterior a la esfera política (Cobb, Ross y Ross, 1976, 126). Es decir, por una parte *La Verdad* constituyó el nexo de unión entre ciertas reclamaciones y la opinión pública. Pero, por otra, también facilitó la canalización de dichas demandas hacia los órganos de decisión política. De este modo, los colectivos más descontentos entendieron que la denuncia de su situación en las páginas de este periódico podría ayudar "para convencer a quienes competa". Ésta fue la intención, en septiembre de 1976, de un grupo de jóvenes de Huerta de Marzo que a través de *La Verdad* quisieron hacer llegar su voz al "ayuntamiento y a la opinión pública para que comprendan" que sus peticiones "son justas y urgentes". En noviembre de 1975, los vecinos de un polígono de viviendas agradecieron al periódico su eficaz papel de "intermediario bienhechor" ante las autoridades para solucionar los problemas de agua corriente existentes en la barriada. Igualmente, un vecino de las barriadas agradeció al rotativo la atención prestada, ya que si "al haber expuesto a la opinión pública nuestras tribulaciones [...] sirven para que las autoridades competentes aceleren la obra [...] pueden ustedes tener la seguridad de contar con el agradecimiento de 72 familias. Si por el contrario, ello no va a servir de nada, nuestro agradecimiento también [...] por lo que podía haber sido un acicate para los cargos que tienen en su mano la solución del problema". En definitiva, como decían los vecinos del barrio de San Pedro "los problemas de los barrios si no se airean de alguna manera (prensa, radio, visitas, reuniones de barrio, etcétera) no se solucionan"[71].

Si se tiene en cuenta lo analizado en las páginas anteriores no extraña que el periódico *La Verdad* tuviese continuos roces y enfrentamientos con las autoridades franquistas de la provincia. Dichas pugnas representaron una batalla más del tenso combate que a nivel

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

general se produjo entre los medios de comunicación social católicos y las jerarquías del Movimiento. Durante los años finales de la dictadura *La Verdad* reprobó constantemente, como hizo en enero de 1976, "los errores, desvirtuaciones e incongruencias" del comportamiento de los representantes del Sindicato Vertical y demás autoridades de la provincia. No faltaron en sus páginas las duras críticas vertidas contra un sindicalismo franquista que "ataca a quien debía defender, en vez de amparar". Igualmente arreciaron las denuncias contra una burocracia vertical que "está haciendo un flaco servicio a la Organización, a los trabajadores, y al resto de los habitantes que poblamos esta España". Tras la publicación de tales denuncias no extraña que los periodistas de este rotativo esperasen las "acusaciones que desde el búnker sindical nos llegarán" por la defensa de las libertades sindicales, de la libre asociación y de la amnistía.

Fue notable la defensa de la libertad de expresión por parte de este periódico y la denuncia de las trabas institucionales impuestas a tal derecho. Así se produjo cuando en julio de 1974 el delegado de *La Verdad* en Albacete señaló que a "algunos les sienta mal que la prensa reclame sus derechos y se sitúe en su lugar". En respuesta, en enero de 1975, el delegado provincial de la OS acusó a este diario de "falta de rigor informativo" y de "falsas e injuriosas" vituperaciones[72]. También el alcalde de Albacete denostó en febrero de 1976 a esa prensa representante de lo "torcido, lo enano y lo gris". Tomando las "palabras de un gran periodista español", señaló que el "prestigio de la prensa no está en su capacidad de demoler nada, sino de arreglar las ruinas y los desperfectos". A juicio del primer edil, la "misión de la prensa no es la de excitar a diario a los lectores contra unos o contra otros, sino componer un orden de ideas y de soluciones"[73]. Ante tal visión de un alcalde, que además era periodista, al igual que el gobernador civil, se comprende que, como *La Verdad* denunció en el verano de 1974, a "algunos les sabe mal que pidamos aperturas [...] y les duele la denuncia"[74].

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En conclusión, en los años finales del franquismo, la prensa comprometida con el cambio fue más allá de sus habituales prerrogativas periodísticas para convertirse prácticamente en un medio casi normativo, valorativo y ético de la vida política del país. En enero de 1976 el propio gobernador civil de Albacete auguró "una problemática creciente" y un incesante "conflictivo futuro" debido, entre otras razones, a la "existencia de unos medios de comunicación más críticos". Éstos, entre los que se encontró *La Verdad*, pusieron su grano de arena en la conquista de nuevos espacios públicos, que precedió y contribuyó a canalizar el cambio político en una dirección plenamente democrática.

7. CANALES DE DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA PROTESTA

Una de las características predominantes de la conflictividad social registrada durante el segundo franquismo fue su alto grado de concentración tanto sectorial como geográfica. No obstante, las nuevas oportunidades políticas alimentaron durante la parte final de la dictadura el crecimiento de un ciclo de protestas que a su vez se extendió a nuevos sectores y lugares. Como dice Tarrow, los "ciclos de protesta movilizan a los organizados pero también organizan a los desmovilizados" (Tarrow, 1991, 47). En efecto, desde la muerte de Carrero Blanco a finales de 1973, el país experimentó lo que los sociólogos llaman un "cambio en el número y en el nivel de acciones contenciosas coordinadas que conducen a una conflictividad más generalizada implicando a un mayor número de actores" (McAdam, 2003, 293). El aumento de la conflictividad apreciado en la provincia de Albacete durante los dos últimos años de vida del dictador formó parte de un proceso de convulsión más general y cada vez dirigido con mayor decisión contra el poder político. En

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

otras palabras, dicha animación de la escena sociopolítica de la provincia tuvo lugar durante la fase de aceleración del ciclo de protestas que conforme avanzó la década de los setenta se fue extendiendo —aunque con diferente frecuencia e intensidad— a nuevas zonas del país antes poco movilizadas.

Conforme se desarrollan las protestas de aquellos grupos con "una larga historia de enfrentamientos", estimulan a colectivos en circunstancias similares a intentar solucionar los agravios motivo de su descontento (Hill y Rothchild, 1992, 190-195). De este modo, la lucha protagonizada desde la década de los sesenta por los colectivos "adelantados" de los centros urbanos e industriales del país fue poniendo lentamente al descubierto, junto a otros factores, algunos flancos vulnerables de la dictadura franquista. La movilización de los "iniciadores" del ciclo fue abriendo oportunidades y allanando el camino para la animación de otros colectivos. Así, cuando, desde finales de 1973, se hizo más palpable el desgaste de un régimen debilitado por la profunda crisis política, social y económica que vivía el país, aquellos sectores más timoratos decidieron sumarse a la movilización. A este respecto se puede decir que la aparición de una protesta más contenciosa en provincias como Albacete se vio favorecida por el efecto expansivo y el ejemplo ofrecido por aquellos involucrados en el ciclo de protestas desde sus inicios en la década de los sesenta.

Este cambio de escala en la conflictividad, y consecuente integración de las provincias más pasivas en una escena sociopolitica general más efervescente, se vio facilitado por procesos de emulación y transmisión de la información. Ésta difusión de los recursos necesarios para la movilización se produjo a través de redes sociales y contactos personales. En ocasiones, dichos procesos de irradiación tuvieron cierto carácter espontáneo. Por ejemplo, cuando los familiares emigrados regresaron al pueblo por vacaciones, "venían con unos posibles que aquí no existían", y contaban las

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

libertades democráticas que disfrutaban en sus países de destino. Aquellos hermanos, tíos o vecinos emigrados "nos hablaban de que en Francia había médicos para todos, había escuelas para todos, había coches para todos y televisores para todos y nosotros lo más básico no lo teníamos cubierto [...] lo que nos hacía pensar que en otros países se vivía mejor que aquí y que algo no funcionaba en España"[75]. El testimonio de los emigrantes albacetenses, al igual que en otras provincias lo tuvo el turismo, constituyó una importante ventana abierta de forma espontánea para el conocimiento de los sistemas políticos, las formas de vida, las costumbres y valores predominantes en la sociedad europea. Sin embargo, generalmente la transmisión de recursos y experiencias que provocaron la aparición de nuevas actitudes y compromisos políticos no respondió a una dinámica espontánea. De manera común, dichos procesos estuvieron articulados por las organizaciones y los movimientos sociales que, utilizando los recursos aprendidos en la lucha, intentaron propagarse y ganar a nueva militancia contra la dictadura.

En este sentido, en el mundo católico obrero cumplieron una funcionalidad de primer orden las coordinaciones de zona, las asambleas territoriales y los congresos de la JOC. Estas actividades permitieron a trabajadores albacetenses conocer, asimilar y entrar en contacto con nuevos valores y prácticas colectivas. Igualmente, a través de convivencias y reuniones realizadas lejos de Albacete los militantes jocistas supieron de la realidad de aquellas provincias más conflictivas y con una mayor tradición reivindicativa. La participación en aquellos encuentros les "daba una ilusión de que no estabas sólo, de que había más gente que estaba luchando igual que tú, y con los mismos objetivos, aunque a lo mejor los medios fueran diferentes". Así, los contactos con militantes de otras partes del país ayudaron a "empezar a conectar cosas"[76]. Gracias a estos contactos y a la información transmitida "veías que los problemas de los trabajadores no eran los tuyos solos y que había muchísima

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

gente a nivel nacional, cómo en Cataluña y el País Vasco, que tenían mucho más movimiento, sin olvidar también a los obreros de Andalucía y a la gente del campo, todo lo cual nos enriqueció". Además, los rallies europeos organizados por los movimientos obreros cristianos pusieron a los militantes albacetenses que participaron en los mismos de frente con "otra vida que nada tenía que ver con la nuestra y de un mundo democrático, del que nosotros estábamos todavía muy lejos"[77].

En la extensión de la protesta también jugaron un papel destacado los jóvenes albacetenses que militaron en la oposición estudiantil. Aunque los efectos del cambio social y del aumento de la renta per cápita no dejaron de ser modestos en la provincia, cada vez más jóvenes albacetenses de clases medias-bajas arribaron durante las décadas de los sesenta y setenta a una universidad crecientemente masificada, más diversificada socialmente y en constante convulsión protagonizada por el movimiento estudiantil y por los profesores no numerarios (Hernández Sandoica, Carnicer y Baldó, 2007, 155-160). Los albacetenses que marcharon a realizar estudios universitarios fuera de la provincia, especialmente a Murcia, Valencia, Granada, Madrid o Salamanca, encontraron una universidad trasmutada en una "zona de libertad", en la que "lo natural era ser antirrégimen". En efecto, la universidad de aquellos años se había convertido en un núcleo privilegiado de formación de militantes que engrosarían las filas de los partidos clandestinos, las asociaciones profesionales y vecinales, los movimientos sindicales, etcétera (Álvarez Cobelas, 2004). Para algunos de estos jóvenes, la universidad supuso un gran cambio vital. Representó la salida de la "provinciana" Albacete para conocer un mundo nuevo de ideas, vivencias, emociones y percepciones. Las nuevas amistades, las experiencias como delegados de curso, la participación en el teatro universitario y en los recitales poéticos, la confección de murales y pancartas, y el contacto con autores como Bertold Brecht, Marcuse

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

o Sartre, lanzaron a la militancia contra la dictadura a algunos jóvenes estudiantes albacetenses.

Éstos, al "regresar al pueblo" los fines de semana o en periodos vacacionales, acarrearon "libros y propaganda de matiz comunista". También llevaron consigo sus "modelos para la acción colectiva, marcos maestros y estructuras de movilización" que abrieron nuevas oportunidades para los jóvenes adherentes de las redes sociales que estaban germinando en escuelas superiores, institutos y clubes juveniles de la provincia: "A la vuelta, en las vacaciones, empezamos a hablar y a interesarnos un poco por la política, y poco a poco fundamentalmente por la influencia de un estudiante universitario fue por lo que me fui metiendo de una forma más comprometida con la política". Hacia mediados de la década de los setenta los militantes más jóvenes que aún estaban en los institutos de Albacete "nos nutríamos mucho de lo que traían los estudiantes de Murcia y de Valencia"[78]. Pero también entre los jóvenes trabajadores los estudiantes "influyeron bastante", pues "había un grupo de gente universitaria que traía entonces las ideas de la universidad"[79].

Como afirma Florence Passy, los "vínculos sociales son unos de los mayores canales a través de los cuales los potenciales activistas son conectados con una oportunidad para la participación" (Passy, 2003, 30; Snow, 1980, 790; McAdam y McAdam, 1990, 2). Así, las redes y contactos personales que estos estudiantes universitarios, habitualmente comunistas o pertenecientes a los grupúsculos de la izquierda revolucionaria, fraguaron a su vuelta a la provincia en institutos, clubes juveniles y salones parroquiales, representó un vínculo para el acceso a la militancia de otros jóvenes con inquietudes sociales y políticas. Algunos de éstos, aunque desazonados, no se habían movilizado con anterioridad simplemente porque no habían encontrado a la persona que les "implicase políticamente". Pero el contacto con los militantes de la oposición en el seno de redes informales desarrolladas en la cotidianeidad de la sociedad

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

civil fue "definitorio, y a partir de ahí se inicia una etapa de compromiso"[80]. De hecho, "poco importa que uno esté dispuesto desde el punto de vista psicológico o ideológico a participar si no cuenta con el vehículo que pueda lanzarle a la actividad de protesta" (McCarthy y Zald, 1987, 707). Por ejemplo, una joven estudiante se consideraba antifranquista desde la adolescencia, pero no comenzó a desarrollar una militancia organizada hasta que no apareció una oportunidad o contacto. Hasta que algunos años después un antiguo compañero de instituto enrolado en el movimiento universitario antifranquista le sugirió la posibilidad de incorporarse al PCE[81]. A través de esta especie de micromovilización silenciosa basada en los vínculos y actividades cotidianas, los estudiantes universitarios promovieron el acercamiento de las organizaciones de oposición a ciertos ambientes estudiantiles y juveniles, hecho que facilitó "canales colectivos tanto formales como informales, a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva" (McAdam, McCarthy y Zald, 1999, 25). Por lo tanto, al contrario de los postulados de la teoría de la sociedad de masas, "no son nunca los individuos aislados y desarraigados los que se movilizan" (Melucci, 1988, 339).

Desde los años iniciales de la década de los setenta, con la designación de Magisterio como enseñanza superior y la extensión de la revuelta universitaria a la Educación Secundaria, fueron apareciendo focos de protesta estudiantil en las escuelas normales y en los institutos de Bachillerato de las capitales provinciales (Hernández Sandoica, Carnicer y Baldó, 2007, 168). En Albacete, en 1970, la Sección Local de Investigación Social llamó la atención sobre la propaganda subversiva que "en el mes de abril recibieron por correo algunos maestros y profesores referida a la Ley General de Educación". Para la Delegación Provincial de la Juventud, entre la minoría de jóvenes más o menos politizados en la provincia a la altura de 1973, eran aproximadamente "la mitad los que dicen estar influenciados por la Iglesia, y la otra mitad por los centros de enseñanza"[82].

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En dichos centros de enseñanza, desde 1970, "circulaba también entre la juventud literatura izquierdista"[83]. En 1972 la Policía reseñó la "actuación de un pequeño grupo de estudiantes de COU del Instituto de Enseñanza Media Masculino que, en conexión con grupos de la universidad de Murcia, llevaron a cabo —en acción de comando— en aquella ciudad difusión de propaganda subversiva en el recinto universitario y efectuaron en Albacete un acto violento en la persona de uno de los profesores del citado instituto, incendiando la puerta de acceso a su domicilio privado"[84].

Según las informaciones del PCE, el año 1974 estuvo "salteado de una serie de incidencias de todo tipo que motivaron algunas acciones concretas" en los centros de enseñanza secundaria de la capital provincial. En enero la expulsión de un profesor del instituto femenino por su participación en acciones contra el *proceso 1001* provocó "una serie de paros académicos y de protestas, con los que se identificaron algunos miembros del profesorado". Las fuentes del Partido señalaron que la "condena a la expulsión por parte de las alumnas es unánime" y un "gran número de estas, secundadas por alumnos de los institutos Mixto y Masculino, se dirigieron a la Delegación Provincial de Educación en solicitud de que se restituya al profesor expedientado y se dote a los centros de suficiente profesorado". A principios de marzo de 1974, una asamblea convocada en la Escuela Normal de Magisterio por los cerca de veinte delegados del centro acabó con un paro de más de 350 alumnos en protesta por una serie de medidas gubernamentales. Esta acción se repitió otras dos veces durante la misma semana, contribuyendo la intransigencia y la falta de flexibilidad de las autoridades académicas a politizar el descontento existente en este centro.

Antes, a principios de 1974, un grupo de jóvenes libertarias hicieron circular por las aulas del Instituto Femenino de Albacete un panfleto que escandalizó a las autoridades locales. El gobernador notificó al delegado de Educación que se había detectado un

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

"panfleto de 17 páginas multicopiadas con el título 'La lucha sexual de la juventud'". En el mismo se hacía "apología de la liberación de los jóvenes en relación con la moral" y se facilitaban "abundantes detalles sobre prácticas sexuales, afirmándose un perjuicio burgués y el papel reaccionario de la familia burguesa". La primera autoridad gubernativa temió "que el mencionado documento" se difundiera por otros centros de enseñanza al constituir "un medio más de la sistemática ofensiva organizada para crear en la juventud una situación de *anomia* o carencia de normas morales que haga más fácil su receptividad para ulteriores intentos de orientarla hacia conductas manifiestamente antisociales". Por esta razón, ordenó a sus subalternos la "adecuada orientación a los directivos de los centros de Enseñanza, para que prevengan la distribución de documentos de esta naturaleza y en caso de constatarse la circulación de éstos en los mismos, den cuenta inmediata, para realizar las oportunas comprobaciones y actuar en consecuencia respecto de los culpables en la difusión de esta propaganda"[85]. En la escandalizada jerga de la superioridad parecía como si la "sana y limpia" juventud albacetense también fuese víctima de la "tónica de desenfreno de la época" y de la "molicie moral de la sociedad" de aquellos momentos. De ahí el pesar y la angustia del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, ante el "peligro comunista" que "con falsas promesas está envenenando a nuestra juventud, quitándoles a Dios y la moral, el cariño de los padres y el amor a la Patria"[86]. Aun así, en 1975, el gobernador civil no pudo ocultar que "se registraron algunos incidentes en el campo estudiantil"[87]. En enero, los estudiantes albacetenses de magisterio volvieron a convocar un paro en solidaridad con los estudiantes de Murcia, en el que pidieron la dimisión del rector de dicha universidad. Paros que volvieron a producirse en el mes de marzo y, posteriormente, durante el año 1976.

A lo largo de la primera mitad de los años sesenta se hizo patente el fracaso de las tentativas reformistas enarboladas por los

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

burócratas del SEU en el interior de la universidad. Así, los estudiantes que desde la segunda mitad de la década de los sesenta y en adelante se incorporaron a la actividad profesional fueron socializados políticamente en una universidad cada vez más hostil contra el régimen ante la falta de derechos, la mediocridad de una parte del profesorado y el compromiso con las libertades de la otra (Ysás, 2008, 50). Aquellos jóvenes abandonaron el movimiento estudiantil una vez concluidos sus estudios. Pero en la mayoría de los casos esto no supuso un punto y final a la militancia, pues posteriormente cumplieron un papel fundamental en la traslación de la lucha universitaria a sus nuevos entornos laborales y profesionales.

A este respecto, por ejemplo, no hay que olvidar que la reconstrucción del PCE en la provincia, y sobre todo en la capital, recayó en jóvenes técnicos y profesionales. Abogados, profesores, arquitectos, médicos, funcionarios, etcétera, alimentaron en buena medida la militancia del PCE de Albacete de mediados de la década de los setenta. Incluso los socialistas se vieron sorprendidos por el alto grado organizativo del PCE a "niveles de gente preparada". En los últimos años del franquismo aparecieron jóvenes abogados dispuestos a defender a los trabajadores, y que más tarde fundaron el primer despacho laboralista de la provincia en 1976[88]. También bajo esta óptica se explican los conflictos laborales entre funcionarios del ayuntamiento de la capital, de la Delegación de Hacienda, de Justicia o en la Sanidad. En este último sector, las protestas que convulsionaron al mismo durante 1975 fueron protagonizadas por unos MIR espoleados por "una conciencia política previa adquirida en la universidad, en la práctica del movimiento estudiantil" (Lacalle, 1976, 96). Asimismo, la Asociación de Antiguos Alumnos de Magisterio fue una plataforma comunista de movilización en la Enseñanza Primaria. Sin olvidar que los estudiantes más inquietos de los institutos se vieron muy influenciados por "los profesores que habían acabado los estudios en aquellas ciudades

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

con mucha más movida estudiantil y en general una acción política de mayor calado y volvían para instalarse en Albacete". Por otra parte, durante los años finales del franquismo al mundo del periodismo profesional fueron llegando nuevos jóvenes socializados en medios estudiantiles convulsos o en relación con los sectores cristianos más progresistas, como ocurrió en el caso de *La Verdad*. Por las mismas fechas, diversos grupos juveniles comenzaron a realizar sus primeras contribuciones al periodismo de opinión, como el colectivo Sagato en Albacete. Además, aunque tímidos, a partir de 1975, en la capital albacetense se comenzaron a apreciar movimientos y escarceos en los colegios profesionales de abogados, delineantes y médicos.

Pero no siempre la extensión de la protesta fue causada por las organizaciones de oposición. Por paradójico que parezca, y en contra de su voluntad, las autoridades franquistas también contribuyeron a ello. Los gobernantes franquistas facilitaron la irradiación de la movilización precisamente al tratar de erradicar el "germen marxistoide" en sacristías, púlpitos, aulas y facultades de las grandes ciudades de forma sigilosa y discreta. Con este fin, clérigos y profesionales fueron desterrados a lugares sin grandes concentraciones obreras ni universidades como Albacete. Así, trajeron sus ideas políticas y su posición crítica ante la dictadura desde Guipúzcoa, Vizcaya, Asturias, Galicia o Barcelona, algunos profesores, historiadores, médicos, curas, líderes de la JOC, consiliarios de la HOAC, que fueron desterrados a la ciudad de Albacete, a Villamalea, Pozo Cañada, Ledaña, etcétera. Como señalan los informes oficiales, en los pueblos de provincias tradicionalmente tranquilas, entre ellas Albacete, aparecieron sacerdotes venidos de las "provincias del Norte" que "animaban a todos los vecinos a formar sindicatos de agricultores elegidos por ellos mismos, sin que fueran impuestos por el Gobierno, como venía siendo hasta la fecha". Por ejemplo, a principios de los setenta arribó desde tierras

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

vascas en Pozo Cañada un párroco que "nos influyó a toda una generación de gente joven, incluso de mayores, porque era de los curas valientes que llegaba a la Iglesia y hablaba de temas sociales o de temas políticos, a veces era polémico en sus intervenciones en la Iglesia y escandalizaba a la gente bienpensante"[89].

Mediante los procesos analizados en este apartado se fue produciendo una especie de atribución de la similitud o "identificación mutua de actores de diferentes enclaves como suficientemente similares entre sí para justificar la acción conjunta" (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, 294). Así, gracias a curas obreros y otros militantes antifranquistas desterrados, pero también a través del papel de los estudiantes universitarios, de los medios de comunicación, de los encuentros y reuniones con militantes de otros lugares, la información sobre la "acción inicial alcanza a grupos distantes geográfica o institucionalmente [...] los cuales, con base en esta información, se definen a sí mismos como suficientemente similares a los insurgentes iniciales" y deciden emularlos. De este modo, sobre dichos mecanismos se fue canalizando la trasmisión y difusión de recursos organizativos, repertorios y discursos que consiguieron ir "tendiendo puentes entre reivindicaciones e identidades" de colectivos procedentes de diferentes partes del país, con la consiguiente extensión geográfica, sectorial e identitaria de la movilización contra la dictadura franquista (McAdam, 2003, 193).

8. MOVILIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

La crisis económica soliviantó e intranquilizó a numerosos colectivos sociales que percibieron en el nuevo contexto político mejores oportunidades para luchar contra la carestía de la vida y la falta de libertades. Sin embargo, aunque irritados, los actores sociales

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

raramente pueden canalizar sus frustraciones hacia medios colectivos y aprovechar las oportunidades políticas sin unos cauces organizativos formales o informales (Gamson y Schmeidler, 1984, 569-578). En este sentido, no fue mera casualidad el hecho de que el crecimiento de la movilización en la provincia de Albacete durante los dos últimos años de vida del dictador fuese paralelo al desarrollo y consolidación de las organizaciones de la oposición política al franquismo, muy especialmente el PCE. A este respecto, durante los primeros años de la década de los setenta fueron apareciendo, sobre todo en la capital, pequeños colectivos trotskistas, leninistas y maoístas, desgajados del movimiento estudiantil y de orientación radical y revolucionaria. Éstos formaron las Juventudes del PC [m-l], la Joven Guardia Roja y algunos grupúsculos izquierdistas y libertarios. Casi de forma simultánea a la aparición de estos grupúsculos de extrema izquierda fueron desarrollándose las estructuras del PCE en la provincia.

A principios de los años setenta este partido únicamente disfrutaba de una organización de cierta entidad en Villamalea. Aunque según sus dirigentes a la altura de 1970 "existen condiciones en esta provincia para dar un buen salto", la organización del PCE a nivel provincial era verdaderamente precaria. Al comenzar la década, las estructuras del Partido en la provincia no pasaban de la presencia en doce localidades, en las que existían a duras penas cuatro comités locales y uno comarcal, con un total de sesenta afiliados aproximadamente (López Ariza, 1990, 218-235). Además, como apreció con desaliento un informante del Partido en viaje de inspección por la provincia, en localidades como Villarrobledo éste estaba compuesto "en su mayoría por veteranos", muy "ligados al pasado [...] y muy impresionados todavía por la feroz represión que hubo en el pueblo", con "bastante mentalidad del trabajo del Partido en la cárcel, sin ver los problemas actuales y sin ningún contacto con las masas"[90].

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A partir de este punto de arranque verdaderamente frágil e inestable, el Partido observó un importante desarrollo en los años siguientes, hasta convertirse a la altura de la muerte de Franco en la principal fuerza política de oposición a la dictadura en la provincia de Albacete. A principios de 1977 llegó incluso a contar con unos 2.000 afiliados y 67 comités locales en la provincia. De hecho, en la primavera de 1976 un dirigente socialista de viaje por la provincia reconoció que "lo que más me ha impresionado de Albacete es lo bien organizado que está el PCE"[91]. La decidida resolución de éste para aprovechar cualquier frente a través del cual trasmitir reivindicaciones sociales y políticas de carácter democrático llevó a los activistas del mismo a participar en los incipientes movimientos sociales (obrero, estudiantil, vecinal y campesino) que fueron desarrollándose en la provincia durante la primera parte de la década de los setenta. En Albacete, los activistas del PCE crearon las Comisiones Obreras de la provincia, contribuyeron a dinamizar la escena cultural y asociativa a través de su presencia en círculos estudiantiles y juveniles (Asociación de Antiguos Alumnos de Magisterio, Cine Club Buñuel, Librería Popular, Club de Amigos de la UNESCO, etcétera), fomentaron los grupos vecinales que dieron lugar a la creación de asociaciones de vecinos como la del barrio Pedro Lamata, formaron parte de colectivos de profesionales (sanitarios, enseñantes, abogados, funcionarios, etcétera) y, finalmente, insuflaron en el medio agrario el movimiento cooperativo y la organización de las Comisiones Campesinas. Todo ello contribuyó a la consolidación organizativa del Partido y al aumento de la capacidad de movilización del mismo. Aunque se trató de una minoría, no hay que olvidar que los activistas clandestinos del PCE se ubicaron en puntos clave (cooperativas, salones parroquiales, barrios, etcétera) de la socialización y comunicación de muchos trabajadores, estudiantes, vecinos y campesinos de la provincia. Por otra parte, no fueron pocos los que se enrolaron en las filas comunistas

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

simplemente porque el Partido "ofrecía una organización para luchar eficazmente por la libertad"[92]. Así, muchos jóvenes descontentos con la dictadura se vieron fuertemente atraídos por el PCE gracias a su potente organización y al ejemplo de fortaleza y decisión de sus militantes. No hay que olvidar que en aquellos momentos el PCE "era el partido que representaba la oposición más seria, más organizada al franquismo"[93]. Además, la debilidad organizativa y la escasa capacidad de actividad de otros grupos políticos facilitaron la llegada al Partido de jóvenes, estudiantes y profesionales que no se consideraban estrictamente comunistas: "No éramos marxistas, aunque militábamos en organizaciones marxistas éramos demócratas simplemente". En definitiva, los militantes del PCE, en colaboración con cristianos, curas obreros y trabajadores, dieron vida a unos movimientos sociales que, aunque no consiguieron derribar a la dictadura, contribuyeron al fracaso —junto a otros factores— de cualquier continuismo o reformismo controlado que no llevase consigo un verdadero proceso de democratización.

En ocasiones, la continua movilización abierta puede generar un golpe represivo que decapite cualquier organización o movimiento. Por esta razón, en ciertos momentos los cálculos estratégicos imponen el fomento de redes y vínculos creadores de unas bases sociales más sólidas para la extensión y vigorización de la protesta (Sandoval, 1998, 170). En los primeros años setenta la mezcla de la lucha abierta y clandestina del PCE de Villamalea llevó a un punto álgido el enconamiento entre los comunistas del pueblo y las autoridades locales. La intensificación de dicho enfrentamiento hizo temer a los dirigentes del Partido por un severo latigazo policial contra la estructura del Partido en el contexto altamente represivo de inicios de la década de los setenta. Como advirtió un dirigente del PCE en abril de 1970, la "situación en Villamalea tiene sus peligros". Fundamentalmente porque "entran cada vez más en contradicción con el Poder Central", y aunque "esta contradicción

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

no es palpable en el pueblo, ya que han conquistado prácticamente el poder local y la reacción está a la defensiva", el "peligro es real y hay que estar alerta" ante un posible duro golpe represivo. Además, en 1967 se fundaron las Juventudes Comunistas del PCE de Villamalea, portadoras de un continuo activismo y radicalización. Un informe del PCE a nivel nacional señaló en 1970 que los jóvenes del pueblo eran "tremendamente combativos". Hecho que conllevó tensos enfrentamientos con las autoridades municipales y la preocupación de los dirigentes más veteranos del Partido, temerosos éstos de un posible golpe represivo. Razón por la cual los dirigentes más experimentados se mostraron favorables a una acción menos disruptiva que asegurase la conservación del aparato clandestino. Ante esta situación y el objetivo de evitar la desarticulación de dicho aparato, en 1972 el Comité Local de Villamalea tomó "conciencia sobre la necesidad imperiosa de abrirse fuera, ayudar a desarrollar el Partido en la provincia" con el fin de extender la organización ante un futurible desmantelamiento del Partido en la localidad. Así, se intentó "exportar la lucha" a diferentes pueblos de la zona como a Madrigueras, Cenizate, El Herrumblar, La Roda, Tarazona de la Mancha, o a la propia capital provincial. Allí, los militantes de Villamalea entraron en contacto con los jóvenes estudiantes universitarios que volvieron a la ciudad una vez concluidos sus estudios. De este modo se puso el germen para la reorganización del Comité Local de la capital provincial. Un informe de los comunistas de Villamalea, fechado años después, ya en 1975, señalaba que una de las principales "preocupaciones nuestras siempre fue la extensión a la capital". Objetivo que a la altura de este año ya se encontraba "en una línea de crecimiento bastante grande", por lo que "nuestro partido local ya no tiene que intervenir directamente en la capital", allí ya "tienen su organización propia y caminan muy bien"[94].

Antes, en el otoño de 1973 se había creado el Comité Provincial con participación de activistas de Villarrobledo,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Tarazona, Mahora, etcétera. Éste se fraguó principalmente a través de los nexos abiertos desde Villamalea y Albacete con emigrantes albacetenses que habían regresado recientemente y que en algunos casos habían ocupado cargos importantes en los partidos comunistas de sus países de destino. Si los motivos de la emigración al exterior habían sido principalmente de tipo económico, la experiencia en sí solió ser marcadamente política, pues muchos trabajadores albacetenses adquirieron una educación política a través de su contacto cotidiano con la libertad sindical. Aunque la emigración había supuesto una esencial válvula de escape a las tensiones sociales, económicas y políticas del campo, fue en el extranjero donde algunos emigrantes albacetenses comenzaron a participar en "huelgas, manifestaciones y en todos los actos políticos" (Sanz Díaz, 2003, 181).

Los que engrosaron las huestes de la emigración exterior lo hicieron insertándose en redes cimentadas sobre los vínculos familiares o de procedencia. Pero en ciertas ocasiones dichas redes también se construyeron sobre la identificación que proporcionó la huida de la miseria rural y de la humillación ante un pasado "oprobioso" junto al bando perdedor de la guerra. Los vecinos y familiares ya asentados ofrecieron a los recién llegados un núcleo de sociabilidad, vivienda, ayuda para encontrar trabajo, etcétera. A través de estas redes de solidaridad y apoyo mutuo en Francia, Suiza, Alemania u Holanda, algunos trabajadores albacetenses entraron en contacto con un PCE que desarrolló una importante labor de proselitismo entre las comunidades emigrantes. Por ejemplo, algunos villamalenses vendimiaban en el Sur de Francia cuando "empezaron a venir comunistas todas las semanas". Éstos organizaron los sábados y domingos reuniones en las que "hablaban de política, de lo que pasaba en España, de la lucha contra el franquismo y todo eso". No fueron extraños, por tanto, ejemplos como los del matrimonio que constituyó la célula inicial del PCE en el barrio Pedro Lamata de Albacete, que había ingresado en el

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Partido en Suiza, o el del responsable del Partido en Tarazona de la Mancha, quien era un obrero agrícola que "vino a Francia en 1962, en Alta Saboya, donde ingresó en el Partido y fue miembro del Comité de este departamento. Trabajó también y militó en Suiza. En 1964 regresó a Tarazona donde organizó un grupo del Partido"[95]. Además, junto a campesinos de Villamalea, jóvenes estudiantes, profesionales y emigrantes regresados, el mapa de la reorganización comunista en la provincia de Albacete se fue completando con el contacto con los militantes "históricos" de diferentes localidades, como Villarrobledo, Tarazona o Madrigueras, y algunos hijos de los mismos. Si bien los viejos dirigentes en general tuvieron un papel secundario en el nuevo PCE albacetense de los años setenta (San José, 2003, 111). Por otro lado, no hay que olvidar, finalmente, el importante revulsivo que supuso para las estructuras provinciales del Partido el hecho de que dos de sus miembros, Enrique López Carrasco y Asterio Leal, formasen parte del Comité Central del PCE.

Desde la primavera de 1974 el Comité Provincial del PCE comenzó a editar el *Boletín Democrático de Información*, organizó la Junta Democrática albacetense e inició el reparto más regular del *Mundo Obrero*. En mayo de este año los incipientes organismos provinciales del Partido decidieron crear las Comisiones Obreras de Albacete. Durante la década de los sesenta, la aparición de informales y esporádicas comisiones de trabajadores para plantear reivindicaciones "al margen de siglas sindicales y políticas", coordinadas en un proceso que fue desde la fábrica a las estructuras de rama, locales, provinciales y nacionales, dio lugar al movimiento sociopolítico de Comisiones Obreras (García Piñeiro y ERICE, 1994, 152; Ruiz, 2001, 408). Sin embargo, el caso albacetense es claro ejemplo de que al hablar de este movimiento "los orígenes y la trayectoria presentan una notable diversidad" (Ysás, 2002, 85; Miguélez, 1985, 598). Aquí, la creación de Comisiones Obreras,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

como tal organización, siguió una dinámica bien diferente. En Albacete, las Comisiones Obreras fueron promovidas desde el PCE como instrumento de "lucha por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores" y como arma obrera ante la "ausencia de unos sindicatos libres y representativos". Como se puede apreciar, para los comunistas que pusieron en funcionamiento las Comisiones Obreras en la provincia "no cabía duda" de que éstas eran un arma de lucha política y de "que su fin último será precisamente la lucha por las libertades democráticas". Así, además de reivindicaciones laborales, éstas reclamaron desde su nacimiento la amnistía política, las libertades sindicales, el derecho a huelga, reunión y asociación, y el "respeto de los derechos nacionales de los pueblos del Estado español"[96].

Se puede decir, entonces, que Comisiones Obreras de Albacete no tuvo su germen en la acción y en las experiencias organizativas de las bases. Por el contrario, su origen se cifró principalmente en la estrategia política del PCE contra la dictadura. Su objetivo era desarrollar "unos conflictos más antifranquistas que propiamente laborales". Existía la idea, en efecto, entre las organizaciones políticas de oposición en la provincia de que las Comisiones eran un instrumento "construido desde la vanguardia, desde lo que era la dirección política e ideológica"[97]. A diferencia de las Comisiones creadas en otras partes del país durante la década de los sesenta, el sentido del proceso no fue de abajo a arriba, del movimiento al partido, sino al contrario, puesto que el nacimiento de Comisiones estuvo "directamente vinculado al PCE"[98]. En 1974 en la provincia de Albacete "quien decide constituir Comisiones Obreras e influir es el PCE", siendo éste su "motor y el combustible"[99].

El protagonismo del Partido en la puesta en funcionamiento de Comisiones Obreras llevó consigo una doble militancia inicial pues "no había separación real entre lo que era el PCE y lo que era el movimiento de Comisiones Obreras que se estaba impulsando".

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

De hecho, "había una doble militancia que te comprometía [...] y muchas veces ya no discernías si estabas en el terreno sindical o en el terreno político"[100]. Además, esta trayectoria desde el campo de la política al mundo sindical planteó serios problemas para la implantación de Comisiones Obreras en el medio industrial de una capital provincial en la que el PCE estaba compuesto principalmente por estudiantes y profesionales, siendo muy pocos sus militantes obreros. En efecto, "los que entonces estábamos en el PCE en Albacete éramos estudiantes y en general lo que se llamaba entonces *fuerzas de la cultura*". En la capital provincial el "Partido se movía en un ámbito de gente de la cultura, de intelectuales, y no tenía la posibilidad de llegar a los trabajadores" (López Ariza, 1990, 223)[101]. Hecho que comportó una merma en la capacidad de oposición sindical del PCE al disponer de pocos líderes de fábrica que hicieran de nexo entre las bases trabajadoras y las consignas emanadas por el aparato del mismo (Fishman, 1996, 116-118).

Esta ausencia de líderes obreros comunistas explica la nula presencia del PCE provincial en las movilizaciones protagonizadas por los empleados de Banca, los vecinos de algunos barrios o en otros sectores manuales como el Textil en Albacete o la Piel y el Calzado en Almansa. Sectores, además, caracterizados por la presencia de unos movimientos de apostolado obrero en los que arraigó una cultura de independencia y autonomía de los partidos políticos. Por tanto, las organizaciones de la oposición no canalizaron todas las manifestaciones de protesta producidas en el Albacete del final del franquismo. Como comentaba la prensa local católica en junio de 1976 "es totalmente incierto —aunque sea impopular— afirmar que el protagonismo de la lucha obrera ha sido conducido por cualquiera de las tres sindicales hoy en liza: CC OO, USO y UGT, para acercarnos a la realidad provincial habría que admitir previamente que han sido hombres con conciencia de clase, pero hasta ahora independientes, los forjadores de la lucha obrera"[102]. De hecho, el caso de Albacete

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

evidencia, junto al ejemplo de otros lugares, que sería "injusto identificar las actitudes y los comportamientos de los trabajadores exclusivamente con las estrategias de las organizaciones sindicales" (Pérez Pérez, 2001, 228 y Balfour, 1990).

En definitiva, la liberalización limitada impulsada desde arriba, la desunión y desmembramiento de las elites políticas de la dictadura y los realineamientos sociopolíticos facilitaron —junto a los procesos de transmisión y difusión de la protesta— el desarrollo de organizaciones de oposición en la provincia. La aparición de éstas, fundamentalmente del PCE, canalizó el descontento fraguado por los efectos de la crisis económica hacia la acción colectiva y permitió un mejor aprovechamiento de las nuevas oportunidades políticas. Si bien no hay que olvidar que la oposición política en la provincia, especialmente concentrada en sectores estudiantiles y profesionales, nunca llegó a canalizar todas las manifestaciones de protesta contra la dictadura franquista, especialmente aquellas impulsadas por la presencia de los movimientos católicos en sectores manuales y vecinales.

9. LA CREACIÓN DE MARCOS E INTERPRETACIONES DE LA ACCIÓN COLECTIVA

En la historiografía de la parte final del franquismo han abundado los análisis que, en la línea de la historia social más clásica, explican la generación y expresión del descontento exclusivamente como reacción a las privaciones materiales. Sin embargo, dichos acercamientos a menudo obvian que los "individuos actúan colectivamente o dejan de hacerlo, entre otras razones, porque tienen herramientas culturales para interpretar la situación en que viven, los problemas que les acucian y los responsables del conflicto" (Cruz, 1997, 33). De ello no puede deducirse que el conflicto social

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

sea primariamente simbólico, ni simplemente una interacción de carácter literario entre tropos rivales[103]. Más bien cada representación o recreación simbólica de la realidad se encuentra vinculada al escenario social, político y económico en el que tuvo lugar su propia construcción. Bajo la dictadura franquista cualquier narrativa o manifestación discursiva generada por parte de los movimientos sociales necesariamente quedó ligada a una realidad caracterizada por la explotación laboral (bajos salarios, desempleo, disciplina, ritmos altos, insalubridad, etcétera) y la exclusión política (falta de derechos sindicales, represión patronal, etcétera) (Salomón, 2007). Parece necesario, entonces, prestar atención a la percepción que de esta realidad y de sus intereses tuvieron los diferentes colectivos, así como a la formulación de autorrepresentaciones y definiciones compartidas de la situación que animaron y motivaron a la movilización (Scott, Bendford y Snow, 2001, 234).

En el devenir cotidiano de la micromovilización en salones parroquiales, clubes juveniles, escuelas jocistas, cooperativas, institutos, tabernas de los barrios o en el propio Sindicato Vertical, se fue fraguando un sistema de idealizaciones simbólicas a través del cual, muchos de los que en aquellas actividades participaron, comprendieron, y percibieron críticamente, la situación en la que discurría su vida cotidiana (Klandermans, 2001, 192). De este modo, la "familia, los grupos de amistades y ocio, los grupos vecinales, los de la Iglesia [...] constituyeron espacios donde los individuos adquirieron una definición colectiva de los acontecimientos, de su situación y de sí mismos como actores sociales" (Pérez Pérez, 2001, 306). Se levantó, en otras palabras, lenta y diariamente, toda una explicación figurativa o definición compartida de la realidad circundante que motivó y confirió una legitimación a la acción colectiva. Así, jóvenes, trabajadores, vecinos, agricultores, etcétera, construyeron socialmente una percepción de sí mismos y del mundo que les rodeaba, una identidad gracias a la cual definieron

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

el grupo de pertenencia, la situación sufrida, los intereses comunes, los objetivos y estrategias, etcétera.

A la hora de entender las dinámicas presentes en toda movilización hay que tener en cuenta que la "capacidad de las elites para definir qué es legítimo sigue siendo poderosa incluso en periodos de desorden" (Piven y Cloward, 1977, 14). Por esta razón, una de las primeras tareas de los incipientes grupos informales y organizaciones que aparecieron en la provincia conforme avanzaba la década de los setenta fue la de "proponer una visión del mundo que legitime y motive la protesta" (McAdam, 2001, 45). En el seno de los mismos, en el devenir cotidiano de sus actividades, se fue lentamente creando un marco de acción colectiva o "esquema interpretativo que simplifica y condensa el *mundo de ahí fuera*" (Snow y Benford, 1992, 137). Se trató de una actividad simbólica e interpretativa de importancia, ya que no hay que olvidar que un problema social no genera invariablemente un movimiento social si no existe una previa identificación y denuncia de aquél como intolerable. Según algunos autores, "antes de que la acción colectiva pueda ponerse en marcha, la gente debe de definir colectivamente su situación como injusta" (McAdam, 1982, 51). En este sentido, rara vez una injusticia o un agravio son circunstancias objetivas claramente discernibles, sino más bien el resultado de una definición construida colectivamente.

Por tal razón, en el desarrollo cotidiano de actividades, reflexiones de vida y demás prácticas sociales se elaboraron discursos que redefinieron "como injusto o inmoral lo que previamente era considerado desafortunado, aunque tal vez tolerable" (Snow y Benford, 1992, 137). Dichas elaboraciones narrativas construyeron una nueva interpretación de la situación que generalmente trató de ser congruente con las expectativas, valores e intereses de los posibles adherentes. Para ello, de forma habitual fue utilizado un lenguaje accesible y ejemplos concretos fuertemente imbricados en la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

vida diaria con el objetivo de obtener resonancia cultural y una alta credibilidad empírica para los futuros militantes. Así, curas obreros y consiliarios de la JOC procuraron a través de la pedagogía activa y de las revisiones de vida "abrir los ojos un poco a la gente obrera", "ayudarles a descubrir la injusticia sufrida", "descubrir la implicación política que tiene nuestra explotación". En las actividades de la JOC se buscó "deducir los problemas fundamentales que afectan más urgentemente". En otras palabras, hacer ver a los jóvenes trabajadores la "realidad inmediata con sus causas y consecuencias". En definitiva, los responsables de este movimiento se afanaron en decir a los trabajadores que, aunque a veces "no nos demos cuenta de nuestra situación", el agravio cotidiano sufrido en fábricas y talleres no era una desgracia, natural e inconmovible, puesto que "no siempre ha habido pobres y ricos" y la "explotación de unos pocos a la mayoría no ha existido siempre y puede desaparecer" a través de la movilización por unas mejores condiciones de vida[104].

Con el recurso a este razonamiento discursivo los curas obreros y los militantes más experimentados de los movimientos de apostolado intentaron cambiar la percepción que muchos trabajadores tenían sobre los problemas que atañían su vida cotidiana en las fábricas, los barrios, etcétera. No revistió consecuencias menores que en sus descripciones de la realidad dichos problemas dejasen de ser vistos como una desgracia irreversible para pasar a ser interpretados como algo "indigno e inmoral", una injusticia que hacía necesario incidir "en las causas que provocan las consecuencias más generalizadas y aplastantes"[105]. Estrategia exegética discernible en los cursillos de economía que organizaba la JOC y en los que se hizo hincapié en que no era casualidad, ni fortuito, ni accidental, el hecho de que "mi jefe, que no da golpe, puede cambiar de coche cada año, y nosotros no podemos permitirnos ningún capricho". Causa por la cual se animaba a los jóvenes trabajadores a dejar de resignarse ante un predeterminado destino e hiciesen "algo para remediar esta situación injusta"[106].

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Así, desde abajo, en la base de la sociedad civil, se puso en funcionamiento una movilización cognitiva basada en la atribución de nuevos significados tendentes a provocar la indignación y la protesta. A través de este tipo de esfuerzos interpretativos se intentó que "aquello que antes podía haber sido aceptado como una desgracia, ahora se considere intolerable, que hay algo ilegítimo en el sistema y esa injusticia debe rectificarse" (Turner y Killian, 1987, 237). Por ejemplo, en el medio rural se denunció en asambleas, cooperativas y hermandades, los inadmisibles impuestos y entrega de cosechas, los bajos precios, la política gubernamental contra los intereses de los pequeños agricultores, etcétera. De este modo, lentamente dejaron de ser fenómenos azarosos, para mutar en demandas, ciertos ultrajes antes aceptados. Todo ello a través de un laborioso proceso de enmarcado e interpretación colectiva como el llevado a cabo en las multitudinarias juntas de la Cooperativa de San Antonio Abad de Villamalea, donde se animaba, como en 1973, a "denunciar estos hechos", a "no consentir más abusos", a "despertar del gran letargo de muchos años" y a que "no se resignasen a que los expolien de esa manera". Las octavillas repartidas entre 1970 y 1974 por las Comisiones Campesinas en algunos pueblos de la comarca de La Manchuela hablaban de "injusticias intolerables" y "bochornosas" prohibiciones. También se refirieron a los "impuestos injustos" y a las "formas de pago injustas y discriminatorias" que equiparaban con auténticos "saqueos". Dichas tributaciones fueron etiquetadas por las Comisiones como una "carga gravosa para la generalidad de los labradores modestos". Motivo por el cual requerían una respuesta colectiva para hacer "posible su eliminación". En esta misma línea discursiva, en septiembre de 1974 el delegado sindical de Casas Ibáñez informó a sus superiores de la siembra de propaganda "dirigida a los agricultores y diciéndoles, más o menos, *que abrieran los ojos*, que el Gobierno los está explotando"[107].

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Bajo un discurso parecido, un grupo de estudiantes comenzaron a redactar el *Boletín Democrático de Información* del PCE, en la primavera de 1974, para "de una vez por todas" hacer conscientes a los ciudadanos de la provincia de la "explotación y de la estafa que estamos siendo objeto". Con ello pretendieron que el pueblo no permaneciese "callado por más tiempo ante las vejaciones y engaños de que viene siendo objeto desde el advenimiento de la dictadura franquista"[108]. A tal fin estos jóvenes estudiantes comunistas denunciaron múltiples situaciones en las que "se ha buscado el poner un oscuro velo sobre los ojos del pueblo español". No extraña, por tanto, que el contenido de susodicho *Boletín* estuviese trufado de situaciones referenciadas bajo la palabra "engaño", "abuso", "atropello", "fraude", "estafa", etcétera. Dicho boletín continuamente definió el subdesarrollo económico, la emigración o la situación en fábricas y barrios con la etiqueta de problemas insoportables, inadmisibles e inaceptables, y que, por lo tanto, demandaban de la reclamación, la movilización y el compromiso colectivo para ser solucionados.

Con el objetivo de aglutinar a nuevos militantes y apoyos sociales, la lógica discursiva elaborada por los diferentes movimientos trató de enmarcar el desempleo obrero, la emigración o la carencia de servicios en los barrios como hechos intolerables. Pero también se buscó presentar los esfuerzos emprendidos para solucionar tales problemas como justos y legítimos. Por ejemplo, nada espurio, ilícito o subversivo podía haber detrás de una movilización acreditada, según los vecinos de diferentes barriadas de la ciudad de Albacete, porque sus "peticiones son justas y urgentes" y "en todos los sitios a donde hemos ido han reconocido que tenemos toda la razón del mundo". Para estos vecinos sus reclamaciones quedaban más que justificadas por el hecho de ser "también ciudadanos" y "deberse en justicia" dichas mejoras. Ante la presentación de tales argumentos y motivos los vecinos más inquietos y activos

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de los barrios creyeron justificado el hecho de "continuar insistiendo hasta que estén resueltos todos los problemas de los barrios".

Sin embargo, no siempre es "cosa fácil convencer a los más timoratos de que las indignidades de la vida cotidiana no están escritas en las estrellas, sino que pueden ser atribuidas a algún agente" (Tarrow, 2004, 162). En efecto, un ingrediente importante de los marcos de acción colectiva elaborados por los grupos de oposición fue la identificación de los responsables del agravio sufrido. Asignación de una culpabilidad, con tintes moralizantes, que debió de quedar meridianamente clara para los cientos de campesinos de Villamalea que acudían a las asambleas de la Cooperativa de San Antonio Abad. Por ejemplo, en mayo de 1975, éstos escucharon decir a su presidente que "el responsable de todo lo que ocurre es el ministro de Agricultura, el señor Allende, y García Baxter", máximo representante de "las fuerzas más reaccionarias y negras" que "nos están atacando" y "están llevando al campo al desastre". También eran culpables, según Comisiones Campesinas, de la penosa situación en el campo, los "grandes capitalistas amparados por un Gobierno de ladrones y sinvergüenzas", que se estaban enriqueciendo de "manera tan infame" con "el dinero y el trabajo de la clases trabajadoras"[109]. Asimismo, en numerosos conflictos laborales que se desataron en los últimos años de la dictadura los trabajadores responsabilizaron de su situación a empresarios y autoridades franquistas. Éste fue el caso de los empleados del psiquiátrico de Albacete encerrados en el Obispado en diciembre de 1975, quienes consideraron "responsables de nuestra actitud a la Excma. Diputación Provincial [...] y a la OS, las cuales no han efectuado hasta ahora ningún intento por resolver nuestra angustiosa situación"[110].

Por otra parte, hay que decir que las "atribuciones de significado no son solamente elementos constitutivos de la identidad colectiva, sino también un aspecto necesario del proceso de acción

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

colectiva en la medida en que sitúan e identifican otras categorías de actores como objetos de esa acción" (Scott, Benford y Snow, 2001, 230). En este sentido, el conflicto vivido en el Albacete de los últimos años de la dictadura llevó consigo un proceso de construcción social de categorías políticamente relevantes. Es decir, la propia denuncia pública presentada en las líneas anteriores fue el reflejo de una conciencia diferenciada, expresión de la separación entre un "ellos" y un "nosotros". En las actividades de organizaciones y movimientos sociales la creación de una identidad específica necesitó de la descripción del enemigo, de la "invención del otro", a través del emparejamiento antagónico de valores e identidades (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, 61-65). Así, aquellos más descontentos con la dictadura definieron a un "nosotros" con similares problemas e intereses y en contraposición a un "ellos" antagonista, al que atribuyeron maldades reales o imaginadas, siendo éste enmarcado como el oponente dentro de una dicotomía social (Pérez Ledesma, 1997, 225).

En las reuniones de la JOC se hizo hincapié en "la existencia de dos clases" con "intereses contrarios entre sí porque defienden y luchan por causas distintas" y "nuestra pertenencia a una de ellas: la obrera, el pueblo, los explotados". En la otra parte se encontraban los "alegres derrochadores [...] protegidos, amparados y bendecidos por los poderes públicos". Las Comisiones Campesinas de Villamalea fomentaron la identificación de un "nosotros" los "viticultores pequeños y medianos" en oposición al "enemigo jurado de nuestro pueblo". Dicho enemigo fue representado por el "actual régimen político" que les condenaba al duro "trabajo y las deudas". Para los vecinos más conscientes de los barrios "esa minoría de privilegiados" vivía en ese "estrecho eje marcado por una sociedad cerrada y jerarquizada en el que está integrado todo lo que suena y repercute, centros oficiales, cines, bancos, residencias". Una ciudad oficial, lejana y hostil, quebrada por un proceso de división

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

social marcado en el propio espacio, y que hizo que "*nosotros* nos sintiéramos del barrio, *nosotros* no nos sentíamos nunca de Albacete"[111]. De esta manera, el barrio fue emergiendo como un espacio específico de la comunidad, creada ésta sobre redes de reciprocidad y ayuda mutua y sustentada en una identidad autónoma (Hernández Ramírez, 1999, 79-80). Una identidad opuesta en valores y en prácticas sociales a un "ellos" identificados con el centro de la ciudad en el que residía la "parte señorita, la de los poderosos y gobernantes, la parte que vivía bien y la parte comercial"[112].

Como se puede observar, la movilización a menudo se encontró enlazada con toda una serie de símbolos, creencias, valores y significados colectivos que otorgaron un sentimiento de pertenencia al grupo y confirieron un sentido a la participación. Por tal motivo, en la recreación dual de la estructura social que se construyó desde ámbitos obreros no faltó la erección de estereotipos en los que un "nosotros, los trabajadores" fueron representados como víctimas de la explotación —ilustrados con mordazas, cadenas, o como a una vaca de cuya gran ubre succionaban los empresarios— y como luchadores por la libertad. Por el contrario, "ellos, los empresarios y burócratas del aparato verticalista", habitualmente fueron encarnados, junto al signo del dólar, como holgazanes orondos, que fumaban puros, vestían sombrero de copa, corbata y anillos. En las publicaciones obreras, mientras que unos simbolizaban un pajarillo, los otros eran "los cazadores escondidos" que "esperarán su oportunidad para cerrar la boca al que quiere *libertad*"[113]. Además, en estos casos de recreación dual de la estructura social transcendió una definición colectiva del "nosotros" como víctimas del orden capitalista, de la organización social y de la estructura política, que confirió a los trabajadores un sentimiento de diferenciación social adobado con una conciencia de dignidad y orgullo. Por esta razón, en el discurso de las organizaciones del final del franquismo ese "nosotros" quedó identificado con "los verdaderos

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

artífices del progreso", como el elemento productor de una riqueza social injustamente distribuida por la dictadura en favor de un "ellos" representante de sólo "unos pocos" privilegiados. Como decían los agricultores de Villamalea en el verano de 1974, "hemos sido y seguimos siendo los principales contribuyentes a todo el desarrollo, en beneficio de unos cuantos que son los que se llevan el verdadero beneficio"[114].

Si fue muy importante el hacer que la gente se sintiera agraviada en algún aspecto de su vida, no fue menos esencial el hecho de que la misma gente se sintiera optimista respecto a la eficacia de la movilización y de la reivindicación para solucionar sus cuitas diarias. A la identificación del problema y de sus responsables fue unida la presentación de posibles soluciones que de manera general incluyeron una llamada a la movilización como mejor estrategia para deshacer el perjuicio sufrido. En esta línea, en una octavilla repartida en 1973, las Comisiones Campesinas concluyeron que a los agricultores "sólo les queda una solución, hacer acciones y huelgas para que sean escuchados". Para los PNN de instituto la "única forma para presionar es la huelga, ya que no tenemos otra forma de hacernos escuchar como demuestra el hecho de que hayamos sido ignorados durante muchos años". Los "problemas de los barrios si no se airean de alguna manera [...] no se solucionan" decían a finales de 1975 los habitantes de San Pedro[115]. Así, mientras que en unas ocasiones se ensalzó "la movilización y lo eficaz de la lucha", en otras se puso de relieve la futilidad de la pasividad, pues, como arengaba a sus compañeros el representante de los veterinarios albacetenses, "nosotros siempre fuimos pacíficos y por eso siempre fuimos marginados". En los marcos de la acción colectiva, la desmovilización de los actores fue identificada con la perpetuación de situaciones de explotación, exclusión, etcétera. Como cuando a principios de 1976 la Hermandad de Villamalea manifestó que "ya estamos colmados de paciencia y que ya está

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

bien, que dejen de abusar de nosotros por ser la clase más noble y pacífica del país"[116].

En el intento de legitimar la protesta como eficaz arma de lucha ante los ojos de los militantes, los movimientos sociales recurrieron a la comparación, haciendo hincapié en lo que otros grupos habían ganado a través de la misma. Así, la difusión de la identidad colectiva anduvo pareja a las llamadas a la imitación de los ejemplos de movilización concluidos con éxito. Como cuando el PCE —aprovechando la victoria de las trabajadoras en el conflicto de la empresa López Vera en septiembre de 1974— señaló que el mismo "ha constituido un gran ejemplo para todos los trabajadores de Albacete, y ha puesto de manifiesto que la lucha unida de los trabajadores constituye el único camino a seguir para la defensa de los intereses de la clase trabajadora y contra la explotación capitalista". Por otra parte, ante "el desarrollo de los más recientes conflictos laborales acaecidos en la Península", los comunistas llamaron a "seguir el camino trazado por nuestros compañeros de otras regiones más avanzadas en la lucha". Además, esta confianza en la capacidad de la acción colectiva para resolver los problemas fue apoyada, en las ilustraciones de panfletos y revistas, por imágenes optimistas en las que se recurría a valores superiores como la solidaridad, la unión, el apoyo mutuo, etcétera.

Además de los discursos orientados a justificar la protesta, la "participación en la propia acción colectiva, en los actos reivindicativos o en las manifestaciones de adhesión", fue un factor esencial en la promoción y reafirmación de las identidades. Mediante el conflicto, los movimientos sociales no sólo buscaron atraer la atención de las elites franquistas y de posibles nuevos militantes sino también afirmar la identidad de los participantes y reforzar el compromiso y la solidaridad. No en vano, "las propias movilizaciones alteran la interpretación del mundo y aumentan la experiencia de los sujetos que participan en ellas y los que se encuentran a su alrededor". De

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

hecho, constituyen "unos de los principales recursos en manos de los que se ven involucrados para reforzar o aumentar los apoyos sociales" (Cruz, 1997, 15). Por tal razón, las diferentes organizaciones, a pesar de fracasar en ocasiones en sus fines, valoraron especialmente la acción, pues ésta sirvió para, como en el caso de los PNN de instituto, aumentar la "unidad y coordinación" o, como en el caso de los estudiantes de bachillerato durante 1974, para lograr un importante "nivel de solidaridad" al "luchar contra una situación injusta", aunque no se consiguieron "alcanzar los objetivos inmediatos propuestos"[117].

En definitiva, a través de la actividad cotidiana de organizaciones y movimientos se levantaron una serie de estrategias y de interpretaciones de los hechos que legitimaron, dieron sentido y cohesión identitaria a la movilización en favor de unas demandas que fueron consideradas como "justas". De este modo, el proceso analizado en las páginas anteriores fue fraguando un marco unitario ampliamente compartido por los diferentes actores para los que el cambio democrático fue emergiendo como tarea ineludible en la transformación de la realidad social y en la solución de los problemas que aquejaban a diversos sectores.

NOTAS

1. AHGC. Memorias del Gobierno Civil (1973).
2. *LV*, 23-4-1974.
3. AHPOS. Delegación Comarcal de Casas Ibáñez. Delegación Comarcal. Caja 3689.
4. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2145.
5. *LV*, 11-7-1974.
6. SEFT. Entrevista con Juan Fernández Selva (25-1-2005).
7. *LV*, 1-8-1974.
8. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia nacional. Caja 2189.
9. AHPOS. Delegación Comarcal de Casas Ibáñez. Hermandad de Labradores y Ganaderos. Caja 3705.
10. *LV*, 1-5-1975.
11. *LV*, 24-9-1975.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

12. AHPOS. Sindicato del Metal. Memorias. Caja 3166.
13. AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1974). Caja 2133.
14. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145.
15. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145.
16. SEFT. Entrevista con Adela Luján (15-12-2005), trabajadora en el Calzado, enlace sindical y militante de la JOC.
17. SEFT. Entrevista a Esperanza Molina (29-12-2005), trabajadora de la Confección y militante de la JOC.
18. AHPOS. Delegación Comarcal de Almansa. Delegación Comarcal. Caja 3874.
19. SEFT. Entrevista con Adela Luján (15-2-2005).
20. SEFT. Entrevista con Esperanza Molina (29-12-2005).
21. *Bases del movimiento JOC*, p. 12. Fondo privado de Josefina Ruescas (FPJR, en adelante).
22. SEFT. Entrevista con Encarni Calero (13-6-2005).
23. SEFT. Entrevista con Emilia Fuster (2-6-2005), trabajadora de la Confección, enlace sindical, militante del PCE.
24. AHPOS. Delegación Comarcal de Almansa. Sindicato Provincial de la Piel. Caja 3969.
25. AHPOS. Delegación Comarcal de Almansa. Delegación Comarcal. Caja 3874.
26. SEFT. Entrevista con Esperanza Molina (29-12-2005).
27. *LV*, 4-8-1974.
28. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares Internas. Caja 2144.
29. *LV*, 4-9-1974.
30. AHPOS. Sindicato de la Construcción. Correspondencia. Caja 2764.
31. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145.
32. AHGC. Memorias del Gobierno Civil (1975).
33. AHPOS. Delegación Comarcal de Almansa. Delegación Comarcal. Caja 3874.
34. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145.
35. *LV*, 8-6-1975.
36. AHPOS. Delegación Comarcal de Casas Ibáñez. Delegación Comarcal. Caja 3689.
37. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3.
38. *LV*, 30-1-1975.
39. *LV*, 7-11-1976.
40. SEFT. Entrevista con Nicasio Cañaveras (18-1-2006), empleado del psiquiátrico y militante del PCE.
41. *LV*, 28-6-1975.
42. *GDS*, nº 48-49, 1975.
43. AHPOS. Delegación Comarcal de Almansa. Delegación Comarcal. Caja 3874.
44. AHPOS. Delegación Comarcal de Almansa. Delegación Comarcal. Caja 3874.
45. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2146.
46. AHPOS. Sindicato de la Construcción. Actas de Conciliación. Caja 2753.
47. *LV*, 2-10-1974.
48. AHPOS. Sindicato del Metal. Memorias. Caja 3166.
49. AHJOC. Zona Levante-Sureste. Diócesis de Albacete. Caja 96.
50. AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1975). Caja 2133.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

51. AHGC. Memorias del Gobierno Civil (1974).
52. AHGC. Memorias del Gobierno Civil (1975).
53. AGA. Sección Interior. Caja 2.597.
54. *LV*. 16-2-1974
55. *LV*. 7-5-1975.
56. AHPGC. Circulares. Orden Público. Caja 2831.
57. *La Voz de Albacete*. 3-8-1974.
58. *LV*. 29-1-1976.
59. SEFT. Entrevista con José María López Ariza (3-3-2005).
60. *LV*. 10-7-1974.
61. AGA. Cultura. MIT. Sector religioso. Panorama del año 1972. enero de 1973. caja 556.
62. *LV*. 9-7-1974.
63. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia. Caja 2141.
64. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia nacional. Caja 2189.
65. AHGC. Memoria del Gobierno Civil (1976).
66. *LV*. 17-11-1974.
67. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares Internas. Caja 2144.
68. *LV*. 24-11-1976 y 17-2-1977.
69. *LV*. 27-11-1975.
70. *LV*. 3-7-1975.
71. *LV*. 28-9-1975.
72. *LV*. 4-1-1975.
73. AHM. Libro de Actas del Pleno (1-2-1976).
74. *LV*. 10-7-1974.
75. SEFT. Entrevista con Julián Gómez (1-6-2007)
76. SEFT. Entrevista con Manoli García (15-12-2005). trabajadora de la Confección. enlace sindical y militante de la JOC.
77. SEFT. Entrevista con José María Roncero (23-6-2005). dirigente provincial y nacional de la JOC.
78. SEFT. Entrevista con Victoria Delicado (14 y 29-5-2007). estudiante. militante de la extrema izquierda y del movimiento feminista.
79. SEFT. Entrevista con Fernando García Sánchez (10-10-2005). trabajador de la Hostelería. enlace sindical. militante del PTE y de Comisiones Obreras.
80. SEFT. Entrevista con Juan Antonio Mata (15-6-2005). militante del PCE y de Comisiones Obreras.
81. SEFT. Entrevista con T. A. (18-5-2005). estudiante y militante del PCE.
82. AHP. Delegación de la Juventud. Asambleas y Consejos de Jóvenes. Caja 28682.
83. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3.
84. AHGC. Memorias del Gobierno Civil (1972).
85. AHPG. Orden Público. Caja 2831.
86. *LV*. 11-10-1975.
87. AHGC. Memorias del Gobierno Civil (1975).
88. SEFT. Entrevista con Luis Collado (15-4-2005). abogado laboralista. dirigente del PCE y de Comisiones Obreras.
89. SEFT. Entrevista a Victoria Delicado (14 y 29-5-2007).
90. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3.
91. *La Voz de Albacete*. 30-5-1976.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

92. SEFT. Entrevista con José María López Ariza (5-3-2005).
93. SEFT. Entrevista con Antonio Navarro, militante de la Joven Guardia Roja y de Comisiones Obreras (26-11-2005).
94. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete, caja 67, carpeta 5/3.
95. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete, caja 67, carpeta 5/3.
96. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete, caja 67, carpeta 5/3.
97. SEFT. Entrevista con Antonio Navarro (26-9-2005).
98. SEFT. Entrevista con Luis Collado (15-4-2005).
99. SEFT. Entrevista con Juan Antonio Mata (19-5-2006).
100. SEFT. Entrevista con Manuel Escobar (30-6-2005), trabajador del Metal, enlace sindical, militante de Comisiones Obreras y del PCE.
101. Entrevista con Venancio Cuenca (23-5-2005), militante del PCE y de Comisiones Obreras.
102. *LV*, 30-6-1976.
103. No sea, como arguye Fontana, que las ideas y las representaciones se aparezcan "cuando las aislamos, como fantasmas sin relación alguna con el mundo real". Introducción de Josep Fontana en Thompson, 1989, ix.
104. *Cursillo de economía de la JOC*. JOC Albacete, 15 de febrero de ¿1975? FPJR.
105. AHJOC. Zona de Levante-Sureste. Reunión de zona. Caja 95, carpeta 1.11.
106. *La iniciación en las JOC*, pp. 8-9. FPJR.
107. AHPOS. Delegación Comarcal de Casas Ibáñez. Delegación Comarcal. Caja 3689. La cursiva es del autor.
108. FPM. AHT. *BID*, nº 4, agosto, 1974.
109. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Caja 67. Carpeta 5/3.
110. *LV*, 2-1-1976.
111. SEFT. Entrevista con Antonio Pérez (12-12-2005).
112. SEFT. Entrevista con Juan Fernández (5-4-2006).
113. *Participando*, JOC Sureste, 1976. FPJR.
114. FPM. AHT. *BID*, nº 4, agosto, 1974.
115. LV, 28-9-1975.
116. AHPOS. Delegación Comarcal de Casas Ibáñez. Hermandad de Labradores y Ganaderos. Caja 3705.
117. AHPCE. Publicaciones Periódicas. Carpeta 45/6. *BDI*, nº 5, septiembre 1974.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CAPÍTULO 3

ACCIÓN, REPRESIÓN Y CAMBIO POLÍTICO (1976-1977)

1. DESPUÉS DE FRANCO, DEMANDAS DE AMNISTÍA Y DEMOCRACIA

Como dicen algunos autores "todo el mundo sabe que Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975, pero lo que no todo el mundo recuerda es que la dictadura perduró largos meses con posterioridad a esa fecha" (Sartorius y Sabio, 2007, 31). En efecto, tras la desaparición del dictador, la legalidad, las instituciones y los aparatos coercitivos de su régimen siguieron funcionando con normalidad. Su muerte no significó, como habitualmente se ha argüido, el inicio de la transición. En los meses siguientes a noviembre de 1975, y hasta el verano de 1976, desde el Gobierno únicamente se produjeron intentos por consolidar una "monarquía franquista", por implantar una especie de pseudodemocracia respetuosa con los principios de la dictadura. Es más, si se hubiesen cumplido las previsiones sucesorias concienzudamente elaboradas por la legislación, tras la muerte del dictador se hubiese establecido una prolongación del "franquismo sin Franco" (Aróstegui, 2003, 245; Quirosa, 2007, 18). Por lo tanto, sería más correcto señalar que a la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

muerte de Franco le siguieron varios meses de continuismo oficial, enconada movilización y cruenta violencia política. Factores que tuvieron más que ver con la lucha por la recuperación de las libertades democráticas contra una dictadura que mantenía sus aparatos represivos prácticamente intactos que con un predeterminado proceso de transición.

Como ya se ha visto en el capítulo anterior, desde finales de 1973 la provincia experimentó un crecimiento, aunque modesto, en los niveles de conflictividad al calor de la creciente crisis política de la dictadura y del desmoronamiento de la economía. Sin embargo, la dinámica social y política del país, y por ende de la provincia de Albacete, se tornó, aún sin representar un conflicto de dimensiones arrolladoras, más convulsa durante el año 1976. A nivel general, éste fue bienvenido con 18.000 huelgas durante el primer trimestre del año (Ruiz, 2002, 22). Si entre 1971 y 1975 el número de conflictos se quintuplicó, en 1976 la cantidad de huelguistas fue cuatro veces superior a la registrada el año anterior. Mientras, las horas perdidas se multiplicaron por siete en relación con 1975 (Pérez Ledesma, 2006, 129-131). Algunos observadores del periodo han intentado despolitizar el carácter de la movilización obrera y oscurecer los vínculos entre protesta y cambio político. Para ello, han presentado la renovación de dos tercios de los convenios vigentes durante la primera mitad de 1976 como la causa suficiente para desencadenar tan mayúsculo recrudecimiento de la conflictividad social (Martín Villa, 1985, 16). Sin embargo, el grado de efervescencia social vivido durante este año fue abrumadoramente superior al registrado en anteriores ocasiones, como por ejemplo en 1974, con una carga parecida de negociación colectiva (Doménech, 2002b, 211-213).

No se puede negar que la inestable situación económica y la renovación de un gran número de convenios influyeron en el amplio ascenso de la conflictividad desde los meses finales de 1975.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Como decía la Memoria del Gobierno Civil de Albacete de 1976, en "el campo político caben resaltar las consecuencias indirectas derivadas de lo social y económico". No obstante, difícilmente se puede explicar tan tamaña explosión huelguística sin tener en cuenta el efecto que sobre la estructura de oportunidades y expectativas políticas tuvo la muerte del creador y puntal irremplazable del régimen en un contexto de crisis social, política y económica. De este modo, en un contexto de creciente incertidumbre e imparable debilitamiento de las instituciones de la dictadura, la desaparición de su titular desbordó las expectativas de cambio político de miles de trabajadores que comprendieron que "ha llegado el momento de pedir mucho más que otro simple puñado de pesetas destinadas a perderse de nuevo en el pozo sin fondo de la inflación"[1]. Como decían los comunistas de Villamalea, "la muerte de Franco y otros acontecimientos más son los que nos llevan a vivir en nuestro país momentos de vital importancia, los cuales hemos de saber aprovechar para establecer en España las libertades políticas y democráticas"[2].

Tras el desplazamiento de la gigantesca losa de granito que se cerró sobre el féretro del dictador, emergió un nuevo escenario en el que se expandieron las posibilidades de la movilización política y social. Ello fue debido a las "oportunidades políticas abiertas tras la muerte de Franco" que "influyeron decisivamente en el aumento de la conflictividad". Sin duda, el vacío de poder que la muerte del "Caudillo de España", "Jefe de todos los Ejércitos" y "Cabeza del Movimiento Nacional" llevó consigo, abrió "nuevas posibilidades a la acción colectiva" (Pérez Ledesma, 2006, 147). Para cuando Franco agonizó, su dictadura también se encontraba herida de muerte. Conjunción de factores que atizaron una desconocida y nada despreciable ola de protestas que "debido a las condiciones sociopolíticas del país no había podido manifestarse en los meses anteriores" y que en el "nuevo marco de 1976 salen a la superficie con una fuerza incontenible"[3]. Se puede decir, entonces, que el

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

calendario de la conflictividad, aun teniendo en cuenta la profunda crisis social y económica en la que estaba envuelto el país, desde finales de 1975 estuvo principalmente determinado por factores de tipo político.

Los acontecimientos de los últimos meses de este año entrelazaron, con una inusitada fuerza, las reivindicaciones laborales y específicas del centro de trabajo con la agitación a nivel general contra la política económica del Gobierno, la falta de representatividad de la Organización Sindical, las demandas de democracia política y sindical, las peticiones de amnistía, etcétera. Hecho que contribuyó a enraizar fuertemente la conflictividad a nivel local o sectorial con la lucha nacional por el poder político. Así se dejó entrever en la Memoria de la Delegación Provincial de Trabajo de 1975. Según dicha documentación aumentaron "las tensiones conflictivas" en la provincia de Albacete, especialmente a "finales de año" como "reflejo de la situación nacional". En la misma línea, la jerarquía verticalista reconoció no poder sustraerse a "la serie de reivindicaciones sociolaborales que se han desatado en todo el país y que naturalmente, en nuestra provincia también se escucha el eco"[4].

Las autoridades franquistas locales, incluso desde el clima sociopolítico algo más sosegado de una provincia como Albacete, fueron conscientes de la complicada y efervescente situación social vivida en estos meses. Ante la cada vez más habitual alteración del orden público, el presidente de la Diputación señaló que "en el momento actual ser gobernador es una de las cosas más difíciles que se puede ser en España". De hecho, si algún aspecto fue reseñable en la Memoria del Gobierno Civil de Albacete de 1976, éste fue, sin duda, "la intensa y extensa actividad desplegada por los denominados grupos de oposición"[5]. Por su parte, los comunistas también resaltaron "la mayor actividad que se ha ido realizando en todos los órdenes" en la provincia. En febrero de 1976, el gobernador manifestó, con cierta angustia, estar siendo testigo de "una

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

problemática creciente" que auguraba un "conflictivo futuro" ante la "cada vez mayor madurez social y política" de los habitantes de la provincia, la "creciente interrelación" de la capital "con otras ciudades", la "aparición de una juventud preocupada y estudiosa" y la "existencia de unos medios de comunicación más críticos"[6]. Más apesadumbrado fue el tono empleado por el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en una alocución pública realizada en la recta final de 1975. Éste se mostró angustiado por el clima de "irritación y de amargas consecuencias" causado por "el comunismo ateo y materialista, totalitario y avasallador", que "ha ido tomando posiciones, y hoy lo tenemos en las puertas de nuestras casas, en el umbral de nuestras fábricas, en nuestros institutos, en nuestras facultades y, por qué no decirlo, a veces en nuestros templos y conventos"[7]. Buen ejemplo del nerviosismo, perplejidad e incertidumbre entre las elites albacetenses fue la alarmista inversión de los términos de la hegemonía social recogida en los informes oficiales. En momentos de parálisis de la dictadura y de reducción de sus apoyos sociopolíticos, los gobernantes albacetenses reseñaron consternados que la "inactividad o atonía ha sido el denominador común en cuanto a la actuación de los llamados grupos de derechas". Mientras, por el contrario, dicha indolencia "ha contrastado con la gran actividad llevada a cabo por miembros o simpatizantes del Partido Comunista, Joven Guardia Roja, Partido del Trabajo y Comisiones Obreras"[8].

En los meses que siguieron a la muerte de Franco arreció con fuerza una demanda con un profundo anclaje político como fue la petición de amnistía. La eclosión de ésta se produjo gracias a la apertura en la estructura de las oportunidades políticas que llevó consigo la desaparición de Franco. No extraña que redoblasen este tipo de reivindicaciones una vez desaparecido aquel que "siempre se negó a aceptar cualquier medida que supusiera la rehabilitación de los vencidos y el reconocimiento de sus razones" (Aguilar,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1997). Bajo este contexto, la reclamación de amnistía se convirtió en verdadero factor aglutinante de un antifranquismo que, sin llegar a ser mayoritario, cada vez fue más pujante y numeroso desde noviembre de 1975. Un creciente número de personas, antes poco o nada movilizadas, comenzaron a reunirse y a reclamar amnistía. No en base a sus identidades de trabajadores, vecinos o consumidores, sino en función de su identidad como ciudadanos sujetos a unos derechos y obligaciones políticas, así como defensores de una determinada concepción, organización y fines del Estado. En esta línea, para aquellos que salieron a la calle después de la muerte de Franco, la petición de amnistía no fue exactamente, como han sugerido algunos expertos, una demanda de reconciliación nacional motivada por el recuerdo traumático de la contienda civil. Más bien se trató de una reivindicación puramente política contra el sistema nervioso de la dictadura, al dirigirse contra la propia legitimación de origen de la misma.

La aceptación popular de la petición de amnistía respondió al realismo de la propia reivindicación. Ésta entrelazó la demanda de liberación de aquellos encarcelados por el franquismo con las libertades políticas necesarias para ejercer los derechos prohibidos y castigados hasta entonces. En diciembre de 1975, la delegación de mujeres albacetenses presentes en las Primeras Jornadas de la Liberación de la Mujer enviaron, junto al resto de asistentes, un telegrama al rey. En el mismo exigieron amnistía política y libertades democráticas (Nash, 2004, 210). En la provincia de Albacete durante el primer mes de 1976 algunos estudiantes demandaron una "absolutamente necesaria" amnistía como "paso previo a la reconciliación nacional y al olvido de los fantasmas de la guerra". Días antes se había iniciado en las calles de la capital provincial, por parte de Justicia y Paz, una recolecta de firmas en favor de dicha demanda. A finales de enero, el ayuntamiento de Hellín aprobó en pleno la petición de "amnistía para presos y exiliados políticos

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

y sancionados por motivos sindicales y laborales"[9]. También en enero, una de las demandas de la asamblea de las Comisiones Campesinas de la Mancha fue la amnistía.

En estos meses iniciales de 1976, con un importante nivel de conflictividad social, crisis política y acción represiva, cada vez más albacetenses comprendieron que la concesión de la amnistía —como decía el periódico *La Verdad*— no constituía "un favor" sino el "reconocimiento de un elemental derecho humano". Una reivindicación sin cuya retribución la limitada reforma de Arias Navarro y Fraga estaba casi obligada a encallar. En el discurso público que siguió a la muerte de Franco el otorgamiento de la amnistía se convirtió "en el gesto de buena voluntad ineludible para obtener un mínimo de crédito", ya que su obtención era el "primer paso para una futura democracia"[10]. Los empleados de banco exigieron la "aplicación de una total amnistía laboral que restablezca las situaciones debidas a represalias, sanciones y despidos sin limitación en el tiempo y en el grado". Al mismo tiempo que una minoría de los miembros del Colegio de Abogados se adhirieron a las peticiones de amnistía, el grupo de teatro de Villamalea envió una carta al rey en febrero de 1976, pidiendo la "amnistía para todos los presos y exiliados políticos". También los trabajadores de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social demandaron la amnistía para los despedidos de la Seguridad Social y los sancionados por motivos laborales. Los líderes de la oposición que pasaron por Albacete, como fue el caso de Marcelino Camacho, no perdieron la ocasión para llamar a las autoridades franquistas a conceder la "amnistía para todos los políticos y exiliados". A finales de febrero de 1976 en la iglesia de Fátima de Albacete se leyó un documento a favor de la liberación de los presos por motivos tanto políticos como laborales. En marzo, los alumnos de la Escuela de Magisterio incorporaron entre sus peticiones la "amnistía educativa dentro de un marco de amnistía general, así como la derogación de los tribunales disciplinarios".

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Incluso aquellos verticalistas más inquietos por aparentar una ficticia convergencia con las demandas democráticas llegaron —como el caso de la UTT del Vidrio y de la Cerámica— a pedir la amnistía política. En definitiva, durante esos días se pidió "la amnistía por distintos estamentos, áreas y personas". "Es la ciudad quien la pide" reseñaba con alborozo la prensa provincial más abierta[11]. No extraña, por tanto, que el gobernador civil de Albacete señalase que "el tema de la amnistía [...] ha sido el punto más avivado y utilizado como bandera para la celebración de manifestaciones más o menos públicas, o de actos encubiertos, amparados en la condición de culturales, de conferencias científicas, etcétera"[12]. Además, las demandas pro amnistía se entremezclaron con las protestas contra la dura represión desatada desde el Ministerio de Gobernación con Manuel Fraga al frente. A finales de febrero una manifestación recorrió las calles de Almansa. Después se detuvo ante el ayuntamiento y la Casa Sindical para entregar un pliego con doscientas firmas en protesta por la muerte de un compañero en Elda. Los manifestantes también pidieron que la Policía no actuase en actos pacíficos organizados por los trabajadores[13].

La fuerza que alcanzó el movimiento por la amnistía provocó que incluso desde los sectores menos avanzados del franquismo se reconociese su necesidad, aunque con los usuales límites y recelos. Por ejemplo, en Albacete, ANEPA, Fuerza Nueva y la Asociación de Amas de Casa se mostraron favorables a una amnistía que excluyera los delitos de sangre y los actos terroristas. Sin embargo, también hubo sectores franquistas que mostraron abiertamente su repudio a cualquier medida de amnistía. Por ejemplo, en enero de 1976 uno de los concejales del ayuntamiento de Hellín amenazó con presentar la dimisión "otro día que venga aquí y que se traten cosas que no sean de nuestra incumbencia" cuando el pleno aprobó un ruego en favor de la amnistía. En marzo, en una iglesia de la capital provincial, un feligrés increpó al sacerdote cuando éste se refirió

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

a la amnistía. En cualquier caso, ambos hechos fueron claro reflejo del enconamiento y politización del conflicto social que vivió el país, y la provincia de Albacete —aunque en dosis más moderadas— después de la muerte de Franco.

2. CONFLICTIVIDAD LABORAL Y POLITIZACIÓN DE LA ESCENA SOCIAL

Durante 1976, la conflictividad social se instaló en el centro de la vida sociopolítica del país y también se dejó sentir en la provincia de Albacete. Según las propias autoridades albacetenses, el ambiente social en la provincia era de "angustia e intranquilidad". En los informes oficiales se hizo referencia a la existencia de un inquietante "clima de tensión". Para la OS, bajo este entorno tan poco plácido, "algunos grupos situados en la oposición sindical tratan de aprovechar la situación para alentar a nuestra clase trabajadora en demanda de pretensiones que ni siquiera ellos conocían"[14]. Por ejemplo, algunos sindicatos provinciales, como el del Metal, "se encuentra hoy fuertemente presionado por una juventud influenciada por CC OO que trata de revolucionar el sector". En algunas empresas almanseñas del mismo se produjeron durante los primeros meses de 1976 "desastrosas relaciones humanas y convivencias sociales". También en Estándar Eléctrica tuvieron lugar varias huelgas a principios de año que se saldaron con el despido de una veintena de trabajadores por motivos disciplinarios y políticos.

La conflictividad laboral experimentada en la provincia de Albacete durante 1976 poco tuvo que ver con una irresistible revuelta obrera. Sin embargo, el más o menos señalado ascenso de la agitación social inquietó enormemente a las autoridades provinciales. Buena muestra de ello fue el cese en marzo de 1976 del delegado provincial sindical. Éste fue destituido por su comportamiento en exceso

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

arbitrario en momentos de creciente inestabilidad social y crisis política. La actitud intransigente de dicho cargo estaba provocando la aparición y politización de nuevos conflictos bajo un clima cada vez más encrespado. Para la sustitución al frente de la Delegación Provincial de la OS las jerarquías pensaron en la figura de un conocido burócrata sindical a nivel provincial. Se trataba de un falangista social evolucionado hacia posiciones socialdemócratas, cuya experiencia, retórica y capacidad de diálogo parecían ser cualidades preciadas para lidiar con una clase obrera molesta con la crisis económica y sacudida por la situación política. Sin embargo, finalmente el cargo de nuevo delegado sindical de Albacete, nombrado el 27 de marzo de 1976, recayó en la persona de Bande Díaz, a quien Mombiedro de la Torre le espetó públicamente durante el acto de toma de posesión que "entre tus obligaciones está la de devolver a los descarriados a la buena senda"[15].

También los empresarios reconocieron vivir "momentos difíciles y conflictivos". Incluso desde la presidencia del Consejo Provincial de Empresarios se accedió en enero de 1976 a "dialogar y a llegar donde tengamos que llegar para conseguir un entendimiento con los trabajadores dentro de las circunstancias actuales y de las que se presenten"[16]. En respuesta a la situación socioeconómica y política existente durante los primeros meses de 1976 apareció el Club de Empresarios de Albacete. Congregó inicialmente a quince empresas, entre ellas Manufacturas Sánchez Flor, La Manchega, Fontecha y Cano, Metalmobel, etcétera. El objetivo de dicho club no fue otro que "cerrar filas" ante la creciente conflictividad social, la reorganización —aunque pausada— de las organizaciones sindicales de clase y el imparable empeoramiento de la economía (Selva, 2003).

Bajo este clima crecieron las demandas obreras a favor de una mayor representatividad y derechos sindicales. En enero de 1976 mil trabajadores almanseños pidieron que no se firmase el convenio de la Piel si no se admitían sus reclamaciones en torno a la creación

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de un sindicato "totalmente obrero" y representativo de los intereses de la clase trabajadora. Semanas después, en mayo de 1976, en un manifiesto firmado por HOAC, JOC, Grupos de Cultura Popular, grupos sindicales y la Comunidad de Obreros Cristianos de Almansa, se reclamaron sindicatos de clase, libertad de reunión, expresión y asociación, derecho de huelga, reforma fiscal, etcétera. Cada vez con mayor insistencia se comenzaron a oír voces, aunque aún minoritarias, de sectores laborales que públicamente defendieron que "la auténtica organización debe de partir de los propios trabajadores". En enero de 1976, las Comisiones Campesinas de La Mancha, reunidas en Toledo, condenaron la "ineficacia de los cauces y organismos legales actualmente establecidos"[17]. En marzo, de nuevo volvieron a reunirse y a pedir un sindicato campesino "independiente y democrático", que funcionase como "verdadero instrumento de defensa de nuestros intereses"[18].

Como es apreciable, conforme la conflictividad social se hizo más intensa, a las reivindicaciones específicas del centro de trabajo o sector se le fueron progresivamente añadiendo demandas más propias de la política general. Las peticiones concretas, sectoriales o locales, de los trabajadores nunca fueron reemplazadas. Pero junto a éstas cada vez fue más habitual la aparición de demandas sobre el derecho de huelga, la amnistía, la libre sindicación, etcétera. Este extremo fue especialmente palpable durante la negociación de los convenios. La depresión económica, la inestabilidad política y el decepcionante resultado de la negociación colectiva hicieron que cada vez en más convenios la cuestión de la representatividad se convirtiese en un punto de reclamación netamente política. Por ejemplo, en enero de 1976 un grupo de trabajadores de la Piel de Almansa denunciaron que las negociaciones del convenio se estaban llevando a cabo "sin haber contado con los trabajadores". Ante esta situación defendieron que "entre todos los trabajadores democráticamente debemos decidir si se firma el convenio o no". En la misma línea,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

demandaron que se "posibiliten todos los cauces legales por los cuales todos los trabajadores podamos expresar nuestra opinión y necesidades". Según la propia OS, la "tensión" vivida en el Sindicato del Metal era "grande, pues es justo reconocer que el convenio se ha quedado pequeño, y que los trabajadores jóvenes están hábilmente manipulados por CC OO."[19]. En la capital provincial, media centena de trabajadores de este sector denunciaron de forma independiente el convenio y presentaron una nueva plataforma reivindicativa a negociar "con unos auténticos representantes de los trabajadores". Asimismo, la UTT del Sindicato de la Banca se negó a responder a la encuesta sobre la revisión del Convenio de Banca Privada de 1976. El motivo alegado fue la falta de confianza sobre aquellos que confeccionaron el cuestionario, su nula representatividad y la no inclusión en el mismo de una referencia a la amnistía demandada por los trabajadores. En el mes de mayo, empleados del sector declararon en la prensa provincial que la "irrepresentatividad de la actual OS es algo que no necesita de ningún tipo de argumentación". A su juicio, en la negociación de los convenios ésta no servía como "instrumento de auténtica defensa de sus intereses"[20].

En medio de paros, asambleas y otras acciones, los empleados de Banca intentaron evadir las estructuras oficiales en lo que consideraron "como paso previo a este proceso que no supone sino el restablecimiento de los derechos y libertades sindicales". Llamaron a los empresarios a negociar directamente con los verdaderos representantes de los trabajadores. Para ello eligieron democráticamente y en asamblea a una comisión de veintisiete negociadores "salida de la base" y "al margen del Sindicato Vertical". El objetivo de la misma fue "hacer posible esta negociación fuera del cauce del Sindicato Vertical" y "no admitir que se firme un pacto al margen de nuestros intereses y participación". En señal de protesta contra las obstaculizaciones y los manejos del Sindicato Vertical dimitieron veinticuatro enlaces sindicales. Posteriormente lo hizo también el presidente de la UTT del

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Sindicato Local de la Banca de Hellín, junto a todos los enlaces en solidaridad con sus compañeros de la capital provincial.

En estos meses proliferaron asambleas y reuniones entre los trabajadores del Metal, de la Construcción, de la Piel, de la Confección, de la Banca, de la Madera, de la Sanidad, de la Enseñanza, etcétera. También desde principios de 1976 Comisiones Obreras organizó encuentros clandestinos en el bar El Ruedo de Albacete con grupos de trabajadores de diferentes sectores. En algunos pueblos también tuvieron lugar asambleas bajo el paraguas de Cáritas y de la Asamblea Diocesana del Movimiento Rural, para debatir sobre los problemas del campo. Las parroquias fueron el espacio de encuentro y asamblea de los vecinos de los barrios de Pedro Lamata, San Pedro, el Mortero y Hermanos Falcó. Merece la pena reseñar la masiva asamblea del 25 de julio de 1976, en la que unos setecientos trabajadores convocados por Comisiones Obreras se reunieron en el paraje de La Marmota. Entre otros muchos ejemplos, en agosto la Guardia Civil disolvió una asamblea llevada a cabo en un almacén de Villamalea. A la misma asistieron unas cien personas para "discutir un programa y algunos puntos sobre el campo"[21]. Días después, durante las fiestas de Villamalea, otra asamblea fue interrumpida por las fuerzas del orden. No fue prohibida, por el contrario, la manifestación convocada por las Comisiones Campesinas en Villamalea. A la misma asistieron unas 4.000 personas en un pueblo que contaba con 3.400 habitantes. En las pancartas se podía leer "Comisiones campesinas. Contra los monopolios y la oligarquía", "Por un sindicato unitario, libre e independiente", "El campo necesita democracia y libertad". Hubo gritos de "Los campesinos unidos jamás seremos vencidos" o "Sí, sí, sí, en Comisiones está el porvenir" (Sanz Díaz, 2003, 264-270).

En el tenso ambiente social de 1976, la prohibición o represión de las asambleas no siempre desactivó su celebración. La represión en ocasiones provocó respuestas adaptativas y espontáneas que

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

generalmente conllevaron un mayor potencial de disrupción. Por ejemplo, en los primeros meses de 1976 se produjeron varios paros, huelgas y reducciones del rendimiento en empresas de la Confección durante la negociación del convenio. En marzo, medio millar de operarias del sector se congregaron ante las puertas de Sindicatos para realizar una asamblea ante la "necesidad que tenemos las trabajadoras de reunirnos para informar sobre las deliberaciones del convenio". Pero el delegado provincial de la OS la prohibió, porque "no lo veía oportuno" y porque "no era momento necesario, llegando a decir [...] que no consentiría que llegaran a concentrarse y que antes solicitaría la presencia de la fuerza pública, en número de 200 si era necesario". Minutos después, con la Policía rodeando el recinto, las trabajadoras fueron "invitadas a circular por la fuerza pública". En respuesta, un numeroso grupo de las mismas se dirigió en manifestación espontánea a la catedral, de donde también fueron desalojadas, para acabar realizando una asamblea no permitida en la iglesia de Santa Teresa. Para la OS provincial era "inconcebible que dichas trabajadoras decidan reunirse en un templo para discutir acuerdos de ámbito sindical [...] pues parece significar que no pueden ejercitar dichos actos en el seno de la Organización Sindical". A renglón seguido, el católico diario *La Verdad* respondió que los obreros eligieron un "lugar eclesiástico para sentirse protegidos" porque "para sus reivindicaciones debiera estar y servir la sede de la Organización Sindical. Lo malo es que ésta, en ocasiones, no sirve"[22]. Como se puede apreciar, en el convulso contexto político de inicios de 1976, la prohibición de una asamblea en el marco de la negociación colectiva generó problemas de orden público, una concentración, una manifestación, un encierro y, finalmente, la celebración de dicha asamblea en un recinto eclesiástico.

Uno de los principales conflictos que se produjeron en la provincia en los meses que siguieron a la muerte de Franco fue el encierro en el obispado de una decena de auxiliares sanitarios del hospital psiquiátrico de Albacete. En íntima relación con las ya citadas huelgas

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de los MIR, la situación en este centro, dependiente de la Diputación Provincial, se había encrespado en el verano de 1975. Ya para entonces los informes oficiales resaltaron las "fricciones, tensiones, unilateralidad y enfrentamientos que nada favorecen el ambiente laboral ni clínico que debe reinar en el hospital"[23]. Bajo estas circunstancias, la situación acabó por estallar cuando el presidente de la Diputación despidió a finales de 1975 a treinta y siete auxiliares sanitarios, entre los que se encontraban los líderes sindicales y los militantes más inquietos del hospital.

Los empleados respondieron mediante el encierro de diez de ellos, que eran los enlaces del centro, un cura obrero y dos MIR. El lugar elegido para llevar a cabo dicho encierro fueron las instalaciones del Obispado de Albacete a partir del último día del año 1975. Con esta medida los trabajadores intentaron presionar a favor, entre otras demandas, de la readmisión de los despedidos, un contrato laboral fijo negociado a "través de nuestros representantes con la entidad administradora", la subida salarial que evitase la situación de pluriempleo, el reconocimiento por parte de la Diputación de los representantes elegidos por los empleados en los comicios sindicales y una "mayor participación democrática" del personal en la gestión hospitalaria.

La protesta concluyó tras diez días de encierro, gracias a la intercesión de personalidades del *establishment* local muy cercanas a posiciones aperturistas. Finalmente, los trabajadores salieron victoriosos de un conflicto que granjeó una fuerte deslegitimación al mundo vertical. Éste fue acusado por los propios encerrados de no haber "efectuado hasta ahora ningún intento de resolver nuestra angustiosa situación". Desde otras tribunas también fue denunciada la actitud del sindicalismo oficial puesto que su "silencio mientras duró el encierro fue absoluto" y sus "intentos de defender a la clase trabajadora durante el mismo fueron nulos, por inexistentes". Incluso desde sectores progresistas de la propia oficialidad

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

se argumentó que el sindicalismo franquista debía dejar de escudarse en "leyes injustas, que ya no tienen razón de ser en un Estado que mira hacia el futuro y confía plenamente en que la justicia social sea uno de sus pilares"[24].

Durante el transcurso del encierro los trabajadores rechazaron el asesoramiento de los servicios jurídicos de la OS. Acudieron, para su representación, a dos abogados laboralistas del PCE[25]. Dicha actitud de los trabajadores acabó por enervar el ánimo de los jerarcas verticales de la provincia, quienes ejercieron una tenaz presión mediante "gestiones con el Excmo. y Rvdmo. Sr. obispo de la Diócesis para que señale el plazo de salida del encierro"[26]. Susodichas gestiones no dieron gran resultado pues el encierro se extendió durante más de una semana, engendrando una creciente politización y desprestigio tanto de la Diputación como de la OS provincial. Hecho que volvió a tensar las ya maltrechas relaciones entre los prebostes del Sindicato Vertical en la provincia y algunos sectores de la diócesis albacetense. Más aún cuando el vicario de Pastoral Social emitió el 2 de enero una nota de apoyo a los encerrados. En dicho comunicado se alegaba que la Iglesia "no rechaza en principio a nadie ni puede desentenderse de los problemas [...] sobre todo de los débiles", por lo que "desea que toda persona tenga un trabajo digno y estable, que le permita vivir y sostener una familia"[27].

El apoyo a los trabajadores encerrados no llegó únicamente desde los sectores progresistas de la Iglesia. El mismo día del inicio del encierro una manifestación con medio centenar de personas recorrió las calles de Albacete en señal de solidaridad con los enclaustrados. Hizo bajar al alcalde de su despacho para tranquilizar a la multitud, y acabó frente a la Diputación Provincial. A pesar de la actitud represiva de las fuerzas de seguridad, que lograron abortar varios intentos de manifestación, unos setenta jóvenes volvieron a salir a las calles de la ciudad el día 5 de enero para expresar su respaldo a los empleados del hospital psiquiátrico. Éstos también

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

recibieron la solidaridad, en cartas colectivas, notas de adhesión, peticiones, escritos en prensa, etcétera, de empleados de Banca, de cientos de trabajadores de Almansa, de la capital provincial y de Casas Ibáñez, de la Cooperativa de Consumo Robert Owen de Villamalea, de los operarios del psiquiátrico de Conxo en Santiago de Compostela, etcétera. Tampoco faltaron los apoyos desde ciertos sectores de la oficialidad como en el pueblo de Liétor. Allí un grupo de vecinos, con el alcalde al frente, dirigieron una carta al procurador de su partido judicial para interceder por los intereses de los trabajadores. Asimismo, el propio presidente del Sindicato de Actividades Sanitarias se preocupó en todo momento por el estado de salud de los encerrados y criticó duramente la actitud de la OS provincial. Una vez concluido el encierro, para uno de sus protagonistas la consecuencia más positiva del mismo había sido la solidaridad de cientos de trabajadores, que incluso llegaron a ofrecer dinero para compensar los salarios perdidos[28].

La solidaridad manifestada en el caso de los empleados del psiquiátrico demuestra que cada vez fue mayor el número de trabajadores albacetenses que reconocieron como propios los problemas vividos por los miembros de diferentes colectivos pertenecientes a la misma clase social. La propia exhibición pública de una identidad obrera a través de la solidaridad impregnó de connotaciones políticas la acción de los trabajadores en tanto que la actuación de los aparatos coactivos del régimen contribuyó a conferir una significación política a la posición de clase (Doménech, 2002c, 139). Así, la solidaridad se convirtió en un vaso comunicante entre los conflictos acaecidos en diferentes sectores laborales o zonas del país. Extremo que evidenció la creciente maduración de una identidad obrera en la que la lucha por los derechos sociales y políticos fue un ingrediente esencial. No en vano, la Memoria del Gobierno Civil de 1976 señaló que muchos de los conflictos habidos en la provincia durante el año "se reprodujeron en solidaridad con el resto de las provincias que ya habían

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

entrado en el problema"[29]. Así lo hicieron, por ejemplo, cientos de trabajadoras de la Confección, de la Piel en Almansa, estudiantes de Magisterio, auxiliares penitenciarios, agricultores de Villamalea, empleados de Banca, etcétera. Todos ellos protestaron en señal de solidaridad con las reivindicaciones de sus compañeros, en ocasiones víctimas de la represión policial.

El ascenso de la convulsión sociolaboral y la desmembración de algunos de los aparatos de la dictadura provocó la adopción por parte de los mismos de contradictorias y vacilantes estrategias de contención. Hecho que multiplicó la sensación de crisis, desorientación y perplejidad dentro del franquismo. Por ejemplo, el sindicalismo oficial puso en práctica diversas medidas oscilantes entre la facilitación y la represión con el fin de recuperar un crédito ya casi insalvable a la altura de 1976. En febrero de este año, según *La Verdad* "tarde y a destiempo, para recuperar un prestigio perdido en cada acción", la UTT del Sindicato Provincial del Vidrio y de la Cerámica defendió la huelga como legítimo instrumento de defensa de los intereses de los trabajadores, el sufragio universal, la libertad de expresión y la amnistía política. Asimismo, en este mes de febrero de 1976 tuvo lugar la convocatoria de una importante huelga de los transportistas de mercancías por carreteras. Ésta tuvo un considerable seguimiento. Miles de camiones pararon en esos días en los arcenes de las carreteras de todo el país, produciéndose numerosos incidentes, detenciones, denuncias de tráfico, etcétera. La OS albacetense, ante el más que posible peligro de politización, y con el objetivo de "quitar banderas a la oposición", hizo suyas las reivindicaciones de los transportistas. Desde el Sindicato de Transportes —controlado por un empresario del sector e inmovilista concejal del ayuntamiento de Albacete— se llamó a un "paro autorizado de todos nuestros vehículos"[30]. De esta forma, desde las jerarquías verticales se trató de capitalizar el éxito de la protesta, al tiempo que presentar a la misma como una adhesión de los trabajadores a los postulados de la propia OS. Incluso los datos de participación

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

facilitados por los medios oficiales fueron muy superiores a los publicados por la prensa. Los primeros hablaron de 2.000 camiones parados y los segundos de apenas tres centenares. Durante el desarrollo de la huelga la OS rogó a los trabajadores que "colaboréis con los agentes de la autoridad para que el orden público no se vea alterado en ningún momento". Sin embargo, finalmente la protesta se politizó y se produjeron incidentes en algunas localidades, como en La Roda y Albacete. El resultado fue de varias detenciones y sanciones. Hecho que profundizó el descrédito de la OS provincial, y que obligó —en evitación de un mayor desprestigio— al propio presidente del Sindicato de Transportes a pagar las fianzas y gestionar la puesta en libertad de los detenidos.

Por otra parte, la ola de conflictividad de 1976 fue habitualmente acompañada del desarrollo y de la aparición pública de las diversas organizaciones sindicales y políticas (Molinero e Ysás, 1998, 256). En la provincia de la misma, hasta entonces, como reconocían dirigentes socialistas de paso por la misma, además de los grupúsculos de extrema izquierda, "la única fuerza de consideración en la provincia es el PC que cuenta con 200 o 300 miembros y bien organizados"[31]. Pero durante todo el año 1976 la capital provincial presenció un ir y venir de dirigentes clandestinos y semitolerados interesados en abrir contactos y consolidar las bases de sus respectivas organizaciones. Durante aquellos meses visitaron la provincia desde conocidos militantes comunistas como Ramón Tamames, Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius o Francisco García Salve, a líderes de la *derecha civilizada* como Joaquín Garrigues y Gil Robles, pasando por los democristianos de izquierdas y socialistas como Ruiz Giménez, Alfonso Guerra, Pablo Castellanos, Enrique Múgica o José Prat. En el campo sindical, ya desde principios de año se habían producido diversos contactos y reuniones entre militantes de la UGT y grupos cristianos presentes en la Piel y en la Banca de Almansa y Albacete. Unos días antes, el 7 de junio de 1976, se reunieron en el restaurante

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Sotuélamos unos cuantos ugetistas albacetenses con Isaías Herrero, dirigente nacional del sindicato socialista, acompañado éste por un entonces joven "militante de base de la UGT" llamado Manuel Marín González. El fin de tal encuentro fue la fundación de la Federación Provincial ante la necesidad de que la "UGT comience de una manera organizada a trabajar en defensa de la clase trabajadora en nuestra provincia"[32].

Según un informe interno, el impulso de la UGT en la provincia provino de "la entrada de un grupo de diez a doce trabajadores de procedencia cristiana que estaban ya hace tiempo llevando una práctica sindical". Dichos colectivos tenían "especial incidencia en banca". A finales de julio de 1976 el número de altas en la Federación fue de veintitrés, incluyendo "antiguos militantes grandes batalladores en su época, que han pedido su reingreso". A finales de septiembre ya sobrepasaban las cincuenta. Además, el sindicato se iba lentamente expandiendo desde Albacete y Almansa a otras localidades como Tarazona y Casas Ibáñez. Finalmente, también señalar que entre sectores cristianos de la Banca se constituyó desde principios de 1976 la USO. Posteriormente, la CNT hizo acto de aparición oficial en septiembre de 1976. Como se puede observar, desde la muerte de Franco, la provincia vivió un ascenso en la conflictividad social que contribuyó a erosionar el desprestigio del sindicalismo oficial y abrió el camino —en un contexto de crisis política e incertidumbre— a la aparición de un importante ramillete de organizaciones políticas y sindicales de carácter democrático.

3. LA AMENAZA DE LOS RECIÉN LLEGADOS

Desde finales de 1975 se desencadenó un intenso ciclo movilizador. Éste afectó a buena parte de la geografía nacional, lo que "en muchos lugares significó la aparición del conflicto laboral abierto por

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

primera vez" (Doménech, 2002b, 327). En un ambiente calificado por la Policía franquista de "difícil, denso y tenso" se incorporaron a la protesta sectores hasta entonces nunca vistos. La politización y convulsión de la escena social que sucedió a la muerte de Franco aumentó las aspiraciones y las posibilidades de respuesta colectiva de aquellos grupos que antes habían permanecido pasivos ante los agravios sufridos. En efecto, la desaparición del dictador representó el gozne hacia una de esas coyunturas en las que aquellos "menos valientes, pero más numerosos, vieron que el sistema era vulnerable a la protesta" (Tarrow, 1986, 339). La crisis social y la apertura en la estructura de oportunidades provocó que los colectivos más pasivos comenzasen a percibir la posibilidad de obtener mejoras en sus condiciones de vida en un contexto de alta movilización e imparable erosión del poder político. En enero de 1976 los trabajadores del Sindicato Provincial del Espectáculo expresaron el "malestar que ha creado el convenio anterior, dados los términos en que estaba confeccionado"[33]. Los funcionarios de prisiones se encerraron en solidaridad con las reivindicaciones de sus compañeros en otras provincias. En abril, los fotógrafos amenazaron con la huelga. Por otro lado, los taxistas se negaron a hacer servicios a la Residencia del SOE en señal de protesta por una serie de medidas que afectaban de lleno a "la clase obrera". En la misma línea, doscientas enfermeras se manifestaron y se declararon en huelga en demanda del reconocimiento universitario. Los repartidores de pan también pararon durante quince días. En febrero de 1976 un "paro singular" tuvo lugar en la "Audiencia y en los Juzgados, al adoptar los funcionarios de la Administración de Justicia, secretarios, oficiales, auxiliares y agentes, una postura de protesta en la que sin abandonar el cumplimiento de sus servicios los realizaban de la manera más estricta, manifestando así su disconformidad con las recientes disposiciones sobre emolumentos y gratificaciones"[34].

Las reivindicaciones de estos grupos sociales fueron preferentemente laborales. Pero la misma presencia del conflicto en

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

sectores poco relacionados con la acción colectiva fue muestra, por la oportunidad de su movilización en una coyuntura de convulsión y crisis, de la implícita significación política que comportó la aparición de cualquier nuevo actor en conflicto. Además, la emergencia de demandas entre nuevos colectivos como fotógrafos, taxistas, enfermeras o, como ahora veremos, enseñantes, significó una importante diversificación social y económica del origen de las protestas. En este sentido, la creciente variedad de grupos socioeconómicos que se manifestaron o hicieron huelga multiplicó las dificultades del régimen político para atender a la pluralidad de demandas de diversos tipos. Generalmente, estos colectivos tuvieron diferentes razones para desafiar al Gobierno. Pero el efecto general de su malestar combinado contribuyó al creciente desgaste y perplejidad de la dictadura. Por otro lado, cuando andando el año 1976 el ciclo de protestas alcanzó su momento más álgido, la innovación táctica y el repertorio de acción se hizo más variado. Éste introdujo nuevas formas de protesta como el recital, la cena política o la sentada. Por ejemplo, el personal de la Residencia de la Seguridad Social boicoteó la cafetería del centro ante los precios abusivos. Asimismo, los ATS organizaron una sentada por turnos para reivindicar el rango universitario para sus estudios[35].

Los enseñantes de la provincia bajo la dictadura fueron un sector pasivo en el que reinó la distinción "pequeñoburguesa" respecto al resto de la masa asalariada. Pero esta situación cambió durante 1976. En éste y en los siguientes años la enseñanza se erigió como uno de los sectores más inquietos y desazonados de la provincia. Poco después de la muerte de Franco, uno de sus representantes en Albacete dejó claro que éste ya no era "el sector sumiso y adocenado que se creyó haber formado". La problemática de los *maestros nacionales* fue muy similar a la de otros sectores medios y profesionales. Como en la Sanidad, el desarrollo económico y el

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cambio social de los años sesenta provocaron una creciente demanda educativa y la consecuente incorporación a la enseñanza de importantes contingentes de jóvenes docentes, recientemente licenciados, nacidos después de la guerra y socializados en ambientes estudiantiles.

Al igual que los médicos residentes, veterinarios, empleados de Banca o funcionarios de la Administración, los enseñantes se vieron sujetos a un proceso de proletarización y precarización laboral que se tradujo en bajos salarios y pluriempleo (Morente, 1998, 70-71). Ante esta situación, ya en abril de 1975, un grupo de maestros de EGB dirigieron una carta al ministro de Educación, Martínez Esteruelas, con motivo de su visita a Albacete. En la misma pidieron la "creación de un órgano profesional totalmente representativo, independiente de la Administración y con audiencia a todos los niveles". Petición que fue unida a la defensa de una escolarización pública y gratuita[36]. En el mes de mayo, el falangista que controlaba el SEM provincial expuso su "temor de una situación conflictiva" en el sector. Ésta se canalizó poco después principalmente a través de las asociaciones de Antiguos Alumnos de Magisterio (AAA). Durante los años finales del franquismo dichas figuras asociativas se convirtieron en refugio legal para aquellos que trasladaron la politización estudiantil adquirida en las aulas a la agitación en el ámbito profesional una vez acabados los estudios e ingresados en el mundo laboral (Pérez y Doz, 1976, 54-55).

Desde principios de 1976 la AAA de la provincia de Albacete promovió una serie de asambleas y reuniones en diversos centros. El objeto de dichos encuentros fue el de discutir y analizar la situación laboral y las inquietudes del profesorado de enseñanza primaria. En el mes de enero la AAA organizó un ciclo de conferencias sobre el estado de la educación en España. Las conclusiones alcanzadas se convirtieron en una plataforma reivindicativa en favor de la educación pública, gratuita y gestionada democráticamente, la inclusión en

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

las asignaturas de las diferentes realidades nacionales, la creación de un sindicato libre, único, horizontal y de clase, etcétera. Según los participantes en dichas conferencias, la libre sindicación era la única fórmula "capaz de garantizar y dar cauce real y efectivo a las reivindicaciones que el sector tiene planteadas". De igual manera, consideraron necesario crear los "cauces organizativos que posibiliten a los profesionales de la enseñanza estatal participar en la gestión, organización y planificación de la misma"[37]. En febrero, la AAA celebró un debate público en la Escuela de Magisterio, cuya principal conclusión fue el rechazo al SEM como organización representativa de los intereses de los trabajadores de la enseñanza. Para sesenta y cinco profesores de EGB de Hellín, los "asociados al SEM ni suponen mayoría actualmente en el país, ni ostentan representatividad democrática de los docentes españoles ante la Administración". También en el colegio público de Pozo Cañada, diez de sus dieciocho profesores, renunciaron en carta colectiva de la representación del SEM[38].

Durante los primeros meses de 1976 el mundo de la enseñanza en la provincia pareció convulsionarse poco a poco. En marzo, casi medio millar de alumnos de la Escuela Normal de Magisterio de Albacete fueron a la huelga en demanda de la amnistía educativa y de la reapertura de las universidades cerradas. En el mes de mayo los Profesores No Numerarios (PNN) de la Escuela Normal de Magisterio de Albacete fueron a la huelga. Por las mismas fechas los profesores de enseñanza privada amenazaron con la misma en una dura negociación colectiva. Por otro lado, entre los profesionales de la enseñanza Primaria pública se comenzó a fraguar un movimiento democrático a través de un proceso asambleario de espaldas al SEM. La dinámica asamblearia se tradujo en una coordinación provincial que se integró en la Coordinadora Nacional de Profesores de EGB. Así se consiguió movilizar en una alternativa democrática a la mitad de los enseñantes de la provincia, y al 90 por

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ciento de los docentes de la capital provincial y de las principales localidades como Almansa, Hellín o Villarrobledo.

La convulsión vivida en el sector y el rechazo del SEM por parte de la mayoría de los profesores supuso la decadencia y derribo definitivo del mismo durante la primera parte de 1976. Ante esta situación el Ministerio de Educación intentó integrar las tendencias democráticas aparecidas en la enseñanza a través de asociaciones profesionales. Pero los docentes impusieron una serie de condiciones democráticas para participar en cualquier proyecto canalizado por el Ministerio de Educación. Entre éstas se encontró la creación de "una organización unitaria, independiente, representativa y democrática del profesorado estatal de EGB", como paso previo a la "creación de un sindicato único, horizontal y representativo del profesorado". También pidieron la promulgación de las "garantías jurídico-legales que posibiliten en todo momento la realización de asambleas del profesorado". Además de una educación pública y gratuita con la consiguiente "supresión del actual régimen de subvenciones a los centros privados" y la "gestión democrática de los centros docentes". Pasado el verano de 1976, cada provincia votó a sus representantes para participar en las negociaciones con el Ministerio. En Albacete, a pesar de las trabas y manipulaciones propias de los jerarcas del Movimiento en el sector, los profesores eligieron a un representante vinculado a las iniciativas de tipo democrático. Éste obtuvo el doble del número de votos que el candidato oficialista.

La falta de acuerdo entre los representantes democráticos de los profesores y el Ministerio de Educación llevó a la convocatoria de huelga durante diez días en el mes de noviembre de 1976. En la provincia de Albacete pararon, según fuentes oficiales, un 34 por ciento de los enseñantes. Mientras, las cifras de los convocantes ascendieron a casi el millar de huelguistas, que representaban el 52 por ciento de los profesores de la provincia. Aunque la huelga contó con el apoyo de diferentes sectores dentro de la Enseñanza y de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

algunas asociaciones de padres de alumnos, sus resultados fueron más bien modestos. Sin embargo, el movimiento democrático de profesores consiguió con sus demandas de una enseñanza democrática, pública y gratuita, generar una creciente politización en torno a la cuestión educativa. Así se infiere de la reacción y movilización de los propietarios de colegios privados en favor del "derecho a la presencia de la iniciativa privada en el campo de la enseñanza", y del propio obispo contra el "monopolio totalitario" de la "socialización" de la enseñanza.

El crecimiento de la conflictividad social y la contribución a la misma de colectivos antes pasivos —como los enseñantes, panaderos, enfermeras, etcétera— y la integración de todo ello en un contexto general de crisis política, económica y social, no pudo pasar desapercibido para las autoridades de la provincia de Albacete. Perplejas y vacilantes, éstas reconocieron encontrarse ante un "instante de desafío histórico" y en una "época crucial para nuestra Patria". Más aún, cuando se trataba de una provincia como Albacete, en la que poco antes esas mismas autoridades habían visto un "oasis en una España que va siendo turbulenta en las grandes ciudades y por los pueblos norteños". Sobre esta cuestión hay que tener en cuenta, como dice Eisinger, que el factor "implícitamente amenazante de la protesta" sobre las percepciones de las autoridades son "las visiones que indican adónde puede conducir dicho comportamiento" (Tarrow, 1991, 6). Y el comportamiento de crecientes colectivos albacetenses después de la muerte de Franco indicó una cada vez más habitual imitación de lo reflejado en el *espejo político* de los centros industriales y urbanos más convulsos del país. De hecho, no hay que olvidar que el crecimiento de la conflictividad en provincias como Albacete tuvo lugar de forma paralela a una "ocupación como la de Petrogrado en 1917" en Sabadell y a "una situación muy seria de desobediencia civil generalizada y de fervor casi prerrevolucionario" en Vitoria (Fraga, 1984, 38; Martín

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Villa, 1985, 26). Paralelismo que pareció avisar a las autoridades franquistas de lo que "podía suceder en un futuro no muy lejano en el resto de España, en el caso de que no hubiesen cambios políticos sustanciales" (Doménech, 2002b, 327).

Luego, la realidad social se encargó de demostrar que las posibilidades reales de una ruptura eran más bien escasas. Pero el hecho de que en provincias como Albacete se movilizasen después de la muerte de Franco desde trabajadores de la Confección hasta funcionarios de prisiones, pasando por maestros de Primaria, dio pábulo a la metáfora de la *mancha de aceite* tantas veces preconizada por la oposición. Según ésta, la extensión del reguero del conflicto desde los centros urbanos y los obreros fabriles a las zonas rurales y a los sectores medios y profesionales, establecería las condiciones necesarias para la irrupción de la gran huelga general nacional que derrocaría definitivamente a la dictadura. Bajo el turbulento contexto posterior a la muerte de Franco la alarmante presencia de dicha imagen estremeció los corazones de los sectores tanto aperturistas como inmovilistas del franquismo. En mayo de 1976, Luis Apostúa, subdirector del diario *Ya*, avisó apesadumbrado en una conferencia ofrecida en Albacete que "la ruptura se nos viene encima"[39]. Asimismo, circunspectos y desazonados, los sectores más recalcitrantes del franquismo provincial creyeron en enero de 1976 dirigirse "al caos [...] si las cosas no se arreglan"[40]. En la misma línea, a finales de 1975 el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete manifestó su preocupación por el "clima de confusión, de desorientación e intranquilidad, cuando no de irritación y de amargas consecuencias" provocado por el ascenso de la conflictividad social y de la agitación política. Asimismo, por estas fechas, *La Voz de Albacete* hablaba de "momentos de angustia" ante la falta de orden existente y los ataques al régimen. Por tanto, se puede concluir, que el estudio de la conflictividad habida en lugares como Albacete no puede quedar reducido al mero análisis

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cuantitativo. Parece aconsejable enfocar la mirada en su capacidad potencial de amenaza y sugestión, dentro de un escenario general de convulsión social e inestabilidad política, sobre las previsiones de las autoridades ante el futuro político inmediato.

4. ASOCIACIONES Y ESPACIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA

Durante el denominado como segundo franquismo las estructuras económicas y sociales engendraron en la provincia de Albacete constricciones para el alumbramiento de procesos de movilización. No obstante, siempre hay lugar para las opciones colectivas y las interacciones estratégicas dentro de los espacios delineados estructuralmente (Tilly, 1978, 6). En este sentido, las profundas transformaciones socioeconómicas habidas durante las décadas de los sesenta y setenta no constituyeron más que "procesos estructurales que generan los límites de los cambios potenciales" y que "no hacen más que señalar los marcos dentro de los cuales es posible moverse" (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, 202). Por tanto, la aparición pública del conflicto no es tanto un proceso predeterminado como una suerte de "orientación construida a través de las relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y amenazas" (Melucci, 1988, 332-333). Bajo esta argumentación, se hace necesario levantar un puente, sin caer en posicionamientos ni deterministas ni voluntaristas, entre las estructuras y el individuo, que permita una mejor explicación de los procesos de gestación de la acción colectiva.

Un propósito de estas características debe de centrarse, como postula McAdam, en el nivel intermedio entre los determinantes macroestructurales y las motivaciones individuales. Es decir, en ese espacio autónomo de la injerencia estatal en el que se fraguan y desarrollan las redes personales que, en torno a problemas comunes,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

posibilitan el contacto, la discusión, el reconocimiento de la situación vivida y la creación de una identidad colectiva (McAdam, 2003, 286-289). A este respecto, desde inicios de los setenta se fue fraguando en ciertos sectores, aunque minoritarios, de la sociedad albacetense un proceso colectivo profundo y poco visible. Un proceso de importantes consecuencias para la creación de una ciudadanía crítica con el sistema político y progresivamente favorable a la instauración de un régimen de libertades democráticas. Nos referimos al mecanismo de silenciosa germinación —a través de redes informales y experiencias cotidianas— del tejido social, organizativo y simbólico en el que se sustentó el tímido nacimiento de una sociedad civil que había sido reemplazada y desactivada por la esfera "oficial", por la centralización del poder, la conculcación de los derechos políticos y la imposición de una despolitizada cultura del miedo a través de la aplicación de una intensa presión represiva (Alagappa, 2004, 479-480).

Los actores colectivos no son simplemente las víctimas pacientes de la violencia estatal. A menudo los movimientos sociales, como agentes de cambio, disponen de cierta capacidad para resistir, sortear, y adaptarse a la represión ejercida por los aparatos de coerción del Estado (Oliver Olmo, 2007). En efecto, en algunas ocasiones, la escasez de acciones espectaculares de protesta no presupone tanto la pasividad de los actores impuesta por la amenaza represiva como la adopción de otras estrategias de movilización menos visibles y peligrosas, acomodadas éstas al entorno social y político circundante (Sandoval, 1998, 168). A veces, en la parte final del franquismo, la opción estratégica de los más inquietos fue el trabajo soterrado, poco visible, e incardinado en la cotidianeidad de la sociedad civil. No obstante, esta fase latente y "subterránea" de incipiente construcción ciudadana a menudo ha pasado desapercibida para historiadores y demás científicos sociales. Habitualmente se ha tendido a identificar las facetas organizativas

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de la protesta con las estructuras más formales de la movilización. Asimismo, el interés historiográfico se ha centrado en los aspectos visibles y los momentos de auge de los movimientos, sin prestar demasiada atención a la relación existente entre las fases de mayor visibilidad pública de todo movimiento social y aquellas de latencia que se desarrollan en el seno mismo de la sociedad civil (Laraña, 1999, 203).

El silencioso esfuerzo por abrir pequeños espacios de ciudadanía, acumular contactos y trabar redes de apoyo, compañerismo e identidad, se vio facilitado por la promulgación de la Ley de Asociaciones de 1964. A este respecto no han sido muchos los estudios dedicados a analizar el asociacionismo bajo la dictadura. Han sido pocas las monografías sobre dicha cuestión, y de éstas la mayoría se han interesado por recuentos de tipo cuantitativo. Su principal conclusión es que el número de asociaciones en España era realmente bajo en el momento de iniciarse la transición en comparación con otros países también inmersos en procesos de democratización (McDonough, Shin y Moisés, 1998, 652-688). El número de españoles que participaron en asociaciones en el periodo del franquismo fue una minoría, con datos aún más pobres en provincias como Albacete. Sin embargo, tanto en Albacete como en el resto del país, se produjo un significativo crecimiento asociativo tras la publicación de la Ley de Asociaciones de 1964. La promulgación de ésta, con el objetivo de crear ciertos cauces de participación y resolución de conflictos en una sociedad en constante cambio y con nuevos y apremiantes problemas, provocó un considerable aumento en el número de asociaciones en relación con las décadas de los años cuarenta y cincuenta. Aunque no se disponen de todas las cifras desagregadas para la provincia de Albacete y las existentes proceden de diferentes fuentes, según datos de Manuel Ortiz Heras, en la actual región de Castilla-La Mancha únicamente se habían constituido 18 asociaciones hasta el cambio en la legislación en 1964. A partir de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

entonces, se crearon 267 asociaciones hasta los inicios de la transición democrática en 1977. En la provincia de Albacete fueron ochenta las asociaciones creadas entre 1966 y la celebración de las elecciones generales de junio de 1977[41]. Si se tienen en consideración estos datos, al comparar el fenómeno asociativo que surge al calor de la Ley de 1964 con el de la primera parte del régimen, salta a la vista el significativo desarrollo en términos numéricos. Pero tal cambio no sólo fue apreciable en lo que respecta al aspecto cuantitativo, sino también en lo referente al pluralismo. No en vano, desde mediados de los años sesenta aparecieron asociaciones culturales, filatélicas, casinos, teatrales, deportivas, musicales, folklóricas, taurinas, vecinales, cineclubs, de padres de alumnos, de cabezas de familia, etcétera. Hecho que marcó, aun a sabiendas de la debilidad de tal tejido asociativo y del carácter efímero de algunas de las iniciativas, un progresivo cambio en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Ante estas razones no es exagerado argumentar, como hacen algunos autores, que la revitalización del fenómeno asociativo en la parte final del franquismo formó parte de una transformación más general de la sociedad española que contribuyó —junto a otros muchos factores— a ir lentamente allanando el camino para la transición (Radcliff, 2007a, 157-158).

Hay que tener en consideración que de las 483 asociaciones creadas en la actual región de Castilla-La Mancha entre la aprobación de la Ley de Asociaciones de 1964 y la promulgación de la Constitución en 1978, 124 —un 25,7 por 100— se constituyeron antes de 1971. A partir de entonces, entre 1971 y finales de 1976, se detecta cierto crecimiento paralelo a la aparición de crecientes niveles de movilización social y a la crisis política de la dictadura, que concentra en este periodo a un tercio de las asociaciones que vieron la luz entre 1964 y 1977 (Ortiz Heras, 2006). Se trató de una tipología asociativa variopinta que incluyó a una mayoría de asociaciones que en absoluto plantearon conflictos insolubles con el

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

régimen. Éstas generalmente se insertaron con total naturalidad como una oferta más de despolitizados servicios instructivo-recreativos o de otro tipo. Sin embargo, en algunos casos, la aparición de nuevas experiencias asociativas llevó consigo la emergencia de un espacio civil autónomo y separado del Estado en donde pudieron germinar diferentes compromisos sociales o posicionamientos políticos (Uría, 2005). Las asociaciones aparecidas al calor de la Ley de 1964 constituyeron una oportunidad para entrar en la vida pública para ciudadanos cuya única opción hasta entonces había sido la afiliación al Movimiento, a la Sección Femenina o a las asociaciones de la Iglesia (Radcliff, 2007b, 349). De esta forma se abrió una pequeña hendidura para la defensa pública, sin caer en la clandestinidad, de determinados intereses. Se trató de pequeños espacios de sociabilidad en los que afloró una, aunque tímida, esfera pública de debate. Por esta razón, con el fin de aplacar cualquier modesto intento de recomposición de una sociedad civil un ápice más dinámica, en 1969 el gobernador civil prohibió la puesta en funcionamiento del Club Parroquial de Yeste. Un año antes, el ayuntamiento de Tarazona de La Mancha había informado a las jerarquías provinciales de su disgusto porque "se ha prescindido de esta alcaldía en lo que nos concierne sobre la apertura" del Teleclub Parroquial. Más aún cuando las intenciones de dicho club juvenil eran las de convertirse, para recelo de los gobernantes locales, en una "asociación de jóvenes, reunida en un mismo plano de igualdad, quedando por tanto abolidos todos los prejuicios, convencionalismos y acepción de personas y clases"[42].

La mayoría de las asociaciones nacidas al amparo de la legalidad estuvieron rígidamente jerarquizadas y controladas políticamente. No obstante, fue apreciable la aparición de ciertos márgenes de maniobra y de organización colectiva aprovechados por una minoría de ciudadanos para abrir menudos, aunque crecientes, huecos de autonomía en el seno de la sociedad civil. Hecho

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

que a pesar sus limitaciones no careció de importancia. Más aún si se tiene en cuenta la tendencia del régimen franquista a privatizar la vida de los ciudadanos y propiciar sentimientos de apatía, desinterés y desconfianza social (Pérez Díaz, 2003, 427-490). Por ejemplo, la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete fue creada en 1972. Ésta, sin ser una entidad con fines políticos, abrió, a través del compromiso social, nuevos espacios de acción en la solución de problemas cotidianos que en poco satisficieron la pasividad promovida desde la dictadura. La Hermandad de Donantes, además, disfrutó de una sección juvenil que promovió un buen número de actividades lúdicas, festivas, culturales y artísticas que permitieron a numerosos jóvenes encontrar nuevos espacios para una expresión con menos ataduras. Incluso en los locales de la Hermandad se organizaron reuniones o asambleas clandestinas. No en vano, la Hermandad de Donantes levantó —según la prensa— "en ciertos sectores timoratos, reacciones en contra"[43].

Asimismo, bajo la legalidad, y aprovechando los compromisos del régimen con diferentes instituciones internacionales como la UNESCO, aparecieron asociaciones como el Club de Amigos de la UNESCO de Villamalea en 1970. Los objetivos reconocidos en sus estatutos eran "dar a conocer lo más ampliamente posible y contribuir a apoyar la consecución de los ideales y tareas que la UNESCO desarrolla mediante la educación, la ciencia y la cultura, a favor de la paz, la seguridad y el bienestar social". Sin embargo, el gobernador civil de Albacete informó que "los promotores de la asociación que nos ocupa se vienen destacando, por sus intentos de organizar actos a los que pretenden darle un matiz político". Igualmente, según un informe del ayuntamiento de Villamalea, aquéllos tenían una "marcada tendencia comunista". Por lo que, "en beneficio de la paz de este pueblo, esta alcaldía considera que no debe accederse a lo solicitado" y no permitir la legalización de dicho club. Para el sargento de la Guardia Civil la "preparación de la asociación la tienen bien

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

encauzada para que todo se les resuelva y lograrlo con arreglo a sus propósitos y trabajar luego impunes y sin que se les pueda perseguir en sus actividades en caso de hacer alguna cosa ilegal". Aun así, aunque fueron devueltos los estatutos, dicho club funcionó —entre prohibiciones y sanciones— llevando a cabo una importante dinamización sociocultural en la localidad. Como se puede apreciar, aun bajo los cauces oficiales, algunas asociaciones sembraron la alarma entre las autoridades. En 1964, el gobernador civil de Albacete pidió instrucciones sobre el Círculo Cultural Juan Vázquez Mella, si la "referida prohibición subsiste o no, en relación al círculo precitado, y si en su consecuencia por este Gobierno debe impedirse, tolerarse o consentirse".

Aún a tientas, con miedo y no pocas contradicciones, cada vez fueron más los albacetenses expuestos a un proceso de aprendizaje y de contacto con prácticas democráticas a través de su participación en asociaciones, clubes, hermandades, círculos, etcétera. Así se desprende de los preceptos de agrupaciones, como el Club de Amigos de la UNESCO, que reconocían a sus socios el "derecho a votar y a ser votados en las asambleas generales", y a "asistir y participar en la gestión de cuantas actividades se promuevan para organizar actos públicos, festivales, excursiones, etcétera". Igualmente, entre otros ejemplos, los estatutos de la Hermandad Profesional Ferroviaria de Almansa daban el derecho a los miembros de la misma de "elegir y ser elegidos para cualquier cargo de la Junta de Gobierno", así como el de "ser convocados y asistir con voz y voto a las Junta Generales de la Hermandad"[44].

Como dicen algunos autores, los "vínculos establecidos en una determinada fase pueden facilitar nuevos cambios en un contexto diferente" (Diani, 1998, 247). En los meses que siguieron a la muerte de Franco se hicieron más numerosas y visibles las manifestaciones públicas de la sociedad civil que se había venido construyendo en la provincia desde finales de los sesenta. Sobre todo a través de la aparición de asociaciones juveniles, femeninas, vecinales y cívicas. Bajo el

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

turbulento clima social de la parte final del franquismo, hicieron acto de presencia asociaciones de tipo cultural que buscaron "una convivencia más cívica y consciente". No extraña, por tanto, que el nacimiento de algunas de éstas fuese obstaculizado por las autoridades. Éstos fueron los casos del Círculo Onturense y de la Asociación de Amigos de Petrola en enero de 1976. Organizada ésta última por un estudiante de la localidad, que realizaba estudios universitarios en Valencia, con el fin de "establecer en este pequeño pueblo un vínculo entre todos los jóvenes [...] a través de la cultura"[45]. En 1976 apareció la Asociación de Licenciados en Paro de las Ramas de Ciencias y Letras que, además de organizar actividades culturales, se movilizó en la búsqueda y demanda de medidas para frenar el imparable crecimiento del desempleo[46]. Antes, en el mes de abril de 1975, se había constituido, también con el recelo de algunos sectores de la oficialidad, la ya mencionada Asociación de Antiguos Alumnos de Magisterio. Dicha asociación estuvo compuesta principalmente por enseñantes —algunos de ellos del PCE, socialistas y de otros grupos de izquierdas— conectados con sectores estudiantiles y movimientos profesionales de oposición a la dictadura. Fue el motor de la movilización de los profesores de enseñanza primaria durante el año 1976. Tuvo —según sus estatutos— objetivos básicamente culturales que buscaban crear un magisterio más activo y crítico. Principios por lo que ineludiblemente entró en confrontación con las autoridades provinciales. La Asociación de Antiguos Alumnos de Magisterio se interesó por los temas relacionados con la educación y la cultura, y organizó varios seminarios, conferencias, actividades culturales, etcétera. Entre las mismas destacaron los cursos sobre la situación de la enseñanza, el futuro sindical de los profesionales de la educación o el miniciclo de cine basado en la obra de algunos jóvenes cineastas representantes del llamado "nuevo cine español". Así se proyectaron películas con un alto contenido político como *El Verdugo* de Berlanga, *El ángel exterminador* de Buñuel o *Nueve cartas para Berta* de Basilio Martín Patino.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A la altura de 1976 existían ochenta teleclubs en la provincia de Albacete con más de 5.000 socios. La mayoría de estos teleclubs y Casas de la Cultura mantuvieron una oferta cultural que no fue más allá de la pacata programación ofrecida por la Delegación Provincial de Información y Turismo. No fueron extraños ejemplos como los de Alborea, cuyo teleclub recibió en 1976 un premio por parte de la Dirección General de Cultura Popular por su importante actividad "folklórico recreativa". Pero también comenzaron a aparecer casos como el del teleclub de Casas Ibáñez. En esta localidad, los socios decidieron mayoritariamente, a pesar de la oposición y presiones por parte de la Delegación de Información y Turismo, renovar la Junta Directiva para que el teleclub se "abra a todos los criterios", con el fin de que los jóvenes puedan "asomarse a todas las direcciones de pensamiento" y ejerzan "sana crítica para su perfeccionamiento humano y cultural"[47].

En marzo de 1976 un grupo de jóvenes aficionados al cine, ex alumnos de la Escuela de Magisterio, también vinculados a la Asociación de Antiguos Alumnos y al movimiento de protesta de los enseñantes de Primaria, crearon el Cineclub Buñuel de Albacete. Meses después, en febrero de 1977, también apareció con inquietudes artísticas y culturales el Cineclub Independiente de Almansa. La intención del primero de éstos era la de cubrir un hueco cultural y ofrecer un tipo de cine diferente al que se encontraba en los circuitos comerciales. Su objetivo inicial fue el de "traer una serie de películas que no han venido nunca a Albacete". Para sus organizadores, entre los que se encontraban miembros del PCE y de grupos católicos, "lo importante es el cine como elemento de estudio, de reflexión y de trabajo"[48]. Así, el Cineclub Buñuel se convirtió en lugar de encuentro de jóvenes comunistas, católicos y de otras tendencias que organizaron cinefórums y proyectaron películas de un alto valor artístico y contenido político. El cineclub llegó a tener trescientos socios en la primera parte de 1976. Entre sus actividades más reseñables destacó

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

el ciclo de cine social, con la proyección de *Rebelión* o *La sangre del cóndor*; el cinefórum con la presencia de Juan Antonio Bardem y la proyección de *El atentado*; el ciclo de cine catalán —en el que entre otras, se proyectó *Fata Morgana* de Vicente Aranda—, el ciclo de cine francés, etcétera.

Hasta los últimos años del franquismo los centros juveniles habían estado casi exclusivamente dirigidos a los hijos de las clases acomodadas del centro de la capital provincial. En "Albacete había clubes juveniles, pero únicamente en las residencias de dinero". Los pocos existentes estaban, además, controlados por los púberes gerifaltes de la Delegación Provincial de la Juventud. Por esta razón, en 1970 la JOC denunció, en referencia al aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes, que "los medios (dinero, locales) están destinados a una sola organización, quien no está vinculado a ella no se beneficia de ellos"[49]. Ante esta situación, bajo el paraguas de las parroquias, curas obreros, sacerdotes rurales y estudiantes inquietos, se fueron creando centros parroquiales y clubes juveniles que contribuyeron a animar la vida comunitaria de los jóvenes de la provincia. Aparecieron, entre otros, el Club Juvenil Montesinos en Ossa de Montiel, el Club Roda Joven, el Club Juvenil de Villarrobledo o el Stop Club de Almansa[50]. Según un manifiesto de la JOC de esta última localidad, estos "clubs juveniles, organizados por los propios jóvenes trabajadores en los barrios y pueblos son por ahora una de las formas de tomar iniciativas en el tiempo libre". Por ejemplo, en San Pedro y El Mortero, los jóvenes de la barriada, con la ayuda de los curas obreros, consiguieron "un club juvenil para el barrio". Éste vino a aliviar la carencia de lugares de ocio para los jóvenes que "no teníamos donde estar". Con no poco esfuerzo, lograron instalar en un salón de Cáritas un local que les permitió "tener cuatro discos, cuatro libros, cuatro cosas, tener un *ping-pong*...". Allí "intentábamos hablar de los derechos de los aprendices, de los problemas del barrio, de la asociación de vecinos

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

[...] tratar de que la gente se comprometiera..."[51]. Antes, en enero de 1975, de los sectores progresistas de la Iglesia albacetense habían aparecido la asociación y el club juvenil Rumbo Joven. Según sus estatutos, los fines de esta asociación eran "promover la sociabilidad y la amistad entre los jóvenes; desarrollar y cultivar la capacidad creativa de todos ellos y proporcionar a los jóvenes la oportunidad necesaria para su formación sociocultural y deportiva". Para conseguir dichos objetivos "esta asociación organizará actividades sociales, artísticas, deportivas, musicales, etcétera". Según un informe de la Delegación de la Juventud de Albacete los "promotores de dicha asociación son un grupo de jóvenes alumnos del Colegio Salesiano de la Inmaculada de esta capital, apoyados por un licenciado en Filosofía y Letras, ligado igualmente al citado colegio y con indudable influencia en la comunidad religiosa que lo rige [...] influido, creemos, por las tendencias progresistas de una gran parte de la Iglesia actual [...] De lo anteriormente expuesto, se desprende que ideológicamente los miembros de esta asociación se encuentran dentro de las tendencias progresistas y socializantes de la Iglesia actual" por lo que "no es posible asegurar categóricamente la línea de actuación que en el futuro mantenga dicha asociación"[52].

A principios de 1976, hizo acto de presencia el Club de la Juventud de Hellín. El objetivo de éste fue promover actividades culturales, recreativas, artísticas y deportivas alternativas a las oficiales, en cuya confección y gestión el protagonismo recayese sobre los jóvenes. En su programación durante 1976 destacaron recitales musicales que contaron con la actuación de cantautores como Ricardo Cantalapiedra, José Meneses o Manuel Gerena, entre otros; representaciones teatrales de grupos de la provincia como Niebla, exposiciones, competiciones deportivas, etcétera[53]. En el verano de 1976 nació la Asociación Democrática de la Juventud, vinculada al PCE. Entre los objetivos de ésta destacaron el desarrollo cultural y social de la juventud, libre de paternalismos, en un

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

contexto político democrático. Pidió el derecho al voto a los dieciocho años, una enseñanza gratuita y pública hasta los dieciséis años, libertades democráticas, etcétera. Meses después, a principios de 1977, se inscribió en el registro de asociaciones CHAMI, un grupo juvenil autogestionario dedicado a la ayuda a jóvenes marginados que contó con la colaboración de médicos, psiquiatras, asistentes sociales o sacerdotes vinculados a los movimientos democráticos. Su organización y filosofía de funcionamiento se inscribieron en la tendencia de los movimientos renovadores de la pedagogía, la enseñanza o la psiquiatría, por lo que en su seno se promovió la participación directa, la democracia interna y la descentralización.

Desde asociaciones y clubes juveniles se organizaron un amplio ramillete de actividades. En la época estival fueron habituales los campamentos y convivencias promovidas por asociaciones juveniles de todo tipo, desde los Exploradores de España hasta el Movimiento Junior, pasando por los campamentos organizados por la Hermandad de Donantes de Sangre, los técnicos y animadores sociales, la Escuela Normal de Magisterio, los colegios religiosos, los centros parroquiales, etcétera. En algunos de ellos, incluso en los de la OJE, aparecieron Juntas juveniles formadas, a pesar de la vigilancia de los jóvenes próceres del Movimiento, por "chicos elegidos entre ellos democráticamente y donde sus acuerdos son tenidos en cuenta por la Junta de Gobierno y cuya eficacia y resultados son sorprendentes, consiguiendo con ello una participación directa"[54]. Para los jóvenes del movimiento de cursillistas, las jornadas de convivencia de 1976 representaron unas actividades propicias para la "liberación juvenil, que contrasta con el contexto social opresor". Además de una salida a la presión sentida por los jóvenes en el "terreno político, social y económico [...] la Iglesia, la familia y la actividad laboral". La aceptación de este tipo de actividades llevó a los jefezuelos de los aparatos juveniles del Movimiento a programar en la Casa de la Juventud de Albacete algún que otro

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

concurso literario, cinefórum o recital de canción protesta que supusieron un quebradero de cabeza para las autoridades.

Para muchos jóvenes de aquella época la asociación o el club juvenil fue "un sitio donde estar". Un lugar de encuentro donde pasar las tardes de los fines de semana haciendo debate, oyendo el tocadiscos, organizando algún guateque. En otras palabras, "un espacio de libertad para estar juntos con amigos, un sitio donde nos sentíamos un poco libres"[55]. Sacerdotes comprometidos con la solución de los problemas sociales "abrían las iglesias" a jóvenes desinteresados por los asuntos públicos y políticos, únicamente atraídos por la oportunidad de pasar el tiempo libre, organizar guateques y conocer chavalas. Sin embargo, algunos de estos jóvenes fueron cambiando, experimentando nuevas sensaciones e ideas, al conocer, en ejercicios espirituales y demás actividades, a curas obreros y militantes del apostolado que "piensan otras cosas que no son las que te han enseñado siempre en las clases de religión" y que "nos abrieron otras perspectivas"[56]. Muchos de los jóvenes que asistieron a las actividades desarrolladas en centros juveniles, salones jocistas, grupos culturales, etcétera, nunca militaron en organizaciones de oposición ni participaron en acciones colectivas contra la dictadura. No obstante, a través de las mismas comenzaron a intimar, familiarizarse, valorar y legitimar prácticas democráticas antagónicas con la voluntad de control político de la población impuesto por la dictadura. Por lo que se puede decir que la "base potencial para el cambio político es mucho mayor de lo que el descontento políticamente articulado sugiere" (Eckstein, 1989, 27).

Del seno de los sectores más progresistas de la Iglesia albacetense también nació Sagato. Un grupo juvenil relacionado con el movimiento cursillista en el entorno del Seminario diocesano de Albacete, que poco después se convirtió en cantera política del PSOE local. Estos jóvenes estudiantes comenzaron a publicar artículos de opinión y de crítica social y política a la luz de un cristianismo de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

izquierdas en *La Voz de Albacete*. La aparición de este grupo en las páginas de dicho periódico coincidió con el giro aperturista de este diario tras la llegada en febrero de 1976 de un nuevo director de posturas democráticas. Un joven periodista que ya había trabajado en *Informaciones* y *Nuevo Diario* y había sido representante social en el Sindicato de Información. La destitución del mismo al frente del diario en el otoño de 1976 provocó también la salida de Sagato. Poco después este grupo juvenil encontró en las páginas de *La Verdad* "caminos más amplios" donde sus artículos no provocaron —como había ocurrido en *La Voz*— un "conflicto eterno a nivel de redacción" ni generaron "iras y disgustos a nivel de lectores"[57].

Otro ejemplo de la lenta reconstrucción de la sociedad civil albacetense al calor del asociacionismo fue la creación, entre 1971 y 1977, de 18 asociaciones de padres de alumnos en localidades como Letur, Villamalea, Alcalá del Júcar, Yeste, Villarrobledo, Nerpio, etcétera[58]. No fueron pocas las que, como la de Padres de Familia del Instituto Laboral de Hellín, defendieron en sus estatutos el "propagar y defender corporativamente los derechos y obligaciones que la Ley Natural, la Iglesia y el Estado asignan a los padres de familia". De hecho, no le faltaba razón al PCE cuando en 1974 se quejaba de la "ausencia de unas Asociaciones de Padres de Familia que presionen, colaboren y ayuden a la resolución de los problemas escolares"[59]. No obstante, en los estertores del franquismo nacieron algunas asociaciones de padres más proclives a un sistema de enseñanza más democrático, de mejor calidad, popular, accesible y gratuito. En estas coordenadas se movió la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Graciano Atienza de Villarrobledo. Ésta fue constituida en febrero de 1976 tras "varios meses de intentos de formalización de los estatutos". Poco después apareció la Asociación de Padres de Alumnos del Instituto Andrés de Vandelvira en Albacete. En abril de 1977 el turno fue para la APA del colegio del barrio de San Pablo, cuyo objetivo fue la creación de un

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

centro escolar en el barrio que "reúna las condiciones pedagógicas, recreativas y de todo tipo"[60].

Antes, en abril de 1975 el gobernador civil había obstaculizado la autorización de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio San Rafael de Hellín porque "no existe congruencia entre su denominación y el contenido de algunos artículos o apartados". También fue bloqueada por idénticos motivos la Asociación de Padres del Colegio de Ossa de Montiel en enero de 1976. Las prevenciones gubernativas a la legalización de estas asociaciones respondieron a la pretensión de las mismas de influir en la vida pública a través de la interacción con las autoridades políticas. También entre los vecinos más inquietos de la barriada de San Pedro cundió en el otoño de 1975 la idea de que "lo que debemos hacer es una Asociación de Padres de Familia para tratar de una manera más oficial los problemas del barrio". Por ejemplo, el objetivo de la APA del Colegio San Rafael era el de "constituir la representación legal de los padres de alumnos [...] para poder ser oídos por cualquier organismo del Estado, Provincia o Municipio, en materias" como la educación de sus hijos, la promoción social y cultural, etcétera. Por su parte, la APA del Colegio de Ossa de Montiel pretendió "establecer un estrecho contacto y una eficaz colaboración con la Dirección y el profesorado del centro". Además de "participar en la representatividad de los organismos locales educativos" e "incidir por cauce legal en la Administración Pública para solucionar los problemas relacionados" con la educación de sus hijos. En ambos casos, con tales estatutos, aunque de forma velada, los padres estaban proponiendo su asociación como único cauce independiente, representativo y capaz de velar por sus propios intereses ante las autoridades. De esta forma, al elevar su propia visión sobre los asuntos públicos fuera de tutelas, estos padres estaban demandando la creación de nodos autónomos de debate y de toma de decisiones para la construcción de una ciudadanía más independiente.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

No hay que olvidar, además, que algunas de estas formas asociativas, como la Asociación de Padres de Alumnos de Villamalea, que inicialmente estuvieron controladas por "gente de pocas inquietudes", fueron progresivamente colonizadas por militantes de la oposición, con el fin de "conquistar la Dirección de la asociación, renovar sus estatutos y emprender una lucha más". Según un informe del PCE de Villamalea, en 1975 un "grupo de camaradas fueron encargados de asociarse a la misma, con la finalidad de conocer el funcionamiento y fines que pretende dicha Asociación; para posteriormente, si es que interesaba, ir a la conquista de la misma mediante la asociación masiva de los demás camaradas y amigos, para de una forma más o menos legal poder plantear a la Administración algún problema relacionado con nuestra localidad"[61].

Durante 1976 la prensa local progresista comenzó a recoger cuestiones relacionadas con la problemática femenina y la sexualidad. Aparecieron encuestas y estudios sobre las relaciones prematrimoniales, la utilización de la píldora, el aborto o el divorcio[62]. Al mismo tiempo también emergieron asociaciones y movimientos con demandas de tipo feminista. La proclamación por parte de Naciones Unidas de 1975 como Año Internacional de la Mujer representó un factor de empuje para el crecimiento del movimiento feminista en España. Al igual que en otros países bajo regímenes autoritarios, tal celebración sirvió de cobertura legal para la realización de actos y actividades por parte de grupos feministas contrarios al régimen franquista. Así, mientras que los jerarcas de la OS provincial llamaron al orden a las jefas verticalistas que se habían extralimitado en su furor reivindicativo durante los actos oficiales de celebración del Año Internacional de la Mujer, una delegación albacetense —como cita Mary Nash— acudió a las Primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer celebradas en diciembre en Madrid. En las mismas, además de pedir la amnistía, se discutió sobre la educación, la familia, el divorcio, el trabajo, la mujer rural, la sexualidad, el aborto, etcétera. En

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

este sentido, dichas jornadas representaron una "explosión de todo lo que no se había podido debatir colectivamente durante tantos años" (Nash, 2004, 212-215).

En tales jornadas, el predominio organizativo recayó sobre el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), que abogó una lucha ciudadana y antifranquista más que específicamente feminista. El MDM nació en la provincia de Albacete a través del impulso de militantes comunistas de Villamalea y de la capital provincial. En la asamblea anual del PCE de Villamalea, celebrada en enero de 1976, un grupo de militantes femeninas defendieron que la "mujer no debería llevar una lucha exclusivamente feminista, sino que debía de ser una lucha llevada hacia la política, pues si no los movimientos por la liberación de la mujer y las luchas de ésta serían vanas". La primera asamblea del Movimiento Democrático de Mujeres de Albacete tuvo que esperar algunos meses. Entonces, en el otoño de 1976, quedó definido por sus propias militantes como un "movimiento sociopolítico que lucha por las reivindicaciones de la mujer independientemente de su clase y condición". En Albacete el MDM quedó estructurado en grupos de amas de casa, obreras, estudiantes, Sanidad y Enseñanza. Entre sus demandas destacó la creación de guarderías, enseñanza gratuita y con participación democrática de los estudiantes, igualdad laboral y salarial, patria potestad conjunta, información sobre el control de natalidad y anticonceptivos. Pretendió ser un movimiento interclasista, de masas, independiente de los partidos políticos, abierto a todas las ideologías y edades, etcétera. En la primavera de 1976 se constituyó la Asociación de Madres Solteras de Albacete, las cuales pidieron la investigación y el reconocimiento de la paternidad. Éstas también denunciaron la discriminación legal y social —en cuanto a empleos, ayudas económicas o becas— a la que se veían sometidas tanto ellas como sus hijos. En diciembre, las componentes femeninas del colectivo Sagato demandaron una mayor visibilidad pública de los problemas de las mujeres pues "seguimos marginadas". Señalaron que la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

"liberación no puede venirnos de afuera. Esta liberación la hemos de conseguir nosotras mismas, a nivel colectivo, a nivel individual, como sea, pero nosotras mismas"[63].

Como era de esperar en esta región, los años 1977 y 1978 fueron los que contaron con un mayor volumen de asociaciones legalizadas, con 102 y 96 respectivamente. Cifras que supusieron el 40,9 por ciento de todo el periodo analizado. En Albacete fueron unas sesenta las asociaciones creadas entre las primeras elecciones generales y la aprobación de la Constitución. Datos que demuestran que en los años anteriores, al socaire del cambio social y en las actitudes, se había ido creando un potencial para la participación ciudadana que eclosionó cuando se abrieron las puertas a una verdadera libertad de asociación carente de las presiones represivas de antaño. De este modo, fue considerable el aumento en la aparición de nuevas asociaciones durante los primeros momentos de la transición. Hecho que no debe de interpretarse únicamente como consecuencia y producto de la apertura política consignada a través del proceso de democratización. Como sugiere Pamela Radcliff, más bien se trató de un gradual y sostenido proceso de reconstitución de la sociedad civil a largo plazo. Aunque éste se intensificó durante la transición, sus orígenes —si bien timoratos y precarios— se remontan a la conjunción entre la Ley de Asociaciones de 1964 y las transformaciones sociales que facilitaron a la gente corriente nuevas formas para solucionar los problemas de la vida cotidiana (Radcliff, 2007a, 157-158).

5. EL MOVIMIENTO VECINAL. UN COMPROMISO CÍVICO Y POLÍTICO

Para Manuel Castells, la movilización vecinal que eclosionó en España después de la muerte de Franco y durante la transición, representó el movimiento ciudadano más importante en Europa

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

desde el final de la Segunda Guerra Mundial (Castells, 1983, 215). La atención de los poderes públicos municipales a las zonas periféricas de la ciudad de Albacete nunca alcanzó "los mínimos equipamientos ni un grado suficiente de urbanización, razones sobre las que aparece, crece y se consolida un movimiento social y reivindicativo que llega a alcanzar una cierta importancia"[64]. La legalización de la primera asociación de vecinos de la provincia de Albacete, la del barrio Hermanos Falcó, se produjo en enero de 1977. Días después, en el mismo mes de enero de 1977, fue legalizada la Asociación de Vecinos del barrio de San Pedro. Durante este año también fueron creadas las asociaciones de vecinos de los barrios de San Roque y San Juan en Almansa, y la del hospital y Pedro Lamata en Albacete. Si bien esta última se encontraba ya en el limbo gubernativo desde marzo de 1976. También sufrió el retraso gubernativo la AV de la zona sur de Hellín, cuya Junta promotora había pedido su legalización a principios de 1977. En los dos años siguientes, 1978 y 1979, con la llegada de la democracia, aparecieron otras doce asociaciones en diferentes partes de la provincia como Agramón, Pozohondo, El Salobral, Casas Ibáñez, Valdeganga, etcétera[65].

El asociacionismo vecinal en la capital y en las principales manifestaciones urbanas de la provincia creció y se consolidó durante la transición, especialmente entre 1977 y 1979. Sin embargo, sus orígenes, los primeros conatos organizativos y la aparición de las demandas iniciales dataron de los años finales de la dictadura. Durante la primera parte de los años setenta algunos grupos vecinales fueron lentamente germinando al calor de centros parroquiales y asociaciones de Cabezas de Familia. El origen de sus reivindicaciones se encontró en problemas básicos nacidos de una política urbana que, reflejo del carácter autoritario del régimen, desatendió a los barrios periféricos. Hecho que se tradujo en una completa ausencia de equipamientos colectivos y de las adecuadas condiciones de habitabilidad en algunas zonas urbanas. Esta

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

carencia de servicios sociales coadyuvó las necesidades de unión y organización de los vecinos para reclamar con mayor eficiencia unas mejores condiciones de vida en los barrios (Borja, 1977, 157). Por ejemplo, el representante de los vecinos de la barriada de Puerta de Murcia manifestó que "ante el olvido, por parte de la autoridad municipal, de llevar a cabo las obras de pavimentación y aceras [...] quiero recordar a todos los vecinos [...] la necesidad de colaborar colectivamente en la creación de una asociación de vecinos, legalmente constituida, donde todos tratemos de solucionar los problemas de pavimentación, saneamiento, escolaridad, etcétera". Estas asociaciones o grupos vecinales plantearon reivindicaciones muy apegadas a la realidad cotidiana vivida en las barriadas (Castells, 1978, 135). Como decía el presidente de la AV de San Pedro "lo que tenemos que hacer es andar con tiento y no pedir la luna, sino cosas posibles"[66]. Esta naturaleza específica de la reivindicación estuvo también relacionada con la mayor tolerancia disfrutada por la petición de mejoras comunitarias concretas, a diferencia de la persecución sufrida cuando era el caso de demandas políticas generales.

La atención a los problemas cotidianos de las barriadas facilitó que un número creciente de vecinos, aunque casi siempre una minoría, sintiese a las asociaciones como algo propio y cercano. Como algo vinculado a la resolución de problemas perentorios del barrio que afectaban directamente a la vida diaria de sus habitantes (Urrutia, 1986, 123-125). Hecho que atrajo a un mayor número de vecinos cuando se consiguieron arrancar de las autoridades mejoras muy necesarias y esperadas, pues, como decía el presidente de San Pedro, "por eso... ahora, tenemos más moral". Este interés en la solución de los problemas más sentidos en los barrios fue poco a poco conformando una determinada conciencia ciudadana. La "movilización para conseguir unas reivindicaciones concretas" fue un "factor importantísimo tanto para conseguir la reivindicación

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

en cuestión, como para dar un salto decisivo en el grado de conciencia de los vecinos" (Rodríguez Villasante, 1976, 55-56). En verdad, "aquello es lo que aglutinaba al movimiento, sobre todo reivindicar mejores condiciones de vida, las demandas tenían un contenido reivindicativo en sí mismas que aglutinaba a gente en mayor medida que el contenido político"[67].

Sin embargo, la falta de atención a los barrios por parte de unos gobernantes locales que no eran representativos y que no disponían de los recursos negados por el Estado central hizo que los vecinos de algunos barrios se sintieran "abandonados de la mano de Dios". Circunstancia que provocó la emergencia de críticas más o menos veladas contra las autoridades políticas. La dejación, ineficacia y autoritarismo con que dichas autoridades trataron a las barriadas dieron la impresión, como denunciaron algunos vecinos, de que los habitantes de las mismas "no tienen derecho a vivir". Por esta razón, algunos residentes de la periferia acusaron al poder municipal de "no querer saber nada" cuando se trataba de aquellas zonas "fuera del casco urbano". En esta línea, en mayo de 1974, los pobladores del barrio de San Pedro se quejaron en carta colectiva de que "cuanto más pobres somos y más necesitados estamos menos nos ayuda la Administración (Delegación de Educación y Ciencia, Ayuntamiento, etcétera)"[68]. Los moradores de Hermanos Falcó también atacaron a un ayuntamiento que no era "igual con todos sus ciudadanos" porque "no hay dinero para emplearlo en los barrios, pero mientras tanto se llevan a cabo otras obras de no tanta necesidad". Las mejoras prometidas e incumplidas en el barrio de San Pedro y en el Mortero ponía a las claras —a juicio de un grupo de vecinos en septiembre de 1975— "el poco compromiso de las autoridades hacia nuestros problemas". En junio de 1975 el cura de San Pablo se quejaba de los problemas de salubridad en el barrio. Los cuales "ya los hemos puesto en conocimiento del ayuntamiento en cartas dirigidas al alcalde de la ciudad, sin que hasta ahora hayamos obtenido respuesta alguna". En el otoño de 1976 los habitantes de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Hermanos Falcó se quejaron porque "aunque seamos pobres tenemos derecho a que se nos atienda [...] siempre nos engañan y sólo se acuerdan de nosotros cuando muere alguien"[69]. Como es apreciable, desde los barrios se ejerció la denuncia pública de la existencia de unos problemas urbanos y la desatención e incapacidad de los poderes locales para su resolución. El próximo paso fue la demanda de derechos de reunión, expresión y manifestación, como herramienta imprescindible en la defensa y resolución de las deficiencias estructurales de las barriadas (Borja, 1975, 110).

En el crecimiento del movimiento vecinal en Albacete estuvieron presentes los militantes de la JOC, de la HOAC y los curas obreros de las nuevas parroquias de los barrios, que ofrecieron al movimiento una importante cobertura y sostén. En barrios como San Pedro o Hermanos Falcó la reivindicación vecinal "surgió y nació" de la iniciativa de unos cuantos vecinos que se "movían en torno al cura obrero". Pero en otros barrios, como Pedro Lamata, llegó "gente con un mayor compromiso de partido" que "estaba metida en grupos como el PCE"[70]. Allí se instalaron varios vecinos del PCE de Villamalea y otros militantes comunistas para impulsar la dinámica asociativa. El movimiento vecinal de esta barriada descansó sobre activistas de la oposición dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad para responsabilizar a las autoridades municipales de los problemas y carencias existentes en los barrios y orientar la protesta contra las instituciones políticas.

El principal caballo de batalla de los vecinos de Pedro Lamata fue la denuncia de corrupción de la Junta Gestora de la Cooperativa de viviendas del barrio. Ésta fue promovida desde el Sindicato de la Construcción por el presidente falangista del mismo y vicepresidente del Consejo Provincial de los Trabajadores. En mayo de 1975 un grupo de socios de la Cooperativa denunció que desde un par de años antes no se había realizado ninguna asamblea. Es más, se desconocían los dos últimos ejercicios económicos, se habían vendido

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

locales comerciales ocultando los beneficios, etcétera. Como medida de fuerza los cooperativistas se negaron a pagar la cuota de la cuarta fase de la promoción de viviendas. También se entrevistaron con varias autoridades provinciales para manifestar sus "muchas y desagradables sospechas en relación con el estado de cuentas que la Junta Rectora mantiene con respecto al coste de las viviendas". Tras diversas reuniones y asambleas, los vecinos denunciaron el hecho de que la "Junta Rectora tiene plenos poderes para hacer y deshacer". Razón por la cual demandaron que "sea la asamblea quien decida". Finalmente, ya en agosto de 1977, los cooperativistas consiguieron la dimisión de la Junta Rectora y la elección democrática de una nueva en asamblea. También lograron que los libros de cuentas fuesen llevados a la Delegación de Trabajo bajo la supervisión de un abogado laboralista[71].

El papel activo de la AV de Pedro Lamata en la crítica a la gestión de la Cooperativa y de otros locales sindicales del barrio provocó la animadversión de las autoridades locales. Éstas acusaron a la misma de ser un "nido de rojos". El propio vicepresidente del Consejo Provincial de los Trabajadores "dijo personalmente que pondría todos los medios para que la asociación no se legalizara". Ante tales amenazas no extraña, por tanto, que aunque la AV de Pedro Lamata depositó sus estatutos en el mes de marzo de 1976, las autoridades obstaculizaron, "para que los trapos sucios no salieran", su legalización hasta el 18 de junio de 1977, ya bajo la nueva Ley de Asociaciones de abril de ese año. La negativa impuesta por la autoridad gubernativa a legalizar esta asociación, junto a las cortapisas oficiales al desarrollo vecinal en otras zonas de la ciudad, fueron, en el ambiente crecientemente politizado que sucedió a la muerte de Franco, trabando las reclamaciones comunitarias con demandas de tipo democrático.

El movimiento vecinal también contó, al igual que el movimiento obrero, con el apoyo, asesoramiento e implicación de jóvenes

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

profesionales. Principalmente se trató de jóvenes socializados en una universidad agitada y a veces comprometidos con la oposición política, que aportaron una indispensable ayuda técnica al movimiento vecinal. Para aquellos que organizaron el movimiento asociativo en Albacete fue fundamental "buscar asesoramiento" y el encontrar "algún abogado, algún médico, incluso alguna enfermera", dispuestos a "echar una mano"[72]. Por ejemplo, ante las reformas del barrio Hermanos Falcó en la primavera de 1977, los vecinos se quejaron porque los arquitectos oficiales "han elegido las obras de muestras que han querido y no nos han dado opción a elegir a nosotros". Por esta razón exigieron "al Ministerio de la Vivienda una copia de los planos íntegros" y en asamblea eligieron a una Comisión que supervisase, con el asesoramiento de urbanistas, dichas obras, consiguiendo así incorporar varias de sus demandas en el proyecto final.

También hay que tener en cuenta la notable difusión de las reivindicaciones surgidas en las barriadas gracias a la labor de jóvenes periodistas interesados y comprometidos con la problemática ciudadana. Un buen ejemplo a este respecto fue el periódico *La Verdad*. En una coyuntura en la que la prensa de provincias encontró una mayor capacidad de expresión y denuncia de los temas de índole exclusivamente local, este rotativo aprovechó la ocasión para percutir constantemente sobre asuntos que influyeron de manera notable en la vida diaria de la ciudadanía. Sacó a la palestra pública cuestiones como las epidemias, los estercoleros incontrolados, los colegios incendiados, las carencias de aulas y escuelas sitas en barracones, la ausencia de transportes públicos en algunos barrios, los problemas de alcantarillado, alumbrado o tráfico, etcétera (Martín García, 2007). Igualmente, desde este periódico se comenzó a prestar atención a algunas demandas que comenzaban a eclosionar en el entorno vecinal en relación con asuntos ambientales, de contaminación y salubridad. El establecimiento de un quemadero junto a una zona residencial sembró el

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

"descontento y la indignación del vecindario" que en octubre de 1974 recogió firmas para presentar un pliego de quejas ante el ayuntamiento. Los vecinos denunciaron que "no hay derecho" pues "no se pueden tolerar cosas así". Pidieron a las autoridades que "tomen cartas en el asunto, pero con la energía y decisión que el caso merece". Algunos periodistas apoyaron sus reivindicaciones pues "nos ha dado pena ver como niños y mayores son víctimas del autoritarismo de una persona irresponsable o de la negligencia municipal"[73]. En esta línea, en este periódico, durante 1976, afloraron críticas referentes a la "inhospitabilidad de nuestras ciudades [...] que se están autodestruyendo". Sobre los ruidos y el estrés que producen "neurosis obsesiva acompañada de astenia, trastornos cardíacos, náuseas y desfallecimiento de la visión"[74]. En sus páginas igualmente hizo acto de presencia la preocupación por el consumo y los derechos de los consumidores, como en los fraudes en algunos productos agrícolas, la falta de control sobre los productos lácteos, la subida de precios de artículos con excedentes, etcétera.

En definitiva, se puede decir que en "aquella época las asociaciones de vecinos y los barrios tenían mucha relación con la prensa [...] además en *La Verdad* había un director que estaba muy unido al movimiento vecinal"[75]. La prensa, como dice Castells, fue uno de los nexos "del movimiento con el conjunto de la sociedad", al tiempo que facilitó la legitimación de la reivindicación vecinal ante el resto de la ciudadanía. Así también lo entendieron los jóvenes de Huerta de Marzo que en septiembre de 1976 recurrieron a *La Verdad* para demostrar al "Ayuntamiento y a la opinión pública" que sus reivindicaciones eran "justas y urgentes". Sin olvidar que gracias al papel de la prensa las demandas ciudadanas ejercieron "mayor presión entre los organismos administrativos destinatarios de sus reivindicaciones" (Castells, 1981, 290-291). Y de ello fue consciente un vecino que en marzo de 1975 confiaba en que la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

denuncia en la prensa de la situación en su polígono de viviendas sirviese "para convencer a quienes competa"[76].

Con motivo de la legalización de la AV de San Pedro, su presidente declaró en la prensa que "desde el primer momento nos hemos empeñado en que esto quede claro [...] la Asociación se ha creado para solucionar los problemas del barrio, nada más. Cada miembro de la misma tendrá sus ideas particulares, pero la Asociación ha de quedar al margen de las mismas". Sin embargo, que las asociaciones se mantuviesen al margen de las ideas políticas de sus militantes, no quiere decir que sus fines no fuesen esencialmente cívicos y políticos. El simple hecho, en el caso de la mencionada asociación, de buscar —como decían sus vecinos— un contacto "más oficial y directo" con las autoridades, fue reflejo de que ésta y otras asociaciones "aspiraban claramente a influir en la política pública". Desde las asociaciones de vecinos se pretendió afianzar lo que se ha venido en llamar el *eje vertical de la ciudadanía*. Para ello intentaron fortalecer la comunicación entre los vecinos de las barriadas y las autoridades municipales, con la consiguiente ampliación del debate público sobre diversos asuntos urbanísticos y ciudadanos. Así lo reconoció tácitamente el alcalde de Albacete al señalar en marzo de 1976 que las asociaciones eran "interlocutores válidos" entre el ayuntamiento y los ciudadanos de los barrios.

Los estatutos de la AV de San Pedro redactados en febrero de 1977 aprobaron el "dirigirse a los poderes públicos para informarles de las justas pretensiones de los asociados y solicitar la adopción de medidas oportunas". Igualmente, expresaron la intención de los asociados por "interesar y mantener contactos con las autoridades locales, provinciales y estatales en orden a la resolución de cuantos problemas pudieran afectar a los asociados en sus distintos y variados aspectos". En otras palabras, los principios de esta asociación expresaron su voluntad de incidir en los asuntos cívicos y políticos de la vecindad. De forma más o menos tácita, los vecinos de San

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Pedro defendieron la existencia de una voz autónoma, representativa y capaz de velar por sus propios intereses. Con estos estatutos, la asociación de esta barriada mostró su deseo de influir "sobre las normas de la vida política" (Radcliff, 2005, 99-100). Pretensión meridianamente clara también en otros casos, como cuando a principios de 1977 la AV de Hermanos Falcó defendió un modelo urbanístico alternativo en el que las asociaciones tenían "mucho que decir a la hora de solucionar los problemas de la ciudad". Así, al defender su propia visión del interés público, algunas asociaciones de vecinos consiguieron crear "centros alternativos de debate y de toma de decisiones" sobre los que se asentó una emergente ciudadanía democrática (Radcliff, 2006b, 349).

La decisión de los vecinos de influir en los asuntos públicos de la comunidad tropezó con unos gobernantes locales autoritarios y despreocupados por la penosa situación de los barrios. Además, el estrecho marco legislativo impuesto por el franquismo dejó a los vecinos más activos un reducido margen para solucionar los problemas sentidos y sufridos por la mayoría de la barriada. Bajo esta situación, durante los años finales de la dictadura, los vecinos tuvieron que recurrir a visitas al alcalde, cartas a las diferentes autoridades, comunicados en la prensa, asambleas, recogida de firmas, acciones de desobediencia como la huelga de pagos de los cooperativistas de Pedro Lamata, apropiación de locales como el del Ministerio de la Vivienda en el que quedó ubicada la parroquia de Hermanos Falcó, etcétera. Se trató en la mayoría de los casos de formas de acción que en más de una ocasión trasgredieron la legalidad franquista y que inevitablemente comportaron una confrontación, más o menos directa, con las autoridades.

Cuando los vecinos decidieron movilizarse de diferentes formas para pedir mejoras porque "los problemas de los barrios si no se airean de alguna manera (prensa, radio, visitas, reuniones de barrio, etcétera) no se solucionan"[77], chocaron en más de una ocasión

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

con las autoridades. Hecho que automáticamente comportó la adopción de posturas críticas contra el poder municipal. Entre otros ejemplos, cuando un "grupo de católicos" de San Pedro protestaron porque las obras y mejoras acordadas con el alcalde en varias reuniones entre 1974 y 1975 no fueron realizadas, la reacción de las autoridades provocó la politización del asunto. En respuesta "el alcalde tiene interés en resaltar que el ayuntamiento de Albacete, con cartas o sin cartas, seguirá su política de realizaciones en todas las zonas de la ciudad"[78]. Y con el mismo tono taxativo de dicha contestación se amenazó a los vecinos, se les tachó de "incivilizados" y se les negó el recibimiento en sus visitas al ayuntamiento. Todo lo cual provocó el malestar de aquéllos y sus críticas contra el alcalde y el concejal de Barrios y Pedanías. Ante la habitual intransigencia y ambigüedad oficial incluso los vecinos no movilizados comprendieron los obstáculos impuestos por las autoridades franquistas a la actividad de curas obreros, militantes cristianos o miembros de la oposición, para satisfacer las necesidades básicas de sus barriadas. De este modo, vecinos no politizados de los barrios periféricos fueron adoptando posiciones criticas contra los gobernantes locales y ciertas posturas de apoyo a aquellas organizaciones sociales y políticas que velaban por la mejora de las condiciones de las barriadas. Así se explica una de las causas del mayoritario voto cosechado por los partidos de izquierdas en las posteriores elecciones democráticas en estas zonas de la ciudad (Izquierdo, 1984, 140).

Por otro lado, en el seno de las asociaciones de vecinos, bajo un entorno autoritario, se reprodujeron prácticas y formas de organización democrática. Habitualmente, el funcionamiento cotidiano de las asociaciones se caracterizó por la utilización de un lenguaje participativo y unos procedimientos parlamentarios básicos. Por ejemplo, en la AV de San Pedro cualquier asociado podía "tomar parte con libertad de palabra y de voto en las Juntas generales

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

y sus debates", además de "elegir y ser elegido para miembro de la Junta Directiva"[79]. En los momentos finales del franquismo, las asociaciones vecinales se convirtieron en espacios abiertos en los barrios en los que un mayor número de vecinos comenzaron, aún con prudencia y cierto reparo, a intimar con prácticas democráticas. Este proceso de aprendizaje político se articuló fundamentalmente a través de asambleas. Durante la celebración de las mismas vecinos con un diferente grado de compromiso plantearon sus necesidades y reivindicaciones con la consiguiente legitimación democrática del movimiento (Martínez, 2000, 275). La asamblea, como en el caso de los barrios de San Pedro y Mortero, representó el "órgano supremo" de las asociaciones que iban germinando después de la muerte de Franco. A pesar de la continuada vigilancia policial, en asociaciones como la del barrio de Hermanos Falcó predominó "el estilo asambleario que allí se utilizó desde el primer momento, todas las cosas las decidíamos en asamblea y todo el mundo podía opinar en la asamblea"[80]. En éstas "se planteaban temas a debate y allí se procuraba que todo el mundo hablara y opinara, y luego si había que tomar algún tipo de decisión [...] pues se votaba a mano alzada"[81]. Para aquellos que vivieron esa experiencia en el caso albacetense, el asociacionismo vecinal representó "una auténtica escuela de vida social", ya que "el opinar, el plantear problemas y soluciones, el preocuparse, el estar pendientes unos de otros, creó un movimiento muy interesante". En definitiva, como conclusión a este apartado, se puede decir que el movimiento vecinal que eclosionó en los estertores del franquismo contribuyó a extender ciertas prácticas democráticas y un mayor interés cívico por los problemas públicos, al tiempo que deslegitimó la gestión política de las autoridades locales en referencia a los barrios periféricos de la ciudad. Todo lo cual contribuyó, junto a una multiplicidad de factores, a ir creando unas condiciones sociales y políticas más favorables para el tránsito a la democracia.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

6. LOS EXPONENTES DE UNA CULTURA CONTRAHEGEMÓNICA

Tras la muerte del dictador, una sociedad civil con mayor grado de autonomía se manifestó de muchas y diferentes formas a través de librerías, fiestas populares, recitales, exposiciones, etcétera (Lemus, 2002, 205). En realidad, se trató de una especie de "contraespectáculo" con sus propios espacios, valores, rituales y discursos. Éstos fueron diezmando la hegemonía sociocultural de la dictadura y contribuyeron a fortalecer los cada vez menos livianos vínculos y aspiraciones cotidianas entre la sociedad civil y la oposición al franquismo[82]. Una importante manifestación cultural alternativa y opuesta a la propaganda oficial fue la Librería Popular. Ésta fue inaugurada, con una exposición de Alfonso Parra, por un grupo de militantes del PCE durante una aún pacata Primera Feria del Libro de Albacete en septiembre de 1975.

Reflejo de la situación sociopolítica del país y del beneplácito de un delegado de Información y Turismo con ciertas miras aperturistas, la edición siguiente de la Feria del Libro, la del verano de 1976, evidenció una —aunque aún comedida— inusitada animación cultural. Aquellos que se acercaron, siempre bajo la mirada disimulada de la Policía, a la caseta de la Librería Popular, pudieron comprar las *Charlas en la prisión* de Marcelino Camacho, los libros de Ramón Tamames y los de la colección Gaya Ciencia[83]. El *stand* de la Librería Popular recibió las visitas de Juan Antonio Bardem, Marcelino Camacho y Eugenio Triana. Igualmente se anunció que "Paco Salve, líder de CC OO, firmará ejemplares", acto que no se pudo realizar ante la desautorización gubernativa.

Durante la Feria del Libro de 1976 también se inauguró un nuevo establecimiento librero en la ciudad, la Librería del Maestro, en cuyo acto fundacional participó José Luis Martín Vigil. Poco después, en octubre de 1976, además de la Librería Popular, la Librería

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblos comenzó a vender el *Juventud Obrera*, tras su reaparición después de largos secuestros y suspensiones[84]. No obstante, tanto a la Librería Popular como a la del Maestro, les había antecedido en la promoción de una cultura con otras miras la Librería Delta en el año 1972. Ésta fue creada por un grupo de profesionales socialistas procedentes de ambientes universitarios, aunque sin militancia en ninguna organización de oposición a la dictadura. La librería fue un proyecto principalmente comercial, si bien tuvo una cierta tendencia progresista y en sus locales se organizaron exposiciones de pintura, veladas literarias y recitales que ofrecieron una ventana de libre expresión[85]. En esta librería, y luego en la Popular, expusieron sus obras jóvenes artistas albacetenses, que habían pasados por las facultades de Bellas Artes de diferentes universidades y participado en el movimiento estudiantil, como Juan Miguel Rodríguez, Arnedo, Nicasio Cañaveras o Quijano, quien decía sentirse atraído "por el mundo de los obreros", por los "temas sórdidos" y el "hombre que sufre de verdad".

En el Albacete de finales del franquismo la Librería Popular se convirtió en un referente para todos aquellos albacetenses que apostaron por un futuro democrático en los meses de agonía de la dictadura. Según la Memoria del Gobierno Civil de 1976 la "Librería Popular era tan conocida por su actuación como centro receptor y organizador de actos que facilitaron la presencia en Albacete de líderes de grupos de oposición como Camacho, Sartorius, Tamames, etcétera". En efecto, sus locales ofrecieron cobijo a todo tipo de manifestación cultural de signo democrático, progresista y antifranquista, desde exposiciones de pintura a recitales poéticos o musicales, pasando por conferencias y tertulias. Además de los ya citados, también pasaron por sus locales, aunque la mayoría de las veces sus intervenciones fueron prohibidas, Alfonso Guerra, Pablo Castellanos, Simón Sánchez Montero, Manuel Gerena y Manuel Azcárate, entre otros. Con dichos invitados no

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

extraña que para la primera autoridad gubernativa de la provincia esta librería fuese un foco de subversión en el que se reproducían "actos encubiertos, amparados en la condición de culturales, de conferencias científicas, etc"[86].

Como era habitual por aquel entonces, la actividad cultural, cívica y política llevada a cabo por la Librería Popular sufrió numerosas sanciones y prohibiciones de tipo gubernativo. A principios de 1976 el gobernador civil de Albacete fue informado que "viene observándose reiteradamente en algunas provincias que con motivo de la presentación y lanzamiento publicitario de libros o de obras artísticas, determinados establecimientos comerciales como librerías, salas de arte, tiendas de discos, etcétera, organizan reuniones cuya verdadera finalidad es llevar a cabo coloquios con intenciones de crítica y de propaganda contra el régimen". Por lo tanto, "teniendo en cuenta la ilegalidad de tales actividades se interesa a V. E. que [...] adopte las medidas oportunas para evitar que los establecimientos citados realicen actividades distintas de las estrictamente comerciales, entre las que lógicamente se comprenden las de carácter publicitario, incluida la firma de obras por sus autores". Así, los actos organizados por la librería se vieron expuestos al intenso control policial y a la acción gubernativa. Las sucesivas desautorizaciones firmadas por el gobernador civil hicieron imposible la celebración de varios actos culturales con una clara significación política. Sin embargo, esta intransigencia gubernativa en vez de sembrar silencio provocó nuevas acciones, politización y denuncias contra la falta de libertad de expresión.

Por ejemplo, según informó la propia autoridad gubernativa, algunos actos organizados por la Librería Popular "al ser desautorizados, dieron lugar a algunos incidentes". En enero de 1976, cuando Marcelino Camacho llegó a Albacete para pronunciar una conferencia en la librería, encontró un despliegue policial especial en los aledaños de ésta. El expeditivo desalojo de numerosos asistentes al acto

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

a la voz de "váyanse a Rusia" provocó encontronazos, algún disturbio y protestas. Asimismo, las continuas desautorizaciones que sufrió esta librería fueron objeto de crítica por parte de la prensa local más progresista. Ésta se mostró disconforme en marzo de 1976 ante el intento oficial de coaccionar la "actividad cultural de algunos grupos marginados, como el de la Librería Popular, cuya mayor acusación tiene su origen en su inquietud". Según *La Verdad* "cuando uno no sólo se dedica a vender recetas de cocina, sino a organizar conferencias, presentaciones de libros, charlas, exposiciones de cultura, es mal visto por el otro país". El colectivo Sagato también denunció el hecho de que desde la oficialidad se presentasen "siempre como sospechosas y bajo la amenaza de suspensiones y prohibiciones" diversas actividades culturales. La razón, para este grupo, estribaba en que la "cultura, cuando se hace en el pueblo y desde el pueblo, se convierte en política, en praxis liberadora"[87]. En definitiva, la obsesión gubernativa por perseguir todas aquellas actividades desarrolladas por la Librería Popular provocó algún que otro incidente, así como numerosas críticas y pronunciamientos públicos que fueron erosionando el prestigio del régimen entre crecientes sectores de la sociedad albacetense.

La Librería Popular fue igualmente el banderín de enganche de reclutamiento para un PCE y unas Comisiones Obreras en expansión durante los meses finales de la dictadura. Sus locales hicieron de punto de encuentro de las diferentes sensibilidades políticas opuestas al franquismo que eclosionaron por doquier una vez muerto el dictador. Sus actos sirvieron para poner en contacto a comunistas, socialistas, democristianos, socialdemócratas, católicos, gente de la izquierda radical y aperturistas del régimen. Aquel "era el lugar de encuentro, de contacto, de tertulia, de charla y de debate, de todos aquellos que, en muchos casos inconscientemente, se estaban preparando para asumir desde la izquierda la dirección de la nueva realidad social, sindical y política de la provincia"

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

(Mata, 2002, 80). La labor de la librería corrió paralela a la del despacho laboralista creado por el PCE y Comisiones Obreras en la segunda mitad de 1976. Al igual que la Popular, el despacho laboralista fue una plataforma legal de organización y movilización del PCE, un lugar de encuentro y contacto entre trabajadores, estudiantes, profesionales y técnicos vinculados al Partido o a la oposición antifranquista. Después de la muerte de Franco al despacho también comenzaron a acudir numerosos trabajadores, para recibir asesoramiento jurídico y laboral ante el profundo descrédito del aparato vertical[88].

Los locales de la Librería Popular o del Cineclub Buñuel fueron también utilizados para representar aquellas obras de teatro que, por su mensaje, no encontraron un hueco en otros espacios oficiales. Éste fue el caso de la obra llevada a escena por el Equipo de Teatro de Albacete *Las hermanas de Búfalo Bill* durante los meses iniciales de 1976. Composición que no pudo ser representada en ningún local de la capital por ser considerada "inmoral" por las autoridades. El Equipo de Teatro de Albacete, creado a mediados de 1975, apostó en su representaciones por un teatro experimental y comprometido que, a pesar del boicot oficial, representó varias obras en los barrios periféricos de la ciudad y pueblos de la provincia[89]. En Villarrobledo, apareció el grupo teatral La Troya, independiente y compuesto por estudiantes. Meses antes, la prohibición gubernativa en esta localidad, en el otoño de 1974, de una obra teatral escenificada por el grupo Besana provocó la desaparición del mismo. Este grupo había nacido en 1973, aprovechando las estructuras de la Sección Femenina, en torno a una veintena de estudiantes "unidos en la inquietud teatral" e implicados en realizar un teatro experimental y moderno "al más alto nivel de ideas que impera en Europa". Este fue el caso de su representación de la obra de Jordi Teixidor *El retablo del flautista*, que según la edición albacetense del diario *Pueblo* era una de las "obras más polémicas de estas

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

últimas temporadas [...] que tanto está dando que hablar". Por tal motivo, la representación que debía tener lugar en Villarrobledo en el otoño de 1974 no tardó en ser prohibida por el gobernador civil. Hecho que llevó a los actores, en señal de protesta, a abandonar Besana y a organizar otro grupo teatral al margen de la rama femenina de la OJE, porque "estará más libre" ante "los impedimentos que Sección Femenina impone en ciertas representaciones de ciertas obras"[90].

En los años finales del franquismo, mientras que las autoridades defendían una programación cultural en la que no cabía el "ataque a la religión católica ni a las Leyes Fundamentales" y se afianzaban en que "no podemos dejar los festivales en manos de grupos minoritarios", un "público juvenil y verdaderamente enfervorizado" asistía a las aún pocas representaciones de teatro experimental (Fuster, 1974, 70). Ya en 1974 había llegado el primer café-teatro a la capital provincial, con una obra representada por un grupo de jóvenes madrileños para quienes "nuestro género no es muy cómodo para determinadas estructuras" y la "Administración no nos ve con buenos ojos". Por aquel entonces entre sectores estudiantiles y campesinos de Villarrobledo y Villamalea se estaba "gestando y dando forma a una serie de iniciativas culturales interesantes". En ambas localidades quedaron "comprometidas una serie de actuaciones de personajes del mundo de las letras, del arte, de la literatura, de la vida y de la política, para acudir a ambas poblaciones y para dar una serie de charlas". Pero dichos actos fueron prohibidos. También en Villamalea ya había sido cancelada la obra teatral de Alfonso Sastre *Tierra roja*, cuyo permiso gubernativo fue denegado "por estar prohibida su representación en todo el territorio nacional"[91]. De nuevo, en septiembre de 1974 fue suspendida una obra de este autor, en este caso *El pan de todos*, que iba a representarse en un salón parroquial de Villarrobledo por parte de un grupo de estudiantes universitarios

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de la localidad. Por otra parte, el grupo teatral juvenil Niebla de Albacete fue campeón nacional del Certamen Nacional Juvenil de Teatro Social de 1976. El suyo fue un teatro crítico y experimental. También participó en la organización de teatros-fórum con estudiantes y jóvenes albacetenses. En algunas localidades de la provincia se pudo asistir a obras teatrales, como la que en mayo de 1975 corrió a cargo del grupo Cizalla con composiciones de Bertold Brecht en la Casa de la Cultura de Albacete, realizadas por nuevos grupos teatrales que con un lenguaje simbólico, alegórico, y casi críptico, comportaron algún tipo de crítica sobre la situación política y social del país. Si bien numerosas representaciones corrieron peor suerte y fueron prohibidas por el gobernador. Éste fue el caso de la "Cantata de Santa María de Iquique", una alegoría sobre el levantamiento y la represión de los pampinos chilenos, que el grupo de teatro La Milaria iba a representar en la localidad de Casasimarro. En cualquier caso, en los años finales del franquismo fueron apareciendo diversas manifestaciones culturales, con nuevos valores y significados, que erosionaron la hegemonía sociocultural de la dictadura y contribuyeron a ir preparando el camino hacia la democracia.

7. EN BUSCA DE NUEVAS SEÑAS DE IDENTIDAD. RECITALES Y FIESTAS POPULARES

El nombre de la citada librería fue el reflejo de la intención de la oposición democrática de recuperar lo popular, identificado con una cultura crítica y alternativa a la propagada desde los centros de poder franquistas. Dicha rehabilitación de la cultura popular usurpada por el franquismo encontró uno de sus principales cauces de expresión en la canción protesta. Ésta tuvo su referente en el modelo de algunos cantautores europeos y norteamericanos, y su

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

principal manifestación en España fue la Nova Cançó catalana. Las estructuras políticas existentes en España hicieron del fenómeno de la canción social o reivindicativa una clara manifestación politizada de oposición a la dictadura franquista. Temas como "Al vent", "L'estaca" o poemas y canciones de autores proscritos con una fuerte carga de denuncia social y crítica política, se convirtieron en verdaderos himnos entonados por miles de jóvenes[92].

Los conciertos de Raimon, Paco Ibáñez, Lluis Llach y algunos otros cantautores representaron verdaderos actos de masas de oposición a la dictadura. Los recitales de protesta hicieron las veces de un verdadero factor de movilización emocional, además de ser una especie de zona franca para la realización de otras actividades como mítines, reparto de propaganda, venta de libros, etcétera (Mainer y Juliá, 2000, 102). Para aquellos jóvenes albacetenses que asistieron a alguno de estos recitales de canción protesta la "música a veces nos servía como forma de expresión de toda una rabia contenida y de unas ganas de libertad que no podías expresar de otra forma y de paso también nos servía para hacer un acto de protesta, se convertía en una manifestación, en una demostración de fuerza social emergente que reivindicaba la democracia"[93].

En Villamalea, "no se cabía" en los conciertos de Rosa León, Víctor Manuel o Meneses durante las fiestas de la Cooperativa. En Albacete, en marzo de 1976, y a pesar de los obstáculos burocráticos impuestos por las autoridades, la Escuela de Magisterio y la Casa de la Juventud organizaron un festival folk que contó con las actuaciones de cantautores locales como Pedro Piqueras, Manolo Luna, Ignacio Valero, Jesús Hernánz, etcétera. La mayoría de estos cantantes eran jóvenes estudiantes albacetenses ligados a los grupos de oposición a la dictadura en el mundo universitario. El diario *La Voz* rotuló "Siete voces de Albacete y se acabó el tiempo de silencio" en referencia a este concierto que acogió en el pabellón deportivo a un número nada despreciable de jóvenes de diferentes partes de la provincia[94]. Con

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

eventos de este tipo, aunque siempre fueron una minoría, se fue poco a poco recuperando y ensalzando toda una tradición cultural, ideológica e intelectual, casi enterrada durante cuatro décadas de franquismo. Aquellos jóvenes que asistían a actos de esta naturaleza cada vez en mayor número tuvieron, aunque efímera y poco duradera, una conciencia subjetiva de ruptura cuando escuchaban "Marinero en tierra" de Alberti o coreaban aquello de "una fresca rosa roja ha florecido en mi pecho; izquierda corazón izquierda". En realidad, se trataba de actos culturales de reivindicación política en los que, como decía uno de aquellos jóvenes cantautores, llegaba la "hora de que quien quiera decir algo que lo haga"[95].

Los citados cantautores locales Pedro Piqueras y Manolo Luna protagonizaron el primer recital de música folk de la localidad de Hellín en septiembre de 1976. En la crónica aparecida en la prensa se dijo que "cantaron la voz del pueblo y de los pueblos de nuestra provincia". En este concierto "la jota, el fandango, la manchega, salpicó de música los problemas del paro, de la emigración, de la incultura, de las tierras y de los hombres". En diciembre de 1976 el PCE organizó un festival con una importante asistencia de público. Éste llenó la plaza de toros de Albacete para escuchar a Víctor Manuel, Ana Belén, Manuel Gerena y Rosa León. Meses después, en enero de 1977, también actuó en Hellín el cantautor vasco Fernando Unsain. Se trató de otro de los numerosos recitales de cantautor que aquellos meses recorrieron la geografía española, y que en la provincia también tuvieron su lugar en localidades como Almansa o Villarrobledo.

Los recitales siempre fueron una cuestión de muy complicada gestión por parte de la dictadura. Éstos, al igual que las actividades culturales de carácter político organizadas por la Librería Popular, casi invariablemente se convirtieron en fuente de politización y desprestigio para las autoridades locales. En efecto, cuando la celebración de un recital o concierto de canción protesta fue permitida

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ineludiblemente se dieron entre los artistas referencias críticas, más o menos veladas, a la situación política del país. Si, por otra parte, la permisividad llevó adherida un fuerte control sobre los temas y las letras de las canciones también aparecieron críticas y denuncias en la prensa contra la falta de libertad de expresión. Así ocurrió, por ejemplo, durante el Festival de la Canción de Hellín. Durante el mismo, uno de los finalistas se quejó de las presiones del propio alcalde, quien le prohibió cantar dos temas ya visados con anterioridad por el Ministerio de Información. También los presentadores del acto protestaron públicamente porque les "dijeron que nos inhibiéramos de hacer comentarios entre canción y canción. Sólo el nombre y el del intérprete. Nos midieron las palabras"[96].

Para evitar pronunciamientos públicos contra la dictadura, las autoridades decidieron en otras ocasiones no permitir la celebración de recitales musicales. En comunicaciones internas que en aquellos meses circularon por el Gobierno Civil de Albacete se llamó la atención sobre la "utilización de todo tipo de festivales como un instrumento novedoso más de la subversión". Ante tal amenaza se hizo necesario para las autoridades "contar con la oportuna respuesta" y aplicar "muy fuertes sanciones contra sus promotores, intentando que su importe supere, siempre que sea posible, al propio beneficio empresarial". Según las consignas oficiales, a "los cantantes que se extralimiten de forma notable [...] se remitirá la correspondiente actuación al fiscal". No extraña, por tanto, que en el Gobierno Civil de Albacete existiese una larga lista de "cantautores prohibidos". Entre los mismos destacaron Manuel Gerena, Víctor Manuel, Ana Belén, Paco Ibáñez, etcétera. El 29 de julio de 1975 el gobernador civil recibió una circular de Gobernación en la que taxativamente se ordenaba que "a partir de la fecha queda prohibida la celebración de todo tipo de festivales de música pop y similares"[97]. Sin embargo, la intransigencia gubernativa no obtuvo mejores resultados que la mencionada tolerancia

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

controlada, ya que la prohibición de los actos y la sanción de sus organizadores y artistas habitualmente provocaron protestas y una mayor politización. Así ocurrió en septiembre de 1976 tras la prohibición del festival organizado por el PCE durante la feria de Albacete. Esta desautorización provocó que unas 1.000 o 1.500 personas se manifestaran durante varias horas por las calles de la capital provincial. Reclamaron la dimisión del gobernador civil y la puesta en libertad de uno de los comunistas organizadores del evento. La manifestación concluyó con numerosos saltos y altercados hasta altas horas de la noche. Fue inédito, además, el hecho de que —como informó la prensa local— los manifestantes —con banderas republicanas— "recibieron aplausos de los vecinos asomados". "Hace unos meses esto era imposible en Albacete", concluía el redactor de *La Verdad*, ante tal manifestación de descontento y malestar por la prohibición de un concierto.

Además, a través de la prensa local, aquellos "cantautores prohibidos" tuvieron la ocasión de denunciar la falta de libertad de expresión existente. En septiembre de 1975, Manuel Gerena declaró que la desautorización de su actuación en las Fiestas de Villamalea se produjo únicamente por "airear los problemas de los trabajadores del campo, sus miserias, sus tristezas". En junio de 1976 Víctor Manuel, tras expresar su deseo de "ir a actuar a la Librería Popular" y de "visitar un simpático pueblo agricultor: Villamalea", protestó porque si "aparezco prohibido es por la falta de libertad de expresión en este país"[98]. En definitiva, las actividades de signo cultural y político representaron una continua fuente de preocupación y descrédito para las autoridades franquistas. Éstas respondieron con una variada gama de actitudes, desde la tolerancia a la intransigencia, representando, casi siempre, fuese cual fuese la opción elegida, un coste político para el régimen (Ysás, 2006, 44).

Los temas y alusiones entonadas en los recitales de canción protesta, en las que usualmente aparecieron Alberti, Miguel

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Hernández, García Lorca y otros muchos, reflejaron el recurso periódico por parte del antifranquismo a unas determinadas señas de identidad. En cierta manera manifestaron el esfuerzo de ciertos colectivos por reencontrase con la trama histórica de una cultura quebrada al final de la guerra civil. Como si "el ilusionado empeño del ayer parecía vincularse mejor a las esperanzadas propuestas de la nueva democracia" (Mainer y Juliá, 2000, 164-166). Lo que condujo a la recuperación de intelectuales, literatos y artistas relegados al olvido por la cultura oficial. En esta dirección, después de la muerte de Franco, en relación con el ascenso de las peticiones de amnistía, desde la oposición democrática se comenzó a homenajear a determinados intelectuales o personajes del mundo de la cultura y del arte. Actos que inquietaron profundamente a las autoridades que ordenaron "una vigilancia especial en actos conmemorativos o en honor de personalidades republicanas o ejecutadas en nuestra guerra, así como las recepciones públicas de exiliados"[99].

Éste fue el caso del homenaje nacional brindado a Miguel Hernández por una amplia gama de asociaciones culturales, grupos teatrales, librerías, asociaciones de vecinos, partidos políticos y sindicatos contrarios a la dictadura franquista[100]. A pesar de los obstáculos y el confusionismo promocionado desde el despacho del gobernador civil, en Albacete la comisión encargada de organizar el homenaje fue "protagonista de varias actividades culturales, siempre de signo reivindicativo y progresista" (López Ariza, 1990, 226). Por este motivo, a la primera autoridad gubernativa le disgustó profundamente que se celebrasen "en la Casa de la Cultura y Cine de las Escuelas Pías una serie de conferencias en memoria de Miguel Hernández, interviniendo oradores tanto de Albacete como venidos de fuera"[101]. Durante varios meses se organizaron varias actividades culturales entre las que destacaron los concursos de poesía y pintura, exposiciones, conferencias y recitales como el realizado a cargo del dúo iberoamericano Los juglares, que cantaron a Miguel Hernández, Alberti y Lorca.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Las celebraciones y festejos populares, al igual que conciertos de canción protesta, recitales folclóricos y homenajes, formaron parte de la búsqueda identitaria a partir de la recuperación de una determinada cultura y tradiciones. Todo ello englobado en un esfuerzo de movilización simbólica con el objetivo de reemplazar un "sistema de creencias dominante que legitima el *statu quo* por otro alternativo que apoye el cambio provocado por la acción colectiva" (Gamson, Fireman y Rytina, 1982, 15). Sin duda, en los designios de la dictadura franquista por controlar políticamente a la población ocupó un papel importante el control de la vida cotidiana y la organización del ocio (Folguera, 1995, 165-168). La fiesta popular bajo el franquismo fue objeto de la aristocratización y recatolización, e incluso militarización, con el fin de eliminar la huella y la memoria de pasadas culturas y tradiciones colectivas. Así, tanto la fiesta como el ocio, cargados ambos de una amplia temática religiosa y distribuidos en el calendario en función de las efemérides franquistas, representaron para la dictadura franquista un importante instrumento de socialización, adoctrinamiento y control social.

Pero por los mismos motivos ambas esferas formaron igualmente parte de esa casi silenciosa batalla por la apertura de nuevos espacios de la vida cotidiana autónomos de la intrusión y control político del Estado. En este sentido, durante los años finales del franquismo fueron apareciendo diversas voces en favor de la democratización de las fiestas. Por ejemplo, en el pueblo de Liétor, en el verano de 1974, la presión de una parte del vecindario provocó que las autoridades invitasen "a toda la juventud femenina a que democráticamente se eligieran, teniendo así todas la posibilidad de ser electoras y elegibles" las reinas y damas de las fiestas[102]. Durante la feria de Albacete de 1976 surgieron voces que de forma más o menos tácita criticaron la falta de participación de los vecinos en la programación de los festejos y, por consiguiente, denunciaron el déficit democrático de la Corporación Municipal. El

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

colectivo juvenil Sagato se quejó de una programación ferial en la que "nos lo dan todo hecho" y "las fiestas se organizan desde arriba". Desde diferentes ámbitos de la sociedad albacetense se comenzaron a censurar unos festejos oficiales carentes de sentido popular y "limitados a un cierto sector que puede pagarlos". De hecho, como denunció algún crítico, en los Festivales de España, uno de los principales eventos de la feria, los "precios eran excesivamente altos para buena parte de la población". Así, con motivo de la feria de septiembre de 1975 circuló en Albacete una irónica coplilla que decía:

Dicen que las ferias son
"pa" que se divierta el pueblo,
yo debo ser un marciano
puesto que no me divierto.
A mí, para ir a los toros
no me llega el presupuesto
Y para ir a la caseta,
tengo que vender lo puesto.

Pienso que sería mejor
el que nuestro ayuntamiento
en lugar de financiarse
perdiese un milloncejo
dando alguna diversión
al alcance de su pueblo
a los del salario base
¡que también tienen derecho![103]

Incluso algunos sectores oficiales aperturistas, como en el ayuntamiento de Hellín, defendieron una "feria desde el pueblo para el pueblo", en la que fuesen "las gentes las que han de participar en su programación y montaje", y en la que las actividades fuesen decididas

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

por los "propios vecinos, por medio de comisiones nombradas y elegidas por ellos mismos, por barrios o distritos". Así, poco a poco se fue reivindicando la fiesta popular como un derecho ciudadano, como un espacio autónomo y libre de adherencias oficiales, y no un evento cerrado y al alcance de sólo unos pocos. A este respecto, sin duda, el contrapunto al modelo de fiesta y disfrute del ocio promovido desde la oficialidad fue la, ya citada en otros capítulos, Fiesta de la Vendimia organizada por la Cooperativa de San Antonio Abad de Villamalea. Se trató de una fiesta popular, participativa y con un evidente trasfondo reivindicativo. Para buena parte de los vecinos de la localidad, la Fiesta de la Vendimia representó "ni más ni menos que un pretexto más para seguir reivindicando". La gran mayoría de los villamalenses participaron en los campeonatos deportivos, pasacalles, festivales de poesía, concursos de vinos, comidas populares o recitales de canción protesta. Se trató de unos festejos caracterizados por el "compañerismo, la camaradería y la alegría". No en vano, "estábamos todo el pueblo esperando a que llegaran los primeros días de septiembre para que se celebrara aquella fiesta". Por tal motivo, no llama la atención el hecho, como señalaron sus organizadores, de que "estas fiestas no les gusten a algunas gentes por su carácter de fiesta popular que es la única manera de hacer una fiesta". De hecho, intentaron ser prohibidas en varias ocasiones, y habitualmente fueron seguidas por un importante despliegue de vigilancia policial. Como decía *La Verdad*, en las fiestas de esta localidad existía "una conciencia distinta a la que preside el resto de las fiestas españolas". No había en las fiestas villamalenses "concesiones oficialistas" sino "inquietud por abrir nuevos cauces".

Este tipo de fiestas populares incorporaron numerosos elementos de los repertorios tradicionales de lucha popular. Entre ellos, la ocupación del espacio público para presionar a las autoridades a través de la acción comunitaria a las autoridades.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Igualmente, la Fiesta de la Vendimia de Villamalea tuvo un componente de representación dramática o "teatro callejero" popular, al girar en torno al símbolo de la *flor de la vendimia*. Personificada ésta por las reinas y la corte de honor, que en el acto de apertura de los festejos "dirigían unas palabras que casi siempre estaban relacionadas con el campo, con el pueblo y con la lucha"[104]. También quedaron escenificados elementos procesionales en la cabalgata de carrozas engalanadas por los vecinos con inscripciones tales como "¡abajo el fraude, viva la agricultura!", "monopolios no, cooperativismo sí" o "entre el tiempo y el gobierno el campesino está muriendo". En la edición de 1976 los tractores convertidos en carrozas exhibieron eslóganes íntimamente relacionados con la actualidad política del país. Pidieron un "Sindicato Unitario" y postularon como "Solución: Ruptura democrática".

Después de la muerte Franco, las fiestas de algunos barrios periféricos y de localidades de la provincia fueron tímidamente convirtiéndose en espacios de encuentro, de reivindicación, y de promoción de unos valores culturales, identitarios y comunitarios habitualmente opuestos a los preconizados desde arriba por las autoridades del régimen. En septiembre de 1976 el PCE organizó un concierto de música folk. Su intención era montar "un espectáculo popular, joven y con precios asequibles", en el que participase "gente que canta y dice algo". Los presentadores del acto serían los actores Juan Diego y Tina Sáinz. Pero finalmente el gobernador civil prohibió la celebración del concierto poco antes de la apertura de las puertas al público.

No obstante, fruto de las demandas ciudadanas en un contexto político delicado y de la presión de los propios sectores reformistas dentro del Ayuntamiento, la programación oficial de la feria de Albacete de 1976 incluyó algunos actos con participantes impensables meses antes. Según contaba la prensa menos dócil, aunque el gobernador civil trató de impedir la actuación del grupo Jarcha, su repertorio

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cosechó "los aplausos y el entusiasmo popular" que acompañaron a "los esloganes de fuerte sabor político". Igualmente, entre la generalidad de una programación teatral "evasiva en demasía", destacó la obra *Julio César*, adaptada por J. A. Hormigón "con un mensaje claro para nuestra realidad actual". En las fiestas de la Falla del Barrio de San Juan de junio de 1976 ésta tuvo como tema central al "aperturismo y destape, encierros en las iglesias, aguas subterráneas y solución de los aparcamientos en la ciudad".

Durante las ferias de Hellín, en septiembre de 1976, se organizó el I Festival de la Canción. En la celebración del mismo, jóvenes del pueblo y de otras localidades cercanas interpretaron temas de Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Patxi Andión, Ricardo Cantalapiedra, etcétera. Según la prensa, éste fue "el festejo eminentemente más popular y de más fuerte impacto juvenil", así como "el único acto, excepto algunos deportivos, organizado fuera del ámbito oficialista del ayuntamiento, por jóvenes y para jóvenes". Otra de las actuaciones más esperadas en las fiestas hellineras fue el concierto del cantautor José del Pino. Actuación que contó con la "ausencia de las autoridades civiles, a excepción de dos concejales, y abundancia de público joven que aplaudió coreó y vitoreó con fuerza"[105].

En estas mismas fiestas de Hellín en 1976 también se instaló por primera vez la barraca con la que un grupo de jóvenes pretendieron ofrecer una "alternativa democrática a la hostelería hellinera"[106]. Antes, en las fiestas de Alcalá del Júcar se había creado, bajo la iniciativa de unos cincuenta vecinos y del PCE, un "merendero democrático de la clase trabajadora y campesina". Tras los habituales problemas con las autoridades, el merendero se convirtió, además de un lugar donde poder comprar libros de economía, política, sociología o filosofía, en el punto de las fiestas donde escuchar la música de Paco Ibáñez, Lluis Llach, Raimon, Serrat, etcétera. La buena acogida llevó a repetir la experiencia en septiembre en la feria

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de Albacete. Según los organizadores, con esta iniciativa se pretendía revitalizar el perdido carácter popular de las fiestas mediante la organización de actividades, música, gastronomía popular y precios asequibles. De este modo, desde diversos sectores de la población y grupos políticos se fue redefiniendo el concepto de la propia fiesta y de la utilización del espacio público. A través de ésta, aunque pausada, eclosión de una cultura reivindicativa en favor de la democratización, popularización y desmercantilización del ocio, se explica que durante dos domingos consecutivos más de un centenar de jóvenes de la localidad de La Roda se congregasen en noviembre de 1976 en las puertas de un baile público. Su objetivo fue protestar, ante la presencia de la Guardia Civil, por los precios abusivos impuestos por el promotor. Igualmente, los vecinos de Villamalea abarrotaron los "bailes obreros" u otras actividades lúdicas organizadas por la Cooperativa bajo precios populares. Por el contrario, fue muy escasa la aceptación popular de los bailes y las sesiones de cine celebradas en los salones propiedad del alcalde.

Tras la muerte de Franco, las fiestas patronales de algunas barriadas de la capital provincial adquirieron un novedoso empuje. En los estertores del franquismo estas fiestas se convirtieron en momentos tendentes a animar la vida social, incrementar el tejido asociativo, multiplicar las ocasiones de reunión y conocimiento de los vecinos, permitir la programación de actividades lúdicas y culturales, etcétera. Las fiestas patronales de las barriadas fomentaron la "unión y el encuentro de vecinos" del mismo barrio y, en ocasiones, también con vecinos de otros barrios con una problemática similar. Además, este tipo de celebraciones también fueron una oportunidad para la reivindicación. Representaron "un momento de espejo público [...] le invitabas al alcalde para contarle lo que necesitabas en el barrio". De esta forma, cada vez que se celebraban las fiestas, "había un artículo previo en la prensa para anunciarlo, y ya iban los responsables de las asociaciones de vecinos, que eran

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lo que llevaban la voz cantante, y hablaban de cómo estaba el barrio y de lo que el barrio necesitaba"[107]. Por ejemplo, los vecinos de Hermanos Falcó aprovecharon las fiestas de 1975 para quejarse de que "no tenemos ningún servicio público dentro del barrio; ni servicio de autobuses, ni establecimientos comerciales; ni bares, ni cafeterías, ni muchas cosas más", por lo que decían sentirse "muy abandonados". Con motivo de los festejos del año siguiente apareció en Hermanos Falcó el boletín informativo, *Nuestro Barrio*, destinado a expresar los problemas, aspiraciones e inquietudes de los vecinos del barrio. Igualmente, "ante la proximidad de la festividad de San Pedro", patrón de la parroquia de los barrios de Sepulcro, Pedro Lamata, San Pedro, Mortero Pertusa y Bolera, un grupo de vecinos de dicha parroquia quiso "celebrar su fiesta haciendo un repaso de las gestiones realizadas y de los resultados obtenidos hasta el momento, sobre los muchos problemas que tienen planteados nuestros barrios y queremos darle a conocer al resto de la gente de los mismos"[108]. Algunas ferias fueron desarrollando cierto sentido crítico y reivindicativo que inevitablemente colisionó con las autoridades gubernativas. Por ejemplo, en septiembre de 1976 éstas suspendieron el pregón de las fiestas de Bogarra. La razón aludida es que dicho pregón anunciaba una reunión en la iglesia para informar a los temporeros sobre los problemas que podían encontrar en la campaña de la vendimia.

Durante el periodo de las fiestas se transformó el ritmo de la vida de las barriadas periféricas. Éstas, poco a poco, fueron definiendo su propia concepción del tiempo libre, de la celebración popular y de la identidad comunitaria. En contraposición a la Feria de Albacete y otras celebraciones organizadas desde la oficialidad del régimen, las fiestas de los barrios desarrollaron un carácter abierto, popular y participativo. Generalmente, se trataron de unas "fiestas gestionadas por todos", con actividades gratuitas y precios populares únicamente consagrados a sufragar la actividad de la asociación

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

vecinal. El recelo y la falta de ayuda municipal hizo que "todas las personas del barrio se volcasen a trabajar" en la organización de sus fiestas, desde la confección de banderitas con bolsas de plástico para engalanar las calles, a preparar chocolate con churros u organizar cualquier actividad. En fin, este creciente impulso social por la popularización de las fiestas en el fondo representó una demanda más o menos velada sobre la democratización de las instituciones locales. Así, en los estertores del franquismo cada vez fueron más los sectores de la ciudadanía albacetense que reclamaron, a través de la demanda de unas fiestas más participativas, mayores cotas de independencia y libertad en el disfrute del propio ocio, con la consiguiente frustración de las pretensiones dictatoriales de control político sobre la población.

8. REPRESIÓN Y ORDEN PÚBLICO. LA OTRA CARA DEL CONFLICTO

Durante 1976 las reivindicaciones de diferentes colectivos ciudadanos quebraron en numerosas ocasiones la estrecha legalidad franquista y amenazaron el mantenimiento del orden público. Es decir, se convirtieron en un problema político para la dictadura, a combatir las más de las veces a través de la represión. El aumento, durante el último año de vida del dictador y hasta la celebración de las primeras elecciones generales de 1977, en el número de amenazas, multas, sanciones, desalojos, detenciones y acciones violentas perpetradas en la provincia de Albacete, no sólo por el aparato oficial sino también por grupúsculos ultraderechistas, fue sin duda reflejo del aumento de la acción colectiva contraria a la dictadura. El incremento de la actividad coactiva de los aparatos represivos de los últimos Gobiernos del franquismo y los primeros de la Monarquía fue la respuesta a la intensificación en el nivel de amenaza política

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

impuesto por la movilización y la conflictividad social. Así, el objetivo de este capítulo es analizar el discernible aumento en la presión represiva de las autoridades como reflejo de la agudización del conflicto político y de la creciente efervescencia social. Como dice Tilly, el aumento de la actividad represiva de la autoridad tiene una base política en tanto que es el eco de la vigorización del enfrentamiento entre los contendientes por el poder (Tilly, 1997, 323-334).

La creciente preocupación de las autoridades ante la alteración del orden público y su disposición a mantener la "paz franquista" se dejó ver en el constante envío de circulares relacionadas con esta cuestión. En febrero de 1975 circuló en las dependencias del Gobierno Civil de Albacete una nota, enviada desde el Ministerio de Gobernación. En la misma se dio cuenta del "propósito de recrudecer e intensificar la campaña de acciones subversivas [...] encaminada a la provocación de paros, encierros, manifestaciones, difusiones de propaganda y publicación de noticias tendenciosas". Por tal razón se requirió a las autoridades provinciales "absoluta firmeza", la "inexcusable obligación de cumplir con el mayor celo y diligencia" y "mantener atención preferente a situaciones o posibles incidencias que habrá de procurar detectar con antelación en el territorio de su jurisdicción y corregir con la máxima diligencia y energía". En otra circular, ésta de principios de 1976, se aclararon los principios fundamentales a seguir para llevar a cabo un "coherente y actual entendimiento del orden público". Con tal objetivo fueron enumerados una larga lista de actos y actitudes que no debían "entenderse como tolerables en el mantenimiento de la paz interior". Entre otros muchos destacaron la "falta del debido respeto a la Institución o persona que encarna la soberanía nacional" o la "expresión apologética de la destrucción violenta o convulsión del orden institucional, político o social de España"[109]. Para perfeccionar las labores de control y mantenimiento del orden, en agosto de 1976, se aconsejó el "siguiente criterio: en cuanto se refiere a las

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ideas, debe prevalecer lo judicial, en la calle, las Fuerzas de Orden Público mantendrán o restablecerán el orden sin ninguna contemplación". Otras comunicaciones internas insistieron una y otra vez en la restricción al máximo de la "celebración sistemática y continuada de asambleas obreras". La razón estribó en que éstas "siempre se convierten en instrumentos de la subversión y nunca solucionan nada"[110].

Desde la muerte de Franco se hizo más que patente el cuestionamiento del "orden franquista". Ante la amenaza impuesta por la ascendente conflictividad, las jerarquías franquistas de la provincia no dejaron resquicio posible entre su discurso político y su comportamiento efectivo. Así, mostraron en todo momento su clara disposición a combatir la subversión con "prudencia, sin debilidad". En febrero de 1976 el gobernador civil manifestó públicamente la necesidad de "mantener la iniciativa a toda costa para hacer imposible toda ruptura"[111]. Bajo tal pretensión, la primera autoridad gubernativa avisó de que "toda actuación ilegal no puede ser tolerada", ya que la "lucha está planteada con el fin de llevarse a las masas". Por su parte, dejó claro que "no se tolerarán alteraciones del orden público", ya que en atención al mantenimiento del orden deseable "ningún grupo puede apoderarse de la calle". Asimismo, el capitán de la compañía de La Roda prometió en junio de 1976 que la Guardia Civil "continuaría siempre en la misma línea de salvaguardar el orden". En homenaje a la Policía Armada, celebrado en abril de 1976, el inspector general manifestó que "estamos compenetrados con la áspera misión de salvaguardar la paz en España, luchando por hacer vanos los turbios manejos y propósitos"[112]. Antes, en octubre de 1975, el comandante de la Guardia Civil de Albacete había asegurado que en la lucha contra el comunismo "ateo", "totalitario" y "avasallador", las "Fuerzas del Orden Público en primera instancia y el Ejército, cuando la gravedad así lo exija, no regatearán esfuerzos para aplastarle y aniquilarle"[113].

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Ante dicha manifestación pública de la voluntad de las autoridades provinciales por combatir cualquier alteración del orden, no fueron extrañas las multas y detenciones contra aquellos que se manifestaron o participaron en actos contrarios a la dictadura. Incluso las huelgas de carácter oficialista, como la ya mencionada huelga de los transportistas en febrero de 1976, acabaron con disturbios, detenciones, veinte procesados, expedientes, etcétera. Entre el cúmulo de denuncias y sanciones destacaron las multas gubernativas, coacciones y amenazas recibidas por el clero progresista durante el último año de vida del dictador. Éste fue el caso de los representantes de la Asamblea del Clero Rural que denunciaron escuchar muy a menudo aquello de "ten cuidado que las reuniones cuestan caras". En octubre, el párroco de Pozo Cañada recibió una carta "llena de insultos y con amenaza de muerte" proveniente de un grupo de extrema derecha. Meses después, en la localidad de Chinchilla, unos panfletos animaron a echar "fuera antes de que sea tarde" a dos sacerdotes tildados de "libertinos" y "comunistoides". En el mes de julio de 1975, el gobernador civil multó al párroco de la localidad de Nerpio por su homilía en referencia al *Desfile de la Victoria*. En la que se citó el *Documento de la Reconciliación*.

La intensa espiral represiva, con su punto culminante en las ejecuciones de septiembre de 1975, provocó la denuncia de algunos sacerdotes albacetenses contra los casos de violencia política. Sin que ellos mismos tardasen en ser víctimas de esa misma represión y fuesen sancionados por sus homilías críticas con la acción gubernativa y policial. Así, en septiembre de 1975, un eclesiástico fue multado y llevado a declarar ante la Guardia Civil por una homilía condenatoria de la represión estatal pronunciada en la iglesia de los Padres Capuchinos de la localidad de Hellín que fue condenatoria de la represión estatal. En octubre, las sanciones recayeron sobre el arcipreste de Hellín y el párroco de Pozo Cañada. Al mes siguiente fue el titular de la iglesia del Espíritu Santo de Albacete el sancionado por

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

unas peticiones que, a juicio de la autoridad, daban a "entender actuaciones injustas de las Fuerzas del Orden Público con la mala intención de desprestigiarlas". Dicho sacerdote fue llamado a declarar y posteriormente multado por el gobernador civil porque "en los momentos y circunstancias actuales la exhortación precitada no puede tener otra interpretación que la que se da en la denuncia, de clara y malintencionada alusión hacia las falsas actuaciones de las FOP, tendentes a su desprestigio". Esta labor punitiva sobre ciertos sectores de la iglesia albacetense llevó al obispo de la diócesis a defender a los párrocos más críticos. Para la primera autoridad eclesiástica de la provincia las sanciones civiles eran injustas porque "faltan los cauces oportunos para que las posibles infracciones sean juzgadas con objetividad"[114].

Con motivo de la muerte de Franco, los gobernadores civiles de diversas provincias, entre ellas Albacete, procedieron al levantamiento de las sanciones impuestas a sacerdotes por homilías "subversivas". El 9 de diciembre de 1975 el gobernador civil de Albacete recibió un fax del director general de Política Interior en el que se ordenó la "condonación de multas impuestas por infracciones impuestas en materia de orden público"[115]. Por este motivo, el gobernador Federico Gallo, invocando el "bien probado amor de Francisco Franco a la Iglesia", condonó las multas de los párrocos de Albacete, Nerpio y Hellín. Si bien para entonces la acción sancionadora contra párrocos jóvenes y muy comprometidos con la problemática diaria de sus parroquias había generado una importante deslegitimación del régimen entre ciertas feligresías. Para evitar la creciente politización provocada por la represión contra sacerdotes, en enero de 1976, el gobernador civil de Albacete recibió una nota del Ministerio de Gobernación en la que se destacaba que "el orden público ha alcanzado en algunas ocasiones índices apreciables de conflictividad con motivo de las homilías pronunciadas por las jerarquías eclesiásticas, por lo que esta Dirección General comunica a V. E. se sirva abordar

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tales temas con singular delicadeza"[116]. Este aviso suavizó la presión sancionadora contra los párrocos durante los meses siguientes. Aunque ésta reapareció en enero de 1977. Entonces, veintiún sacerdotes fueron retenidos en una reunión sobre sindicalismo agrario celebrada en el Centro Diocesano de Pastoral Rural de Fuensanta.

Tampoco se libró de las presiones gubernativas y del exhaustivo control policial un sector de la prensa provincial que cada vez se expresaba de forma más libre y crítica. En esta línea, el delegado local de *La Verdad* recibió en más de una ocasión requerimientos notariales para que desvelase sus fuentes. Su periódico fue apercibido en varias ocasiones de expediente sancionador y recibió amenazas por parte de grupos ultraderechistas. En junio de 1976 fueron llamados a declarar los periodistas que cubrieron una cena presidida por Ramón Tamames. También en el verano de 1976 el director del ortodoxo diario *La Voz de Albacete* fue detenido y llevado a declarar por encontrarse entre los participantes de la asamblea multitudinaria de Comisiones Obreras en el paraje de La Marmota. Entre la decena de detenidos con motivo de la jornada de lucha del 12 de noviembre de 1976 se encontró también un periodista de *Pueblo*, ya por entonces alineado con los sectores demócratas de la profesión, quien sufrió malos tratos "como advertencia al colectivo menos sumiso del periodismo local" (Gómez Flores, 1991, 208). En diciembre de 1976, *El País* publicó que habían sido "citados a declarar tres periodistas de Albacete". Se trataba de los "representantes de los tres diarios locales, *La Voz de Albacete*, *La Verdad* y el *Pueblo*, en su edición provincial, que asistieron para dar información a sus respectivos periódicos, de la presentación de una parte del Comité Provincial del Partido Comunista de Albacete"[117]. Poco después, fue el delegado de *La Verdad* en Albacete el que tuvo que visitar la comisaría por estar presente en la antes aludida reunión pastoral de Fuensanta.

Pero los periodistas no fueron los únicos presionados y férreamente vigilados durante estos meses. Valga como ejemplo el

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

"incidente surgido" en febrero de 1976 en Almansa "cuando a varios enlaces del Calzado se les requirió por la Guardia Civil para hacerles varias preguntas, indicándoles que solamente eran cuestiones estadísticas, siendo todo ello, al parecer, una indagación debida a los comentarios surgidos últimamente en relación con el establecimiento del nuevo Convenio para la Industria del Calzado"[118]. Igualmente, en la primavera de 1976, un trabajador que asistió a una asamblea de Comisiones Obreras a las afueras de la ciudad de Albacete fue detenido a su vuelta a casa y posteriormente interrogado. Todo ello aderezado con continuas coacciones como las del alcalde de Casas Ibáñez, quien amenazó con "tomar medidas oportunas" contra aquellos enseñantes de Magisterio que continuasen en huelga durante el otoño de 1976. El delegado de Correos en Albacete amenazó, ante la posibilidad de huelga, con la suspensión de contratos a los interinos y con la posibilidad de ser acusados por sedición debido a la interrupción del normal funcionamiento de un servicio público. Sin olvidar la estrecha vigilancia sobre los líderes de la oposición ejercida por la *Secreta* y policías de paisano que a veces se hacían pasar por representantes de comercio, trabajadores, etcétera.

Por otra parte, con el objetivo de erradicar cualquier trasgresión del orden que minase la propia legitimación de origen de la dictadura, en febrero de 1975, la Guardia Civil tuvo que intervenir para desalojar el local de la Hermandad de Labradores de Villamalea en el que se habían reunido 150 trabajadores en huelga. En los primeros días de 1976 la policía dispersó en varias ocasiones las manifestaciones en apoyo de los trabajadores del psiquiátrico encerrados en el Obispado. Meses después, las medidas de seguridad desplegadas para el Primero de Mayo de 1976 fueron más importantes de lo habitual. La Dirección General de Seguridad había prohibido desde semanas antes las manifestaciones ante el "objetivo inequívoco de crear un clima de intranquilidad ciudadana que propicia sus verdaderos e inconfesables

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

propósitos". En Albacete, la Guardia Civil dio al traste con varias asambleas en diferentes partes de la capital provincial, el gobernador civil no permitió una reunión para tratar los problemas del campo albacetense en Villamalea y en Almansa quedaron suspendidos varios actos en conmemoración del día de los trabajadores. En julio de este mismo año, la Guardia Civil y la Brigada Político Social pusieron fin a la asamblea multitudinaria de Comisiones Obreras y Comisiones Campesinas en La Marmota. En agosto, la Guardia Civil detuvo a nueve asistentes a una asamblea en Villamalea. En septiembre, la Policía dio, a punta de metralleta, por terminado otro acto en Villamalea y condujo a varios de sus asistentes al cuartel. Un mes antes "una pareja y un sargento de la Benemérita" clausuraron una asamblea organizada en esta misma localidad, deteniendo a los tres organizadores. Según el Gobierno Civil, en 1976 se produjeron "varios desórdenes públicos en la capital y Villamalea, los cuales, y por la rápida intervención de la Fuerza Pública, obstaculizaron la inicial formación y posteriores reagrupamientos [...] Se realizaron algunas detenciones y se instruyeron las oportunas diligencias que pasaron a los organismos y jurisdicciones competentes"[119].

En respuesta a la situación social y política surgida tras la muerte de Franco, las autoridades civiles habitualmente siguieron el "principio general inspirador" de "favorecer el mantenimiento del orden público en caso de duda sobre la conveniencia de autorizar el acto". Por tal motivo, en el mes de octubre de 1976 el gobernador civil de Albacete, ante la posibilidad de que se produjesen disturbios, denegó la autorización a una manifestación de adhesión a su propia figura programada por los sectores más adictos. Las autoridades dejaron claro que "no se tolerarán tampoco los encierros en cualquier otra clase de edificios, incluidas las iglesias". Sin embargo, en ese mismo mes de octubre unos cuatrocientos agricultores de Villamalea se encerraron en la iglesia del pueblo como medida de protesta por la prohibición de una asamblea de las

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Comisiones Campesinas. Finalmente, el desalojo se produjo de forma pacífica y no hubo detenciones, pero se desplegó un importante cordón policial por toda la localidad y sus accesos[120].

En otras ocasiones la acción policial dejó un importante balance de magullados y detenidos. Éste fue el caso, entre otros muchos ejemplos, de la manifestación espontánea que recorrió las calles de la capital provincial tras ser suspendido un recital de canción protesta con la toma policial del campo de fútbol en el que se iba a realizar. Estas situaciones de violencia colectiva habitualmente fueron provocadas por la actuación policial al reprimir y dispersar acciones pacíficas. En más de una ocasión los sindicatos y partidos de la oposición democrática protestaron contra la expeditiva acción de la Policía ante la que "no medió por parte de los manifestantes ningún tipo de provocación a la fuerza pública". Tras la desautorización de la conferencia de CC OO en la I Semana Sindical de Albacete de septiembre de 1976, Marcelino Camacho y Venancio Cuenca intentaron ofrecer su charla en las mismas puertas de la sede provincial de la OS, pero la actuación policial no lo permitió. En señal de protesta se organizó una manifestación a favor de la amnistía y pidiendo la dimisión del gobernador. Las autoridades hablaron de "incidentes leves", pero la verdad es que la brigada antidisturbios se empleó de forma expeditiva. Al día siguiente, el padre de uno de los participantes escribió una carta a la prensa mostrando su malestar porque su hijo había llegado a casa "apaleado todo su cuerpo" por el mero hecho de "haber gritado libertad y democracia"[121]. La CNT tampoco pudo participar en la Semana Sindical. Para mostrar su descontento, organizó su presentación oficial en la propia calle debido a la desautorización del gobernador civil para hacerla en la Casa Sindical. Como resultado, unas doscientas personas se congregaron en las puertas del edificio de Sindicatos y fueron dispersadas violentamente por la Policía.

En noviembre, los asistentes a una asamblea en Villamalea tuvieron que esconderse en una huerta para evitar la violencia de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

varias docenas de guardias civiles enviados por el gobernador. Tras la detención en el mismo mes de Santiago Carrillo y otros siete dirigentes del Partido, un centenar de personas se manifestaron en Albacete para pedir la puesta en libertad del líder comunista. Una vez más, las fuerzas del orden reprimieron violentamente la manifestación. Con motivo de la jornada de lucha convocada por la COS para el 12 de noviembre de 1976, en la ciudad de Albacete "durante más de una hora, las calles del centro fueron escenario de carreras, saltos, golpes, persecuciones y actuaciones desmedidas y violentas que produjeron varios heridos de diversas consideración" (Gómez Flores, 1990, 208). La manifestación, que a pesar de las amenazas disuasorias contó con algo más de medio millar de participantes, fue duramente reprimida por las fuerzas de seguridad con la colaboración de elementos ultraderechistas armados con cadenas y palos. En total, hubo trece detenidos. Algunos de ellos sufrieron malos tratos y posteriores despidos y represalias laborales. En aquella ocasión, las "fuerzas represivas se emplearon a fondo contra la multitud que asomaba por las calles confluyentes a la plaza Gabriel de Lodares", llegándose a ver incluso a "policías de paisano empuñando pistolas amenazadoramente" (Mata, 2002, 84). Durante estos mismos días, el ordenanza de la Hermandad de Labradores de Villamalea fue despedido y desalojado de su puesto de trabajo por parte de la Guardia Civil. En respuesta, las calles del pueblo se llenaron en una manifestación contra dicho despido que fue dispersada por las fuerzas del orden con especial violencia. Fueron detenidos varios de los cabecillas de la manifestación, y el pueblo tomado militarmente ante la decidida resistencia de los vecinos (Sanz Díaz, 2003, 270). Por lo tanto, se puede considerar, como han hecho otros autores, a la violencia política, principalmente causada e intensificada por la actuación de las fuerzas del orden público, como a un subproducto más de la lucha por el cambio político y su represión (Tilly, 1997, 291). Es decir, la creciente

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

presión represiva fue el reflejo de la existencia de un importante conflicto político. El resultado de dicho conflicto parecía, a la altura de 1976, estar íntimamente relacionado con el control del espacio público.

Por otra parte, desde algunos meses antes de la muerte de Franco fue continua la prohibición de actividades de tipo cultural o de ocio. En septiembre de 1975 no se autorizaron la conferencia de Ramón Tamames y las actuaciones de Carcoma y Manuel Gerena con motivo de las fiestas populares de Villamalea[122]. En diciembre de este año el gobernador volvió a prohibir una conferencia, en este caso se trataba de Miguel Ángel Mateo. Este catedrático e historiador no halló local en toda la ciudad en el que pronunciar una conferencia sobre técnicas electorales. No hay que olvidar que incluso ANEPA encontró problemas para organizar un coloquio en febrero de 1975 en el salón del Colegio de Farmacéuticos de Albacete, hasta que se aclaró que aquél era un "acto político muy en la línea del Movimiento". En enero de 1976 fue prohibida la charla de Marcelino Camacho en la Librería Popular. En mayo no fue permitida la conferencia de Pablo Castellanos, y poco después fue Alfonso Guerra quien sufrió la suspensión gubernativa de su charla programada en la Librería Popular para el 20 de julio. En aquel caluroso mes de julio de 1976, la primera medida del nuevo gobernador no fue otra que desautorizar una conferencia coloquio de Coordinación Democrática. Poco después Francisco García Salve no pudo firmar ejemplares de *Gaceta de Derecho Social* en su visita a la Feria del Libro de Albacete.

Aquellos que sufrieron la prohibición gubernativa para manifestar sus ideas en los eventos organizados por la Popular, encontraron una válvula para expresar su opinión en las páginas del diario *La Verdad* o en *cenas políticas* celebradas de forma paralela a los actos de la librería. Si bien tales cenas también contaron con una estricta vigilancia. Éste fue el caso de la *cena política* con Nicolás Sartorius

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

y Sánchez Montero en febrero de 1976. Los comensales invitados a la misma sufrieron la atenta mirada de unos cuantos agentes que a medianoche decidieron dar por concluida la velada. Alfonso Guerra pudo asistir a una cena política en la que, ante la presencia policial, los asistentes silbaron la Internacional. Al día siguiente, según el periódico *La Verdad*, "quizá de ahora en adelante el Gobierno Civil necesite un agregado musical que oriente sobre lo que se puede o no se puede cantar en este país". Cuando Marcelino Camacho regresó a Albacete, en septiembre de 1976, no pudo asistir a la cena programada porque el restaurante estaba cerrado y varias unidades policiales vigilaban el recinto. En definitiva, como denunció el colectivo Sagato, en los meses finales de la dictadura, entre las autoridades albacetenses existió una inquebrantable voluntad de "controlar a todo aquel que se compromete un poco en la vida política", de "asistir en plan de espías a toda conferencia que se de con signo político" o detener sin miramientos a quien porta "unos libros o unas hojas que se dicen propaganda ilegal"[123].

La conflictividad social vivida en la provincia de Albacete durante la etapa terminal de la dictadura no fue arrolladora ni desestabilizó profundamente al régimen franquista. Sin embargo, fue lo suficientemente contenciosa como para representar un preocupante desafío político para las autoridades y para aquellos sectores más adeptos al franquismo. Amenaza que atizó la movilización de los grupos adictos de la dictadura. Por ejemplo, en la multitudinaria concentración de adhesión a Franco tras las ejecuciones de septiembre de 1975 que tuvo lugar frente al Gobierno Civil de Albacete, el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil arengó a "pasar de la abstención o pasividad ante el aparato subversivo a un activismo tan militante como el de esos malvados que viven en la clandestinidad o del terrorismo". Así lo hizo aquella parte del franquismo provincial más reaccionario, especialmente la que se vio más amenazada y hostigada por el aumento de las protestas y el desarrollo de la actividad terrorista.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

No es casualidad, por tanto, que el franquismo más recalcitrante llamase a la movilización precisamente cuando la presión internacional contra el régimen crecía y diferentes grupos sociales expresaban su descontento con mayor decisión.

Por tanto, se puede decir que la conflictividad social alimentó la aparición de contramovimientos de extrema derecha. Éstos, plácidamente atrincherados hasta entonces en la burocracia estatal, en el aparato vertical y en las fuerzas policiales y militares de la provincia, comenzó a reorganizarse. Su objetivo no fue otro que el de conseguir por todos los medios la pervivencia de la dictadura franquista, aunque fuese sin Franco. Sus actos violentos se vieron facilitados porque las mismas fuerzas de seguridad dispuestas a evitar cualquier alteración del orden provocado por los grupos de oposición a la dictadura, mutaron en transigentes ante la violencia ultraderechista. Es decir, se produjo una multidimensionalidad del Estado que permitió conjugar la dura presión represiva contra los grupos de oposición democrática con la tolerancia frente al pistolerismo de la ultraderecha bunkerizada. Como comentaba la prensa local en mayo de 1976 "algunos se empeñan, con permiso al parecer de la autoridad, en hacer imposible la convivencia". Poco después, este diario volvió a criticar que "mientras para unos se intenta negar o reprimir cualquier intento de manifestación puramente cultural, para otros se dan las máximas facilidades y se intentan paliar actos, como las pintadas, que no tienen porque tener la más ligera justificación". En estos meses, desde diversos sectores democráticos de la provincia se denunció la actitud de la autoridad competente que "contempla tales formas de expresión [las amenazas de la ultraderecha] con una aparente pasividad", e incluso a veces "dando la impresión de conformidad".

Tras la muerte de Franco, aunque también con anterioridad, se sucedieron las amenazas recibidas por *La Verdad*, párrocos progresistas o la Librería Popular de parte de grupos ultra, además de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

pintadas contra los partidos políticos de izquierdas habitualmente firmadas por GCR (Guerrilleros de Cristo Rey) y GAC. Ya en abril de 1975 el empresario de cine que se había decidido a proyectar la película *La prima Angélica* recibió numerosas amenazas por parte de grupúsculos de extrema derecha. En noviembre de 1975 los Guerrilleros de Cristo Rey enviaron un escrito con amenazas de muerte al párroco de Pozo Cañada, dándole veinte días para que abandonara la parroquia. Durante los primeros meses de 1976 aparecieron pintadas en diversos colegios de la capital provincial que decían "Carrillo, no". En febrero la prensa señaló que "tiene una vigorosa actividad adhesiva en la ciudad el grupo político de ultraderecha Fuerza Nueva. Algunos escaparates, y más concretamente el de una librería, es una de las zonas favoritas para colocar sus anuncios que tienen de fondo los colores de la bandera nacional y una única inscripción: Fuerza Nueva"[124].

Las celebraciones del Primero de Mayo de 1976 en Villamalea fueron boicoteadas por un grupo de extrema derecha "perfectamente organizado para lucha" y llegado de afuera, que protagonizó una violenta reyerta callejera con los jóvenes del pueblo en la que "hubo sangre y heridos". Según algún testigo "hubo intervención de la Guardia Civil, pero no hizo nada más que separar, pero no hubo sanciones, ni encarcelamientos, ni juicio ni nada"[125]. La Librería Popular denunció el "ambiente hostil hacia la librería" por parte de determinados grupos aficionados a las "amenazas, coacciones y provocaciones de todo tipo". A finales de abril de 1976 la fachada de este establecimiento amaneció llena de pintadas en las que se podían leer "Dios y Patria con Franco" o "Viva la Falange". Cuando sus propietarios se dispusieron a denunciar el caso, la autoridad encargada se negó a dar trámite a la denuncia, ya que "las frases que en las paredes y persianas se han pintado son de carácter legal". El 26 de noviembre de 1976 la Librería Popular fue víctima de un atentado con bomba perpetrado por un grupo de extrema

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

derecha denominado VI Comando Adolfo Hitler. Tras el atentado no hubo ningún detenido, ni se realizaron interrogatorios a excepción de los sufridos por los propios dueños del establecimiento. Éstos aportaron una importante información en comisaría. Pero fue desatendida por los responsables del orden público que prefirieron hacer correr el rumor de que la bomba había sido instalada por los propios propietarios de la Popular. Poco después del atentado, otro anónimo enviado a la Librería Popular decía "volaremos nuevamente vuestra asquerosa y repugnante madriguera, ¡¡Arriba España!!".

En los primeros meses de 1977 siguieron sucediéndose las provocaciones de la extrema derecha. Así, no trascendió si el incendio de la librería El Maestro, como se creía, fue intencionado. También hubo amenazas de bomba en la Residencia de la Seguridad Social en la que trabajaban algunos militantes comunistas, además de pintadas e insultos a miembros y militantes de las organizaciones de izquierdas. Éstos se sentían vigilados por la Policía y la gran mayoría de ellos se encontraban fichados, pero en ocasiones "te daban más miedo los *fachas* organizados"[126]. Algunos militantes de la oposición fueron seguidos por grupos de extrema derecha, recibieron amenazas telefónicas, algunas pintadas en sus domicilios con amenazas de muerte, agresiones, altercados en bares, etcétera. Sin embargo, no se produjo ni una sola detención de activistas de los grupúsculos más ultramontanos, aunque "en Albacete, si se quiere, tienen fácil localización"[127]. Para finalizar con este rosario de actuaciones de los comandos de ultraderecha, en marzo de 1977, durante la visita de Carrillo a Tarazona, Madrigueras y Villamalea, se dio marcha atrás a un complot ideado por los sectores más retrógrados y nostálgicos del franquismo para asesinar al líder comunista en la última de estas localidades.

En definitiva, se puede decir que la crisis del régimen franquista no fue simultánea a la desmembración de los poderes del Estado (Casanova, 1996, 45). La invulnerabilidad de éste y su disposición

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

y capacidad de mantener el orden, marcaron los límites del cambio político y el control del proceso de democratización por parte de aquellos sectores reformistas del franquismo que controlaron los aparatos estatales de coerción (Kohler, 1995, 105-107). Asimismo, la violencia ultraderechista provocó la moderación de los grupos de oposición ante la amenaza involucionista y el efecto desestabilizador del terrorismo y de la crisis económica. No obstante, la creciente actividad coercitiva del Estado y la violencia ultra fueron el eco de un enconado conflicto político y pusieron de manifiesto la creciente dificultad de la dictadura para mantener el control político de la población y asegurar el orden público en el que descansó su propia existencia.

NOTAS

1. *GDS*, diciembre, 1975.
2. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete, caja 67, carpeta 5/3.
3. *GDS*, diciembre, 1975.
4. AHGCA. Memorias del Gobierno Civil (1975).
5. AHGCA. Memorias del Gobierno Civil (1976).
6. AHM. Libro de Actas del Pleno, 1-2-1976.
7. *LV*, 11-10-1975.
8. AHGC. Memorias del Gobierno Civil (1976).
9. *LV*, 29-1-1976.
10. *LV*, 10-7-1976.
11. *LV*, 8-2-1976.
12. AHPGC. Memorias del Gobierno Civil (1976).
13. *LV*, 28-2-1976.
14. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2146.
15. *La Voz de Albacete*, 28-3-1976.
16. *LV*, 22-1-1976.
17. *GDS*, nº 56-57, 1976.
18. *GDS*, nº 59, 1976.
19. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia. Caja 2141.
20. *LV*, 13-5-1976.
21. *El País*, 18-08-1976.
22. *LV*, 12-3-1976.
23. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares Interior. Caja 2144.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

24. *LV*, 7-1-1976.
25. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia. Caja 2144.
26. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2146.
27. *LV*, 2-1-1976.
28. *LV*, 10-1-1976.
29. AHPGC. Memorias del Gobierno Civil (1976).
30. *LV*, 2-3-1976.
31. FLC. Informes. Sig. 002809-010.
32. FLC. Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT. Correspondencia con uniones territoriales (Albacete). Sig. 002501-004.
33. *LV*, 30-1-1976.
34. *LV*, 6-2-1976.
35. *LV*, 5-6-1976.
36. *LV*, 6-4-1975.
37. *LV*, 14-1-1976.
38. *LV*, 18-1-1976.
39. *LV*, 20-5-1976.
40. *LV*, 9-1-1976.
41. AHPGC. Derechos ciudadanos. Asociaciones. Caja 766.
42. AHPGC. Derechos ciudadanos. Asociaciones. Caja 764.
43. *LV*, 18-10-1974.
44. AHPGC. Derechos ciudadanos. Asociaciones. Caja 765.
45. AHPGC. Derechos ciudadanos. Asociaciones. Caja 768.
46. *LV*, 4-12-1976.
47. *LV*, 5-12-1976.
48. *LV*, 17-3-1976
49. AHJOC. Zona Levante-Sureste. Diócesis de Albacete. Caja 96.
50. AHPGC. Derechos ciudadanos. Asociaciones. Caja 765.
51. SEFT. Entrevista con Antonio Pérez (12-12-2005).
52. AHPDJ. Participación. Caja 28681.
53. *LV*, 12-10-1976.
54. *LV*, 28-7-1974.
55. SEFT. Entrevista con Victoria Delicado (14 y 29-5-2007).
56. SEFT. Entrevista con Pepe Tendero (23-5-2007).
57. *LV*, 3-10-1976.
58. AHPGC. Derechos ciudadanos. Asociaciones. Cajas 764 y 765.
59. FPM. AHT. *BDI*, nº 8, diciembre, 1974.
60. *LV*, 12-3-1977.
61. AHPCE. Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3.
62. *LV*, 5-5-1976.
63. *LV*, 26-12-1976.
64. Oficina Municipal de Planeamiento (1982): *Albacete: una aproximación a su realidad urbana*. Ayuntamiento de Albacete, p. 79.
65. AHPGC. Derechos ciudadanos. Asociaciones. Caja 765.
66. *LV*, 11-1-1977.
67. SEFT. Entrevista con Andrés Gómez Beteta (5-4-2005).
68. *LV*, 9-10-1974.
69. *LV*, 26-10-1976.
70. SEFT. Entrevista con Juan Fernández Selva (18-1-2006).
71. *LV*, 10-8-1977.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

72. SEFT. Entrevista con Juan Fernández Selva (5-4-2006).
73. *LV*, 3-10-1974.
74. *LV*, 31-5-1975.
75. SEFT. Entrevista Juan Fernández Selva (5-4-2006).
76. *LV*, 18-3-1975
77. *LV*, 28-9-1975.
78. *LV*, 27-6-1975.
79. Asociación de vecinos de los barrios de San Pedro y Mortero: *Estatutos de la Asociación de Vecinos de los Barrios de San Pedro y Mortero*. Albacete, febrero de 1977.
80. SEFT. Entrevista con Juan Fernández (14-4-2006).
81. SEFT. Entrevista con Andrés Gómez Beteta (22-4-2005).
82. El concepto de "contraespectáculo antihegemónico" en los términos planteados por Gramsci proviene de Ealham, 2005, 96.
83. *LV*, 27-6-1976.
84. *LV*, 17-10-1976.
85. SEFT. Entrevista con Salvador Jiménez (24-5-2007).
86. AHGC. Memorias del Gobierno Civil (1976).
87. *LV*, 12-9-1976.
88. SEFT. Entrevista con Luis Collado (15-4-2005).
89. *LV*, 7-1-1977
90. AHPOS. Asistencia y Promoción. Caja 2043.
91. AHPGC. Derechos ciudadanos. Asociaciones. Caja 764.
92. SEFT. Entrevista José Maria López Ariza (9-3-2005).
93. SEFT. Entrevista con Victoria Delicado (29-5-2007).
94. *La Voz de Albacete*, 20-3-1976.
95. *LV*, 21-3-1976.
96. *LV*, 30-9-1976.
97. AHPGC. Circulares Orden Público. Caja 2831.
98. *LV*, 19-6-1976.
99. AHPGC. Circulares Orden Público. Caja 2831.
100. *LV*, 9-5-1976.
101. AHGC. Memorias del Gobierno Civil (1976).
102. *LV*, 14-7-1974.
103. *LV*, 31-8-1975
104. SEFT. Entrevista con Julián Gómez (1-6-2007)
105. *LV*, 26-9-1976.
106. *LV*, 1-10-1976.
107. Entrevista con Juan Fernández Selva (28-1-2006).
108. *LV*, 4-11-1975.
109. AHPGC. Circulares Orden Público. Caja 125.
110. *LV*, 26-10-1976.
111. AHM. Libro de Actas del Pleno, 1-2-1976.
112. *Albacete Sindical*, nº 11, 1976.
113. *LV*, 11-10-1975.
114. *LV*, 12-10-1975.
115. AHPGC. Circulares Orden Público. Caja 2831.
116. AHPGC. Circulares Orden Público. Caja 125.
117. *El País*, 17-12-1976.
118. AHPOS. Delegación Comarcal de Almansa. Delegación Comarcal. Caja 3874.
119. AHGC. Memorias del Gobierno Civil (1976).
120. LV, 26-10-1976.
121. LV, 30-9-1976.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

122. LV, 10-9-1975.
123. LV, 13-1-1977.
124. LV, 4-2-1976.
125. SEFT. Entrevista con Julián Gómez (1-6-2007).
126. SEFT. Entrevista con Victoria Delicado (29-5-2007).
127. LV, 4-2-1977.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CONCLUSIONES

La primera conclusión que se puede extraer de la lectura de este libro es que la sociedad albacetense de los últimos años de la dictadura franquista no estuvo tan desmovilizada, ni fue tan apática e impasible como habitualmente se ha sugerido. A lo largo de este trabajo se ha demostrado que la movilización acaecida en esta provincia se desplegó en íntima conexión con las oportunidades y amenazas derivadas de los procesos sociales, políticos y económicos acontecidos a nivel general. Durante la parte final de la dictadura existió una clara interrelación entre el crecimiento de la contestación en una provincia como Albacete y las oscilaciones en el contexto sociopolítico y económico del país. Hecho este que introduce la realidad provincial en los avatares de la política general y en las luchas sociales por el poder a nivel nacional. En definitiva, no se pueden comprender las dinámicas sociales y políticas experimentadas por la provincia durante el periodo estudiado sin tener en cuenta que éstas formaron parte de un ciclo general de extensión y profundización del conflicto que durante los años setenta contribuyó a desgastar las estructuras de la dictadura franquista y a facilitar el cambio democrático.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Sin embargo, por otra parte, no se puede obviar la innegable existencia durante el periodo estudiado de actitudes de pasividad, conformismo y miedo entre diversos sectores de la sociedad albacetense. Se ha demostrado que la situación social y política que vivió la provincia durante el franquismo tardío distó de corresponderse con una plácida "balsa de aceite". No obstante, la escasa politización popular y la pusilanimidad de las organizaciones contrarias a la dictadura en provincias de este tipo, rurales y subdesarrolladas, dificultó e hizo imposible la ruptura preconizada por la oposición democrática. La inacción, el desinterés y la pavura de ciertos colectivos sociales estuvieron relacionados con el modesto efecto que en esta provincia tuvieron el acelerado crecimiento económico, las profundas transformaciones sociales y las oportunidades políticas abiertas por la Ley de Convenios Colectivos de 1958. Por consiguiente, si casos como el albacetense sirven para ilustrar la extensión y expansión de una presión popular que, cada vez más numerosa y diversificada social y geográficamente, consiguió desbaratar cualquier proyecto pseudorreformista de pervivencia del franquismo, también son ejemplo de las debilidades del antifranquismo incapaz, ante su escasa inserción en el tejido social de la España más rural y atrasada, de forzar una salida rupturista al largo túnel de la dictadura.

Bajo un escenario principalmente rural y agrario, marcado —aunque con algunas excepciones— por el subdesarrollo económico, el retardo sociocultural, el desempleo y la emigración, no extraña que las grandes huelgas y los conflictos estridentes representasen situaciones poco comunes durante este periodo en la provincia de Albacete. Sin embargo, la ausencia de protestas visibles y con una importante carga disruptiva no agotó el catálogo de formas de conflicto. Como tampoco implicó una absoluta aprobación, colaboración y lealtad de la clase trabajadora albacetense con el poder patronal o vertical. Como se ha podido apreciar, la ausencia de grandes conflictos colectivos no estuvo tan relacionada con la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

aceptación y el consentimiento del orden sociopolítico impuesto como con el miedo y las debilidades estructurales nacidas de la represión, la dispersión, la eventualidad, la incapacidad organizativa, etcétera. Allí donde existieron pocas posibilidades para la acción colectiva, las formas anónimas de protesta (absentismo, boicot, indisciplina, etcétera) fueron las únicas herramientas de resistencia y defensa eficaz. En suma, la falta de atención a las turbulencias que recorren las profundidades de un mar aparentemente en calma condena al sumiso consentimiento a grupos que únicamente pudieron manifestar su descontento a través de los repertorios posibles en escenarios atrasados y empobrecidos, donde la rebelión abierta fue algo más que excepcional.

La aún escasa historiografía sobre el comportamiento y las actitudes de los colectivos radicados en los medios rurales y agrarios de la España del tardofranquismo ha acentuado la pasividad y la desmovilización de estas comunidades. En efecto, durante los años sesenta y setenta la situación social del campo albacetense estuvo lejos de reflejar una realidad convulsa o turbulenta. Sin embargo, la preeminencia del estudio del conflicto industrial y urbano ha ignorado la continuidad en el medio rural de eficaces formas tradicionales de protesta y de acción popular. En efecto, sobre un fondo agrario, despoblado y empobrecido, aparentemente tranquilo y sosegado, se reprodujeron numerosos repertorios de movilización, primitivos o tradicionales, que pervivieron hasta los años finales del franquismo en base a su importante eficacia en la reproducción social, simbólica y económica de los grupos rurales a partir de la utilización de recursos, estrategias y experiencias de acción comunitaria.

Así, a través del impago de impuestos, la ocultación de la cosecha, la resistencia a la concentración parcelaria, la defensa de los derechos tradicionales sobre los montes y tierras de pasto, etcétera, los vecinos manifestaron su voluntad, lejos de la absoluta indiferencia, por intervenir en los asuntos públicos y políticos de la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

comunidad. Éstos no se movilizaron en reacción instintiva y espasmódica ante las malas cosechas, granizos, sequías, etcétera. Los perniciosos efectos materiales de las mismas se insertaron en un denso conglomerado simbólico de derechos y obligaciones recíprocas, costumbres y normas sociales aceptadas y compartidas por la comunidad. La percepción cotidiana acerca de las dificultades de la reproducción material estuvo mediada y filtrada por unos significados colectivos que fundaron cierto consenso popular acerca de lo legítimo y lo ilegítimo. Como se ha podido apreciar, las formas tradicionales de resistencia y movilización descansaron en una densa red de significados, concepciones y símbolos sobre los derechos y deberes entre las autoridades y sus gobernados. Fueron reflejo de las experiencias compartidas y de las definiciones comunes que las clases populares del campo albacetense tuvieron sobre la justicia y de las obligaciones asistenciales atribuidas a las autoridades locales.

El mejor ejemplo de una comunidad rural decididamente movilizada en la defensa de sus intereses fue el caso de Villamalea. En esta pequeña localidad, un grupo de militantes comunistas, con el apoyo de otros vecinos del pueblo, decidieron influir en los asuntos públicos y políticos en los que se ventilaban los intereses del vecindario a través de la presencia en las instituciones locales. Bajo este propósito, el movimiento liderado por el PCE consiguió controlar la Cooperativa de San Antonio Abad, la Hermandad de Labradores, la Caja Rural, el Club de Amigos de la UNESCO, la Cooperativa de Consumo Robert Owen, el Bar-Televisión, el club de teatro, la biblioteca, etcétera. Desde todos estos organismos, el PCE organizó una potente lucha abierta y legal, haciendo de instituciones de control franquista verdaderas plataformas de aprendizaje político y reivindicación. Dicha movilización, más que ser el resultado de un modelo ideológico, básicamente respondió a las necesidades de defensa colectiva de los intereses de los agricultores y las clases populares en el marco de una dictadura como la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

franquista. Por lo tanto, el progresivo apoyo popular a las demandas de tipo político y democrático se desprendió de las reivindicaciones más sentidas por los habitantes del pueblo y del trabajo sindical y social a nivel de base.

Por otra parte, el caso de Villamalea es ejemplo de que el trabajo abierto y legal de los militantes de la oposición, junto a su compromiso realista y responsable con los problemas cotidianos del pueblo, fraguó vínculos de simpatía y solidaridad entre aquellos y el resto del vecindario. Las consecuencias se tradujeron en un importante cambio en la consideración social de la represión. En la parte final del franquismo, ésta ya no golpeaba, como en décadas anteriores, a grupúsculos desconocidos de activistas clandestinos. Por el contrario, en los años finales de la dictadura, dicha violencia estatal se cernió sobre trabajadores que previamente, a través del compromiso diario, se habían ganado el apoyo y la confianza de la mayoría de sus convecinos. Así, como se ha podido comprobar, cuando la represión se desató contra aquellos más valorados y respetados por la comunidad, los conflictos politizados y radicalizados no tardaron en aparecer.

La ausencia de grandes huelgas y conflictos colectivos habitualmente ha sido esgrimida para realzar los apoyos sociales de los que disfrutó la dictadura franquista en provincias como Albacete. Pero también para poner de relieve la evidente existencia de una amplia mayoría social silenciosa, conformista y apática. Sin embargo, aún teniendo en cuenta los soportes sociales sobre los que descansó el franquismo, la inexistencia de contestación políticamente articulada no significa necesariamente la absoluta aceptación y legitimación del orden político existente. En este caso cabe apreciar que durante la parte final del franquismo, los albacetenses fueron objeto de una trasformación cotidiana y silenciosa que se tradujo en la aparición de nuevos hábitos, prácticas sociales y percepciones de la realidad política de la provincia y del país que, sin duda, contribuyó decisivamente a facilitar el camino hacia la transición democrática.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Sin embargo, tal evolución en las actitudes, los comportamientos y las ideas no nació de la nada. Ni fue el simple producto mecánico del desarrollo económico y de las transformaciones sociales del periodo. Como se ha probado, en dicha evolución cumplió un papel muy importante el sigiloso y cotidiano proceso de contacto, experimentación, aprendizaje y legitimación de las ideas y valores democráticos. Es decir, la movilización micro, latente y sumergida en la cotidianeidad de la sociedad civil, que puso las bases para la incipiente construcción de la ciudadanía democrática. Dicha construcción se vio facilitada por la promulgación de la Ley de Asociaciones de 1964. Ésta marcó, aun a sabiendas de sus limitaciones, un progresivo cambio en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, que contribuyó a ir pavimentando el camino hacia la transición democrática. Como se ha visto, la Ley de Asociaciones de 1964 trajo consigo en la provincia de Albacete un considerable aumento tanto en el número de asociaciones como en la diversidad de las mismas en relación con las décadas de los años cuarenta y cincuenta. Las nuevas asociaciones, aunque mayoritariamente de tipo recreativo y controladas políticamente, ofrecieron ciertos márgenes de maniobra aprovechados por una minoría de ciudadanos para abrir menudos, aunque crecientes, huecos de autonomía en el seno de la sociedad civil. Algunas asociaciones, como las de vecinos o las de padres de alumnos, encarnaron útiles instrumentos de participación en la arena pública a través de la interacción y negociación con las autoridades con el objetivo de influir sobre las normas de la vida política y defender la existencia de una voz autónoma, representativa y capaz de velar por los intereses de la comunidad.

En definitiva, se puede decir que la emergencia de este incipiente tejido asociativo fue reflejo de un gradual y sostenido proceso de reconstitución de la sociedad civil a largo plazo. El mismo hundió sus raíces en la segunda parte de la década de los sesenta y eclosionó con mucha mayor decisión después de la muerte de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Franco con la aparición de clubes y asociaciones juveniles, culturales, teatrales, feministas, cineclubs, etcétera. Destacaron especialmente las asociaciones de vecinos. El objetivo inicial de sus socios fue la mejora de las condiciones de vida en las barriadas. No obstante, la desatención por parte de unos gobernantes locales no representativos provocó la crítica contra las autoridades y la progresiva demanda de los derechos políticos necesarios para una mejor defensa de sus intereses. Un factor importante en el desarrollo del movimiento vecinal, además de la participación de curas obreros, grupos cristianos y militantes de la oposición, fue el asesoramiento y la ayuda técnica de jóvenes profesionales como arquitectos, abogados, sanitarios, etcétera. Muchos de los cuales procedieron de las huestes politizadas del movimiento estudiantil en la universidad y generalmente estuvieron vinculados a alternativas democráticas. Sin olvidar a este respecto la difusión adquirida por las reclamaciones procedentes de las barriadas gracias a la labor de un determinado tipo de prensa, como *La Verdad*, preocupada por la problemática ciudadana. Como se ha puesto de manifiesto en este trabajo, en el discurrir cotidiano de los grupos vecinales se reprodujeron formas de organización democrática envueltas habitualmente en el lenguaje de la participación. Dichas prácticas se canalizaron en asambleas en las que los vecinos pudieron asistir, participar y exponer sus inquietudes. De este modo, el movimiento vecinal contribuyó a extender ciertas prácticas democráticas, así como un mayor interés de sectores ciudadanos por los problemas públicos y comunitarios. Todo ello sustanciado en la crítica hacia unas autoridades municipales exhaustas económicamente, atenazadas por el centralismo, no representativas y progresivamente contestadas.

Durante la primera parte de la década de los sesenta la provincia de Albacete vivió una tranquila situación social. Este apacible panorama comenzó tímida y lentamente a cambiar durante los años finales de la década. Sobre todo debido a la movilización de un

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

núcleo cristiano de empleados de banco, de un combativo movimiento campesino en Villamalea liderado por el PCE y de una minoría de eclesiásticos descontentos con las relaciones de poder dentro de la Iglesia y la colaboración de la misma con la dictadura franquista. Sin embargo, durante la parte final de los sesenta e inicios de los setenta, a pesar de la existencia de núcleos de apostolado obrero en el calzado almanseño y de comisiones comunistas en Renfe y en Villarrobledo y de algún movimiento estudiantil en la capital provincial, la protesta no pasó de ser débil, efímera y aislada. Fue posteriormente, en el periodo transcurrido entre el asesinato del presidente del Gobierno Carrero Blanco, en diciembre de 1973, y la muerte de Franco, en noviembre de 1975, cuando el ambiente social en la provincia de Albacete experimentó una conflictividad más contenciosa y regular.

Se puede decir que tal aumento de la contestación formó parte de un proceso de efervescencia más general y cada vez dirigido con mayor decisión contra el poder político. La conflictividad social creció en Albacete al calor de un ciclo de protestas a nivel nacional que durante la década de los setenta se fue intensificando y extendiendo —aunque con diferente frecuencia e intensidad— a nuevas zonas antes poco movilizadas. Dicho ciclo había emergido previamente, durante los años sesenta, en los principales centros urbanos e industriales del país. Desde entonces, la lucha protagonizada por los colectivos "adelantados" fue poniendo lentamente al descubierto algunos aspectos vulnerables de la dictadura y abrió nuevas oportunidades para la movilización de aquellos grupos sociales menos decididos. Así, cuando, desde finales de 1973, se hizo más palpable el desgaste de un régimen debilitado por las querellas internas y la crisis económica, llegó la protesta más regular a aquellas provincias más timoratas como Albacete. Esta integración en una escena general más turbulenta y animada fue en parte debida a los procesos de emulación y transmisión de la información

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

mediante redes sociales y contactos personales. A través de convivencias de militantes, encuentros nacionales, la prensa, la propaganda clandestina, el papel de los estudiantes universitarios en su vuelta a Albacete, la labor de activistas desterrados desde las provincias más conflictivas, etcétera, se transmitió una serie de experiencias y valores desde los focos "iniciadores" de la protesta a las zonas menos movilizadas. A través de dichos mecanismos se difundieron una serie de recursos organizativos e interpretativos que establecieron nexos entre las reclamaciones e identidades de colectivos procedentes de diferentes partes del país. El resultado fue la consiguiente extensión geográfica, sectorial e identitaria, de la movilización contra la dictadura franquista.

En los procesos de transmisión e irradiación de la protesta fue importante el papel jugado por una minoría de universitarios albacetenses. Éstos participaron en el movimiento estudiantil que convulsionó las universidades del país durante la parte final del franquismo. Al volver a la provincia en fines de semana o periodos vacacionales, estos jóvenes estudiantes trajeron consigo libros, propaganda e importantes recursos estratégicos, organizativos y simbólicos, muy útiles para la movilización de sectores juveniles. Aquellos estudiantes socializados políticamente en una universidad hostil al franquismo abandonaron el movimiento una vez concluidos sus estudios. Pero no hay que olvidar que en muchos casos trasladaron su compromiso contra la dictadura a sus nuevos entornos laborales y profesionales. Debido a dicha traslación, en la provincia de Albacete aparecieron realidades conflictivas entre sectores de *cuellos blancos* como técnicos, funcionarios de la Administración, médicos, profesores, abogados, periodistas, etcétera, que se unieron a la movilización ya emprendida en la década anterior por los empleados de banco. Fruto de esta dinámica también nacieron los primeros núcleos democráticos, aunque minoritarios, en los colegios profesionales de abogados, delineantes, médicos, etcétera.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Como se ha puesto de relieve especialmente en el caso de empleados sanitarios y enseñantes, durante los años finales del franquismo el descontento llamó a las puertas de la misma Administración del Estado que había sido concienzudamente purgada en la posguerra. La protesta se extendió entre las clases medias y profesionales que en 1939 habían saludado la entrada en la provincia del triunfante bando rebelde. Hecho que comportó una profunda erosión de las bases sociales de la dictadura. Además, la aparición de una incipiente movilización entre estos sectores profesionales ayudó a popularizar y cambiar la imagen de la protesta sociolaboral en diversos sectores no politizados de la sociedad. Por otra parte, la *terciarización del conflicto* contribuyó en cierta medida a cuestionar la legitimación social del régimen al elevar el interés sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Así, mientras que la movilización de médicos, maestros y vecinos de las barriadas elevó reivindicaciones sobre los equipamientos colectivos y servicios sociales en la capital provincial, en Almansa emergió un movimiento ciudadano que reclamó la solución de las deficiencias sanitarias y educativas de esta localidad. Ejemplos ambos de la emergencia durante los últimos años de vida del dictador de tensiones sociales que fueron compartidas por diferentes colectivos y que estrecharon los vínculos entre la comunidad, la militancia obrera y la incipiente oposición democrática

Ha sido una tendencia común considerar el crecimiento en los niveles de agitación social del periodo terminal del franquismo como consecuencia de la irrupción en 1973 de la profunda crisis económica internacional provocada por la subida de los precios del petróleo. Desde este punto de vista, la súbita aparición de la crisis puso fin al dilatado periodo de desarrollo económico que había experimentado el país desde principios de los años sesenta, lo que comportó una abrupta frustración de las expectativas sedimentadas durante la larga fase de bonanza y el consecuente ascenso del malestar social,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

manifestado éste en un crecimiento de las huelgas y demás acciones disruptivas. Así, la depresión económica, especialmente intensa en la principal actividad secundaria de la provincia, la construcción, llevó consigo un incremento acelerado de la inflación y del desempleo. Sus efectos, además, quedaron multiplicados a consecuencia de la dura actitud patronal, la ineficacia de la negociación colectiva para aplacar la subida de precios y la política de rentas del Gobierno. El vertiginoso agravamiento de la situación económica impuso una importante amenaza sobre una clase trabajadora albacetense tentada a movilizarse cuando los costes de la inacción y la pasividad —ante los nocivos efectos de la crisis sobre las modestas economías familiares— fueron superiores a los desprendidos de la propia movilización. En efecto, la crisis económica generó un profundo malestar y soliviantó a los trabajadores albacetenses. Desde finales de 1973, la lúgubre amenaza de la profunda depresión apremió a la clase trabajadora de la provincia a movilizarse con una decisión de la que no había hecho gala hasta entonces. Sin embargo, de ello no se puede deducir, en la línea de las teorías de la frustración, que el aumento de la conflictividad durante estos meses fuese —como trataron de hacer ver los burócratas de la OS con el fin de despolitizar el descontento— simplemente la reacción espasmódica a la galopante inflación y al estancamiento de los salarios. De hecho, no hay que olvidar que el malestar siempre se encuentra latente en el cuerpo social y que la privación material suele estar más relacionada con la pasividad que con la movilización. Por lo tanto, como se ha podido comprobar en este trabajo, si los desfavorables factores económicos animaron la actividad reivindicativa, esto fue debido a que irrumpieron de forma paralela a la crisis final del franquismo, bajo un ambiente de creciente incertidumbre e inestabilidad política y social. En esta línea, la coyuntura económica no fue más que el marco sobre el que se desarrolló un nuevo escenario político que alimentó nuevas expectativas y aspiraciones de cambio entre crecientes sectores sociales cada vez más descontentos con la dictadura.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La escena social de la parte final del franquismo no quedó convulsionada únicamente a golpe de desempleo e inflación. En estos meses también se produjo la conjunción de una serie de procesos en el terreno de la política que contribuyeron a abrir nuevas oportunidades para la acción de los descontentos. Entre finales de 1973 y 1975 se dieron cita ciertos factores que conformaron un contexto político más favorable para la movilización. A ello contribuyó la liberalización del régimen franquista iniciada por el nuevo Gobierno de Arias Navarro a principios de 1974. Éste puso en funcionamiento, ante el desmembramiento de la dictadura, la creciente presión internacional y el ascenso de la conflictividad social, un programa de desarrollo controlado del sistema con el fin de ensanchar las bases políticas y sociales del mismo. Sin embargo, dicha apertura limitada no sólo no solventó la crisis política y social en la que se encontraba instalada la dictadura franquista, sino que, además, facilitó un mayor grado de convulsión social y un crecimiento de las demandas democráticas. Así, la dictadura reveló una creciente vulnerabilidad, reflejada en la contradictoria y vacilante combinación de indicios de apertura y cierre del sistema político, que fue aprovechada por aquellos más descontentos y desafectos para incitar a la protesta y a la contestación.

Las páginas de este libro han puesto de relieve la mayor probabilidad de que la gente corriente se movilice cuando existen unas autoridades divididas y enfrentadas. Es decir, cuando aparece la oportunidad política en forma de desunión y fraccionamiento de las elites gobernantes. En este sentido, en los años finales del franquismo existió una íntima conexión entre la movilización por abajo y las disputas y enfrentamientos por arriba. Extremo palpable en la España y en el Albacete posterior a la desaparición de Carrero Blanco, cuando al calor de unos mayores niveles de disidencia social y política, se agudizaron las pugnas internas ya existentes desde la década anterior en el seno de la coalición de poder dictatorial.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Durante 1974 y 1975 se pronunció el desmembramiento de una dictadura corroída por las disputas internas mantenidas, en líneas generales y aunque no se tratase de grupos ni homogéneos ni impermeables, entre sectores aperturistas e inmovilistas. El fraccionamiento de la coalición de poder franquista y el consiguiente debilitamiento del régimen aumentaron las posibilidades de acción de los colectivos de oposición. Pero también, a su vez, el desgaste y descrédito que la movilización social acarreó sobre las estructuras franquistas encarnó una oportunidad para aquellos que estando dentro del sistema tuvieron la voluntad y capacidad para abandonar el *barco encallado* y a punto de hundirse de la dictadura. De hecho, la evolución —no exenta de oportunismo, ambigüedad y contradicciones— de parte de la clase política del franquismo hacía posiciones aperturistas fue espoleada por la creciente presión social, el deterioro del régimen y la incapacidad del mismo para encauzar el disenso político y social que creció en la sociedad albacetense y española conforme avanzaron los años setenta.

Así, en la recta final de la dictadura, cada vez más dirigentes franquistas, que vieron peligrar el futuro político personal ante el crecimiento de la agitación sociopolítica, el estancamiento de las reformas y los ramalazos represivos del búnker, adoptaron vagos e indefinidos posicionamientos reformistas. Dicha evolución se sustentó en la voluntad de aumentar la propia influencia dentro de un *establishment* franquista en descomposición y labrar el camino personal ante un incierto futuro político. Como resultado, en ayuntamientos, en la Diputación Provincial, en el Sindicato Vertical, en la Administración civil, etcétera, aparecieron focos tibiamente favorables a cierta transformación política de contornos imprecisos pero que ciertamente contribuyó a facilitar el terreno político en que tendría lugar la transición democrática.

De este modo, desde dentro de las instituciones franquistas emergieron "aliados inesperados" para los grupos más comprometidos

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

con la demanda de derechos y libertades. Entre las habituales actitudes ambiguas y confusas de los sectores aperturistas del franquismo, en ocasiones descollaron comportamientos en favor de una indefinida reforma política, críticas veladas a la ineficacia del sindicalismo oficial, reclamaciones de mejoras para los barrios periféricos, peticiones de amnistía, declaraciones en solidaridad con colectivos en conflicto, etcétera. Como se ha podido comprobar, en el interior del *establishment* franquista provincial y en su entorno apareció algún abogado, "ciudadano de bien", dispuesto a defender a miembros de la oposición, alguna autoridad que intercedió por los militantes antifranquistas, cierta jerarquía eclesiástica disconforme con la violencia ejercida por los aparatos del Estado, funcionarios y técnicos de la Administración que apoyaron y asesoraron a trabajadores y vecinos, etcétera. En cierta manera el desafío exterior se combinó con la presión interior para profundizar en la crisis y erosión de la dictadura. Así, los sectores movilizados aprovecharon la oportunidad abierta por las divisiones entre las elites gobernantes o los apoyos personales y puntuales de dichas elites, o de personajes "de orden y de bien", para mejorar sus posibilidades de acción y reducir los posibles costes ocasionados por la represión. En este sentido, también el desarrollo y consolidación de las organizaciones de la oposición política al franquismo, muy especialmente el PCE, y la aparición del diario católico *La Verdad*, favorecieron la animación social experimentada por la provincia durante los dos últimos años de vida del dictador.

Por otro lado, la agitación social registrada en la provincia durante los años finales del franquismo no se puede comprender sin tener en cuenta los procesos a través de los cuales grupos de trabajadores, agricultores o vecinos, confirieron un significado a los acontecimientos y definieron colectivamente la realidad más cercana. Como se ha probado, a la hora de enjuiciar la situación vivida no hay que olvidar que un problema social no provoca la reivindicación de forma automática. Entre el sufrimiento de unas duras

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

condiciones de explotación laboral y de opresión política y la acción colectiva para mejorar dichas condiciones mediaron las interpretaciones y los marcos de significado construidos cotidianamente en el seno de organizaciones, grupos informales y movimientos sociales. En líneas generales, dichas percepciones y explicaciones de la cotidianeidad circundante identificaron la naturaleza injusta e inadmisible de ciertas situaciones, culparon moralmente a los responsables del agravio y presentaron a la acción colectiva como el instrumento más eficaz para solucionar los problemas y deshacer los ultrajes sufridos. Todo ello con el objetivo de conferir un sentido y legitimación a la protesta. Por tanto, si nuevos recursos y oportunidades objetivas facilitaron la respuesta colectiva de los más débiles al disminuir los costes derivados de la acción, no fue menos trascendente la construcción social de una identidad colectiva que confirió sentido a la movilización y estableció lazos de solidaridad entre sus participantes, por lo que parece aconsejable complementar el interés por los factores estructurales y por los repertorios de acción más visibles con planteamientos culturalistas, que dirijan la atención a la micromovilización latente, poco perceptible y anidada en el devenir cotidiano de la sociedad civil.

La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 no significó el inicio de la transición a la democracia. Muy al contrario, los meses que siguieron a la misma, hasta julio de 1976, estuvieron flanqueados por los intentos oficiales de perpetuación del sistema, la conflictividad social y la presión represiva. Todos ellos factores que tuvieron más que ver con la lucha contra la dictadura por la recuperación de las libertades democráticas que con un predeterminado proceso de transición. Como ya se ha visto, desde finales de 1973 la provincia experimentó un crecimiento, aunque modesto, en los niveles de conflictividad al calor de la creciente crisis política de la dictadura y del desmoronamiento de la economía. Sin embargo, la dinámica social y política del país, y por ende de la provincia de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Albacete, se tornó, aún sin representar un conflicto de dimensiones arrolladoras, más convulsa durante el año 1976. Este ascenso de la conflictividad estuvo relacionado con la negociación de dos terceras partes de los convenios bajo un contexto de caída libre de la economía. Sin embargo, tan considerable incremento de la protesta no puede ser correctamente entendido sin tener en cuenta el efecto que sobre la estructura de oportunidades y expectativas políticas tuvo la muerte del creador y puntal irremplazable del régimen en un contexto de crisis social, política y económica. La desaparición del dictador expandió las posibilidades de movilización política y social. En otras palabras, representó una expansión de las oportunidades políticas que, a su vez, facilitó la eclosión de nuevos conflictos más disruptivos y politizados. De este modo, los acontecimientos acaecidos a finales de 1975 entrelazaron, con una inusitada fuerza, las reivindicaciones laborales y específicas del centro de trabajo con la agitación a nivel general a favor de las libertades democráticas. Así, se puede decir que el calendario de la conflictividad social después de la muerte de Franco estuvo principalmente determinado por factores de tipo político.

En el ascenso de las reivindicaciones sociopolíticas una vez muerto Franco jugó un papel estelar la reclamación de amnistía. Ésta aglutinó a diferentes colectivos sociales, no en base a sus identidades de trabajadores, vecinos o consumidores, sino en función de su identidad como ciudadanos objeto de unos derechos políticos. En este sentido, la amnistía no representó tanto un esfuerzo de reconciliación nacional ante el recuerdo traumático de la guerra civil, como una demanda esencialmente política dirigida contra la propia legitimación de origen de la dictadura. Por otro lado, bajo el tenso ambiente sociopolítico que impregnó el año 1976, cada vez fueron más los asalariados albacetenses decididos a movilizarse en solidaridad con otros trabajadores. Hecho que se produjo al reconocer como propios los problemas vividos por los semejantes de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

diferentes partes del país. Este creciente interés y preocupación por la situación y reivindicaciones de otros colectivos afines puso de relieve el crecimiento y la maduración de una determinada identidad colectiva en la que la lucha por los derechos sociales y políticos representó un ingrediente esencial. Además, hay que señalar que la ola de conflictividad de 1976 fue habitualmente acompañada por el desarrollo y la aparición pública de un amplio ramillete de organizaciones sindicales y políticas.

La politización y convulsión de la escena social que sucedió a la muerte de Franco aumentó las aspiraciones y las posibilidades de respuesta colectiva de sectores que antes habían permanecido pasivos ante los agravios sufridos. Bajo dicha atmósfera, aquellos grupos sociales habitualmente desmovilizados e impasibles, comenzaron a percibir la posibilidad de obtener mejoras en sus condiciones de vida gracias a los efectos de la alta movilización y de la imparable erosión del poder político. Durante 1976, por primera vez durante la larga dictadura, se asistió en la provincia de Albacete a la movilización de colectivos como panaderos, enfermeras, taxistas, veterinarios, etcétera. Así, el ascenso de la conflictividad en provincias como Albacete, que tuvo lugar sobre un fondo general de crisis política, económica y social, impuso una seria amenaza de imitación de lo reflejado en el *espejo político* de los centros industriales y urbanos más convulsos del país. Hecho que no pudo dejar de influir sobre las percepciones y previsiones políticas inmediatas de unas autoridades perplejas y circunspectas ante el ascenso y expansión de unas protestas que amenazaban con una radicalización de consecuencias imprevisibles de no mediar la articulación de un cambio democrático.

Durante 1976 también aparecieron un buen número de actividades culturales en torno a librerías, recitales, conciertos de canción protesta, homenajes, fiestas populares, etcétera. Éstas ayudaron a minar el control de la dictadura franquista sobre la vida cotidiana

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

y la organización del ocio de la población. Las prácticas desarrolladas en dichos espacios representaron una especie de "contraespectáculo" alternativo, con sus propios valores y códigos, a la hegemonía sociocultural impuesta durante largos años por el régimen franquista. En realidad, en muchas ocasiones se trató de verdaderas manifestaciones de protesta contra la dictadura. Además, a través de estas actividades se rescataron las señas de identidad procedentes de una tradición cultural, ideológica e intelectual, casi enterrada durante cuatro décadas de franquismo. En cierta manera implicaron un reencuentro con la trama histórica de una cultura y tradiciones colectivas quebradas al final de la guerra civil. Sin olvidar, por otro lado, que las autoridades franquistas encontraron grandes dificultades para responder a este tipo de actividades principalmente de signo cultural, pero que escondían un nítido mensaje político. De hecho, cualquier medida oficial, que osciló desde la prohibición a la facilitación, significó las más de las veces un importante coste político para el régimen.

Como se ha puesto de relieve en este libro, una buena evidencia del aumento de la conflictividad y de su capacidad de desafío político después de la muerte de Franco se encuentra en el considerable ascenso de la actividad represora de las autoridades. En efecto, en el año 1976 se asistió en la provincia a todo un rosario de sanciones, denuncias, detenciones, desalojos, etcétera. El incremento de la actividad coactiva de los aparatos represivos traslució la respuesta del régimen a la intensificación en el nivel de amenaza política impuesto por la movilización. En este sentido, las páginas anteriores han demostrado que la violencia política, principalmente causada por la actuación de las fuerzas del orden público, es un subproducto más de la lucha por el cambio político y su represión. Además, los efectos políticos de la protesta, bajo el contexto de crisis de la dictadura y golpeo del terrorismo, atizaron, a su vez, la movilización de los grupos adictos del franquismo. Éstos, en sus

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

facciones más extremas, optaron por la actividad violenta a través de las amenazas, pintadas, insultos y atentados, perpetrados por los comandos de extrema derecha contra librerías, periodistas, clérigos, enseñantes, militantes, etcétera. La acción de los mismos fue el más claro reflejo de la respuesta de los sectores más retrógrados del franquismo a la creciente movilización social y a la intensificación del fenómeno terrorista. En suma, la capacidad coercitiva del Estado coadyuvó a marcar los límites del posible cambio político. Igualmente, la actividad ultraderechista provocó actitudes de moderación entre los movimientos sociales. Sin embargo, la violencia política desplegada por ambos ante las demandas de democracia muestran, a su vez, el agotamiento de la dictadura para ejercer el control sobre la población y asegurar el mantenimiento del orden público en el que descansó su propia existencia.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR FERNÁNDEZ, P. (1997): "La amnesia y la memoria: las movilizaciones por la amnistía en la transición a la democracia" en CRUZ, R. y PÉREZ LEDESMA, M. (eds.): *Cultura y movilización en la España contemporánea*. Madrid, Alianza.

ALAGAPPA, M. (2004): "Civil Society and Democratic Change. Indeterminate Connection, Transforming Relations" en ALAGAPPA, M. (ed.): *Civil Society and Political Change in Asia. Expanding and Contracting Democratic Space*. Stanford, Stanford University.

ÁLVAREZ COBELAS, J. (2004): *Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970)*. Madrid, Siglo XXI.

ÁLVAREZ JUNCO, J. y PÉREZ LEDESMA, M. (1982): "Historia del movimiento obrero. ¿Una segunda ruptura?" en *Revista de Occidente*, 12.

ÁLVAREZ TARDÍO, M. (2005): *El camino a la democracia en España. 1931 y 1978*. Madrid, Gota a Gota Ediciones.

ARÓSTEGUI, J. (2003): "La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)" en MARTÍNEZ, J. (coord.): *Historia de España Siglo XX, 1939-1996*. Madrid, Cátedra.

— (2004): *La historia vivida. Sobre la historia del presente*. Madrid, Alianza.

— (2006): "Traumas colectivos y memorias generacionales: el caso de la guerra civil" en ARÓSTEGUI, J. y GODICHEAU, F. (eds.): *Guerra civil. Mito y memoria*. Madrid, Marcial Pons.

ARRIERO RANZ, F. (2005): "El movimiento democrático de mujeres: de la lucha antifranquista a la conciencia feminista" en *La transición de la dictadura franquista a la democracia*. Barcelona, CEFID.

BABIANO MORA, J. (1995): *Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (Madrid, 1951-1977)*. Madrid, Siglo XXI.

BALFOUR, S. (1990): "El movimiento obrero y la oposición obrera durante el franquismo" en TUSELL, J.; ALTED, A. y MATEOS, A. (coords.): *La oposición al régimen de Franco*. Madrid, UNED.

— (1994): *La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988)*. Valencia, Edicions Alfons el Magnanim.

BARDAVÍO, J. (1995): *Las claves del rey. El laberinto de la transición*. Madrid, Espasa-Calpe.

BASCUÑÁN AÑOVER, O. (2008): *Protesta y supervivencia. Movilización y desorden en una sociedad rural: Castilla-La Mancha, 1875-1923*. Valencia, Biblioteca Historia Social.

BENITO DEL POZO, C. (1990): "El conflicto individual en la clase obrera asturiana 1940-1958" en TUSELL, J., MATEOS, A. Y ALTED, A. (coords.): *La oposición al régimen de Franco*. Madrid, UNED.

BERZAL DE LA ROSA, E. (2000): "La oposición católica al franquismo en Valladolid: la HOAC (1960-1975)" en *Hispania Sacra*, 52.

— (2002): "De la doctrina social a la revolución integral. Cultura política y sindical de la oposición católica al Franquismo en Castilla y León" en *Historia del Presente*, 1.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

— (2007): *Sotanas rebeldes. Contribución cristiana a la transición democrática*. Valladolid, Diputación de Valladolid.

BORJA, J. (1975): *Los movimientos sociales urbanos*. Madrid, Ediciones Siap-Planteos.

(1977): "Popular movements and urban alternatives in post-Franco Spain" en *International Journal of Urban and Regional Research*, 1.

CARR, R. y FUSI, J. P. (1979): *España, de la dictadura a la democracia*. Barcelona, Planeta.

CASANOVA, J. (1996): "¿España como modelo de cambio?" en UGARTE, J. (ed.): *La transición en el País Vasco y España. Historia y memoria*. Vitoria, Universidad del País Vasco.

— (2000): "Resistencias individuales, acciones colectivas: nuevas miradas a la protesta social agraria en la historia contemporánea española" en GONZÁLEZ DE MOLINA, M. (ed.): *La historia de Andalucía a debate*. Tomo I, Granada, Antrhopos.

CASTELLS, M. (1978): "Urban Social Movements and the struggle for democracy" en *International Journal and Regional Research*, 2.

— (1981): *Crisis urbana y cambio social*. Madrid, Siglo XXI.

— (1983): *The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban social Movements*. Berkeleley, CU Press.

CAZORLA SÁNCHEZ, A. (2007): "Order, Progress, and Syndicalism? How the Francoist Authorities Saw Socioeconomic Change" en TOWNSON, N. (ed.): *Spain Transformed. The Late Franco Dictatorship, 1959-1975*. Nueva York, Palgrave.

CISQUELLA, G.; ERVITI, J. L. y SOROLLA, J. (2002): *La represión cultural en el franquismo: diez años de censura de libros durante la Ley de Prensa (1966-1976)*. Barcelona, Anagrama.

COBB, R; ROSS, J. y ROSS, M. (1976): "Agenda Building as a Comparative Political Process" en *American Political Science Review*, 70.

COBO ROMERO, F. y ORTEGA LÓPEZ, T. Mª (2003): "La protesta de sólo unos pocos. El débil y tardío surgimiento de la protesta laboral y de la oposición democrática al régimen franquista en Andalucía oriental" en *Historia Contemporánea*, 26.

COBO ROMERO, F. (2007): "Moldes teóricos y paradigmas historiográficos para el estudio de los *nuevos movimientos sociales*" en ORTEGA LÓPEZ, T. Mª (ed.): *Por una historia global. El debate historiográfico en los últimos tiempos*. Granada, Universidad de Granada y Prensas Universitarias de Zaragoza.

COLLIER, R. B. y MAHONEY, J. (1997): "Adding Collective Actors to Collective Outcomes. Labor and Recent Democratization in South America and Southern Europe" en *Comparative Politics*, 29.

— (1999): *Paths Toward Democracy. The Working Class and Elites in Western Europe and South America*. Cambridge, Cambridge University Press.

CRONIN, J. (1992): "Estadios, ciclos e insurgencias: la economía del malestar social" en MOSCOSO, L. y BABIANO, J. (comps.): *Ciclos en política y economía*. Madrid, Fundación Pablo Iglesias.

CRUZ ARTACHO, S. (2001): "El hermano pobre de la historia social española. Algunas consideraciones sobre el conflicto campesino en la historia contemporánea" en CASTILLO, S. y FERNÁNDEZ, R. (coords.): *Historia social y ciencias sociales*. Lérida, Editorial Milenio.

CRUZ, R. (1997a): "La cultura regresa al primer plano" en CRUZ, R. y PÉREZ LEDESMA, M.: *Cultura y movilización en la España contemporánea*. Madrid, Alianza.

— (1997b): "*Sofía Loren, sí, Montini, no*. Transformación y crisis del conflicto anticlerical" en *Ayer*, 27.

CHULIÁ, E. (2001): *El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de Franco ante la prensa y el periodismo*. Madrid, UNED, Biblioteca Nueva.

DIANI, M. (1998): "Las redes de los movimientos sociales: una perspectiva de análisis" en IBARRA, P. y

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

TEJERINA, B. (eds.): *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*. Madrid, Trotta.

DÍAZ SÁNCHEZ, P. (2003): "Trabajo y género en la España franquista. Estudio comparado de dos sectores: la confección-textil y los ferrocarriles" en NIELFA CRISTÓBAL, G.: *Mujeres y hombres en la España franquista: sociedad, economía, política y cultura*. Madrid, Editorial Complutense.

— (2006a): "La lucha de las mujeres en el tardofranquismo: los barrios y las fábricas" en *Gerónimo de Uztariz*, 21.

— (2006b): "Disidencias y marginaciones de las mujeres en el sindicalismo español" en CASTILLO, S. y OLIVER, P. (coords.): *Las figuras del desorden: heterodoxos, proscritos y marginados*. Madrid, Siglo XXI.

DOMÉNECH, X. (2002a): "El cambio político (1962-1976). Materiales para una perspectiva desde abajo" en *Historia del Presente*, 1.

— (2002b): *Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil y canvi politic. Sabadell 1966-1976*. Publicacions de L'Abadia de Montserrat.

— (2002c): "El problema de la conflictividad bajo el franquismo: saliendo del paradigma" en *Historia Social*, 42.

EALHAM, C. (2005): *La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937*. Madrid, Alianza.

ECKSTEIN, S. (1989): "Power and Popular Protest in Latin America" en ECKSTEIN, S. (ed.): *Power and Popular Protest. Latin American Social Movements*. Berkeley, University of California Press.

EDWARDS, P. K. y SCULLION, H. (1987): *La organización social del conflicto laboral. Control y resistencia en la fábrica*. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ELEY, G. (2003): *Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000*. Barcelona, Crítica.

FERNÁNDEZ MIRANDA, P. y FERNÁNDEZ MIRANDA, A. (1995): *Lo que el rey me ha pedido*. Barcelona, Plaza y Janés.

FISHMAN, R. (1990): "Rethinking State and Regimen: Southern Europe's Transition to the Democracy" en *World Politics*, vol. 42, nº 3.

— (1996): *Organización obrera y retorno a la democracia en España*. Madrid, CIS.

FOLGUERA, P. (1995): "La construcción de lo cotidiano durante los primeros años del franquismo" en *Ayer*, 19.

FOWERAKER, J. (1990): *La democracia española. Los verdaderos artífices de la democracia en España*. Madrid, Arias Montano Editores.

(1994): "Popular Political Organization and Democratization: A Comparison of Spain and Mexico" en BUDGE, I. y MCKAY, D. (eds.): *Developing Democracy*. Londres, Sage Publications.

FOWERAKER, J. y LANDMAN, T. (1997): *Citizenship Rights and Social Movements. A Comparative and Statistical Analysis*. Oxford, Oxford University Press.

FRAGA, M. (1984): *En busca del tiempo perdido*. Barcelona, Planeta.

FUSTER RUIZ, F. (1974): *Historia del teatro en Albacete*. Albacete, Edición Francisco Fuster.

GAMSON, W.; FIREMAN, B. y RYTINA, S. (1982): *Encounters with Unjust Authority*. Homewood, Dorsey Press.

GAMSON, W. y SCHMEIDLER, E. (1984): "Organizing the poor" en *Theory and Society*, Vol. 13, 4.

GARCÍA PIÑEIRO, R. y ERICE SEBARES, F. (1994): "La reconstrucción de la nueva vanguardia obrera y las comisiones de Asturias" en RUIZ, D. (dir.): *Historia de Comisiones Obreras (1958-1988)*. Madrid, Siglo XXI.

GIL ANDRÉS, C. (2000): *Echarse a la calle. Amotinados, huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 1890-1936)*. Zaragoza. Prensas Universitarias de Zaragoza.

GÓMEZ ALÉN, J. (1998): "Huelgas políticas o laborales. El conflicto social en la Galicia franquista" en CASTILLO, S. y ORTIZ DE ORRUÑO, J. Mª (coords.): *Estado, protesta y movimientos sociales*. Vitoria, Universidad del País Vasco.

GÓMEZ FLORES, A (1991): *Anatomía de una transición. Albacete, del fascismo a la democracia*. Albacete, Diputación de Albacete.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

GÓMEZ HERRAEZ, J. Mª (1996): "La Diputación frente al desarrollo (1959-1975)" en REQUENA, M. (coord.): *Historia de la Diputación de Albacete (II)*. Albacete, Diputación de Albacete.

GÓMEZ OLIVER, M. (2007): "¿Y ahora qué? La sociedad rural ante la Transición política" en QUIROSA-CHEYROUZE, R. (coord.): *Historia de la transición en España. Los inicios del proceso democratizador*. Madrid, Biblioteca Nueva.

GÓMEZ RODA, J. A. (2004): *Comisiones Obreras y represión franquista, Valencia, 1958-1972*. Valencia, Universitat de Valencia.

GONZÁLEZ MADRID, D. y ORTIZ HERAS, M. (2005): "Camilo, no te comas a los curas, que la carne de cura se indigesta. La influencia de la Iglesia en la crisis del franquismo" en *La transición de la dictadura franquista a la democracia*. Barcelona, CEFID.

HELD, D. (1989): "Citizenship and Autonomy" en HELD, D. (ed.): *Political Theory and the Modern State*. Cambridge, Polity Press.

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, J. (1999): *El Cerro del Águila e Hytasa: Culturas de trabajo, sociabilidad e imágenes de identificación*. Sevilla, Diputación de Sevilla.

HERNÁNDEZ SANDOICA, E., RUIZ CARNICER, M. A. y BALDÓ LACOMBA, M. (2007): *Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización juvenil*. Madrid, La Esfera de los Libros.

HIGHLEY, J. y GUNTHER, R. (1992): "Spain: The Very Model of the Modern Elite Settlement" en HIGHLEY, J. y GUNTHER, R. (eds.): *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe*. Cambridge, Cambridge University Press.

HILL, S. Y ROTHCHILD, D. (1992): "The Impact of Regimen of the Diffusion of Political Conflict" en MILDARSKY, M: (ed.): *The Internationalization of Communal Strife*. Londres, Routledge.

HOBSBAWM, E. J. (1988): "History from Below-Some Reflections" en KRANTZ, F. (ed.): *History From Below*. Nueva York, Basil Blackwell.

HUNTINGTON, S. P. (1991): *The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century*. Londres, University of Oklahoma Press.

IZQUIERDO COLLADO, J. de D. (1984): *Las elecciones de la transición en Castilla-La Mancha*. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses.

JULIÁ, S. (1988): "Transiciones a la democracia en la España del siglo XX" en *Sistema*, 84.

— (1994): "Orígenes sociales de la democracia en España" en *Ayer*, 15.

— (1996): "Condiciones sociales de la transición a la democracia en España" en UGARTE, J. (ed.): *La transición en el País Vasco y España. Historia y memoria*. Bilbao, UPV.

— (2003): "Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición" en *Claves de la razón práctica*, 129.

— (2006): "En torno a los proyectos de transición y sus imprevistos resultados" en MOLINERO, C. (ed.): *La transición, treinta años después. De la dictadura a la instauración y consolidación democrática*. Barcelona, Península.

KAPLAN, T. (1990): "Conciencia femenina y acción colectiva: el caso de Barcelona, 1910-1918" en AMELANG, J. y NASH, M. (eds.): *Historia y género: las mujeres en la época moderna y contemporánea*. Valencia, Alfonso el Magnánimo.

KARL, T. (1990): "Dilemmas of democratization in Latin America" en *Comparative Politics*, octubre.

KAYE, H. J. (1989): *Los historiadores marxistas británicos*. Zaragoza, Universidad de Zaragoza.

KLANDERMANS, B. y GOSLINGA, S. (1999): "Discurso de los medios, publicidad de los movimientos y la creación de marcos para la acción colectiva" en MCADAM, D., MCCARTHY, J., y ZALD, M. (eds): *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid, Istmo.

KLANDERMANS, B. (2001): "La construcción social de la protesta y los campos pluriorganizativos" en LARAÑA,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

E. y GUSFIELD, J. (eds.): *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*. Madrid, CIS.

KOHLER, H-D. (1995): *El movimiento sindical en España. Transición democrática, regionalismo, modernización económica*. Madrid, Fundamentos.

LACALLE, D. (1976): "Profesionales y técnicos ante el conflicto laboral" en LACALLE, D. (dir.): *El conflicto laboral en profesionales y técnicos*. Madrid, Editorial Ayuso.

LARAÑA, E (1999): *La construcción de los movimientos sociales*. Madrid, Alianza Editorial.

LEMUS, E. (2002): "Nada va a surgir de la nada. Democracia y modernización: la sociedad andaluza de la pretransición" en LEMUS, E. y QUIROSA-CHEYROUZE, R. (coords.): *La transición en Andalucía*. Universidades de Huelva y Almería.

LEVINE, D. (1986): *Religion and Political Conflict in Latin America*. Chapel Hill, University of North California Press.

LEVINE, D. y MAINWARING, S. (1989): "Religion and Popular Protest in Latin America: Contrasting Experiencies" en ECKSTEIN, S. (ed.): *Power and Popular Protest*. Berkeley, University of California Press.

LINZ, J. J. (1990): "Transiciones a la democracia" en *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 51.

LÓPEZ ARIZA, J. Mª (1990): "La transición" en *Los comunistas en la historia de Albacete*. Albacete, PCE.

LÓPEZ PINTOR, R. (1981): "El estado de la opinión pública española y la transición a la democracia", en *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 13.

LÓPEZ VILLAVERDE, A. L. (2003): "La iglesia y los católicos: de la legitimación al desenganche" en REQUENA GALLEGO, M. (coord.): *Castilla-La Mancha en el franquismo*. Ciudad Real, Añil.

MAINER, J-C. y JULIÁ, S. (2000): *El aprendizaje de la libertad 1973-1986*. Madrid, Alianza.

MALEFAKIS, E. (1983): "Spain and its Francoist Heritage" en HERZ, J. (ed.): *From Dictatorship to Democracy: Coping with the Legacies of Authoritarism and Totalitarism*. Westport, Greenwood Press.

MARTÍN GARCÍA, O. J. y ORTIZ HERAS, M. (2006): "Ser antifranquista y no morir en el intento" en CASTILLO, S. y OLIVER, P. (coords.): *Las figuras del desorden: heterodoxos, proscritos y marginados*. Madrid, Siglo XXI.

MARTÍN GARCÍA, O. J. (2005a): "¿Una balsa de aceite? Debilidades de la oposición y extensión de la protesta. Albacete, 1974-1977" en *La transición de la dictadura franquista a la democracia*. Barcelona, CEFID.

— (2005b): "Evolución política de la Corporación franquista. Albacete, 1974-1979" en ORTIZ HERAS, M.: *Memoria e historia del franquismo. V Encuentro de Investigadores del Franquismo*. Cuenca, UCLM.

— (2006a): "*Este banco me debe dinero*. Protesta, identidades y oportunidades en el sector de la banca albacetense en los años sesenta" en *Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea*, 5.

— (2006b): *Albacete en transición, 1970-1979*. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses.

— (2007): "Antes de la transición, la lucha por la libertad. El papel de la prensa de provincias en el desgaste de la dictadura. *La Verdad de Albacete* (1973-1977)" en *III Congreso Internacional Historia de la transición en España. El papel de los medios de comunicación*. Seminario de Estudios del Tiempo Presente. Almería, noviembre 2007.

MARTÍN VILLA, R. (1985): *Al servicio del Estado*. Barcelona, Planeta.

MARTÍNEZ I MUNTADA, R. (2000): *El moviment veinal a l'area metropolitana de Barcelona durant el tardofranquisme y la transició*. Trabajo de investigación, Universitat Pompeu Fabra.

MATA, J. A. (2002): "Movimiento sindical y conflictividad social en los primeros años de la transición en Albacete" en SELVA INIESTA, A.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

(coord.): *XXV años de historia social y económica en Albacete, 1977-2002*. Albacete, IEA-FEDA.

MATEOS, A. y SOTO CARMONA, A. (1997): *El final del franquismo, 1959-1975. La transformación de la sociedad española*. Madrid, Historia 16.

MCADAM, D. y FERNÁNDEZ, R. (1990): "Microstructural Bases of Recruitment to Social Movements" en *Research in Social Movements, Conflict and Change*, vol. 12.

MCADAM, D., TARROW, S., y TILLY, Ch. (2005): *Dinámica de la contienda política*. Barcelona, Hacer.

MCADAM, D.; MCCARTHY, J. y ZALD, M. (1999): "Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales" en MCADAM, D.; MCCARTHY, J. y ZALD, M. (eds.): *Movimientos sociales. Perspectivas comparadas*. Madrid, Istmo.

MCADAM, D. (1982): *The Political Process and the Development of Black Insurgency*. Chicago, University of Chicago Press.

— (2001): "Cultura y movimientos sociales" en LARAÑA, E. y GUSFIELD, J. (eds.): *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*. Madrid, CIS.

— (2003): "Beyond Structural Analysis: Toward a More Dynamic Understanding of Social Movements" en DIANI, M.: *Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action*. Oxford, Oxford University Press.

MCCARTHY, J. y ZALD, M. (1987): *Social Movements in a Organizational Society*. New Brunswick, Transaction Books.

MCCARTHY, J., SMITH, J., y ZALD, M. (1999): "El acceso a la agenda pública y a la agenda del Gobierno.: medios de comunicación y sistema electoral" en MCADAM, D., MCCARTHY, J., y ZALD, M. (eds.): *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid, Istmo.

MCDONOUGH, P.; SHIN, D. y MOISÉS, J. A (1998): "Democratization and Participation: Comparing Spain, Brazil and Korea" en *The Journal of Politics*, 60, Vol. 4.

MELUCCI, A. (1988): "Getting Involved: Identity and Mobilization in Social Movements" en KLANDERMANS, B., KRIESI, H. y TARROW, S. (eds.): *From Structure to Action: Comparing Social Movement Research Across Cultures*. Greenwich, JAI Press.

— (1995): "The process of collective identity" en JOHNSTON, H. y KLANDERMANS, B.: *Social Movements and Culture*. Minneapolis, University of Minnesota Press.

MIGUÉLEZ LOBO, F. (1985): "Los origenes del "nuevo movimiento obrero" en España. Algunas hipótesis de investigación" en GONZÁLEZ PORTILLA, M.; MALUQUER, J. y DE RIQUER, B. (eds.): *Industrialización y nacionalismo. Análisis comparativos*. Actas del I Coloquio Vasco-Catalán de Historia, UAB.

MINGO, J. A. de (1994): "La conflictividad individual en Madrid bajo el franquismo (1940-1975)" en SOTO CARMONA, A.: *Clase obrera, conflicto laboral y representación sindical*. Madrid, Ediciones GPS.

MOLINERO, C. e YSÁS, P. (1999): "Economía y sociedad durante el franquismo" en MORENO FONSERET, R. y SEVILLANO CALERO, F. (eds.): *El franquismo. Visiones y balances*. Alicante, Universidad de Alicante.

— (1998): *Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista*. Madrid, Siglo XXI.

— (2003): "Modernización económica e inmovilismo político, (1959-1975)" en MARTÍNEZ, J. (coord.): *Historia de España Siglo XX, 1939-1996*. Madrid, Cátedra.

MOLINERO, C. (2002): "*Crónica sentimental* y falsa memoria del franquismo" en *Historia del Presente*, 1.

— (2005): "Una nova mirada sobre la transició" en *L'Avenç*, 307.

MONTERO, F. (2000): *La Acción Católica y el franquismo. Auge y crisis de la Acción Católica especializada*. Madrid, UNED.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

MORENTE VALERO, F. (1998): "Relacions laborals, nivells de vida y activisme sindical dels treballadors publics en el sector del ensenyament" en YSÀS, P. (coord.): *Treball, treballadors y sindicalisme en l'Adminsitracion publica a Catalunya (1939-1996)*. Barcelona, Columna.

MUÑOZ SORO, J. (2007): "Parlamentos de papel: la prensa critica en la crisis del franquismo" en QUIROSA-CHEYROUZE, R. (coord.): *Historia de la transición en España. Los inicios del proceso democratizador*. Madrid, Biblioteca Nueva.

NASH, M. (2004): *Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos*. Madrid, Alianza.

NEVEU, E. (2003): *Sociología de los movimientos sociales*. Barcelona, Hacer.

NICOLÁS MARÍN, E. (2007): "*La Transición se hizo en los pueblos*. La vida política en Murcia (1968-1977)" en QUIROSA-CHEYROUZE, R. (coord.): *Historia de la transición en España. Los inicios del proceso democratizador*. Madrid, Biblioteca Nueva.

O'DONELL, G. (1989): "Transitions to Democracy: Some Navigations Instruments" en PASTOR, R. (ed.): *Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum*. Nueva York, Holmes and Meier.

O'DONELL, G. y SCHMITTER, Ph. (1986): *Transitions from Authoritarian Role. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore, John Hopkins University Press, 1986.

OBERSCHALL, A. (1973): *Social Conflict and Social Movements*. Englewood Cliffs, Prentice Hall.

OLIVER OLMO, P. (2003): "El mercado de trabajo y las relaciones laborales" en REQUENA GALLEGO, M. (coord.): *Castilla-La Mancha en el franquismo*. Ciudad Real, Añil.

— (2007): "Políticas represivas y nuevos movimientos sociales: propuestas para su enfoque historiográfico". Ponencia presentada en las *VIII Jornadas de Historia y Fuentes Orales* (El Barco de Ávila, 19, 20 y 21 de octubre de 2007).

ONTIVEROS, E. (1975): "La crisis de la construcción" en *Contrapunto*, 12.

ORTEGA LÓPEZ, T. Mª (2003): *Del silencio a la protesta. Explotación, pobreza y conflictividad en una provincia andaluza*. Granada 1936-1977. Granada, Universidad de Granada.

ORTIZ HERAS, M. y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I. (2001): "Aproximación a las Comisiones Campesinas en Castilla-La Mancha (1939-1988)" en LÓPEZ VILLAVERDE, A. L. y ORTIZ HERAS, M. (coords.): *Entre surcos y arados. El asociacionismo agrario en la España del siglo XX*. Cuenca, UCLM.

ORTIZ HERAS, M., RUIZ, D. y SÁNCHEZ, I. (2003): *España franquista. Causa General y actitudes sociales ante la dictadura*. Cuenca, UCLM.

ORTIZ HERAS, M. (1992): *Las Hermandades de Labradores en el franquismo. Albacete, 1943-1977*. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses.

— (1995): *Violencia política en la II República y primer franquismo: Albacete, 1936-1959*. Madrid, Siglo XXI.

— (2004): "La historiografía de la Transición" en *La transición a la Democracia en España. Historia y fuentes documentales. VI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos*. Guadalajara, Anabad Castilla-La Mancha.

— (2005): "Historia social de la dictadura franquista: apoyos sociales y actitudes de los españoles" en *Spagna Contemporánea*, 28.

— (2006): "Movimientos sociales y sociabilidad en Castilla-La Mancha durante el segundo franquismo" en MATEOS, A. y HERRERÍN, A. (eds.): *La España del presente. De la dictadura a la democracia*. Madrid, Historia del Presente.

— (2008a): "Moral y control social" en LÓPEZ VILLAVERDE, A. L. y JIMÉNEZ MONTESERÍN, M. (coords.): *Historia de la Iglesia en Castilla-La Mancha*. Ciudad Real, Celeste.

— (2008b): "La Historia del presente y la relevancia del estudio de los movimientos sociales" en ORTIZ HERAS,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

M. (coord.): *Los movimientos sociales en la crisis de la dictadura y la transición: Castilla-La Mancha, 1969-1979*. Ciudad Real, Biblioteca Añil, 2008.

PALACIO ATARD, V. (1999): *Juan Carlos y el advenimiento de la democracia en España*. Madrid, Espasa Calpe.

PALMA, G. di (1990): *To Craft Democracies: An Essay on Democratic Transitions*. Berkeley, University of California Press.

PALOMARES, C. (2006): *Sobrevivir después de Franco. Evolución y triunfo del reformismo, 1964-1977*. Madrid, Alianza Editorial.

— (2007): New Political Mentalities in the Tardofranquismo" en TOWNSON, N. (ed.): *Spain Transformed. The Late Franco Dictatorship, 1959-1975*. Nueva York, Palgrave McMillan.

PASSY, F. (2003): "Social Networks Matter. But How?" en DIANI, M. (ed.): *Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action*. Oxford, Oxford University Press.

PÉREZ DÍAZ, V. (1993): *La primacía de la sociedad civil*. Madrid, Alianza Editorial.

— (2003): "De la Guerra Civil a la sociedad civil: el capital social en España entre los años treinta y los años noventa del siglo XX" en PUTNAM, R. (ed.): *El declive del capital social. Un estudio internacional sobre las sociedades y el sentido comunitario*. Barcelona, Galaxia Gutenberg.

PÉREZ GARZÓN, J. S. et al (2000): *La gestión de la memoria. La historia de España al servicio del poder*. Barcelona, Crítica.

PÉREZ LEDESMA, M. (1997): "La formación de la clase obrera: una creación cultural" en CRUZ, R. y PÉREZ LEDESMA, M.: *Cultura y movilización en la España contemporánea*. Madrid, Alianza.

— (2006): "'Nuevos' y 'viejos' movimientos sociales en la transición" en MOLINERO, C. (ed.): *La transición, treinta años después. De la dictadura a la instauración y consolidación democrática*. Barcelona, Peninsula.

PÉREZ SERRANO, J. (2007): "La transición a la democracia como modelo analítico para la historia del presente: un balance crítico" en QUIROSA-CHEYROUZE, R. (coord.): *Historia de la transición en España. Los inicios del proceso democratizador*. Madrid, Biblioteca Nueva.

PÉREZ PÉREZ, J. A. (2001): *Los años del acero. La transformación del mundo laboral en el área industrial del Gran Bilbao (1958-1977). Trabajadores, convenios y conflictos*. Madrid, Biblioteca Nueva.

PÉREZ, M. y DOZ, J. (1976): "El movimiento de los enseñantes en España" en *Zona Abierta*, 7.

PIVEN, F. y CLOWARD, R. (1977): *Poor People's Movements*. Nueva York, Vintage.

POWELL, Ch. (1993): *El piloto del cambio*. Barcelona, Planeta.

PRESTON, P. (2001): *El triunfo de la democracia en España*. Barcelona, Grijalbo.

QUIROSA-CHEYROUZE, R. (2007): "La transición a la democracia: una perspectiva historiográfica" en QUIROSA-CHEYROUZE, R. (coord.): *Historia de la transición en España. Los inicios del proceso democratizador*. Madrid, Biblioteca Nueva.

RADCLIFF, P. (2005): "La construcción de la ciudadanía democrática: las Asociaciones de Vecinos en Madrid en el último franquismo" en *La transición de la dictadura franquista a la democracia*. Barcelona, CEFID.

— (2007a): "Associations and the Social Origins of the Transition during the Late Franco Regimen" en TOWNSON, N. (ed.): *Spain Transformed. The Late Franco Dictatorship, 1959-1975*. Nueva York, Palgrave McMillan.

— (2007b): "La ciudadanía y la transición a la democracia" en PÉREZ LEDESMA, M.: *De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España*. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

RAGUER, H. (2006): *Réquiem por la Cristiandad. El Concilio Vaticano II y su impacto en España*. Barcelona, Peninsula.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

RODRÍGUEZ VILLASANTE, T. (1976): *Los vecinos en la calle: una alternativa democrática a la ciudad de los monopolios*. Madrid, Ediciones de la Torre.

RUIZ, D. (2001): "Las Comisiones Obreras, movimiento sociopolítico (1958-1976)" en ORTIZ HERAS, M.; RUIZ, D. y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I. (coords.): *Movimientos sociales y Estado en la España contemporánea*. Cuenca, UCLM.

(2002): *La España democrática (1975-2000). Política y sociedad*. Madrid, Síntesis.

SALOMÓN CHÉLIZ, Mª P. (2007): "Una nueva cara de la historia social: la historia de las clases populares" en ORTEGA LÓPEZ, T. Mª (ed.): *Por una historia global. El debate historiográfico en los últimos tiempos*. Granada, Universidad de Granada.

SAN JOSÉ, E. (2003): *De la república, la guerra, la represión, la resistencia... Recuerdos y notas personales*. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 2003.

SANDOVAL, S. (1998): "Social Movements and Democratization. The Case of Brazil and the Latin Countries" en GIUGNI, M.; MCADAM, D.; y TILLY, Ch.: *From Contention to Democracy*. Oxford, Rowman and Littlefield Publishers.

SANTA OLALLA SALUDES, P. M. de (2002): "La diócesis de Albacete del Concilio Vaticano II al final de la transición democrática" en *II Congreso de Historia de Albacete. IV Historia Contemporánea*. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses.

SANZ DÍAZ, B. (1993): "Bastiones de resistencia en Castilla-La Mancha (I): El caso de Villamalea" en SÁNCHEZ, I., ORTIZ HERAS, M., y RUIZ, D. (coord.): *España franquista. Causa General y actitudes sociales ante la dictadura*. Albacete, UCLM.

— (2003): *Villamalea. Historia de un pueblo de Castilla-La Mancha, 1875-1977*. Villamalea, Ayuntamiento de Villamalea.

SANZ FERNANDEZ, F. (1994): "La aportación de la JOC a la cultura obrera y a la formación de militantes para el movimiento obrero" en *Los católicos y el movimiento obrero*, XX Siglos, 22.

SARTORIUS, N. y SABIO, A. (2007): *El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España. Noviembre de 1975-Junio de 1977*. Temas de Hoy, Madrid.

SCOTT, H., BENFORD, R. y SNOW, D. (2001): "Marcos de acción colectiva y campos de identidad en la construcción social de los movimientos" en LARAÑA, E. y GUSFIELD, J. (eds.): *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*. Madrid, CIS.

SCOTT, J. (1976): *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in South Asia*. New Haven, Yale University Press.

— (1986): *Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven, Yale University Press.

— (1997): "Formas cotidianas de rebelión campesina" en *Historia Social*, 28.

SELVA INIESTA, A. (2003): "Historia del asociacionismo empresarial en Albacete (1976-2002)" en SELVA INIESTA, A. (coord.): *XXV años de historia social y económica en Albacete.1977-2002*. Albacete, IEA-FEDA.

SHARE, D. (1986): *The Making of Spanish Democracy*. Londres, Centre for the Study of Democratic Institutions.

SHORTER, E. y TILLY, Ch. (1985): *Las huelgas en Francia, 1830-1968*. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SNOW, D. *et al.* (1980): "Social Networks and Social Movements: A Microstructural Approach to Diferential Recruitment" en *American Sociological Review*, 5, vol. 45.

SNOW, D. y BENFORD, R. (1992): "Master Frames and Cycles of Protest" en MORRIS, A. y MCCLURGH, C. (eds.): *Frontiers in Social Movemet Theory*. New haven, Yale University Press.

SOTO CARMONA, A. (1996): "Conflictividad social y transición sindical" en en TUSELL, J. y SOTO CARMONA, A. (eds.): *Historia de la transición (1975-1986)*, Madrid, Alianza Universidad.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

— (2005a): *Transición y cambio en España, 1975-1996*. Madrid, Alianza Editorial.
— (2005b): *¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo*. Madrid, Biblioteca Nueva.
TARROW, S. (1985): "Mass Mobilization and Regimen Change: Pacts, Reform and Popular Power in Italy (1918-1922) and Spain (1975-1978)" en GUNTHER, R.: *The Politics of Democratic Consolidation*. Baltimore, John Hopkins Press.
— (1989): *Democracy and Disorder. Protest and Politics in Italy, 1965-1975*. Oxford, Clarendon Press.
— (1991): "Struggle, Politics and Reform: Collective Action, Social Movements and Cycles of Protest". Cornell University, Western Societies Program, Occasional Paper, 21.
— (1996): "Social Movements in Contentious Politics: A Review Article" en *American Political Science Review*, 4, vol. 90.
— (1999): "Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales" en MCADAM, D., MCCARTHY, J., y ZALD, M. (eds.): *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid, Istmo.
— (2004): *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid, Alianza.
THOMPSON, E. P. (1979): *Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*. Barcelona, Crítica.
— (1989): *La formación de la clase obrera en Inglaterra*. Barcelona, Crítica.
— (1995): *Costumbres en común*. Barcelona, Crítica.
TILLY, Ch. (1978): *From Mobilization to Revolution*. Reading, Addison-Wesley.
— (1988): "Social Movement and National Politics". Center for Research on Social Organization, Working Paper, 197.
— (1997): *El siglo rebelde, 1830-1930*. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.
— (1998): "Conflicto político y cambio social" en IBARRA, P. y TEJERINA, B.: *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*. Madrid, Trotta.
— (2006): *Regimes and Repertoires*. Chicago, The University of Chicago Press.
TOWNSON, N. (2007): *Spain Transformed. The Late Franco Dictatorship, 1959-1975*. Nueva York, Palgrave.
TURNER, R. y KILLIAN, L. (1987): *Collective Behaviour*. Englewood Cliffs, Prentice Hall.
TUSELL, J. y QUEIPO DE LLANO, G. (2003): *Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la transición (1973-1976)*. Barcelona, Crítica.
URÍA, J. (2005): "Relación de comunicaciones: asociacionismo y sociabilidad durante el franquismo. Del colapso al despertar asociativo" en ORTIZ HERAS, M. (coord.): *Memoria e historia del franquismo. V Encuentro de Investigadores del Franquismo*. Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
URRUTIA ABAIGAR, V. (1986): *El movimiento vecinal en el área metropolitana de Bilbao*. Bilbao, Instituto Vasco de Administración Pública.
VALIENTE FERNÁNDEZ, C. (1998): "La liberalización del régimen franquista: la Ley del 22 de junio de 1961 sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer" en *Historia Social*, 31.
VEGA, R. (2002): "Acerca de la trascendencia de un conflicto obrero" en VEGA, R. (coord.): *Las huelgas de 1962 en Asturias*. Oviedo, Fundación Juan Muñoz Zapico.
VILLAR, C. (2001): "Recuperar y repensar la memoria de las mujeres sobre la experiencia sindical" en *Arenal*, 8, enero-junio.
XABIER FERREIRA, E. (1999): "Mujeres, memoria e identidad política" en *Historia, Antropología y Fuentes Orales*, 21.
YSART, F. (1984): *Quién hizo el cambio*. Barcelona, Argos.
YSÁS, P. (1991): "Huelga laboral y huelga política. España 1939-1975" en *Ayer*, 4.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

— (1998): *Treball, treballadors i sindicalisme en l'Administració pública a Catalunya (1939-1996)*. Barcelona, Columna.
— (2002): "Las Comisiones Obreras: orígenes y configuración" en VEGA GARCÍA, R. (coord.): *El camino que marcaba Asturias. Las huelgas de 1962 y su repercusión internacional*, Gijón, Ediciones Trea.
— (2004): *Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975*. Barcelona, Crítica.
— (2006): "La crisis de la dictadura franquista" en MOLINERO, C. (ed.): *La transición, treinta años después. De la dictadura a la instauración y consolidación democrática*. Barcelona, Península.
— (2008): "¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social en el franquismo tardío" en *Ayer*, 68.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A TIENTAS CON LA DEMOCRACIA
MOVILIZACIÓN, ACTITUDES Y CAMBIO EN LA PROVINCIA DE ALBACETE, 1966-1977

INVESTIGACIÓN Y DEBATE

ÓSCAR J. MARTÍN GARCÍA

La transición a la democracia es un claro exponente de los usos públicos y políticos de la historia. La necesidad de legitimar tal obra de ingeniería política se ha sustanciado en una interpretación oficial, casi canónica y no exenta de tópicos. Ésta ha atendido a un plan trazado desde arriba y virtuosamente ejecutado por unos pocos artífices procedentes del reformismo franquista. Tal explicación presupone la existencia de una sociedad española impasible e instalada en la desmovilización. Sin embargo, incluso en las zonas del país menos industrializadas y urbanizadas, la indiferencia y el miedo coexistieron con una ascendente conflictividad sociopolítica que debilitó la dictadura y contribuyó a crear las condiciones políticas para el cambio democrático. Así, las negociaciones entre elites fueron precedidas e influidas por una multiforme presión social que introdujo sus principales demandas en la agenda política de la transición. En esta línea, el presente trabajo analiza las oportunidades políticas, la movilización de recursos y los marcos interpretativos que legitimaron y animaron una protesta asentada en el cambio de actitudes y en el aprendizaje de nuevas prácticas democráticas que facilitaron el camino hacia la libertad.

9 788483 193907
18 € ISBN: 978-84-8319-390-7

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES "DON JUAN MANUEL"
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»